

Análisis del proceso de Desarme Desmovilización y Reinserción –DDR- de las
Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- en Antioquia: Trayectoria del paramilitarismo
tras los acuerdos de paz

Gisela Andrea Aguirre García

Universidad de Antioquia

Medellín, 2010

Análisis del proceso de Desarme Desmovilización y Reinserción –DDR- de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- en Antioquia: Trayectoria del paramilitarismo tras los acuerdos de paz

Gisela Andrea Aguirre García

Tesis presentada al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia para obtener el título de:

Magister en Ciencias Políticas

Director:
Manuel Alberto Alonso Espinal
Mg. Ciencias políticas

Medellín, 2010

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
I PARTE: ESTADO DEL PROCESO DDR EN ANTIOQUIA	11
1. El lugar del proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción- DRR- en los acuerdos de paz: supuestos y expectativas sobre el proceso.....	12
1.1 Fases del las operaciones de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes y modelos de Intervención	16
1.2 Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos alzados ilegales de la Alta Consejería para la Reintegración:	22
2. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL SUROESTE: El Caso de los municipios de Andes y Amagá.....	24
2.1 Municipio de Andes	26
Caracterización de la población desmovilizada	26
Servicios Sustitutivos	26
2.2 Municipio de Amagá.....	33
Caracterización de la población desmovilizada	33
Servicios Sustitutivos	34
Servicios Reconciliatorios.....	36
2.3 Observaciones generales sobre el DDR en el Suroeste.....	39
3. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL ORIENTE: El Caso de los municipios de San Carlos y San Francisco.....	40
3.1 Municipio San Carlos.....	42
Caracterización de la población desmovilizada	42
Servicios Sustitutivos	43
Servicios Reconciliatorios.....	46
3.2 Municipio de San Francisco.....	48
Caracterización de la población desmovilizada	48
Servicios Sustitutivos	48
Servicios Reconciliatorios.....	53
3.3 Observaciones Subregionales.....	55
4. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO: El Caso de los municipios de Puerto Berrio y Puerto Triunfo.	58

4.1 Municipio de Puerto Berrio.....	60
Caracterización de la población desmovilizada	60
Servicios Sustitutivos	61
Servicios Reconciliatorios.....	64
4.2 Municipio de Puerto Triunfo.....	66
Caracterización de la población desmovilizada	66
Servicios Sustitutivos	67
Servicios Reconciliatorios.....	70
4.3 Observaciones sobre el DDR en la Subregión del Magdalena Medio	73
5. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA: El Caso de los municipios de Cauca y Tarazá.....	76
Seguridad Física y Rearme en los municipios de Cauca y Tarazá.....	78
5.1 Municipio de Cauca	83
Caracterización de la población desmovilizada	83
Servicios Reconciliatorios.....	86
5.2 Municipio de Tarazá.....	90
Caracterización de la población desmovilizada	90
Servicios Reconciliatorios.....	94
5.3 Observaciones sobre el DDR en la Subregión Bajo Cauca.....	96
6. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL URABÁ: El Caso del municipio de Turbo ..	100
6.1 Municipio de Turbo.....	100
Caracterización de la población desmovilizada	100
Servicios Sustitutivos	101
Servicios Reconciliatorios.....	106
6.2 Observaciones subregionales	110
7. REINTEGRACIÓN EN EL OCCIDENTE: El Caso de los municipios de Santafé de Antioquia y Sopetrán.....	115
7.1 Municipio de Santafé de Antioquia.....	118
Caracterización de la población desmovilizada	118
Servicios Sustitutivos	118
Servicios Reconciliatorios.....	121

7.2 Municipio de Sopetrán	124
Caracterización de la población desmovilizada	124
Servicios Sustitutivos	124
Servicios Reconciliatorios.....	128
7.3 Observaciones al DDR en la subregión del Occidente.....	131
8. ANOTACIONES GENERALES SOBRE EL DDR EN ANTIOQUIA	132
8.1 Reintegración: Económica, social y política.	132
Reintegración Económica	132
Reintegración Social	134
Reintegración política	136
8.3 Desmovilización y Desarme.....	136
II PARTE: TRAYECTORIA DEL CONFLICTO ARMADO EN ANTIOQUIA TRAS LA	
DESMOVLIZACIÓN DE LAS AUC. Origen e Identidad de la Violencia paramilitar: Una	
relectura del Caso Suroeste.	141
9. NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA ARMADA EN ANTIOQUIA.....	142
9.1 Estado de la población desmovilizada de las AUC en Antioquia y la incidencia del narcotráfico en el proceso de reintegración.....	154
9.2 Pervivencia de contextos de ilegalidad y la influencia local del actor armado	166
10. ORIGEN E IDENTIDAD DE LA VIOLENCIA PARAMILITAR.	168
Una propuesta interpretativa del DDR	168
10.1 Seguimiento a las dinámicas de la violencia armada: ¿Qué causa la violencia paramilitar?	170
10.2 Dinámicas Intracomunidad	172
10.3 Actores e Identidades que intervienen en la generación de la violencia local	173
10.4 El astillamiento del Estado de derecho y la configuración de autoritarismos subnacionales paramilitares.....	174
11. ORIGEN E IDENTIDAD DE LA VIOLENCIA PARAMILITAR EN EL SUROESTE.	176
Trayectorias de la violencia: Por la defensa del Orden Social.	176
10.1 La Economía Cafetera y los contornos del orden social	177
11.2 Una Amenaza al orden establecido: Movimiento Cívico y Campesino del Suroeste	181
11.3 El periodo de 1986 – 1996: Las expresiones armadas y democráticas de la izquierda y la derecha	184

11.4 El periodo de 1996 – 2006: Contrainsurgencia, Limpieza social como institución, vigilatismo y Narcotráfico.....	187
<i>Identidad Contrainsurgente del paramilitarismo</i>	188
<i>Identidad vigilatista o el paramilitarismo como Ejército privado</i>	188
<i>Identidad Narcotraficante del paramilitarismo</i>	189
11.5 Una relectura del DDR desde la subregión del Suroeste.....	192
Índice de Tablas	195
Índice de Figuras	197
Índice de Gráficos	198
Referencias bibliográficas	199
Anexo 1.	205
Acuerdo de Santa Fe De Ralito para contribuir a la paz de Colombia. Texto del acuerdo entre el Gobierno y las AUC.....	205

INTRODUCCIÓN

La Ley 418 de 1997, facultó al Gobierno Nacional para realizar negociaciones de paz con los grupos armados al margen de la ley y definir el contenido necesario de los acuerdos de paz en procura de garantizar, tal como ella misma señala, el “*normal funcionamiento de las instituciones civiles de la región en donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que los suscribe*”. Igualmente, bajo esta Ley, el Gobierno, obtuvo la competencia para otorgar beneficios jurídicos por actos que constituían delitos políticos. Estos beneficios fueron complementados por la Ley 975 de 2005 (Ley de justicia y paz). En esta última, se dictaron disposiciones para la reincorporación de los excombatientes, al igual que, los parámetros para llevar a cabo los acuerdos humanitarios. Posteriormente, bajo la Ley 548 de 1999 y la ley 782 de 2002, se dictaron modificaciones para la Ley 418 de 1997 y el decreto 1000 de 2003.

A partir de la declaratoria de paz y cese unilateral de hostilidades decretado por los Jefes paramilitares en carta pública enviada al Presidente Álvaro Uribe Vélez el 29 de noviembre de 2002, se da inicio al proceso de negociación de paz. El Alto Comisionado de Paz; Luis Carlos Restrepo, los miembros de la Comisión exploratoria y la Iglesia católica se reunieron con los Jefes de Autodefensa para producir lo que se llamó el *Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia*¹. En dicho Acuerdo se pactó el cese de hostilidades, la desvinculación de las Autodefensas del narcotráfico, desmovilizar la totalidad de sus estructuras armadas a diciembre de 2005, el acompañamiento de la Iglesia Católica. Por su parte el Gobierno se compromete a reintegrar las personas desmovilizadas.

El 25 de noviembre de 2003 en Medellín, el Bloque Cacique Nutibara da inicio al proceso de concentración, desarme y desmovilización de las estructuras militares de las AUC que finaliza el 15 de agosto de 2006 con la desmovilización del Frente Norte Medio Salaquí o Frente Chocó, del Bloque Elmer Cárdenas. A través de 38 actos se desmovilizan 31.671 hombres y mujeres y se recogió 18.051 armas largas, cortas y de acompañamiento.

En Antioquia se desmovilizaron 10 Bloques, 2 Frentes y 13 jefes. Estos Bloques lograron fragmentar el departamento y hacerse al control de vastos territorio, a través, de la coerción armada de la población, la extracción de negocios lícitos e ilícitos, alianzas con empresarios y políticos de la región, tal como se ha evidenciado en sucesivas declaraciones de algunos Jefes paramilitares y estudios sobre el paramilitarismo.² Ver Tabla 1. Grupos de las AUC desmovilizados en Antioquia.

Tabla 1.
Grupos de las AUC desmovilizados en Antioquia

<i>Grupo</i>	<i>Comandante</i>	<i>Número de hombres</i>	<i>Área de influencia</i>
Bloque Cacique Nutibara	Giovanni Marín <i>Comandante R</i>	873	Valle de Aburrá

¹ Ver Anexo.

² Alonso; Manuel *et al.* Estudio DDR en Antioquia. 2007.

Bloque Bananero	Ever Veloza Alias <i>H.H</i>	453	Turbo a Dabeiba
Bloque Suroeste	Jesús Alcides Durango Alias " <i>René</i> "	127	Suroeste
Bloque Héroes de Granada	Diego Murillo Alias " <i>Don Berna</i> "	2.033	Valle de Aburrá, Oriente, Nordeste
Bloque Noroccidente Antioqueño	Luis Arnulfo Tuberquia Alias " <i>Memín</i> "	222	Occidente
Bloque Central Bolívar	Iván Roberto Duque Alias " <i>Ernesto Baez</i> " y Carlos Mario Jiménez Alias " <i>Macaco</i> ", " <i>Julián Bolívar</i> "	1.922	Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio
Bloque Mineros	Ramiro Vanoy Murillo Alias " <i>Cuco Vanoy</i> "	2.790	Bajo Cuca y Norte
Autodefensas campesinas del Magdalena Medio	Ramón Isaza	990	Magdalena Medio, Caldas y Boyacá, Cundinamarca y Norte del Tolima
Frente Costanero – Bloque Elmer Cárdenas	José Alfredo Berrío Alias " <i>El Alemán</i> "	309	Norte de Urabá
Frente Pavarandó y Dabeiba – Bloque Elmer Cárdenas.	José Alfredo Berrío Alias " <i>El Alemán</i> "	484	Chocó – Dabeiba

El Decreto 128 de 2003 contempla los servicios que el Estado ofrecería en materia de reincorporación, entendida como la dejación de armas y el inicio de un proceso de reincorporación a la vida civil coordinado por el Ministerio del Interior y de Justicia con apoyo del Comisionado de Paz. Sin embargo, sólo después de tres años de haber iniciado el desarme, se crea la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR en los sucesivos), a partir del decreto 3043 de 2006. 395 de 2007, en el cual, reglamenta la ley 418 de 1997 y se modifica parcialmente el decreto 128 de 2003 en materia de reincorporación a la sociedad civil. A pesar de la experiencia de Colombia en procesos de paz y desmovilización, y de los múltiples llamados al Gobierno Nacional sobre el excesivo centralismo del proceso DDR y escaso debate con la sociedad, sólo en el 2008 se formula un documento CONPES que procura la articulación de un sistema de atención a las necesidades individuales y comunitarias para la reintegración de los excombatientes.

En Antioquia y el resto del país, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración sistematizó las prácticas y resultados de diversos operadores y Agencias de Cooperación Internacionales en relación con la reintegración, para finalmente estructurar un programa que recoge en gran parte el modelo de Medellín; único municipio que aventuró una respuesta para la población desmovilizada que al 2004 llegaba a 864 excombatientes colectivos, y a junio de 2008 ascendió a 4.244 desmovilizados individuales y colectivos, entre hombres y mujeres (ACR, 2008).

Un punto de partida necesario para realizar un balance sobre el proceso de desmovilización, desarme y inserción de las AUC, es el que da cuenta del grado de cumplimiento de los acuerdos de paz en los que se enmarca dicho proceso y rastrea el seguimiento a la política nacional de DDR. Partiendo de dicha ruta, en esta investigación se hace un esfuerzo por abordar algunas hipótesis sobre la naturaleza del DDR en las subregiones de Antioquia y

por mostrar la importancia de madurar un modelo interpretativo que trascienda la comprensión mecánica, puramente procedimental y aislada de los programas DDR, de cara a evaluar los efectos de dichas operaciones de paz en el desmonte del paramilitarismo, partiendo de la premisa de que su sentido es aportar a la transición de la guerra a la paz y prevenir nuevos ciclos de violencia armada.

Esta investigación busca hacer un balance del proceso DDR en Antioquia mediante estudios de caso, tomando como punto de partida el modelo de reintegración de la Política Nacional, y teniendo como referente las principales escisiones que han marcado el origen del conflicto armado y el paramilitarismo en las subregiones.

Su presentación se organiza en dos partes. La primera de ellas abarca 8 capítulos que en su conjunto se proponen realizar un balance del proceso DDR en Antioquia bajo el esquema con que se llevan a cabo las operaciones de paz en el mundo y el caso particular colombiano. El capítulo 1 aporta algunas consideraciones sobre los procesos de desmovilización, desarme y reintegración en el marco de acuerdos de paz. Los capítulos 2 al 7 en su orden comprenden los estudios de caso de las subregiones del suroeste, oriente, occidente, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Urabá. En estos se caracteriza la población desmovilizada, se realiza una aproximación a la seguridad física de los excombatientes y el panorama local del rearme; una descripción del acceso a servicios sustitutos y los llamados servicios reconciliatorios o reintegración social. A la vez se procurará insinuar las posibles escisiones sobre las cuales se articulan nuevos ciclos de violencia y han pervivido remanentes de los “viejos” conflictos con manifestaciones actuales, y los principales problemas que enfrenta el DDR en las subregiones. El capítulo 8 presenta el análisis del proceso DDR en el departamento, a partir de las observaciones particulares del DDR en las subregiones e introduce consideraciones claves para repensar la desmovilización de las AUC y el desmonte del paramilitarismo en Antioquia.

Con los estudios de caso emergen algunas características particulares del proceso DDR en dichos territorios y se deja en evidencia la pervivencia del conflicto armado en el departamento producto del irresuelto fenómeno paramilitar. Así, la segunda parte del informe se estructura en 3 capítulos. El capítulo 9 señala las trayectorias del conflicto armado en Antioquia tras la desmovilización de las AUC. El capítulo 10 propone un modelo interpretativo para el análisis del proceso DDR bajo premisas diferentes a los esquemas de las operaciones de paz. Y finalmente, el capítulo 11 profundiza sobre el origen e identidad del paramilitarismo en el suroeste de Antioquia y su incidencia en las particularidades del DDR a partir del propuesto modelo interpretativo del DDR.

La investigación se desarrolla bajo un enfoque de investigación mixto. La utilización de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas facilitó el contraste del relato vivo sobre la reintegración a partir de las percepciones, vivencias y opiniones de diversos actores, y la información cuantitativa institucional sobre el tema, logrando una mejor descripción y análisis del problema. Para ello, se realizaron 11 estudios de caso. Los municipios analizados fueron seleccionados bajo el criterio de mayor concentración de población desmovilizada y su relevancia en la dinámica territorial del paramilitarismo. Los estudios focales se implementaron en total, a través de 33 grupos focales municipales con:

población desmovilizada, víctimas y sociedad civil, y autoridades locales; 22 entrevistas a actores económicos, políticos, de gobierno y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del departamento de Antioquia y las subregiones.

El análisis estadístico de la información cuantitativa en que se apoya la investigación proviene de datos suministrados por instituciones públicas. Así, todos los análisis concernientes al proceso DDR se apoyan en los datos suministrados por la Alta Consejería para la Reintegración. Los análisis sobre cultivos ilícitos se apoyan en cálculos de la autora a partir de los datos suministrados por la Policía Especializada Antinarcóticos. Igualmente, el análisis de las estadísticas sobre violencia se apoya en datos facilitados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

I PARTE: ESTADO DEL PROCESO DDR EN ANTIOQUIA

1. El lugar del proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción- DRR- en los acuerdos de paz: supuestos y expectativas sobre el proceso.

En términos generales, la salida negociada a los conflictos armados internos, tiene como propósito la búsqueda sostenida de la disminución de la violencia armada y la recuperación del orden y la ley bajo la hegemonía del Estado. Expertos como Vicenç Fisas y Gleichmann Colin, dan una significativa calificación a la seguridad humana y la interpretan como condición para la superación de los factores estructurales que inciden en la permanencia de economías ilegales, ancladas en la pobreza que actúan como generadoras de nuevos ciclos de violencia. Sin embargo, su manifestación fáctica es objeto de fuertes tensiones ideológicas de las sociedades en situación de la guerra. La superación de los índices de pobreza hacia la garantía de seguridad humana se va transformando en un asunto fundamental, que involucra no sólo a excombatientes -para una adecuada vinculación a la sociedad civil y sostenimiento dentro de la civilidad-, sino también, a las víctimas del conflicto armado y el resto de la población.

Un proceso de paz, supone la suscripción de acuerdos entre las partes beligerantes para desestructurar los factores centrales del conflicto. Sin embargo, una definición minimalista y técnica entiende los procesos de paz como esquemas de negociación en el que ésta- la paz- es solo una etapa del proceso y no un fin en sí mismo. El elemento problematizador de dicha idea radica en los alcances de la negociación en términos de la profundidad e impacto de los acuerdos en la disminución de la violencia y estabilidad de un orden: bien como transformaciones que logren incidir en un nuevo pacto político producto de la negociación entre *los actores* o simplemente como el sometimiento y dejación de armas concentrando los acuerdos en condiciones aceptables para los excombatientes sin que ello implique cambios estructurales de la sociedad.

Fisas (2006), explica que los alcances de los procesos de paz implementados por países en guerra interna han sido tipificados en 5 modelos:

1. Modelo centrado en la desmovilización y reintegración de combatientes, el cual consiste en conceder algunos privilegios jurídicos, políticos y/o económicos a los líderes de los grupos desmovilizados, tal como en el caso de Angola.
2. Modelo Centrado en el reparto del poder político, económico y/o militar, tal es el caso de Liberia, Burundi, RD Congo o Somalia.
3. Modelo de intercambio o concesiones de un lado y otro: “paz por democracia” en Nepal, “Paz por reconocimiento de derechos, en particular de autodeterminación” como en el caso Vasco e Irlandés.
4. Modelo basado en la búsqueda de fórmulas de autogobierno con cierta relación con el reconocimiento de derechos, como el caso Filipinas, Indonesia, Sahara Occidental,

El contenido de la negociación, ineludiblemente expresa la comprensión que se tiene del conflicto armado y del actor armado en particular, lo cual determinará la suerte del contenido de los acuerdos, el marco político y jurídico de transición y sus demás mecanismos extrajudiciales. Deseablemente éstos deben atender el debate entre los diversos sectores de la sociedad en torno a un marco mayoritariamente aceptable para las negociaciones de paz.

Estos asuntos han sido objeto de fuertes tensiones en Colombia, entre: los enfoques que proponen la implementación de programas para responder a compromisos propios de la negociación, con quienes pugnan por cambios imprescindibles para la transformación de los conflictos; la discusión sobre poner fin a la violencia con altos costos de impunidad o quienes proponen abordar las raíces del conflicto como prevención de nuevos ciclos de la violencia; la garantía y restitución de derechos de las víctimas como la simple indemnización o el acceso a la verdad y formas de justicia. Tradicionalmente, estos asuntos son presentados como dos polos de una misma discusión, a la cual, no escapa el DDR como uno de los medios de implementación de los acuerdos de paz, con enormes potencialidades para la promoción de mecanismos de transición de la guerra a la paz en lo local.

En este orden, puede decirse que, un proceso DDR puede ocurrir como resultado de la adaptación de las fuerzas armadas o ejércitos de un país a condiciones de paz, como estrategia para liberar recursos para la inversión en desarrollo, o como el resultado de la negociación de la paz, rendición o derrota militar, e incluso, como táctica de desgaste militar, lo cual puede resultar bastante costoso y de corto alcance en relación con la negociación de la paz con todos los actores, principalmente, porque como táctica de guerra es susceptible de utilización por parte del actor armado ilegal como mecanismo de subsistencia de la tropa a la vez que se presenta la doble militancia, sobre esto Springer; 2006 llama la atención.

Sobre las operaciones de desarme, desmovilización y reintegración -DDR- existen dos enfoques predominantes, los Estándares Internacionales DDR de la Naciones Unidas (ISDDR-UN), por un lado, confieren al DDR la responsabilidad de desmovilizar y desarmar los ejércitos, así como procurar que no vuelvan a las armas, previendo las demandas internas de dicha población para su inserción a la vida civil y los factores externos que pudieran incidir en nuevos ciclos de violencia. De acuerdo con dicho enfoque, el objetivo superior de los programas DDR es ayudar a desestructurar el conflicto armado y disminuir factores de riesgo para la aparición de nuevos ciclos del conflicto.³

Por otro lado, el Programa Multicountry para la desmovilización y reintegración - Iniciativa de Estocolmo (SIDDR) – destaca que el objetivo de los programas DDR es contribuir no

³ De acuerdo con el enfoque integrado o estándar internacional de Naciones Unidas (IDDRS) 2006, el objetivo del proceso DDR es contribuir a la seguridad y la estabilidad de entornos para el desarrollo en el post-conflicto, abordar el problema de la seguridad post-conflicto que surge cuando los ex combatientes que se quedan sin medios de subsistencia o de redes de apoyo, que no sean sus antiguos compañeros, durante el período de transición del conflicto a la paz y el desarrollo, a través de un proceso de la eliminación de las armas de las manos de los combatientes, y la ayuda para integrarse social y económicamente en la sociedad. Debe impedir un retorno a los conflictos violentos.

sólo a un medio seguro y estable en el que el proceso DDR y la transición en general hacia la paz puedan ser constantes, sino además en la reestructuración de la política. Esta concepción, entiende que la reconstrucción social y económica y el desarrollo a largo plazo únicamente pueden hallar arraigo en un medio de esta índole.

Diferentes procesos en el mundo han evidenciado que las operaciones DDR son un paso decisivo para avanzar en procesos más integrales de desarrollo y paz hacia la consolidación de la democracia, procurando superar la visión simplista que propende por la consolidación de la seguridad, considerada como una estrategia de corto plazo. Esto sugiere que en la desestructuración de la capacidad bélica del actor armado y de la sociedad, se precisan soportes al DDR y a la transición⁴. En el entendido, de que no sólo el actor armado a través de las armas es poseedor de la capacidad de desestabilización del orden democrático, sino que además existen otras estructuras que garantizaron el sostenimiento y consolidación de dichos grupos.

Generalmente las políticas DDR se estructuran como servicios básicos que poco consultan el problema particular sobre el cual pretende incidir en cada contexto, teniendo en cuenta la naturaleza del actor armado en particular, quién causa la violencia y cómo opera, lo cual es determinante en la definición de los alcances y límites del proceso, los obstáculos y los mejores resultados a los que se puede aspirar en un contexto determinado, evitando así caer en generalizaciones o lugares comunes sobre la guerra.

De manera general, los expertos recomiendan el análisis del contexto político, social, económico y de seguridad en términos de los desafíos para la superación del conflicto y la estabilización, así como el potencial para la construcción de la paz, que más allá de los compromisos que establezcan las partes en conflicto, implica compromiso de las élites políticas dentro y fuera del gobierno.

En relación con el ambiente social, la mayoría de sugerencias se refieren a la importancia de tener en cuenta los costos humanos y materiales de la violencia producto del conflicto armado. Sin embargo, quienes utilizan como marco de referencia las raíces de los conflictos para la superación de la violencia armada, sugieren atender los desafíos de las transformaciones de prácticas y valores culturales no democráticos, especialmente, de sociedades con conflictos armados de larga duración.

⁴ Tales como, la reforma del sector de la seguridad y de la defensa (ej. Burundi, Eritrea); el refuerzo de la **autoridad gubernamental** (Afganistán); la **transición política** del país y el establecimiento de una **estructura institucional** (Angola), la reconstrucción de las **poblaciones afectadas por el conflicto armado** (Burundi); el refuerzo de la **estabilidad socio-económica** (Eritrea) o la creación de un ambiente estable para que se den **condiciones de seguridad humana** (Sudán). Escola de Pau y Agencia de Cooperación Española, 2008; 21. prácticas de desarme de la sociedad y control de armas, el endurecimiento en contra del tráfico de armas y estupefacientes, las garantías de la seguridad humana, reforma agraria, entre otras (Escola de Pau y Agencia de Cooperación Española; 2007. Springer, 2005). No atender, por ejemplo, reformas del tipo de desarme de la sociedad y lucha contra el tráfico ilícito en un contexto de conflicto armado de larga duración, resulta en una amenaza de violencia repetida que combinada con pobreza y bajos índices de seguridad humana, falta de perspectivas de reintegración y un mayor acceso a las armas puede llevar a tasas de crímenes aún más altas y a un nivel continuo de violencia. (Gleichmann *et al.*, 2004 p.25).

En relación con la estabilización económica, enmarcan sus consideraciones y recomendaciones a partir del supuesto de que, el conflicto armado destruye las economías nacionales y locales, y la infraestructura, a la vez que estimula el aumento de la corrupción y el desvío de recursos tras el postconflicto, provocando que disminuya la capacidad de los gobiernos para dirigir sus países y para regular las economías ilegales que se convierten en actividades más lucrativas articuladoras de nuevos ciclos del conflicto. De fondo, tales análisis subrayan la necesidad de fortalecer la economía nacional y regional articulando a esto el éxito de la reintegración de los excombatientes, sostenibilidad de mejoras sociales y la productividad de las comunidades socavada por la pobreza.

Finalmente, Naciones Unidas señala la necesidad de analizar los posibles escenarios de seguridad y generación de violencia armada, puesto que, incluso cuando hay un fin formal de las hostilidades, la ruptura de la ley y el orden, junto a la proliferación de armas cortas puede generar altos niveles de violencia armada. En este sentido en el DDR se debe considerar los posibles escenarios de seguridad para contener y resolver posibles expresiones de violencia en compañía de otras instituciones públicas y/o de la sociedad civil.

Si bien, una política DDR en sí misma no resuelve las causas del conflicto, las recomendaciones de análisis contextual para su formulación, contribuyen a apaciguar el potencial de futuros conflictos violentos y la formulación de otras estrategias de paz y reformas complementarias. Independientemente del alcance del modelo interpretativo del fenómeno para la formulación del DDR, los expertos coinciden en señalar el escaso sentido y los altos riesgos para futuros escenarios de paz, que puede generar la implementación de un proceso DDR en medio de una negociación o acuerdo de paz superficial, que no trabaje sobre las causas del conflicto, lo que generalmente deviene en el rearme o la pervivencia del conflicto armado por otras vías, posiblemente más refinadas (IMDR, 2007)⁵.

Las expectativas de un proceso DRR con las AUC se relacionan con el esclarecimiento histórico de las responsabilidades políticas de una élite conservadora que se opuso a los procesos de apertura democrática en el país y las responsabilidades del establecimiento en la creación de ejércitos paramilitares como principal estrategia para obstaculizar el pluralismo político (Alonso, 2007; p. 23). En el ámbito regional, las expectativas sobre el DDR tienen que ver con la desmovilización de todos los combatientes; desestructuración de los ejércitos; el rompimiento de cadenas de mando y redes de apoyo políticas, económicas y sociales; la entrega de todas las armas; el cese de actividades económicas ilegales y de la violencia armada; el establecimiento de responsabilidades por la violación del Derecho Internacional Humanitario –DIH–.

⁵ Iniciativa Multicountry de Desmovilización y Reintegración. 2007. Desde 1994 se han implementado 34 procesos DDR en el mundo (22 de éstos en África). Lamentablemente, algunos de los países implicados han pasado por más de un programa. A pesar de tener la esperanza de que los programas DDR puedan contribuir en forma significativa a los procesos de paz, se sabe que casi la mitad de los países que salen de conflictos corren el peligro de recaer en la violencia y en mayor grado; es decir, la violencia solo cambia de forma y puede, incluso, aumentar en el período post-conflicto.

En lo local, idealmente las expectativas sobre el DDR y la Justicia Transicional se encuentran en relación con la efectiva desarticulación del poder paramilitar: el efectivo rompimiento de la cadena de mando sobre los combatientes; el esclarecimiento de los mecanismos a través, de los cuales operó el actor armado y las responsabilidades de actores locales y regionales privados e institucionales locales y regionales; implementación de procesos de memoria colectiva y restitución de derechos de las víctimas y de justicia restaurativa; restablecimiento de tierras y bienes materiales expropiados; la transformación de imaginarios colectivos sobre el actor desmovilizado como referente de poder; la transformación de los valores culturales que soportaron el poder armado; transformaciones en los marcos dinámicos de la función pública y la política local que soportaron la acción armada. Ineludiblemente ello plantea el reto de articular los mecanismos DDR y de justicia transicional entorno a objetivos y propósitos coordinados, pero, principalmente, erigirse sobre una base más comprensiva del problema con acuerdo a los referentes democráticos del Estado de derecho.

1.1 Fases de las operaciones de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes⁶ y modelos de Intervención

Diferentes procesos en el mundo, han evidenciado que las operaciones DDR son un paso decisivo para avanzar en procesos más integrales de desarrollo y paz y en la consolidación de la democracia, procurando superar la visión simplista que propende por la consolidación de la seguridad, considerada como una estrategia de corto plazo. Esto sugiere, que en la desestructuración de la capacidad bélica del actor armado y de la sociedad se precisan soportes al DDR y a la transición⁷. En el entendido, de que no sólo el actor armado es

⁶ Se considera “combatiente” no sólo a los individuos que portan un arma, sino también a todas aquellas personas que forman parte del grupo armado “personas que trabajan en logística y administración, así como individuos que han sido secuestrados y de los que se ha abusado sexualmente o de cualquier otra manera, y quienes posteriormente han permanecido con el grupo” (Gleichmann, *et al*, 2004, p. 15).

Naciones Unidas define el término basado en una analogía con la definición que figura en el Tercer Convenio de Ginebra de 1949 en referencia al trato de los prisioneros de guerra en relación con las personas que trabajan en los conflictos armados internacionales, combatiente es una persona que: es un miembro de un ejército nacional o un ejército irregular, o que está participando activamente en las actividades militares y las hostilidades, o que está involucrado en reclutamiento y transporte de personal militar, o comanda y toma decisiones dentro del Ejército armado legal o un ejército ilegal, o que llegó a un país con armas y uniformes militares o como parte de una estructura militar; o de haber llegado en un país calido llevar armas o haber llegado en un país de acogida como una determinación civil ordinario y a partir de entonces asume alguno de los atributos mencionados anteriormente (Operational Guide to the integrated disarmament, demobilization and reintegration standards, 2006; p.24)

⁷ Tales como, la reforma del sector de la seguridad y de la defensa (ej. Burundi, Eritrea); el refuerzo de la **autoridad gubernamental** (Afganistán); la **transición política** del país y el establecimiento de una **estructura institucional** (Angola), la reconstrucción de las **poblaciones afectadas por el conflicto armado** (Burundi); el refuerzo de la **estabilidad socio-económica** (Eritrea) o la creación de un ambiente estable para que se den **condiciones de seguridad humana** (Sudán) (Ecola de Pau y Agencia de Cooperación Española, 2008; p. 21). prácticas de desarme de la sociedad y control de armas, el endurecimiento en contra del tráfico de armas y estupefacientes, las garantías de la seguridad humana, reforma agraria, entre otras (Escola de Pau y Agencia de Cooperación Española; 2007. Springer, 2005). No atender, por ejemplo, reformas del tipo de

poseedor de la capacidad de desestabilizar el orden democrático, sino, que existen otras estructuras que garantizaron el sostenimiento y consolidación de dichos grupos. Y por otro lado, que la larga duración del conflicto armado arraiga en la sociedad “órdenes alternos” como formas de ser de lo estatal, favorables a la permanencia de contextos de ilegalidad que amenazan cualquier intento de reconstrucción de un orden democrático.

De acuerdo con los estándares internacionales de Naciones Unidas, las estrategias de una política DDR deben centrarse en:

- Contribuir a la seguridad y estabilidad política a través de la disminución de los índices de violencia.
- Devolver la confianza a la población en general a través de la no repetición de los actos violentos.
- Prevenir el reingreso de los excombatientes a la guerra.
- Prevenir o mitigar futuros conflictos violentos.
- Contribuir a la reconciliación nacional, que debe involucrar tanto a los excombatientes y víctimas como a la población civil, lo cual requiere medidas de Justicia Transicional.
- Liberar recursos humanos y financieros y capital social para la reconstrucción y el desarrollo incluyente.

El proceso es multifocal y multidisciplinario en la medida en que “se desactiva el pie de fuerza y se neutraliza la capacidad bélica, el aparato financiero y las redes de tráfico y apoyo, y la estructura general de operaciones de uno o más grupos armados dentro de un conflicto interno” (Springer, 2005). Así, si se tiene en cuenta, que la función principal del desarme⁸ es construir confianza, recuperar el monopolio de las armas, y promover la tramitación de conflictos con el uso de formas no violentas, se precisan esfuerzos en la desactivación de las estructuras militares y demás factores como redes de tráfico de armas, civiles armados, entre otros, que podrían incidir posteriormente en un fácil rearme dada la posibilidad de reemplazarlas.

Una estrategia integral del desarme no se limitará a la recolección de las armas de los combatientes, se precisa además, la desarticulación de las redes de civiles armados, campañas anti proliferación de armas, desmonte de redes de tráfico, endurecimiento de la legislación para el porte, uso y registro de armas, remoción de minas y municiones sin explotar –MUSE-. En tal sentido Springer propone que el problema del desarme más que un procedimiento de acopio, control y disposición de armas, como un procedimiento

desarme de la sociedad y lucha contra el tráfico ilícito en un contexto de conflicto armado de larga duración, resulta en una amenaza de violencia repetida que combinada con pobreza y bajos índices de seguridad humana, falta de perspectivas de reintegración y un mayor acceso a las armas puede llevar a tasas de crímenes aún más altas y a un nivel continuo de violencia. (Gleichmann *et al.*, 2004; p.25).

⁸ Desarme se suele definir como la recogida, control y eliminación de armas pequeñas, municiones, explosivos, armas ligeras y pesadas de los combatientes y en ocasiones de los civiles (Disarmament..., 2004; p. 29; UN,1999; p. 15; Özerdem, 2002; p. 962; Nilsson, 2005. Ecola de pau y Agencia de Cooperación Española, 2007. Colin Gleichmann *et al.*, 2004)

meramente técnico, que consiste en poner en marcha planes para desactivar y deshabilitar el potencial bélico⁹ que sustenta el conflicto.

Durante las etapas de la desmovilización y la reintegración, deben quedar absolutamente develados los mecanismos y dinámicas de soporte de la acción del ejército armado ilegal, de manera que la fuerza pública logre asumir eficazmente el control de éstos eliminando así las posibilidades de rearme. Las diferentes etapas consisten en:

- *La desmovilización*, se da en el campo militar, como la disolución controlada de una unidad armada del grupo, en una temporalidad corta con el propósito de reducir o disolver completamente las fuerzas armadas u otros elementos armados que han participado en un conflicto, con lo cual, se da un paso hacia la recuperación del monopolio de la violencia en manos del Estado, por la disolución de los ejércitos en competencia o los excedentes de las Fuerzas Armadas - FF.AA- del país. Así, se prepara a los excombatientes para su licenciamiento con documentos de identificación, se les cuenta y registra, y se reúne la información necesaria para su integración en la comunidad.
- *La reinserción*, es una etapa entre la desmovilización y la reintegración, durante la cual, se entrega un paquete de apoyo básico o ayuda transitoria: ropa, utensilios de cocina, transporte, entre otros. Que facilitan la llegada y asentamiento del desmovilizado y su familia en el lugar que haya elegido para vivir o donde se llevará a cabo la reintegración. Ésta ha sido definida como “el proceso por el que excombatientes adquieren la condición de civiles y acceden a formas civiles de empleo e ingresos”.
- *La Reintegración*, ha sido definida como el proceso en el cual los ex combatientes adquieren la condición de civil y obtienen un empleo sostenible e ingresos. Éste es esencialmente un proceso social y económico con un marco de tiempo libre, que tiene lugar en las comunidades a nivel local. Es parte del desarrollo general de un país y una responsabilidad nacional de largo plazo coincide con el objetivo central de los programas de reintegración - apoyar a los excombatientes para su integración social y económica a la sociedad civil-.

Mientras que el desarme y la desmovilización, sirven primariamente para desarrollar confianza desarmando y registrando a los combatientes. Se asume que con la ayuda de los servicios ofrecidos por los programas de reintegración los excombatientes serán desmovilizados y desearán llevar una vida civil. La reintegración, pasa del foco primario sobre los individuos, sus necesidades y destrezas hacia uno en el cual serán un miembro responsable de la comunidad, apoyando así el desarrollo de la ésta. (Naciones Unidas, ISDDR; 2006).

⁹ Utiliza la expresión potencial bélico en el entendido que más allá de retirar de una sociedad las armas y cerrar las puertas a la industria sin control de armas, persisten conocimientos y prácticas que es preciso desestructurar en la cultura para desactivar el potencial bélico de una sociedad, que puede conducir otras trayectorias de la violencia (Springer, 2005; p.118).

Varios autores, coinciden en la necesidad de atender las diferentes dimensiones económica, política y social, para que los excombatientes hagan parte de la sociedad civil en condiciones que lo harían el resto de la población. Pues, existen tres grandes retos a los que se enfrentan los excombatientes en la sociedad: las amenazas de seguridad; los conflictos que pueden generarse por las atrocidades que cometieron, generando ciertas tensiones y divisiones en la sociedad; y lograr valerse por sí mismos aún con las limitaciones o secuelas de la guerra (Nilsson, 2005; p.29).

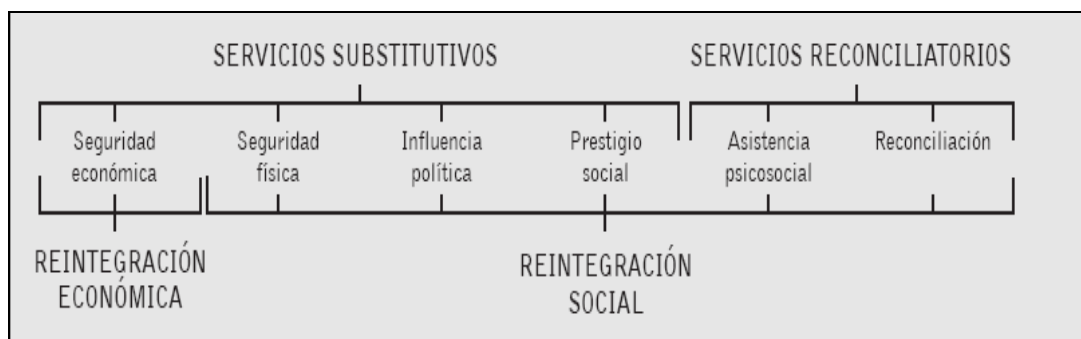
De acuerdo con las experiencias internacionales en la materia, un primer modelo de reintegración se centra en el excombatiente y tiende a resolver necesidades individuales de reintegración a largo plazo, previendo los esfuerzos y demandas que implicará la transición de la vida militar a la vida civil, procurando formas civiles de trabajo e ingresos, así como el proceso de vinculación política, económica y social a una comunidad. Este modelo está referido principalmente, a los programas de asimilación económica de los combatientes desmovilizados, especialmente a través de la formación profesional y planes de creación de empleo, paquetes de educación, salud y recreación, destinados a obstaculizar los descontentos que puedan socavar la consolidación de la seguridad.

El segundo modelo, es el de la reintegración centrada en la comunidad, el cual, potencia el ambiente favorable para la reconciliación evitando tensiones y resentimientos entre los excombatientes y otros grupos vulnerables de la sociedad que tendrían que ser objeto de políticas serias de reparación en el marco de construcción de la paz. De acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, el DDR sienta las bases para la protección y mantenimiento de las comunidades, potenciando su capacidad de absorción¹⁰, en la que estas personas puedan vivir como ciudadanos respetuosos de la ley, mientras se fortalece la construcción nacional como la capacidad para la paz a largo plazo, la seguridad y el desarrollo. Los participantes de dicho modelo son los excombatientes, sus familias, y las comunidades receptoras en un compromiso de largo plazo para profundizar el desarrollo socioeconómico de la región, trabajar por la inclusión de los principales afectados por la violencia y la superación de la pobreza, y la transformación de los contextos de ilegalidad y violencia, en un marco de tiempo indeterminado.

Ambos modelos de reintegración distinguen entre dos tipos de servicios básicos. Los servicios sustitutivos son incentivos que sustituyen los beneficios ofrecidos por la violencia armada en aspectos de la seguridad física, económica, la influencia política y el prestigio social. Y los reconciliatorios tienen como propósito avanzar en la vinculación del excombatiente a la comunidad, e incluyen asistencia sicosocial y otros en interacción con las comunidades receptoras (tabla 2).

¹⁰Por capacidad de absorción Naciones Unidas entiende la capacidad de una comunidad, la economía y / o país para incluir a los ex combatientes como activos miembros de pleno derecho de la sociedad. La capacidad de absorción se utiliza a menudo en relación con las capacidades de las comunidades locales, pero también puede referirse a social y las oportunidades de reinserción política.

Tabla 2.
Modelo de servicios y necesidades para la reintegración



Fuente: Escola de Pau y Agencia de Cooperación Española, 2007.

Es importante una visión de la reintegración que no excluya ninguna de las tres dimensiones de política, social y económica de ésta, ya que, es poco probable que uno de estos aspectos pueda lograrse sin los otros, las necesidades de reintegración, se definen como:

- *Reintegración económica:* procura que los excombatientes y sus familias construyan sus propios medios de subsistencia de manera autónoma, a través, de un acompañamiento previo para el entrenamiento y formación de habilidades para el empleo remunerado que garantice su auto-suficiencia.
- *Reintegración política:* implica que los ex combatientes y sus familias pasarán a formar parte de procesos de toma de decisiones sobre los temas de la vida pública y los suyos propios como miembros organizados de la sociedad a través de los procedimientos democráticos. De acuerdo con el tipo de proceso de paz, la reintegración política ha implicado la participación de los excombatientes en la política nacional.
- *Reintegración social:* es vista no sólo como "la aceptación de los ex combatientes y sus familias" por parte de una comunidad de acogida. Implica además, potenciar las capacidades en las comunidades, instituciones y organizaciones locales, en un marco de la recuperación de la confianza cívica y reciprocidad democrática, como compromiso de todos con la superación de la violencia, con base en lo cual se produce la aceptación social del excombatiente.

La puesta en marcha de la fase de reintegración implica la participación tanto del gobierno nacional como el regional y el local, y debe incluir (Nilson, 2007; p. 28)

- La formulación de una política nacional flexible de acuerdo con las demandas de los contextos regionales y locales.
- El apoyo a las agencias regionales para la implementación.

- Ayuda de emergencia a nivel local.
- Pagos de incentivos.
- Los paquetes de reinserción.
- Los proyectos de (re)construcción.
- Espacios de deliberación de los diversos actores.

Los resultados de largo plazo de la reintegración, son el factor más relevante para la estabilidad y la paz. Esto significa que esta es la fase decisiva en la cual se aplican todas las estrategias tendientes a consolidar el orden y la ley en todo el territorio nacional en manos del Estado. De acuerdo con estos planteamientos preliminares, una Política de Reintegración deberá dar cuenta, por un lado, de las estrategias conducentes a garantizar al individuo y la comunidad niveles aceptables de condiciones de vida digna, básicamente a través, de los servicios sustitutivos de los beneficios de la guerra, y los servicios reconciliatorios. Y por otro lado, diseñar e implementar estrategias de inclusión y desarrollo socioeconómico regional para la comunidad en general, de cara a la reconstrucción de las sociedades y las economías locales para garantizar autonomía a los excombatientes y las víctimas para la finalización de los servicios asistenciales.

Finalmente, algunos autores atribuyen el éxito DDR a cuatro factores determinantes (WB, 2001; p.14, Hitchcock, 2004; p.37 citado por Nilsson, 2005):

- El sostenimiento de la voluntad política de las partes
- La implementación de medidas de seguridad que regulen la violencia.
- El rápido abordaje del proceso DDR
- La amplia participación de toda la sociedad en el proceso.

Al caso es pertinente agregar estrategias de marcos más amplios para la paz, como:

- La negociación con otros actores armados de diferente naturaleza.
- Fomento al desarrollo socioeconómico y superación de la pobreza

1.2 Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos alzados ilegales de la Alta Consejería para la Reintegración:

Tras cinco años de iniciada la desmovilización y tres años de puesta en marcha de varias iniciativas para la reintegración de los excombatientes, a partir de las cuales en el 2007 se origina el Programa de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos al margen de la ley, sólo en el año 2008 se logra estructurar un modelo de reintegración en el documento CONPES 3554 de diciembre de 2008. La política procura recoger los marcos teóricos y los aportes que en la materia han surgido de otras experiencias DDR en el mundo y de manera especial la experiencia del programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. Para su puesta en marcha, la ACR ha diseñado un modelo de Gerencias regionales con base en el mayor número de concentración de la población participante. Antioquia tiene Gerencias de programa en las subregiones de Urabá: San Pedro de Urabá, Necoclí; en el Bajo Cauca en el municipio de Cauca; en el Magdalena Medio en el municipio de Puerto Berrío y Medellín para el resto de Antioquia, Paz y Reconciliación para atender los desmovilizados del municipio de Medellín y el CRO Juvenil.

Basada en un enfoque de intervención individual y comunitario allí donde se presenta la mayor concentración de excombatientes, el objetivo central de la Política Nacional busca reintegrar social, comunitaria y económicamente las personas desmovilizadas, a través del apoyo psicosocial, formación y sensibilización de los excombatientes para que voluntariamente hagan parte y aprovechen las oportunidades de la civilidad y; promoción de la convivencia y la reconciliación de las comunidades receptoras en aras de maximizar la capacidad de absorción y aceptación del excombatiente¹¹.

Los objetivos centrales de la política están enfocados en “apoyar, formar y sensibilizar los excombatientes para que voluntaria y autónomamente hagan parte de y aprovechen las oportunidades que ofrece la civilidad” (COMPES, 2008) y en promover la convivencia y la reconciliación en las comunidades receptoras. Para ello, el ejercicio de la política, se basa en gran medida en la estrategia psicosocial y de inclusión de los excombatientes como población vulnerable.

Los objetivos específicos son:

1. Identificación y promoción de la solución de los problemas jurídicos de los desmovilizados.
2. Apoyo a la formación de los desmovilizados como personas autónomas a través de la atención psicosocial y manejo saludable del tiempo libre.
3. Promoción de estilos de vida saludables en el ámbito físico y mental a través del acceso al Sistema de Seguridad Social y Salud.

¹¹ COMPES 3554. 2008.

4. Promoción de la permanencia en el sistema educativo formal.
5. Contribución a la construcción de habilidades y destrezas que les permitan insertarse exitosamente en el mercado laboral y la generación de sus propios ingresos.
6. Promoción de la convivencia, la reconciliación y fortalecimiento social de las comunidades receptoras.

A través de estos objetivos, a largo plazo, la política gubernamental pretende que se produzcan más desmovilizaciones de actores y grupos armados, la consolidación de los avances en materia de seguridad y aportar a la construcción de la paz a través del DDR, impedir el retorno de los excombatientes a la vía armada y garantizar la no repetición de los actos violentos y la disminución de las víctimas, así, como fortalecer las instituciones del Estado para la aplicación de la política descentralizada de reintegración.

De acuerdo con la ACR¹² son 13 los indicadores de gestión de la política, la mayoría de ellos de eficiencia, medida por el número de municipios intervenidos, número desmovilizados en salud, número desmovilizados con educación formal y para el trabajo, número desmovilizados con apoyo psicosocial, número desmovilizados con planes de negocios, convenios con la sociedad civil y sector privado para la reintegración y cumplimiento de dichos convenios, entre otros.

En términos generales, la Política Nacional para la Reintegración incorpora referentes internacionales en materia del DDR, ajustándose a los principales señalamientos que las experiencias internacionales han realizado a los procesos de paz en el mundo y los programas DDR.

La Política, tiene como marco la aspiración de consolidar los logros alcanzados en materia de seguridad y en el largo plazo, estimular el desarrollo socioeconómico del país. El DDR, es tratado en el documento de la Política Nacional como un componente fundamental para la consolidación de la paz articulado a estrategias de desarrollo del país. A pesar de ello, la Política no plantea mecanismos para la reactivación del desarrollo económico local y regional de las comunidades articuladas al proceso DDR, donde en último término debe darse la reintegración de excombatientes y restitución de derechos a las víctimas, en una perspectiva de superación de la pobreza; lo cual, ha oscilado entre fundamento político para la pervivencia del conflicto armado y recurso estratégico para la provisión de combatientes.

¹² <http://www.reintegracion.gov.co/app/Portals/0/indicadores/Indicadores.pdf>

2. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL SUROESTE: El Caso de los municipios de Andes y Amagá

El suroeste ha mantenido un cierto orden a través de la práctica de la mal llamada “limpieza social”, más fuertemente desarrollada durante la década de los 80. La presencia de grupos de “limpieza social” se empezó a manifestar en municipios como Andes, Jardín, Caramanta, Venecia y Urrao. La estrategia de estos grupos, consistió en la amenaza, la desaparición forzada de personas y el asesinato de campesinos, líderes cívicos e indígenas, acusados de pertenecer o simpatizar con la subversión, pero además, de la eliminación del *otro* que no es funcional al orden social establecido. Si bien ello pareciera a simple vista ser recurrente como práctica paramilitar en las diferentes subregiones, como se verá, ello marca una profunda diferencia con las organizaciones armadas paramilitares que se configuraron en las demás subregiones de Antioquia.

Un rasgo particular de la acción paramilitar fue una profunda intolerancia por la diferencia y la eliminación del *otro diferente* amenazante de la transformación del orden social y los valores que lo sostenían, fuertemente arraigados en la cultura paisa tradicional de la familia extensa, organizada, conservadora y emprendedora. Así, de acuerdo con la primera cumbre de las autodefensas celebrada en 1994, se da cuenta de la presencia de estructuras armadas bajo denominaciones muy variadas en Betania (los Racumines), en Andes, Támesis, Caramanta y Valparaíso (La Escopeta), en Jardín (Jardín sin guerrilla) y en Angelópolis, Hispania, Concordia y Titiribí (Autodefensas del pueblo). A partir de 1994, estos grupos locales reciben el apoyo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU-, con lo cual lograron ampliar su radio de acción.

Hacia el suroeste cercano al Valle del Aburra resulta clara la influencia de sectores locales en la conformación de grupos de limpieza social previos a la aparición de las ACCU, con el objetivo de proteger la región de la influencia guerrillera. El Ejército de Liberación Nacional –ELN-, entre 1990 y 1996 registra en la subregión una actividad armada similar a la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, e incluso en algunos años supera la actuación de esta guerrilla.

La gestación del Bloque Suroeste, también, se encuentra en la ampliación territorial de las ACCU. Fue Vicente Castaño, quien buscó incursionar en zonas bajo influencia de las FARC, que comprendía los municipios de Urrao, Betulia, Concordia, Amagá, Angelópolis, Titiribí y Ciudad Bolívar. Sus principales zonas de concentración se establecieron en Amaga (caserío La Mina), en Titiribí (veredas El Caracol, Albania, El Morro y Sinifaná) y en algunos corregimientos de Ciudad Bolívar. Al momento de iniciarse el proceso de negociación con el Gobierno en diciembre de 2002, la estructura de las AUC contaba con una presencia consolidada en municipios como Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Amagá, Liborina y Andes, mientras que se disputaba con las FARC, el extenso territorio de Urrao, incursionando desde el occidente de los municipios de Salgar, Concordia, Betulia, Anzá y Caicedo.

El 30 de enero de 2005, en el sitio San Gregorio, del corregimiento Alfonso López del municipio de Ciudad Bolívar, se llevó a cabo la desmovilización de 125 miembros junto con 103 armas que, operaban en el Suroeste, al mando de Jesús Alcides Duque alias “René. Es importante aclarar, que algunos analistas tienden a relacionar el Bloque Suroeste con el Noroccidental y el desaparecido *bloque Metro* derrotado por “Don Berna” y la naciente estructura *Héroes de Granada* que lo reemplazó. Sin embargo, esta nubosidad sobre el ejército paramilitar del suroeste, junto al incumplimiento a la fecha de desmovilización del exjefe paramilitar aludiendo problemas de seguridad y su posterior escape de la Mesa de Ralito, hacen pensar en que el bloque tenía serios problemas de fraccionamiento. Posteriormente, en el 2007 el ex jefe paramilitar fue capturado.

Actualmente, en el suroeste se concentra una población de 198 desmovilizados, 173 de ellos son desmovilizados colectivos de las AUC, el resto, son desmovilizados individuales. De acuerdo con su estado dentro del programa de reintegración, sólo 150 se encuentran activos, 11 han sido asesinados, 9 detenidos y 28 inactivos.

2.1 Municipio de Andes

Caracterización de la población desmovilizada

En el municipio de Andes, se encontró un total de 19 hombres participantes del programa DDR, distribuidos así: 13 desmovilizados colectivos de las AUC, 1 desmovilizado individual de las AUC y 5 desmovilizados individualmente de las FARC. De acuerdo con la edad, 6 están entre los 18 y 25 años de edad, 11 entre los 26 y los 40 años y 2 tiene más de 40 años. Todos los participantes del programa tienen cédula de ciudadanía, de los cuales 12 cuentan con libreta militar y 10 tienen Certificado del pasado judicial. 12 de ellos tienen básica primaria, 1 secundaria, del resto no se tiene información.

De los 13 desmovilizados colectivamente, 11 están activos dentro del programa DDR y 2 inactivos. La población desmovilizada individualmente permanece dentro del programa. El 10% de la población por reintegrar ha dejado de asistir al programa DDR en el municipio de Andes, la cual corresponde a 2 hombres desmovilizados colectivamente de las AUC. Sus edades se encuentran entre los 18 y 25 años de edad. Ambos realizaron el proceso de cedulaación, certificado de pasado judicial y libreta militar. Ambas personas se encuentran dentro del Régimen subsidiado en Salud y no se tiene registro del nivel de escolaridad.

La población activa dentro del programa DDR asciende a 17 hombres excombatientes de los cuales, 11 son desmovilizados colectivamente de las AUC, 1 de desmovilización individual del mismo grupo y 5 desmovilizados individualmente de las FARC. 4 de ellos están en edades entre los 18 y 25 años de edad, 11 entre 26 y 40 y 2 son mayores de 40 años. Los diecisiete, poseen cédula de ciudadanía, de ellos sólo 10 tienen libreta militar y 8 tienen Certificado de pasado judicial. Sobre el nivel de escolaridad, se encuentra que de 4 no se tiene información al respecto, 12 tiene primaria y 1 secundaria. Respecto a la salud no se encuentra información de 1, 10 se encuentran en el Régimen Subsidiado y 6 en el Régimen Contributivo.

En términos generales, los excombatientes ubicados en estos municipios no tienen muy claro el contenido de los acuerdos realizados durante la negociación de su desmovilización. A pesar de haber transitado por las diversas etapas del DDR, aún no les resultan muy claros sus derechos y rutas acceso a éstos. En consecuencia, perciben que individualmente deben construir oportunidades para su proceso de reintegración, sin generarle mayores responsabilidades en ello a otros sectores del Estado o de la sociedad, a pesar, de que admiten la participación de las autoridades civiles y militares, así como el sector económico en el conflicto armado y de endilgarles responsabilidades sobre la violencia que vivió la subregión.

Servicios Sustitutivos

Seguridad Física y Rearme

En el tema de seguridad, los participantes del proceso reconocen que uno de los asuntos que pone en alto riesgo el proceso de reintegración tiene que ver con que algunos mandos

medios estén tratando de reconstruir algún tipo de estructura armada; sin embargo, señalan que este fenómeno se ha presentado sobre todo, en zonas más relacionadas con el tráfico y cultivos ilícitos como es el caso del Magdalena medio, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá. De acuerdo con la ACR, las principales amenazas a la seguridad en la subregión son: amenazas contra la vida, reclutamiento en algunas zonas, presiones por personas o grupos delincuenciales, baja credibilidad por parte de la Fuerza Pública, todo ello para finalizar señalando como ventaja que esta subregión es más tranquila en comparación con otras¹³. El narcotráfico en la subregión tiende a relacionarse con la presencia de familias dedicadas al negocio, el testaferrato, el lavado de dinero en la compra de tierras, así como el aumento de expendios de droga y de los homicidios de drogadictos y de los expendedores a manos de los proveedores de la mercancía.

Con frecuencia la seguridad es el principal factor, junto con el desempleo, que causa la mayor movilidad de los desmovilizados. Los participantes que representan liderazgos y experiencia para los grupos armados, han sufrido atentados por resistir a revincularse. Menor amenaza implican las permanentes invitaciones de la comunidad para resolver problemas. Algunos participantes han optado por mantenerse lo menos visibles posible, puesto que continuar con las actividades de la ACR, especialmente en el área psicosocial, a pesar de que participar en tales actividades ofrece importantes posibilidades económicas para la subsistencia. En noviembre de 2008, el número de homicidios de excombatientes en la subregión del suroeste fue de 10 personas, de acuerdo con la profesional responsable del proceso local de la ACR. En menor medida se presenta la amenaza a la seguridad; por la vía armada o por la vía del desprestigio, como producto de la toma de venganza por parte de particulares que se vieron afectados con el conflicto.

Salud

Según las cifras de la ACR, de los 17 participantes activos, 16 (94%) ya están carnetizados en el SISBEN y afiliados a salud, 10 de ellos al régimen subsidiado y 6 al contributivo (tabla 3). Quienes tuvieron dificultades con la afiliación, se debió a problemas de movilidad que hacen que tengan múltiples registros en el SISBEN y esto obstaculice la rápida y eficaz carnetización. Según la Administración local, el tema de la salud, al menos en términos de coberturas, ha sido eficientemente resuelto.

Tabla 3
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro
Andes	17	10	6	1

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

¹³ Grupo Focal Profesionales Apoyo psicosocia de la Alta Consejería para la Reintegración, 2008.

Los participantes del proceso señalan que si bien el área de la salud ha sido una en las que se han brindado mayores garantías, pueden señalarse algunas problemáticas, como por ejemplo, la ausencia de una atención especial para la población en situación de discapacidad, éstos tienen un trámite especial en el que no media la unidad territorial y que suelen desconocer los participantes. Por otro lado, existen problemas referentes a la caracterización del nivel del SISBEN al que son afiliados los participantes y sus familias. Pues, no hay un direccionamiento nacional al respecto, sino que, depende en gran medida del modo de gestión realizada por el personero municipal

Los excombatientes consideran que este es uno de los derechos a los que pueden acceder con facilidad, pues, el acceso corre por cuenta de la gestión de cada participante. En torno al tema los Gobiernos locales señalan no tener claro el tipo de atención especializada que debe tener con esta población, aunque, pueden garantizar la afiliación, no pueden asumir otro tipo de costos de atención en salud. Ello pone en evidencia el desconocimiento de las rutas interinstitucionales para la atención especial a personas con discapacidades.

Educación

En la tabla 4, se observan las cifras de los excombatientes que han podido acceder a la educación en el municipio de Andes. Del total de personas activas dentro del programa DDR, el 11% tiene educación básica primaria, mismo porcentaje aplica para la educación secundaria. El 88% son población objetivo para terminar su proceso de formación académica, de los cuales el 80% se encuentran estudiando, ninguno de ellos en formación para el trabajo.

Tabla 4
Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo

Municipios	Número de Participantes Activos	Brecha en Formación Académica		Población objetivo para Formación académica	Población atendida	Formación para el empleo
		> 5o	2ª.			
Andes	17	2	2	15	12	0

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

Los participantes del proceso señalan que sólo uno de ellos posee formación secundaria, los demás no alcanzan a ser graduados en primaria, lo que limita sus posibilidades de acceder al mercado laboral y de poder aplicar a los proyectos productivos. El gobierno local comparte este tipo de miradas y considera que el nivel educativo de las personas en el programa, ha generado dificultades en la reintegración de los excombatientes. Todos expresan una gran disposición a emprender procesos educativos y formativos para el trabajo, tanto por la bonificación económica que reciben en contraprestación, como por las posibilidades laborales que facilita. Reconocen la ventaja de la gratuidad de la educación,

pero su situación económica precaria, se impone y no la asumen como un periodo estratégico en la construcción de mayores ventajas competitivas para el empleo. Esto empeora sus oportunidades para la reintegración económica dado que uno de los requisitos indispensables para la ejecución de proyectos productivos es haber cursado la primaria.

Sin embargo, el acceso a educación es mal calificado ya que las clases no han sido iniciadas por falta de asignación de plazas, lo cual de acuerdo con el Gobierno local, corre por cuenta del orden departamental y nacional. En cuanto a formación para el trabajo, del grupo de 19 excombatientes que están en el proceso, 6 se están capacitando con el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- .

Reintegración Económica

En cuanto a proyectos productivos no existe a nivel municipal ningún proyecto que haya sido desembolsado o promovido en el contexto nacional o local. Por parte de la ACR, se ha realizado gestiones con sólo una empresa en busca de oportunidades laborales para los desmovilizados, sin ningún resultado. Por parte del Estado local hay disposición a apoyar en este asunto por medio de la vinculación de los desmovilizados en proyectos gestionados directamente por la Administración local, sin embargo, múltiples problemáticas se presentan debido al nivel educativo de los participantes. Al respecto, la Secretaria de gobierno señala que:

“las acciones para la generación de empleo no son debidamente articuladas desde el estado local y entidades nacionales como Acción Social o la ACR, ya que, para la planeación y ejecución de cualquier proyecto debe tenerse un diagnostico previo de los perfiles de los desmovilizados y poder llevar a cabo proyectos de acuerdo con las situaciones específicas”.(Entrevista Secretaria de Gobierno. 2008).

Adicional a una economía regional que no genera muchos puestos de trabajo y salarios que se acomoden a las expectativas de los desmovilizados, se tiene el escaso entrenamiento y formación de habilidades para el empleo de esta población, ya que, tal como se señaló en el apartado sobre educación, los bajos niveles de alfabetización y las dificultades de eficiencia para la optimización educativa no posibilitan que se desarrollen proyectos productivos o se obtengan empleos que garanticen la autosuficiencia del participante y su núcleo familiar. Ningún participante tiene un empleo estable. El tiempo laborado se presenta por épocas de cosecha. Sin embargo, ocho meses al año es tiempo de no-cosecha y las posibilidades laborales de los excombatientes son nulas; en época de no cosecha la migración es la alternativa posible, por lo que los procesos de reintegración y la continuidad de estos se ponen en riesgo.

No existe apropiación del tema por parte de las autoridades locales, ni interés en el diseño de estrategias locales -Administración municipal /comunidad/sector privado-. Al respecto la Administración municipal señala que no sólo ésta sino *“cualquier tipo de reintegración*

debe ser una responsabilidad compartida entre comunidad, sector privado y Estado local, ya que –según las autoridades locales- uno de los mayores riesgos que corre el proceso DDR en el municipio es el hecho de no poder ofrecer alternativas de empleo, que posibilite que los desmovilizados no vuelvan a la guerra”. Según señala la representante de la ACR, un asunto que no ha permitido que la reintegración económica se concrete en el municipio de Andes, es que la formación para el trabajo no ha sido lo suficientemente aprovechada por los participantes, según ella, porque la participación de los excombatientes en cualquiera de las actividades de reintegración como son el apoyo psicosocial y la educación, esta incentivada por el apoyo humanitario y económico que esto les representa, y en caso de que éste no llegue, los participantes se desvinculan de los procesos. Frente a esto, los participantes responden, que es muy difícil poder hacer parte de los diferentes procesos, a través, de los medios propios, mas aún, si estos medios están sumamente limitados.

Reintegración Política

Los desmovilizados aún no se han vinculado activamente a espacios de participación política o ciudadana, pues, no encuentran beneficio en ello, al respecto uno de ellos señala *“quiero acompañar un candidato al Concejo con quien espero conseguir una casa”* (Entrevista local. Persona desmovilizada, 2008.)

La representante de la ACR, comenta que se han hecho gestiones para que los desmovilizados puedan hacer parte de espacios de participación comunitaria como las Juntas de Acción Comunal (JAC), con el objetivo de que los participantes entiendan que por medio de la vía democrática es que se logra la materialización de derechos.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención Psicosocial

Los participantes del Programa de Reintegración, expresan una alta valoración del acompañamiento psicosocial de la ACR. A éste, le asignan la importancia de la restitución de valores básicos de los individuos para relacionarse con los demás en la vida social a través de trabajos tanto grupales como individuales, que en ambos casos incluyen el núcleo familiar del excombatiente.

En el municipio de Andes, los desmovilizados no son actores que socialmente se visibilicen como excombatientes de grupos armados paramilitares, por el contrario, permanecen en el anonimato. Según señalan los desmovilizados *“con el fin de poder llevar una vida normal”*. Las personas desmovilizadas, reconocen las limitaciones que posee un proceso de reintegración social en estas condiciones y consideran que el ideal es poder visibilizarse como excombatientes y poder reconstruir las relaciones con la comunidad partiendo de la idea de que deben demostrar con “acciones concretas” su voluntad de reintegrarse a la vida civil, sin embargo, examinan los riesgos de ello en una sociedad donde aún existen resentimientos por parte de la comunidad y donde el conflicto armado sigue latente.

Según los desmovilizados y algunos líderes de la sociedad civil, la reintegración social requiere el restablecimiento de confianza entre los diferentes actores locales, principalmente, entre excombatientes y comunidad, lo cual se encuentra determinado por el esclarecimiento del conflicto en lo local y no encuentran estrategias claras por parte de los diferentes Gobiernos. Reclaman conocimiento sobre la política DDR desconocida y poco clara para los actores locales. Tal desconocimiento del proceso DDR y del proceso de reintegración en particular ha conducido a ideas como que desmovilizados reciben privilegios desbordados en comparación con el resto de la sociedad y especialmente las víctimas, las rutas que deben recorrer desmovilizados y víctimas en medio de los acuerdos de paz no es claro. Especialmente víctimas y líderes sociales consideran fundamental para el proceso de reintegración en el municipio, la realización de acciones de retribución a la comunidad y asuntos como la verdad no han hecho parte del proceso en lo local.

Los líderes sociales y las víctimas del conflicto consideran crucial, “humanizar” a los excombatientes, la poca claridad del proceso por parte de la comunidad ha aumentado sus temores y en este sentido, sugieren que es necesario comprender las lógicas estructurales de la guerra y el lugar de un combatiente en ella “*para volver a entender un desmovilizado como un ser humano con derecho a derechos*”. Todavía es más reiterada la afirmación que solo “*cuando uno vea que saben respetar a los demás*” se abren ciertas puertas de entrada a la sociedad. Ello no les impide reconocer el lugar relevante que ocuparon otros no armados en la generación de violencia, por lo cual consideran debe fortalecerse la acción efectiva del Estado.

Según las autoridades locales, hay múltiples factores que influyen en el proceso de reintegración, y son diferentes los requerimientos que la sociedad les hace a los desmovilizados para ello:

“para muchas personas es importantes pues como la etapa de ellos reconozcan que han cometido sus delitos y otra cosa que la gente está esperando es que les ayuden a encontrar a sus muertos que quedaron desaparecidos que por lo menos saber que fue lo que realmente sucedió, para muchas personas eso es lo más importante, saber, conocer, para otros es importante como te digo saber que ellos pidan perdón, para otros es importante saber algún tipo de recompensa económica digamos que es por lo que dejaron de percibir o los sufrimientos que tuvieron en algún tiempo y otras personas es que queremos que se reintegren totalmente a la vida civil como ciudadanos y que dejen de delinquir y de realizar ese tipo de actos que van en contra de la ley”. (Entrevista local. Organizaciones sociales. 2008)

El papel de los diversos actores

Algunos grupos sociales y la organización de víctimas reconocen la importancia de la desmovilización y la reintegración de desmovilizados, así como el papel que la comunidad debe jugar para la no repetición de la violencia consecuente con la legitimación del

ejercicio del poder de actores ilegales y por la falta de movilización ciudadana respecto a la ineficiencia del Estado. Los líderes tienen claro que el incumplimiento del gobierno y el rechazo social pone en riesgo el proceso de reintegración. Según los actores sociales entrevistados, la comunidad no se ha organizado lo suficiente para exigirle al estado los medios necesarios para deliberar acerca de las razones y dinámicas del conflicto, así como la deliberación de los costos y ganancias de un proceso de reintegración.

A pesar de su marginalidad, entre los diferentes actores se reconoce que el mayor aporte que el sector privado puede realizar al proceso de reintegración, es la creación de condiciones de empleabilidad digna a la población desmovilizada, en pro de ayudar en la reintegración económica. Los líderes sociales y los desmovilizados, consideran que esto es fundamental pues, el sector privado se ha visto altamente afectado por el conflicto armado, pero, más aún, por su responsabilidad en la configuración del conflicto local y en la consolidación de los actores armados ilegales.

La administración pública local y la ACR ejecutarán políticas conjuntas de atención a la población desmovilizada, para lo cual, ha venido propiciando algunos encuentros iniciales con algunos expertos para el entendimiento del conflicto, proceso que la comunidad aún no percibe. Ello incluye estrategias de reintegración económica, lo cual ha sido altamente valorado por los desmovilizados y otras acción de inclusión y acompañamiento a víctimas.

2.2 Municipio de Amagá

Caracterización de la población desmovilizada

Los desmovilizados del municipio de Amaga en su mayoría accionaron en este territorio durante su participación en el grupo armado, sin que necesariamente todos militaran en el mismo frente o bloque de las AUC. El núcleo familiar de la mayoría se encuentra compuesto por su cónyuge y entre dos y tres hijos.

De acuerdo con la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), el municipio de Amagá cuenta con un total de 21 excombatientes de las AUC, 20 de ellos de desmovilizaciones colectivas y uno de tipo individual. Del total de excombatientes dos son mujeres y 19 son hombres. De acuerdo con la edad, cinco de ellos están entre los 18 y 25 años de edad, 15 entre los 26 y los 40 años y uno tiene más de 40 años. Todos realizaron el proceso de cedulaación, ocho cuentan con libreta militar y 15 tienen Certificado del pasado judicial.

En relación con el grado de escolaridad, del total de excombatientes, uno tiene grado de escolaridad primaria, siete de secundaria y de 13 no se tiene información. De los desmovilizados colectivos (20), se encuentra que 13 están activos, dos detenidos y cinco inactivos. Por su parte, la población desmovilizada individualmente corresponde a un excombatiente activo. En términos generales, el estado de los excombatientes del proceso DDR para el municipio de Amaga es igual a 14 excombatientes activos, cinco inactivos y dos detenidos.

La población que se encuentra por fuera del programa en el municipio de Amaga asciende al 33% del total de excombatientes por reintegrar. De éstos, siete hombres fueron desmovilizados colectivos de las AUC, cinco de ellos no han regresado al programa y dos se encuentran detenidos. Seis, tienen edades entre 26 y 40 años y uno tiene más de 40 años. Los siete cuentan con cédula de ciudadanía y certificado de pasado judicial, sólo uno tiene libreta militar. No se tiene información del nivel de escolaridad de la población inactiva. Seis de ellos se encontraban vinculados al Régimen de Seguridad Social en Salud, cinco en régimen contributivo y uno en subsidiado.

La población activa o que hace parte del programa DDR en el municipio está integrada por 14 excombatientes de las AUC, de los cuales 13 se desmovilizaron colectivamente y uno de manera individual. De ellos, dos son mujeres y 12 hombres. En relación con las edades, cinco de ellos se encuentran entre los 18 y 25 años de edad y nueve entre 26 y 40 años. Los 14 excombatientes poseen cédula de ciudadanía, siete tienen libreta militar y sólo 10 de ellos tiene certificado de pasado judicial. Respecto a el nivel de escolaridad se encuentra que de seis no se tiene información al respecto, uno tiene primaria y siete secundaria. Todos tienen acceso a salud, siete en el régimen contributivo y siete en el subsidiado.

Servicios Sustitutivos

Seguridad Física y Rearme

Los participantes del proceso denuncian el hecho de que algunos mandos medios tratan de reconstruir algún tipo de estructura armada. Sin embargo, señalan que este fenómeno se ha presentado principalmente, en aquellas zonas donde accionaron como combatientes, es el caso del Magdalena Medio, Norte, Nordeste y Urabá. Por otro lado, los desmovilizados perciben la posibilidad de amenazas a la seguridad por la vía de la venganza de acciones violentas acometidas durante sus épocas de combatientes.

Salud

Según la ACR el total de los 14 participantes activos se encuentran carnetizados, siete afiliados al régimen subsidiado de salud y siete al régimen contributivo (tabla 5). Los participantes, señalan que el proceso de carnetización y afiliación ha sido en general eficiente, sin embargo, algunos de ellos aún no acceden al derecho debido a que han estado inactivos o están recién llegados a la zona. Otros, se quejan de la ineficaz atención de la ESE hospitalaria, en lo cual ha entrado a mediar la administración municipal. El gobierno local señala que no tiene claro el tipo de atención especializada que debe tener con esta población, ni las fuentes de financiación. Entiende que como con todos los habitantes su responsabilidad y alcance de los recursos es para proveer la carnetización, pero no podría asumir otro tipo de costos de atención en salud.

Tabla 5
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro
Amaga	14	7	7	

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

En cuanto a los niveles del SISBEN en los que quedan registrados, según los participantes, es problemático que la mayoría de desmovilizados pertenezcan al nivel 0 y sus familias al nivel 3, pues, encarece la atención médica de su familia, que en calidad de Jefes de Hogar no están en capacidad de pagar, pero además, ello incrementa los costos de vida en general.

Educación

Del total de personas activas dentro del programa DDR de Amaga, el 57% tiene básica primaria, el 14% tiene formación secundaria. Del total, el 85,7% se convierten en objetivo para la terminación del proceso de formación académica básica. De ésta, solo el 28% se encuentran estudiando. El 64% se encuentra en proceso de formación para el empleo (tabla 6).

Tabla 6
Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo

Municipios	N. Participantes Activos	Brecha en Formación Académica		Población objetivo para Formación académica	Población atendida	Formación para el empleo
		> 5o	2 ^a .			
Amagá	14	8	2	12	4	9

Fuente: Datos ACR Antioquia a Junio 2008.

Según los desmovilizados, en el sector educativo ha habido problemas de continuidad. Tras varios meses de descanso la institución que ofrecía el servicio de educación no ha vuelto a reiniciar clases debido –según señalan- a la falta de contratación desde el gobierno departamental. Al respecto, expresa la ACR que la mayor desventaja en la subregión se relaciona con la falta de oportunidad en la contratación de docentes, en algunos municipios lo cual, paraliza los procesos de educación.

De acuerdo con los participantes del proceso DDR, el SENA ofrece hasta 12 cursos. Sin embargo, pocos optan por éstos debido a la urgencia de buscar ingresos económicos y “estabilidad” laboral, en lo cual interrumpe la dedicación horaria que les exige los diferentes servicios ofrecidos por la ACR. De manera que, ni la bonificación económica por asistir a las actividades de la ACR suplen las necesidades económicas, ni la pérdida de la ayuda económica es deseable frente a los esporádicos empleos. A pesar de todo, los desmovilizados no logran articular un propio recorrido de cara a la extracción del mayor beneficio, posiblemente a través, de la formación para los proyectos productivos. Ante estas situaciones, la pregunta que se hacen es ¿hasta cuándo nos van a dar los subsidios?

Reintegración Económica

Amagá, es uno de los pocos municipios de Antioquia, junto con Medellín, Itagüí y Turbo, donde se han desembolsado proyectos productivos. Según la ACR se desembolsó un proyecto de vivienda por \$8.000.000 en el cual se beneficio un participante. En cuanto a la empleabilidad -según la ACR -se ha contactado con una sola empresa, sin embargo, no se registra la gestión directa de ningún empleo, ni la consecución de este. Los participantes consideran que la empleabilidad es un asunto aún sin resolver y con pocas perspectivas al respecto, ya que, aunque se han presentado algunas propuestas estas no se concretan.

La economía de la subregión es fundamentalmente agrícola, con predominancia del cultivo de café. La situación económica de los desmovilizados es inestable, se emplean entre días desempeñando trabajos varios, asunto que según los desmovilizados pone en riesgo el proceso, puesto que, se generan, mas motivaciones para volver a delinquir, pero, con mayor razón, porque se instala un sentimiento de desconfianza hacia el Estado por el

incumplimiento de unos términos en los que los desmovilizados consideran se desarrolló la negociación de paz, en la que la reintegración económica era fundamental y de la cual pocas cosas se han materializado.

La población desmovilizada considera que si bien hay una responsabilidad muy importante en este ámbito del sector privado por el papel que desempeñaron en el conflicto armado, ésta no se asume. La participación de los empresarios y terratenientes en la discusión de opciones para la reintegración económica, sacaría los participantes de la dependencia de los subsidios de la política, dicen los desmovilizados.

Reintegración Política

La política es un asunto aún inexplorado por parte de los desmovilizados, no han hecho parte activa y visible de espacios públicos de deliberación o decisión, ni se han inmiscuido en asuntos político/electorales. A pesar de lo cual, algunos de los participantes señalan la intención de algún día acercarse a estos espacios democráticos, dándole una alta valoración como posibilidad de materializar sus derechos. Según el gobierno local, es necesario ser precavido en la participación en política con la población desmovilizada dados los aprendizajes que dejan los escándalos por parapolítica en el departamento y el país.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Apoyo Psicosocial

Los desmovilizados plantean que reintegrarse a la vida en sociedad es un proceso lento, pero que gracias programa han logrado avanzar en asuntos como la resolución de conflictos, tener relaciones con la comunidad en igualdad de condiciones y sin relaciones inequitativas de poder, entre otros asuntos que trabajan en los encuentros con la profesional del Área psicosocial de la ACR. Más allá de ello, consideran que el papel de éste servicio es controlarlos. Al respecto un participante opina que:

“A veces uno no puede venir y le dan permiso, pero uno sabe que tiene que estar en la jugada, por la plata y porque lo tienen a uno en la mira” (Entrevista local. Persona desmovilizada. 2008).

El rechazo por parte de la sociedad civil y el estigma social, no es para el caso de los desmovilizados de Amagá un asunto generador de presión. Por el contrario, la relación con la comunidad es *“cordial y desde las lógicas civiles”*; con lo cual un participante del programa de reintegración, insinúa que la relación es horizontal y no medida por el poder de las armas. Desde la perspectiva de los desmovilizados es necesario comenzar a implementar estrategias de acercamiento con la población civil *“aprovechando coyunturas sociales que posibiliten el encuentro, como por ejemplo: las fiestas navideñas, que se propongan acciones de solidaridad por parte de los desmovilizados con población vulnerable del municipio y las víctimas”*. El participante agrega que, *“Es muy importante*

además entender que fue y que es hoy el conflicto armado, ya que, ese fenómeno es un fenómeno donde la sociedad civil y actores armados están inmersos pero pocos actores lo entienden a profundidad”.

Uno de los asuntos más problemáticos según los participantes, para el proceso de reintegración social en el municipio de Amaga, causado por el afán estatal de recuperar la seguridad y la hegemonía sobre el ejercicio del poder, así, como garantizar que los desmovilizados no recaigan en prácticas delictivas, es la superación de los estigmas sociales que no permiten la generación de confianza con la comunidad. Así, es común que cuando los participantes se encuentran en lugares públicos las requisas de la Policía son excesivas, focalizadas en esta población y permanentes, de igual manera es común, según los desmovilizados que:

“... organismos como la SIJIN nos lleve al comando y los fotografié, como si fuéramos considerados un peligro público”.

A pesar de ello, según expresan los desmovilizados una problemática en la relación con la comunidad es el reiterativo hecho de que ésta busque resolver problemas de tipo privado por intermedio del excombatiente. Frente a lo cual, los participantes dicen anteponer su opción por el respeto de la institucionalidad pública.

El papel de los diversos actores

Si bien se ha logrado avances en la reintegración de los excombatientes a la vida civil por medio, de la naturalización de su presencia en la vida cotidiana del municipio, el gobierno local considera que esta actitud de la comunidad debe ser entendida mas como un acto de indiferencia al proceso, ya que, la sociedad no ha participado del proceso de movilización. Al respecto señala:

“En Amagá la gente no está muy enterada en qué consistió el proceso, y lentamente se han ido dando cuenta quienes son los desmovilizados que se fueron, que volvieron y que ahora son sin haberlo sido.”(Entrevista Gobierno local. 2008).

El gobierno local del municipio de Amagá, entiende el proceso de reintegración, como un programa con dirección central que es acatada en lo local, pero, que en ningún sentido representa la creación de estrategias propias para la atención de los desmovilizados, o se convierte en competencia propia. Funcionarios públicos plantean que la acción que han tenido con respecto a la población desmovilizada...

“no ha sido del todo directa, no por el hecho de que se haya alejado de éste sino porque ha tratado de respetar al ente que lidera el proceso, es decir la Alta Consejería”.

Sin embargo, plantea que se han tratado de iniciar procesos de apoyo a la población desmovilizada, pero que se han dificultado algunos asuntos con la ACR, principalmente, de

flujo de información de parte de la ACR hacia el gobierno municipal con respecto a la caracterización de los participantes del proceso.

Según plantean los desmovilizados son pocas las estrategias que el Estado local ha desarrollado e implementado en el municipio de Amagá, puesto que, en ningún momento se han planteado y ejecutado acciones concretas en términos de la reintegración económica, o social. Al respecto, el gobierno local señala que hay un interés importante por apoyar proyectos productivos a la población desmovilizada, pero que frente a eso ha habido limitantes referentes a los intereses propios de los participantes por un lado, y por el otro, el hecho de que poseer una tierra donde desarrollar el proyecto es un prerrequisito de las posibles entidades financiadoras.

Los desmovilizados plantean, además, que no se han propiciado espacios por parte de la institucionalidad pública para la deliberación del fenómeno del conflicto y del DDR, o espacios de encuentro entre la sociedad civil y los desmovilizados en pro de procesos de reconciliación.

El sector privado, nunca se ha acercado de alguna manera al proceso de reintegración y no ha visibilizado las responsabilidades que puede tener frente a dicho proceso, así como los alcances que su vinculación le permitiría al proceso, específicamente, en la reintegración económica. El gobierno local, reconoce que es en este sector en el que recae parte de la responsabilidad del proceso de reintegración, sobre todo, aquel de la reintegración económica por medio de la generación de empleo, que le den sostenibilidad a largo plazo al proyecto, dado que, la autosuficiencia de los participantes depende gran parte del éxito del proceso, incluso después de que culmine la atención que hoy realiza la ACR.

2.3 Observaciones generales sobre el DDR en el Suroeste

Como se ha visto, los problemas relacionados con la reintegración de los excombatientes tienen que ver con la real garantía de acceso a información y oportunidades para que quienes se desmovilizaron construyan opciones laborales por fuera de la guerra. La desmovilización en el suroeste estuvo marcada por la baja concentración de excombatientes y dispersión de los excombatientes. A pesar de las falencias de la política de reintegración, lo problemático como tal en la pervivencia de la violencia en la subregión no se encuentra relacionado con ello.

La violencia que se expresa a través de los homicidios en la subregión continúa girando en torno a la limpieza social, la lucha por el control de plazas de venta de estupefacientes y la seguridad que demandan los habitantes empresarios, cafeteros y narcotraficantes de la zona.

La compra de tierras en el suroeste ha acelerado transformaciones en su vocación económica que tiende cada vez más hacia las fincas de recreo y el ganado. Como se verá en la segunda parte de esta investigación, dicha transformación tiene menos que ver con la baja producción de las tierras o el precio del café y más con el exceso de dinero circulante en la subregión que se invierte en propiedad raíz, aumentando la concentración de tierra y transformando la región.

A pesar de que los políticos locales temen vincularse a las discusiones sobre la reintegración de los excombatientes AUC, al igual que una considerable mayoría social, es común escuchar que otorgan a su presencia en la subregión el control del orden social que el Estado no garantizó, de un lado frente a la amenaza de las guerrillas y de otro de los daños sociales que representan drogadictos y delincuentes. A pesar de los índices de violencia la subregión mantuvo una aparente calma incomparable con los acontecimientos de la guerra en otras subregiones.

3. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL ORIENTE: El Caso de los municipios de San Carlos y San Francisco

La subregión del oriente se divide en 4 zonas de alto desarrollo y potencial económico y de recursos naturales para el departamento y el país, especialmente relacionados con la producción de energía en la zona de embalses, la expansión de la economía agrícola tecnificada y la producción industrial de la zona del altiplano y la zona de bosques húmedo tropical. Todo ello potenciado por el Plan Vial de la Apertura que atraviesa la región desde el centro del país hasta puertos en el Atlántico y Pacífico y el Plan Vial con el Túnel de la Paz, el aeropuerto internacional José María Córdoba, la Zona Franca, los Proyectos Hidroeléctricos, y acciones para el desarrollo turístico e inmobiliario.

Históricamente, el desarrollo subregional ha sido orientado por agentes externos y condicionado con criterios físicos y técnicos que han producido desequilibrios en el desarrollo local y subregional, sobre todo del Altiplano con respecto a las demás zonas; tales como, la degradación y agotamiento de la base de recursos naturales, el acelerado y poco planificado crecimiento poblacional urbano de la zona del Altiplano. La construcción de las centrales hidroeléctricas (cinco en la subregión) causó un desplazamiento poblacional en masa dada la inundadas las mejores tierras de varios municipios, en los valles de los ríos Nare, Guatapé, San Carlos y Caldera. La población desarraigada sufrió el cambio abrupto de la vocación económica de la zona y el impacto en sus tradiciones culturales y en la desarticulación de su tejido social. Otros megaproyectos como el aeropuerto internacional José María Córdoba, la autopista Medellín-Bogotá tuvieron impacto similar.

La expansión económica del oriente se encuentra fuertemente anclada en el periodo de mayor dinamización de la industria en el país y concretamente en Medellín, a través, del Modelo de Sustitución de Importaciones, por medio de la transferencia de establecimientos industriales hacia Rionegro y municipios vecinos; especialmente, las producciones destinadas a la exportación (Sáenz y Zapata, 1998). Ello, más que una descentralización de la industria daba cuenta del desbordamiento de Medellín, hacia la nascente área metropolitana, que desde la década del 70 hasta inicios de los 80 consolidaría a la “*zona de las industriales*”, en cuyo proceso industrializador se vincularía otros nuevos territorios de la subregión.

Los principales ejes de la economía subregional se constituyeron en torno a la expansión de la industria textil del Valle de Aburrá, con muy poca capacidad de autosostenimiento y anclaje en la subregión dada las condiciones de dependencia en que surge, y permanece, de los grandes capitales de Medellín. Por otro lado, el potencial hídrico de la subregión, cuya explotación industrializada se proyecta desde los 30's y hasta hoy continúa siendo determinante en la configuración de la economía regional del territorio y sus fronteras socio espaciales.

Uno de los primeros conflictos subregionales en los que tomarían parte los diversos actores armados y en los que se vincularía la acción cívica de campesinos, medios locales, pobladores, políticos y concejales de los municipios más afectados por las especulaciones sobre la tierra, las tarifas desventajosas para los campesinos, la acción abusiva y rapaz de los intermediarios en el megaproyecto de los embalses, en la que también se articularía la acción cívica de la guerrilla del ELN y la represión de las Fuerzas Armadas.

Tales desbalances han servido de punto de entronque con diversas formas organizativas y de movilización social entorno a la configuración de la región económicamente productiva. Una primera movilización de resistencia se expresó a través del masivo y pacífico Movimiento Cívico, en el primer lustro de la década de los 80. Pero la respuesta fue violenta y los líderes cívicos fueron asesinados.

En efecto, el conflicto armado se ha nutrido de los problemas económicos de la región y de una planificación impuesta desde afuera; del interés de actores armados sobre el control del corredor de la autopista Bogotá-Río Magdalena-Medellín-Costa Atlántica dado su carácter estratégico; de la inequitativa distribución de las riquezas generadas por explotación del agua, recurso principal de la región; del desarrollo exógeno con megaproyectos que desplazaron y desarraigaron a gran número de pobladores, se apropiaron de las mejores tierras, generaron desigualdad y pobreza. “Grupos guerrilleros de las FARC y el ELN argumentaron entonces que la lucha debía ser armada. El Frente noveno, desde la zona de Embalses (norte), y el 47 desde la zona Páramo y de Bosques (sur) pretendieron entonces ejercer control territorial sobre las centrales hidroeléctricas y sobre el corredor de la autopista Medellín-Bogotá. El ELN, creó en la zona el Frente Carlos Alirio Buitrago, en homenaje a Carlos y Alirio, jóvenes catequistas asesinados por fuerzas paramilitares. Luego, nació el Frente Bernardo López Arroyave, nombre del sacerdote que trabajaba con ellos, también asesinado.”¹⁴

La llegada de las AUC a la subregión estuvo precedida por el fracaso de las negociaciones de paz durante el gobierno del Presidente Pastrana expresadas en el alto incremento de acciones bélicas, secuestros, extorsión, pero sobre todo, para el sector económico, daño a la infraestructura eléctrica y vial, lo cual representa graves problemas para la producción del departamento y el país. Así, al mando de Ramón Isaza, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio incursionan al oriente por la zona límite de ambas subregiones y la incursión de los hermanos Castaño, a través, del Bloque Metro comandado por alias “Doble cero”; un ex militar de las Fuerzas Armadas. La ofensiva paramilitar fue anunciada a los campesinos a través de volantes arrojados desde una aeronave:

“Campesinos, aléjense de la guerrilla... Guerrilleros, la guerra sin cuartel ha comenzado... ustedes o nosotros”¹⁵

Del conjunto el conflicto armado en la subregión, fuertemente motivado por los altos costos en la protección de la infraestructura productiva, los megaproyectos de la subregión y la

¹⁴ Aguirre y Cardona. 2007; p. 28.

¹⁵ Ibid.

exclusión de los campesinos, tuvo como expresión el sofoco de la resistencia civil pacífica, aterradores índices de violación de derechos humanos y del DIH, la deslegitimación de la Fuerza Pública por la actuación conjunta con paramilitares, la cooptación de la política y los partidos políticos¹⁶ y la gestión pública coludida por los actores armados (Velásquez, *et al.*, 2009).

Durante el periodo del 1999 al 2003 La subregión vivió una de las peores crisis humanitarias de Antioquia, las experiencias de resistencia pacífica y movilización social merecieron un profundo encono de la violencia paramilitar sobre el territorio. Paradójicamente, de igual forma, sobre la trayectoria de la movilización social y organización cívica en la subregión se continúan asentando procesos de movilización contra la guerra, movilización e incidencia política por el desminado humanitario promovido por la Asamblea Provincial de Paz; resistencia pacífica de mujeres y jóvenes en contra de la guerra a través de AMOR –Asociación de Mujeres del Oriente; la organización de víctimas del oriente en los Comités de Reconciliación Municipal; la promoción de la organización de víctimas del oriente y la atención psicosocial entre iguales para víctimas de la violencia armada APROVIASI –Promoción de Vida y Salud Mental-; así como experiencias más resientes de Acciones conjuntas entre excombatientes y víctimas por la Reconciliación; entre otras, promovidas por agentes internos y externos a la subregión.

El Bloque Héroes de Granada, cuya área de influencia se extendía por el oriente, Valle de Aburrá y el Nordeste, se desmovilizó en San Roque, bajo el mando de Diego Murillo, Alias “Don Berna”. En ésta, se desmovilizaron 2.033 personas; el segundo bloque con mayor número de combatientes después del Bloque Mineros, y entregaron 1.120 armas. Hoy en el oriente antioqueño residen 406 desmovilizados, de los cuales 55 se encuentran inactivos, 20 muertos, 18 detenidos. De los desmovilizados colectivos (308), 17 se encuentran detenidos, 21 fallecidos y 67 inactivos. Los municipios con mayor presencia de desmovilizados son San Carlos, Nariño y la Ceja.

3.1 Municipio San Carlos

Caracterización de la población desmovilizada

De acuerdo con la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), el municipio de San Carlos, cuenta con un total de 45 excombatientes de las AUC, todos hombres pertenecientes a desmovilizaciones colectivas. De acuerdo con la edad, 22 de ellos están entre los 18 y 25 años, 22 entre los 26 y los 40 años y uno tiene más de 40 años.

¹⁶ De acuerdo con la Misión de Observación electoral del 2007 que señalaron que “*los municipios de San Francisco, Argelia, Nariño, Sonsón, Cocorná, San Luís, San Carlos, San Rafael y Granada, presentan un mayor riesgo electoral por presiones y posibles actos de perturbación durante los comicios y escrutinios, por parte de las FARC y el ELN.*”

Después de las elecciones del 2003 la Revista Semana publicó una conversación telefónica entre el alcalde actual y alias Don Berna, un líder paramilitar ex comandante de varios Bloques entre ellos Héroes de Granada, en la cual el alcalde le da un parte de victoria al ex comandante y le informa que ganaron la alcaldía.

Todos realizaron el proceso de cedulaación, 24 cuentan con libreta militar y 35 tienen Certificado del pasado judicial. En relación con el grado de escolaridad, del total cuatro tienen grado de escolaridad primaria, 26 de secundaria y de 15 no se tiene información.

En relación con el estado de los excombatientes dentro del proceso de reintegración, se encuentra que: 40 están activos, dos detenidos, uno fallecido y dos inactivos. Sólo el 6% de la población por reintegrar se encuentra por fuera del programa. De las 5 personas que se encuentra por fuera del programa DDR, cuatro están entre 18 y 25 años y uno en edades entre los 26 y 40 años. Los cinco cuentan con cédula de ciudadanía y certificado de pasado judicial, cuatro tienen libreta militar. No se tiene información del nivel de escolaridad de la población inactiva. Cuatro de ellos se encontraban vinculados al Régimen de Seguridad Social en Salud: uno en régimen contributivo y tres en subsidiado, de uno no se tiene información.

La población activa dentro del programa DDR representa el 88% del total de la población por reintegrar radicada en este municipio; es decir, 40 hombres desmovilizados colectivos de las AUC. De éstos, 18 están entre los 18 y 25 años de edad, 21 entre 26 y 40 años y uno es mayor de 40 años. Sobre el nivel de escolaridad se encuentra que de 10 no se tiene información al respecto, cuatro tiene primaria y 26 secundaria. Los 40 poseen cédula de ciudadanía, de ellos 20 tienen libreta militar y 32 certificado de pasado judicial. En salud, de dos no se tiene información y 38 excombatientes están carnetizados: 27 en régimen subsidiado y 11 en contributivo.

Servicios Sustitutivos

Seguridad Física y Rearme

Posiblemente, como remanente de la pérdida de regulación de la Corporación Democracia en el municipio, actualmente, en el municipio de San Carlos algunos jefes paramilitares locales que controlaron fuentes de ingresos ilegales -por ejemplo de distribución de drogas ilícitas-, mantienen o intentan mantener ahora dicho control e incluso ampliarlo, entrando en choque con otros jefes locales, asunto por el cual requieren sostener vínculos, alianzas e influencia sobre algunos excombatientes que poseen conocimiento del negocio, a través, de amenazas o persecución a quienes se nieguen a hacer parte de éste.

Tales acontecimientos amenazan la seguridad de los excombatientes en proceso de reintegración, incrementa la desconfianza entre ellos y profundiza la desconfianza en la sociedad civil sobre la desmovilización real de las AUC. De hecho, esta parece ser la explicación de muertes y atentados contra excombatientes en el municipio de San Roque, San Rafael y San Carlos, durante el presente año. Algunos excombatientes en proceso de reintegración, y sus familias, fueron acompañados por la ACR para desplazarse y salir de San Carlos entre otros municipios.

Adicionalmente, de acuerdo con el Sistema de Monitores Cultivos Ilícitos, en el municipio de San Carlos están aumentando las áreas de cultivo. Otra amenaza tiene que ver con la presencia de la guerrilla en zonas aledañas, recientes escaramuzas dejaron un bus quemado.

Salud

El 95% de la población desmovilizada tiene acceso a salud, el 67% se encuentra afiliado en el Régimen subsidiado, el 27% en el Régimen contributivo y el 5% no se encuentran afiliados a salud (Tabla 7).

Tabla 7
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro	Subsidiado ARS
San Carlos	40	27	11	2	

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

Educación

De los participantes activos del programa el 65% tiene básica primaria terminada, el 12,5% terminó educación secundaria, el 89,6% son población objetivo para la educación académica. El 71,4% se encuentra en el ciclo de educación formal y el 59,7% se encuentra en programas de formación para el trabajo (tabla 8).

Tabla 8
Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo

Municipios	Nº Participantes Activos	Población con Formación académica		Población objetivo para educación académica	Población atendida de la población objetivo	Formación para el empleo ¹⁷
		> 5o	2 ^a .			
San Carlos	40	26	5	35	25	23

Fuente: Datos ACR Antioquia en Junio de 2008.

¹⁷ Población cursando y matriculada en cursos de formación para el trabajo.

Reintegración Económica

De acuerdo con la ACR para junio de 2008, San Carlos, han sido desembolsados recursos de esta oficina para proyectos productivos. En el mismo sentido, no se han contactado empresas para emplear la mano de obra disponible de las personas desmovilizadas. En San Carlos, el aspecto económico es uno de los más críticos para el grueso de la población desmovilizada. El 99% de la economía del municipio está dedicada al sector primario sector agrícola, siendo el principal producto el café, la generación de energía le trae regalías al municipio pero no tiene capacidad de empleo. El sector privado del municipio no abre muchas oportunidades, por lo menos no han sido invitados a concertar opciones. No obstante, la Administración municipal ha vinculado algunos de los excombatientes como funcionarios, tres de ellos se encuentran al frente de la planta de sacrificios municipal, la plaza de mercado, y la oficina de Gestión de Proyectos. A parte de estos tres empleos, las demás vinculaciones han sido temporales.

La bonificación económica por estudio a que tienen derecho los excombatientes, ha sido interpretada como una acción inequitativa e injusta con respecto a la población civil, especialmente las víctimas del conflicto armado, que posee problemáticas social y económicas bastante graves en el municipio con el mayor número de víctimas por minas antipersona del departamento.

La evaluación que respecto de la reintegración económica hacen los desmovilizados es de poca efectividad de las estrategias implementadas para la reintegración económica, caracterizada por las siempre dilatadas expectativas y nuevos requisitos para proyectos productivos. Ello genera desmotivación y escepticismo en la esta población, especialmente en la actualidad cuando reciben ofertas e incluso presiones para vincularse a grupos armados, señalan algunas personas desmovilizadas.

Reintegración Política

Paulatinamente, en el municipio se ha evidenciado la incidencia política por parte de los desmovilizados en los escenarios públicos, antes desde la ilegalidad y ahora desde la civilidad. En las elecciones 2007 se presentó el apoyo directo de los desmovilizados y la corporación Democracia al candidato electo. En la actualidad el Alcalde Conservador se encuentra detenido, acusado de varios delitos, entre ellos la compra dolosa de un terreno ocupado por los paramilitares. La detención y destitución del Alcalde popular afecta y pone en cuestión el proceso de desmovilización.

Por otro lado, dos líderes desmovilizados participaron en la consulta interna del Partido Conservador del 26 de octubre de 2008. Algunos excombatientes participan en otros ámbitos ciudadanos como la Mesa de Reconciliación, donde participan además algunos funcionarios públicos, la parroquia, educadores, concejales, líderes comunitarios y víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, los excombatientes en San Carlos no tienen organización propia, se reúnen mensualmente con la Psicóloga de la ACR con el fin de cumplir con los requisitos mínimos

para recibir la ayuda humanitaria, y la Corporación Democracia; una de las más importantes experiencias organizativas de desmovilizados, ha convocado a desmovilizados de San Carlos ha participar en algunas movilizaciones como la celebración de la desmovilización y para participar en la pasada campaña electoral.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención Psicosocial

Según las cifras de la ACR a junio del 2008, de los 40 participantes activos, 39 asistieron a al menos una actividad psicosocial, es decir que la cobertura de éste es del 98%.

De acuerdo con algunas voces la actitud de desconfianza de la comunidad se explica por la falta de información y participación en el proceso DDR. Por otro lado, el cambio de estos en su relación con la comunidad tampoco fue inmediato, sectores de la comunidad siguieron acudiendo a ellos para “*poner quejas*”, y solicitar su intervención en problemas cotidianos.

Dados los varios actores armados, el alto número de víctimas que se produjeron a manos de uno y otro, incluido el Ejército Nacional, las percepciones sobre el proceso son variadas. Algunas víctimas directas del conflicto no han logrado superar su resentimiento y por ende persisten resistencias. Pero también, existen sectores que simpatizaron con las AUC por considerar que pusieron coto a los abusos de la guerrilla que por años controló militar y políticamente a la población.

Estas diversas posturas se complementan con el hecho de que en el municipio actuaron en diferentes periodos distintos bloques paramilitares, primero llegó al municipio el Bloque Metro quien en su disputa con los grupos insurgentes, perpetró múltiples masacres, asesinatos y desplazamientos, posteriormente llegó el Bloque Héroes de Granada derrotó al Bloque Metro y realizó la fase de consolidación, menos sangrienta.

El papel de los diversos Actores locales

Por su parte, en el municipio de San Carlos, se han constituido dos espacios civiles fundamentales para el proceso de reintegración local: el CARE (Centro de acercamiento para la reparación y la reconciliación), creado por Acuerdo del Concejo Municipal, y la Mesa de Reconciliación, quienes han organizado movilizaciones y acciones de reparación simbólica en las cuales han participado activamente tanto la comunidad como algunos excombatientes. Algunos desmovilizados han participado en el señalamiento de sitios minados y de fosas comunes.

Los principales temas de interés de estos espacios son el restablecimiento de valores y prácticas de reciprocidad democrática y la confianza cívica, los derechos de las víctimas, la no violencia en la transformación de los conflictos, la necesidad de un proceso adecuado de reintegración de excombatientes a la vida ciudadana, son los temas que ocupan la agenda del CARE y la Mesa de Reconciliación.

La Mesa de Reconciliación ha tenido como estrategia el trabajo conjunto con diferentes actores que deben involucrarse en el proceso de Reconciliación y ha buscado igualmente la participación no solo de víctimas, sino también, de excombatientes que se sientan en capacidad y con la voluntad de hacerlo. Al interior de dicho espacio han logrado un ambiente de relaciones simétricas y de mayor confianza.

Debe señalarse, sin embargo, que si bien el proceso de movilización ciudadana en torno al tema de la reintegración es sumamente destacable por las acciones conjuntas de organizaciones sociales, políticas y de víctimas, emprendidas para el control social del proceso de reintegración, se necesita una estrategia que ayude a vincular otros actores locales, particularmente al empresariado.

El gobierno local ha evidenciado desde el momento de la campaña electoral, un interés por representar intereses de la población desmovilizada, sin embargo el reclamo generalizado de los excombatientes es por fuentes de ingresos. El gobierno local alude que debido a la atención que debe realizar a un alto número de víctimas no alcanza a satisfacer todas las demandas. Por su parte el sector privado no se ha vinculado a estrategias de reintegración de personas desmovilizadas.

3.2 Municipio de San Francisco

Caracterización de la población desmovilizada

El municipio San Francisco tiene un total de 39 participantes del proceso de reintegración, 27 de desmovilizaciones colectivas de las AUC, 10 del ELN y dos de las FARC. Del total de excombatientes tres son mujeres y 36 son hombres. La edad de 16 de ellos se encuentra entre los 18 y 25 años, otros 20 se encuentran entre los 26 y los 40 años, dos tiene más de 40 años y de uno no se tiene información. Todos los participantes del programa tienen cédula de ciudadanía, 21 cuentan con libreta militar y 30 tienen Certificado del pasado judicial. Del total de excombatientes, 24 tienen grado de escolaridad primaria, nueve de secundaria y de seis no se tiene información.

De acuerdo con el tipo de desmovilización, de los 27 desmovilizados colectivamente, 25 se encuentran activos dentro del programa de reintegración, 1 de ellos ha fallecido y uno se encuentra inactivo. De la población desmovilizada individualmente todos se encuentran activos.

La población inactiva del municipio de San Francisco representa sólo el 5% del total de la población radicada en el municipio por reintegrar, esta se caracteriza por ser hombres ex integrantes de las AUC, los cuales hicieron parte de desmovilizaciones colectivas, la edad de uno de ellos oscila entre los 18 y 25 años y el otro entre los 26 y 40 años; no se tiene información del nivel de escolaridad. Los dos cuentan con cédula de ciudadanía y certificado de pasado judicial, uno tiene libreta militar. En salud, uno está adscrito al régimen subsidiado y del otro no se tiene información.

Por su parte, la población activa dentro del programa DDR es del 94%, es decir, 37 desmovilizados, de los cuales, 25 son del tipo de desmovilización colectiva de las AUC y 12 individual (10 del ELN y 2 de las FARC). Del total, sólo tres son mujeres. En relación con las edades, 15 están entre los 18 y 25 años de edad, 19 entre 26 y 40 años, dos son mayores de 40 años y de uno no se tiene información. Sobre el nivel de escolaridad se encuentra que de cuatro no se tiene información al respecto, 24 tiene primaria y nueve secundaria. Los 37 poseen cédula de ciudadanía, 20 tienen libreta militar y 27 certificado de pasado judicial. En salud, sobre uno de ellos no se tiene información, 28 se encuentran en el régimen subsidiado, siete en el régimen contributivo y los demás en ARS.

Servicios Sustitutivos

Seguridad Física y Rearme

En San Francisco, la población de desmovilizados es considerada, como una población estable con baja movilidad. De acuerdo con algunos actores, este grupo ya no conforma un grupo con línea de mando; solo se reúnen en torno a las actividades de apoyo psicosocial y

en ocasiones participan con otras personas en grupos de estudio para validar primaria, recibir capacitación del SENA.

La complejidad de los riesgos a que pudieran verse expuestos las personas que han sido desmovilizadas de los diferentes grupos armados, de acuerdo con la mayoría de ellos puede estar representada por la cercanía del 9° frente de las FARC que a pesar de su repliegue por la acción del Ejército Nacional, no ha menguado su capacidad operativa. A pesar de la presencia de la guerrilla del ELN esta no es considerada amenaza.

“No hay problemas graves de seguridad, porque aunque seamos objetivo militar de las FARC aquí está el ejército y la policía. Es posible que la guerrilla no crea en nuestra desmovilización, pero no se puede bajar la guardia porque “a los conejos también los ceban, los que han desertado pueden tener más riesgo con la guerrilla. Aquí nos sentimos protegidos por la fuerza pública, como cualquier ciudadano.”(Entrevista local. Persona desmovilizada, 2008).

Otras voces denuncian los riesgos que implican para la población desmovilizada el hecho de que el Ejército los continúe vinculando a operativos militares. En ocasiones, el Ejército ha utilizado los excombatientes como informantes y acompañantes de operaciones militares, dado el conocimiento del terreno que poseen, lo cual los pone en sumo riesgo.

A pesar del requerimiento de mano de obra armada para ejercer la función de brindar seguridad a los cultivos y rutas del narcotráfico, los desmovilizados consideran que sobre ellos no se ejerce presiones para que se vuelvan a vincular al grupo armado a pesar de que...

“...el tema de cultivos de coca es delicado en San Francisco, la gente no quiere que se trate el tema por temor a fumigaciones o campañas de erradicación, sin alternativas para los campesinos. Es un problema social que hay que afrontar como tal. Por eso la Administración Municipal no ha tratado directamente el problema, que es más de competencia nacional” (Entrevista local. 2008).

En el municipio, persiste la acción de bandas delincuenciales normalmente se encuentra ligada al control de expendios de droga, extorsión y cobro de vacuna. De acuerdo con otros actores subregionales, la situación de violación de los Derechos Humanos (DD.HH) en el oriente, no sólo se encuentra asociada a la presencia de las guerrillas de las FARC, el ELN y el Ejército nacional, en algunas zonas de la subregión del oriente, también se están llevando a cabo acciones de control social por parte de grupos armados asociados a remanentes de los bloques de las AUC que operaron en la región (tabla 9) (Informe DD. HH, 2009).

Tabla 9
Número de hectáreas cultivadas de coca en el Oriente Antioqueño

Municipio	2002	2003	2004	2005	promedio 03-05	2006	2007
ARGELIA	0	4	21	21	15	15	2
SONSON	0	55	25	41	40	84	25
SAN CARLOS	0	0	0	0	0	38	23
SAN FRANCISCO	0	17	0	27	15	137	79
SAN LUIS	0	18	0	83	34	197	102
SAN RAFAEL	0	0		0	0	2	0
NARINO	0	2	0	0	1	94	32

Fuente: Datos Policía Nacional Antinarcóticos. SIMCI 2008

Ex comandantes como alias Mc Guiver y Ramón Isaza en la zona de Sonsón y Doradal, continúan teniendo liderazgo social y político, a la vez que existe una tendencia a asociarlos con la siembra de coca en los municipios aledaños en los que cada vez el cultivo de coca tiende a aumentar, tales como San Francisco, San Carlos, San Luis y Nariño, Sonsón. Otros actores de la subregión y del municipio de San Francisco, señalan que el incremento de las áreas de cultivo de coca se debe al poco éxito del programa de Familias Guardabosques, la prohibición de explotación maderera y la falta de alternativas rentables para la sustitución de cultivos ilícitos.

“En San Francisco el problema es crítico. No sé si están actuando bien o mal. Un campesino va a trabajar como raspachín, ganando apenas un jornal, para traer comida a sus hijos [...] Los raspachines apenas ganan un salario mínimo: 20 mil pesos. En recolección de café pagan 15mil. Ya no hay quien coja la cosecha de café. Los coccaleros hicieron subir los abonos. La Federación cree que está vendiendo abono para el café, pero lo están comprando los coccaleros. Los que tenemos unos palitos de café ya no podemos pagar los insumos”. (Entrevista. Políticos locales 2008).

Se ha presentado la llegada de aproximadamente 350 familias del Bajo Cauca, quienes aprendieron el oficio y lo explotan como agricultura campesina sin necesarios vínculos con actores armados; no se sabe quien promueve dichos retornos, ni si ello obedece a retorno de familias desplazadas. De acuerdo con otras voces con *“el permiso de paramilitares y desmovilizados de San Francisco”* (Informe DD-HH del oriente antioqueño, 2008; p. 67). Al respecto es importante recordar que el Bloque Héroes de Granada es la facción narcotraficante que suplantó al Bloque Metro en el Oriente, sin embargo, no se tiene información sobre las formas de organización para el tráfico, compra de insumos, comercialización y protección de los cultivos, el actor más visible es el campesino,

“Los meten a ellos a la cárcel y no a los grandes coccaleros. La policía y el ejército saben quiénes son y se hacen los que no ven. No

decomisan la gasolina ni los insumos, pero meten a la cárcel a los campesinos.” (Entrevista. Políticos locales. 2008).

Salud

Tabla 10
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro	Subsidiado ARS
San Francisco	37	28	7	1	1

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

En San Francisco los excombatientes consideran que la atención en el hospital es buena. Varias personas tienen algún tipo de restricción en el movimiento de algunas partes del cuerpo, sobre todo en los miembros inferiores y superiores, debido a secuelas de la guerra, no han recibido atención especializada, ni la han buscado por desconocimiento de la Política.

Educación

La mayoría validó la primaria, el 67%, el 8% terminaron formación secundaria, el 5% dos) se encuentran haciendo estudios universitarios. El 91% del total de quienes se desmovilizaron son población objetivo para la formación académica. En formación para el empleo se encuentra el 62% de ellos. La mayoría de ellos se han capacitado en emprendimiento y como auxiliares y oficiales de construcción en el SENA. (Ver tabla 11)

Tabla 11
Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo

Municipios	Nº Participantes Activos	Población con Formación académica > 5o 2ª	Población objetivo para educación académica	Población atendida de la población objetivo	Formación para el empleo ¹⁸
San Francisco	37	3	34	30	23

Fuente: Datos ACR Antioquia a Junio 2008.

¹⁸ Población cursando y matriculada en cursos de formación para el trabajo.

Reintegración Económica

De acuerdo con las estadísticas de la ACR no se ha hecho gestión con empresas para obtener empleos, ni se han desembolsado recursos para proyectos productivos en este municipio. Los desmovilizados emprendieron un negocio de fabricación de bloques para la construcción, pero no es rentable, al día los 26 socios pueden producir la demanda de un mes. Los desmovilizados señalan que el principal problema en el proceso de reinserción es el empleo ya que se considera que cuando se termine la ayuda humanitaria, que en general todos reciben, se pondría en riesgo la estabilidad del proceso.

Actualmente, los excombatientes están empleados en obras públicas municipales, a pesar de lo cual el problema de la reintegración en lo local se debe a las escasas fuentes de empleo, no existe en el municipio un sector empresarial con capacidad de generar empleo. Los empleos a que acceden pertenecen al sector informal. Algunos son maestros de construcción que han ido a otras partes en busca de trabajos como expertos en obra blanca, en servicios eléctricos, entre otros.

Los participantes consideran que en cuanto a la reintegración económica el gobierno ha fallado, ya que nunca recibieron el llamado “capital semilla” que fue prometido inicialmente, asunto que genera en los desmovilizados un sentimiento, que según exponen, podría llevarlos a desistir de hacer parte del proceso de reintegración. A pesar de que la ACR les dice que la capacitación para el empleo y la formación académica es para que logren independencia económica en condiciones que el resto de los ciudadanos, en condiciones de buen desempeño del componente educación de la política de reintegración, los desmovilizados no han restablecido su vida por sus propios medios.

“En promedio me llegaba de ayuda humanitaria es 380 mil pesos, a algunos les llega un poco más. Pero “a mí no me llegan sino 280mil, porque me vine de La Danta, en donde estaba estudiando. Aquí seguí estudiando pero no me lo han reconocido. Un tiempo dejé de llegarme la ayuda. Tengo familia, esposa y tres hijos, estamos esperando otro. Tengo que rebuscarme la vida por otra parte”, (Entrevista local. Persona desmovilizada. 2008).

Con la Administración del municipio, se ha hablado de la posibilidad de acceder a una finca para el cultivo colectivo de productos como café y la caña. Sin embargo, los desmovilizados señalan la importancia de considerar las implicaciones del contexto conflictivo y la presencia guerrillera en el campo.

Reintegración Política

Los locales consideran que los desmovilizados no ejercen ningún tipo de incidencia en la política local, no inciden sobre las organizaciones sociales, ni el proceso electoral. Su participación comunitaria es débil así como en espacios ciudadanos como la Asamblea municipal. Sin embargo, si participan en reunión de deliberación y decisión pública. A pesar de las opiniones anteriores, algunos personajes de lo local han mencionado que

jugaron un papel de presión para la elección de Personera municipal, asunto que según la Administración local, no es cierto ni para este caso ni para otros, ya que como grupo no tienen bases políticas, en este sentido no han presentado candidatos propios, ni han promovido públicamente a ningún candidato.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención Psicosocial

En San Francisco, según los datos de la ACR para junio de 2008, del total de población activa desmovilizada 36 asistieron al menos una vez a las actividades de acompañamiento Psicosocial; es decir, que la cobertura de este acompañamiento es del 97%. La psicóloga de la ACR hace presencia en el municipio cada 15 días, fechas en las cuales realiza diferentes actividades con los participantes y su núcleo familiar. El policía comunitario colabora en el acompañamiento realizando algún seguimiento al comportamiento de los participantes. A pesar de los cambios que algunos excombatientes exhiben, hay sectores de las víctimas que prefieren esperar para ver cambios más profundos, tales como que tengan un comportamiento social que no infunda miedo, y donde prime el respeto por el otro. De acuerdo con desmovilizados, algunas personas les asignan cierta autoridad que ellos no están dispuestos a ejercer.

“Todavía tenemos miedo porque no sabemos a qué atenernos. No sabemos si la gente que nos hizo daño ha cambiado o sigue en lo mismo”. (Entrevista local. Grupo de Víctimas. 2008).

Otro sector de víctimas, considera que se deben abrir las oportunidades necesarias para que se supere la violencia,

“Hemos aprendido a convivir con esas personas. Cuando ellos entraron aquí tuvimos terror de que nos iban a matar a todos. Pero nos tocó vivir con ellos, encontrarnos con ellos, aceptarlos ahí porque estamos en el mismo pueblo. Así había pasado también con la guerrilla” (Entrevista local. Grupo de Víctimas. 2008).

Ello pone en evidencia las divisiones de las víctimas, las cuales se encuentran en extremo condicionadas por el ejercicio de acciones violentas de varios actores armados, en medio de las cuales la población civil fue el tercero de la confrontación.

“A mí ellos no me hicieron nada. Todo el daño me lo hizo la guerrilla. A ellos no les tengo miedo”. “Sería muy bueno escucharlos a ellos, saber qué piensan, por qué se metieron en eso. Todos tenemos alguna razón: que me mataron a mi mamá, o a un familiar, que yo estaba muy joven y me invitaron... Ellos se creyeron víctimas. Nosotros somos víctimas y no nos hemos armado. Pero si

no los recibimos entonces cómo parar la guerra?”(Entrevista local. Grupo de Víctimas. 2008).

Los desmovilizados, reconocen que como grupo no se comunican con las víctimas, a pesar, de que las relaciones con la comunidad están cada vez mas restablecidas, y valoran la existencia de espacios para hablar del conflicto y la reconciliación, la relación con las víctimas aún es lejana por temores, que bien pueden ser mutuos. En términos generales, la población, como los excombatientes viven procesos más o menos espontáneos de restablecimiento de la confianza, que aunque paulatinos, han logrado ir restableciendo el tejido social, vencer el miedo que antes primaba.

El papel de los diversos Actores locales

La Administración municipal señala que no tiene recursos económicos para apoyar la reintegración, sin embargo muestra una actitud de apertura frente al proceso. Por su parte, las víctimas han manifestado interés en articular localmente el proceso DDR con acciones de reconstrucción de la memoria histórica, a través de debates grupales han logrado reconstruir la historia, diagnosticar el número de víctimas y acciones de apoyo mutuo entre las víctimas.

Las víctimas y comunidad concuerdan en que la capacidad de convivir entre iguales no sólo depende de la desmovilización de las AUC:

“No podemos confiar del todo, porque no están todos los grupos armados: falta la guerrilla, el ejército que también nos dejaron víctimas”. (Entrevista local. Grupo de Víctimas. 2008).

Además de vincular los otros grupos armados a negociaciones de paz, sugieren transformaciones que el Estado que tendrían que incorporar cuando menos en las Fuerzas Militares. Al respecto señalan:

“En San Francisco no solamente ha matado gente la guerrilla y los paramilitares; también el Ejército Nacional. Cuando hubo la toma aquí, el ejército pasaba por las casas, porque la gente se entraba y se escondía. El ejército disparaba hacia adentro de las casas. Así mataron a mi esposo. Decían que todos eran guerrilleros. Pero el Estado no responde por eso.”(Entrevista local. Grupo Víctimas. 2008).

3.3 Observaciones Subregionales

El Oriente Antioqueño es la subregión que más pugna por la politización del conflicto armado, el discurso prevalente es el de las víctimas y la sociedad civil con un alto contenido reivindicativo de los derechos de las víctimas y exigibilidad de garantías de no repetición. Tal como en otras ocasiones la sociedad civil del oriente se ha movilizadо entorno al *no más, nunca más, ni una más!* como una consigna para exigir a los actores protagonistas del conflicto armado y los ejércitos frenar la violencia en el oriente, hoy las organizaciones sociales anclan sus iniciativas de movilización en las oportunidades que abre la desmovilización de las AUC de la subregión a propósito de la apertura de múltiples y variados escenarios de debate y confrontación política. Paradójicamente, la desestructuración de la organización social, estuvo en la base estratégica de la confrontación entre actores armados. El modelo paramilitar en otras subregiones logró despolitizar el conflicto y cambiar la agenda de confrontación, a través de la desarticulación de las redes sociales y sus reivindicaciones.

El alto nivel de organización y debate entre actores sociales e institucionales del oriente deja entrever en primer lugar diferentes actores cada uno con diferentes recursos para incidir en competencia por el posicionamiento de agendas más o menos definidas y aglutinantes de sectores de la población. En este sentido, las redes de interacción entre la subregión con otros ámbitos institucionales del departamento y la nación no son exclusivas de un actor en particular.

La desmovilización de las AUC y los análisis sobre el proceso de reintegración, sirven de ocasión para posicionar demandas de más largo alcance por los derechos de las víctimas, los efectos del narcotráfico y de la pervivencia de actores armados al margen de la ley, la violación de los Derechos humanos y el DIH, las implicaciones de los cultivos ilícitos como producto dinamizador de la economía campesina, entre otros, como la tala de bosques como estrategia contrainsurgente.

“Hay que regionalizar la política [de paz], y debe ser integral incluyendo sensibilización a la comunidad, inclusión social, recursos económicos, garantía de derechos, responsabilidades y deberes, equidad en programas con participantes en el proceso de reintegración, con las víctimas, con la comunidad.”(Gobernación de Antioquia – ACR – Conciudadanía. Encuentro subregional DDR oriente. 2009).

Ello se encuentra atravesado por la incidencia de agentes internos y externos que a pesar de la confrontación armada y los altos índices de violencia promueven el debate político sobre los acontecimientos y el conjunto del panorama, a través, de los ejes de dinamización de la economía subregional y la implicación de la apropiación de los recursos para el sostenimiento del *“territorio”*; un concepto que alude a la posibilidad de vincular una vida digna a un lugar de habitación socio espacial.

El conflicto armado en la subregión, tal como la construcción de la paz, continúa operando sobre el sostenimiento de los hilos de conflictos que una vez fue extraído del ámbito de la política para militarizarlos como mecanismo de resolución. A pesar de la intensidad y duración del conflicto armado, la sociedad civil, especialmente las víctimas, continúa operando en construcción conjunta con las demás instituciones públicas y privadas, internas y externas de la subregión, bajo los códigos de lenguaje de una sociedad profundamente democrática y defensora de los Derechos Humanos, que ve en el proceso de paz con las AUC oportunidades estratégica para incidir en ello.

“Como organización de víctimas alentamos salidas democráticas y propendemos por la plena vigencia, cumplimiento y respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por el final de la guerra y la no repetición. Aportamos desde nuestras acciones en la vía de una verdadera reconciliación. Continuamos en grupos organizados y buscamos fortalecerlos”. (Gobernación de Antioquia – ACR – Conciudadanía. Encuentro subregional DDR oriente. 2009).

Con frecuencia en el debate público logra evidenciarse diferentes posturas entorno a los acuerdos de paz con las AUC, el DDR y los derechos de las víctimas, logrando establecer dos niveles de discusión, uno de ellos en relación con las posibilidades reales prácticas de reintegración de excombatientes y de reparación de víctimas, en lo que a menudo establecen las implicaciones de la pobreza como un obstáculo de largo plazo que reta la mayor inversión sobre el territorio en el sentido anteriormente descrito. Al respecto han logrado movilizar agendas que diagnostiquen municipalmente el estado de las víctimas y la formulación de políticas públicas locales.

En éste juega un importante papel la visión de las víctimas que considera que hay que trabajar por la reconciliación construyendo oportunidades para ello, que van desde el apoyo solidario entre diferentes que sobrevivieron a la guerra y que comprometen sus voluntades en la no repetición de una historia compartida, abordando procesos de transformación del conflicto y construcción del futuro con las herramientas de que dispone el Estado local – políticas, administrativas, jurídicas-.

El otro nivel de discusión lo sitúan en el campo de las garantías de no repetición, trayendo al caso denuncias sobre violación de Derechos Humanos y del DIH, entre otras, como enunciados de los vacíos de la negociación parcial de paz, del contenido de los acuerdos con las AUC, de la pervivencia de prácticas contraguerrilla que involucran la sociedad civil; tal como el caso de las ejecuciones extrajudiciales, de un lado. Y de otro, el acceso real a los derechos de las víctimas sin que se despolitice su situación y los acontecimientos históricos que configuraron en la subregión el estado de violación de los derechos humanos, a través, de la indemnización económica, carente de sentido aleccionador para la no repetición.

En términos generales la participación de la población desmovilizada es poco organizada y con ninguna capacidad de incidencia política sobre los demás actores de la subregión, su

reintegración, se encuentra determinada por lógicas inerciales del contexto, que, por el producto de acciones estratégicamente trazadas por el Gobierno nacional, departamental y local. En este sentido, se vinculan a la sociedad en condiciones de *población vulnerable*¹⁹ para la que se trazan políticas públicas de subsistencia. Se pronuncian sobre los riesgos que amenazan su proceso individual de reintegración, marcadas por las presiones por reclutamientos del narcotráfico y la delincuencia; falta verdad total en todos los actores del proceso; falta voluntad y apoyo por parte de las Administraciones y mal desempeño en los programas del Estado. Las personas que se han desmovilizado temen ser llamadas por la justicia después de haberse organizado de nuevo con sus familias.

A pesar del alto grado de debate de la sociedad civil en torno al tema de la paz que ha logrado vincular cuando más a los gobiernos departamentales, con importantes logros señalados aquí, como el desminado, ello no logra tener eco en el ámbito nacional, como tampoco en lo relacionado con el cumplimiento del DIH por parte de las Fuerzas Armadas y otros pilares que ayudaran a soportar o corregir problemas del acuerdo de paz, el DDR de desmovilizados y la reparación de las víctimas.

¹⁹ El concepto es usado en el sentido estricto de poblaciones a las que se dirigen políticas públicas como una forma a través de la cual los gobiernos atienden las fallas del mercado en la ineficaz coordinación de los agentes que lo dinamizan, lo cual se esperaría un elevado grado de eficiencia en la asignación de recursos de la economía. De tal manera el Estado se hace cargo de los problemas sociales que genera la ineficaz participación de la población en el mercado. Andre Röth. 2002.

4. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO: El Caso de los municipios de Puerto Berrio y Puerto Triunfo.

El devenir del paramilitarismo en Antioquia y el resto del país, tal como se le conoce hoy en día, tiene sus orígenes en la región del Magdalena Medio, que operó frente a la profunda crisis de gobernabilidad y de autoridad del Estado, precipitada por la presión de los conflictos sindicales relacionados con el enclave petrolero; proyectos de resistencia de colonos frente a la expansión de la colonización ganadera; la crisis del bipartidismo, en constante interpelación por las tesis comunistas de las guerrillas articuladas al territorio.

Alonso; 1997 explica que frente a la crisis, las Fuerzas Militares intentaron una respuesta legal en primera instancia desde la represión de la protesta social, la cual hacia finales de los 60's vira hacia la contrainsurgencia, acelerada por factores externos como la estrategia militar norteamericana de lucha antisubversiva, y factores internos como la experiencia adquirida por el ejército colombiano en la guerra de Corea; en el nivel interno, por el rompimiento definitivo con las adscripciones partidistas, los procesos de formación ideológica de los oficiales del ejército y, fundamentalmente, los desarrollos que experimenta el conflicto en el país con la irrupción de las guerrillas revolucionarias.

El surgimiento del paramilitarismo tiene su primera fase dentro del Plan LASO – Latinoamerican Security Operation- y el Plan Andes²⁰, y posteriormente desde el Estatuto de Seguridad Nacional,²¹ lo cual generó la militarización de problemas que correspondían al ámbito de la política como los conflictos sindicales, las luchas sociales y la consecuente criminalización de la protesta y desembocó en el involucramiento de las Fuerzas Armadas como la institución más visible del Estado en la configuración del conflicto regional, no con la responsabilidad de regularlo, sino como un actor más en éste, a través de la combinación de formas de acción represivas legales con ejércitos privados²².

Los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Nare y Puerto Triunfo, se especializaron en la formación de una fuerza no convencional de soldados y especialistas de guerra como respuesta las Fuerzas Armadas, sectores económicos y políticos de la región frente a problemas históricamente irresueltos, precipitada por los procesos de paz durante el gobierno de Belisario Betancur²³ fuertemente apoyada por el narcotráfico. “Junto con las autodefensas del Magdalena Medio manifiestas con la aparición de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM, 24 de julio de 1984), y contando con el apoyo del Batallón Bárbula, con dineros e infraestructura aportados por el núcleo central [de Gonzalo Rodríguez Gacha], desde Puerto Boyacá estos

²⁰ Ambos planes materializan la ideología anticomunista de combatir el enemigo interno representado en el movimiento guerrillero producto del expansionismo del comunismo en el mundo. Su fundamento estratégico consistía en “secar el agua al pez” o acabar con la base social de la guerrilla.

²¹ Promulgado a través del decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978.

²² Al respecto ver Alonso, Manuel. Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio. 1997. p.135 y ss.

²³ Al respecto ver Romero, Mauricio. Autodefensas y paramilitares. 1982 – 2003.,2003.

se consolidaron como uno de los más estructurados y violentos focos del paramilitarismo en Colombia” (Fernández, 2002. p.183.).

De acuerdo con estudio realizado por el CINEP,²⁴ ACDEGAM canalizó los proyectos militares, financieros, educativos, sanitarios, de infraestructura y vías, mediante los cuales las *Autodefensas* buscaban ganar y controlar a toda la población. Luego el movimiento político MORENA (Movimiento de Renovación Nacional) intentaría expandir aún más la experiencia como ideología política. Desde el Magdalena Medio se reprodujeron, consolidaron, exportaron y fusionaron con otros agentes armados de Antioquia, Córdoba, los Santanderes, Meta y Casanare.

En sentido estricto, de acuerdo con los estudios interpretativos de la violencia y la configuración regional del Magdalena Medio, históricamente el conflicto armado ha sido determinante en la configuración regional de la subregión, a partir de los múltiples ciclos de confrontación; fuertemente militarizados durante el periodo de la violencia de los años 50 hasta el momento, a raíz de la negación de los social y la exclusión. De forma que, la relación con el Estado se caracteriza por pautas como la resistencia, la confrontación y la violencia.

El 7 de febrero del 2006, tras más de 30 años del proyecto paramilitar, en la subregión del Magdalena Medio de Antioquia se desmovilizaron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, en el corregimiento las Mercedes de Puerto Triunfo al mando de Ramón Isaza -990 desmovilizados y 759 armas-. Y el 12 de diciembre del 2005 se desmoviliza el Bloque Central Bolívar de Ernesto Báez, Macaco y Julián Bolívar; que también operó en parte de la subregión, desmovilizó 1.922 combatientes y entregó 1.386 armas. El total de la población desmovilizada que reside en el Magdalena Medio asciende a 669, de los cuales, 641 son desmovilizados colectivos. El 71% de los excombatientes colectivos se encuentran activos, el 17% están inactivos, el 7% se encuentran detenidos y el 4% ha fallecido.

²⁴ <http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/pdf/deuda06.pdf>. Publicado a abril 4 de 2010.

4.1 Municipio de Puerto Berrio

Caracterización de la población desmovilizada

El Municipio de Puerto Berrio, es cede del CRO para el Magdalena Medio, de acuerdo con la Alta Consejería para la Reintegración, en él se encuentran un total de 355 excombatientes, de los cuales, 343 desmovilizados corresponden a desmovilizaciones colectivas de las AUC y 12 excombatientes a desmovilizaciones individuales. De éstas últimas desmovilizaciones, cuatro excombatientes pertenecientes a las AUC, cuatro a las FARC y cuatro al ELN. La mayoría de la población desmovilizada (315) son hombres y 40 mujeres. De acuerdo con la edad, 109 de ellos están entre los 18 y 25 años, 193 entre los 26 y los 40 años y 50 tiene más de 40 años. Todos realizaron el proceso de cedulaación, 146 cuentan con libreta militar y 254 tienen Certificado del pasado judicial. En relación con el grado de escolaridad, de los 335, 103 tienen grado de escolaridad primaria, 104 de secundaria y de 148 personas no se tiene información.

De acuerdo con el tipo de desmovilización, de entre quienes se desmovilizaron colectivamente de las AUC (343), 229 excombatientes se encuentran activos dentro del programa DDR, 31 detenidos, 19 fallecidos y 64 inactivos. Por su parte, de la población desmovilizada individualmente (12 excombatientes), nueve se encuentran activos y tres inactivos. En general, 238 excombatientes se encuentran dentro del programa DDR y 117 excombatientes se encuentran por fuera de éste, es decir, el 32% del total de la población excombatiente. El mayor número de inactivos en el municipio (116) se presentó durante los años 2005 y 2006.

De los desmovilizados que se encuentran por fuera del programa DDR, 114 hicieron parte de desmovilizaciones colectivas y sólo tres fueron desmovilizados individualmente. La mayoría de ellos (114) son hombres y sólo tres son mujeres. En relación a la edad, 32 de ellos están entre 18 y 25 años, 69 entre los 26 y 40 años y 16 son mayores de 40 años. Todos realizaron proceso de cedulaación y certificado de pasado judicial, 51 de ellos tienen libreta militar. En cuanto a la escolaridad, dos han cursado la primaria y de 115 no se tiene información. En relación con la seguridad social en salud, 37 de ellos se encontraban vinculados al régimen contributivo, 51 al régimen subsidiado y de 29 no se tiene información.

De los 238 excombatientes activos en el programa DDR, 232 son ex integrantes de las AUC, tres del ELN y 33 de las FARC. 229 de ellos participaron de desmovilizaciones colectivas y sólo nueve de ellos en desmovilizaciones individuales. La mayoría son hombres (201) y sólo 37 mujeres. En relación con la edad, 77 personas se encuentran entre los 18 y 25 años de edad, 124 entre 26 y 40 años y 37 son mayores de 40 años. De acuerdo con el nivel de escolaridad se encuentra que de 33 excombatientes no se tiene información al respecto, 101 han pasado por primaria y 104 secundaria. El total de excombatientes

activos poseen cédula de ciudadanía, de ellos 95 tienen libreta militar y 201 certificado de pasado judicial. En salud, no se tiene información sobre 11 personas y 227 excombatientes están carnetizados: 154 en régimen subsidiado, tres en régimen subsidiado ARS y 70 en contributivo.

Servicios Sustitutivos

Seguridad Física y Rearme

Puerto Berrio es el municipio más afectado por homicidios a participantes del programa de reintegración de la subregión del Magdalena Medio. Todos los problemas de seguridad del municipio se encuentran asociados a las confrontaciones armadas entre estructuras del narcotráfico. Cuando menos convergen en la zona tres estructuras en confrontación: Los Rastrojos, Águilas negras y Los Paisas.

No hay confianza en la Fuerza Pública, además de abusar de su poder frente a la denuncia de amenazas y solicitud de protección por persecución de actores armados ilegales, éstos no garantizan protección,

“No se puede confiar en el Ejército o la Policía... está dando dedo al bando contrario. Cuando hago esto (hablar) me estoy poniendo en riesgo”. (Entrevista local. Persona desmovilizada. 2009).

El programa de reintegración se desarrolla en medio de condiciones demasiado hostiles por las confrontaciones armadas, la persecución a participantes, el asedio de estructuras armadas del narcotráfico, e incluso división entre los participantes entorno al desempeño del programa de reintegración; sin que ello haya implicado el uso de la violencia. Los participantes endilgan a la ejecución de la política de reintegración la responsabilidad de no resolver sus demandas de empleo y seguridad de manera eficaz. Los mandos medios no han facilitado la ruptura de la cadena de mando que sigue intermediando por los beneficios de los participantes ante el programa, a la vez que simbolizan autoridad y ejercicio de ésta.

Del lado de las víctimas existe una profunda convulsión propia del enfrentamiento, de un lado, entre los defensores de derechos humanos que pugnan por los derechos a la verdad, reparación de las víctimas y la repetición de actos de violencia y victimización en medio de una intensa oleada de violencia armada. Y de otro lado, grupos y personas oportunistas de los beneficios que la reparación económica o por vía administrativa despierta.

Por su parte las autoridades locales no gozan de confianza entre un grupo de población de víctimas y desmovilizados; recientes hechos confrontan dos importantes instituciones públicas locales entorno a denuncias de amenazas al Ministerio público.

Salud

La mayoría de los participantes del programa de reintegración se encuentran afiliados al sistema de seguridad social en salud. El 64% a través, del régimen subsidiado y el 29% en el régimen contributivo. Sólo el 3,8% no se encuentra asegurado (tabla 11).

Tabla 12
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en el municipio de Puerto Berrío

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro	Subsidiado ARS
Puerto Berrío	238	154	70	11	3

Fuente: Datos ACR Antioquia en Junio de 2008.

En términos generales, los participantes evalúan el acceso al servicio como aceptable. Existen personas con problemas de movilidad y daños físicos en sus extremidades que no conocen los mecanismos de acceso a tratamientos de rehabilitación y prótesis. Adicionalmente, un problema recurrente son las adicciones a droga y alcohol, de acuerdo con los participantes para estas problemáticas no tienen atención ni siquiera para el resto de la población, como un problema de salud pública.

Educación

Del total de participantes, el 69% ha cursado básica primaria, sólo el 7,9% han completado la básica secundaria, así que el 92% de la población participante es considerada objetivo para la educación académica. Sólo el 30% del total de los participantes han cursado en programas de formación para el empleo (tabla 12).

Tabla 12
Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en el municipio de Puerto Berrío

Municipios	N° Participantes Activos	Población con Formación académica		Población objetivo para educación académica	Población atendida de la población objetivo	Formación para el empleo
		> 5o	2ª.			
Puerto Berrío	238	165	19	219	169	73

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

La población desmovilizada de Puerto Berrío, destaca el componente educativo del Programa de Reintegración, pues la mayoría no sabían leer y escribir o no habían concluido

sus estudios de primaria. Ahora un alto número de ellos está terminando sus estudios secundarios, y algunos ya empezaron sus estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. Consideran que fue un acierto el hecho de que la bonificación económica se encontrara condicionada a la realización de actividades de formación. Valoran el apoyo de instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, La Universidad de Antioquia y La Cámara de Comercio.

En particular, la posibilidad de hacer cursos con el SENA, con grupos mixtos en los que no sólo participan desmovilizados, les posibilita mejorar las relaciones con la comunidad, pues en estos espacios se reconocen entre iguales con sus compañeros de curso, con lo cual aluden el rompimiento de los códigos y formas de comunicación que tienen entre los que pertenecieron a ejércitos armados ilegales. Consideran que este tipo de oportunidades posibilitan mucho más la reintegración del excombatiente a la vida civil.

Reintegración Económica

La economía subregional es básicamente agropecuaria, la ganadería extensiva es la principal actividad económica, con una alta concentración de tierra, otra actividad importante es el cultivo de caucho y las fincas de recreo. De conjunto la economía subregional tiene poca capacidad de absorción de mano de obra no sólo de quienes se desmovilizaron sino del grueso de la población. Así de un perfil de campesinos vinculados a ejércitos armados ilegales, los excombatientes de la subregión cambiaron su forma de vida, del “*estar*” en un territorio y la subsistencia que les proveía el *pan coger*, a la ampliación de sus demandas de *tener* y aumentar el *nivel de vida* a través del mejoramiento de la capacidad adquisitiva.

Para la mayoría de excombatientes, el éxito del proceso se fundamenta en los proyectos productivos, porque de acuerdo a lo anunciado en las diferentes reuniones al inicio del proceso, estos cumplían el propósito de poder garantizarles una base sólida para reconstruir sus vidas por fuera de la guerra. Adicionalmente, perciben cada vez mayores las exigencias y dilaciones para materializar los proyectos productivos. Y ven que es poco probable conseguir un empleo en las condiciones laborales deseables por ellos de pago de prestaciones sociales y estabilidad.

A pesar de que hoy en Puerto Berrio existen (cinco) proyectos productivos en desarrollo, de acuerdo con los participantes del programa de reintegración, éstos no logran proveer autosuficiencia económica a la población desmovilizada. Con lo cual interpretan que lo que se concibió como una bonificación económica de soporte al excombatiente en la transición hacia la independencia económica, va configurándose como una demanda de subsidio al desempleo, sin que paralelamente se estén desarrollando estrategias de dinamización del desarrollo subregional y desestructuración de la pobreza.

Reintegración Política

Recurrentemente, agentes locales señalan relaciones entre actores políticos de la zona y los ex Jefes paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar que no desarticuló la desmovilización del ejército armado. El proceso DDR no previó mecanismos para la desestructuración de las redes de apoyo político más relevantes para la permanencia de las actividades de las AUC.

“Realmente ellos no fueron apoyos políticos, ellos fueron puestos en los cargos, con el aval de los Jefes, con eso se sabía quién era el ganador [...] no se usó la presión armada a la población, realmente ello fue una práctica menor porque la plata puede más” (Entrevista político local. 2009).

Durante el 2006 el GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) capturó una banda delincriminal de la que hacía parte la Presidenta del Concejo Municipal con ex integrantes del Bloque Central Bolívar -BCB-, sindicada de extorsión y nexos con el paramilitarismo, al parecer extorsionaban a otras bandas delincriminales de la zona aplicadas al robo de hidrocarburos.

En el Concejo municipal la población desmovilizada ha logrado conseguir apoyos para la gestión de sus demandas colectivas; sin embargo, la participación nominal de quienes se desmovilizaron en la política local no es relevante, son otros los actores con estas identidades quienes figuran en los diferentes escenarios de la política local.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención psicosocial

El programa de reintegración regularmente realiza a través del componente de atención psicosocial talleres a los excombatientes, visita a sus familias y asesorías individuales por demanda, como componentes psicosocial del programa. Por otro lado, se encuentran ejecutando el proyecto de comunidades, el cual, ha sido evaluado por las organizaciones de víctimas como demasiado rígido por encontrarse absolutamente determinado por la ACR en su objetivo, contenido y desarrollo.

Puerto Berrio tiene 3 organizaciones de víctimas, una organización social de estudiantes, la Organización Ave Fénix y la Asociación de Desplazados. Uno de los líderes de Ave Fénix menciona un registro de 1.600 víctimas asociadas, de las cuales 1.400 han iniciado su proceso de reclamación por la vía de la Ley de Justicia y Paz. En la subregión se ha hecho un trabajo importante en torno a la visibilización de la violación de los derechos humanos, que desde el 2008 se ha visibilizado más aún en medio de las arremetidas del narcotráfico. Entre las organizaciones participantes y promotoras se encuentran organizaciones de víctimas, autoridades eclesiósticas, la Comisión Subregional DDR, la Diócesis de Barrancabermeja, el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Conciudadanía, Prodepaz, la ACR, la CNRR- Bucaramanga, La MAPP-OEA, Corporación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, entre otras.

Así, los desmovilizados reclaman protección y seguridad y las víctimas garantías de no repetición.

La fuerte participación ciudadana en el municipio de Puerto Berrio, ha logrado incidir en las agendas públicas para la inclusión de acciones de justicia restaurativa, la mayoría de ellas de carácter simbólico.

El Papel de los diversos Actores

Algunos desmovilizados consideran que ellos sólo tienen parte de la verdad producto de la misma naturaleza de la guerra, “...*la verdad se encuentra fragmentada, es parte de la estrategia militar*”. (Entrevista local. Persona desmovilizada. 2009).

De manera que dudan de las formas como pueden aportar a la reparación de las víctimas, especialmente, porque se corre el riesgo de aumentar la cifra de víctimas dado que el conflicto aún no se acaba y las personas que tuvieron mayor responsabilidad en lo local aún no dejan los negocios que promueven la guerra.

Otros se sienten molestos de que la responsabilidad no sea compartida y consideran doble moral la sociedad porteña,

“Todos saben cómo inició esto [...] No se debe castigar sólo a los mandos medios de las AUC, sino a los ganaderos, políticos y alcaldes porque ellos fueron los que sacaron mayor provecho, nosotros sólo hicimos el mandao. A un Alcalde o una persona del pueblo estaba en contra de sus intereses y lo mandaban a sacar del medio. [...] una persona tenía contactos con mandos medios y pagaban para que le hicieran una vuelta, sin averiguar [...] por plata. Eso sin olvidar el papel del Ejército... ¡mejor ni hablar!”. (Entrevista local. Persona desmovilizada. 2009).

Las víctimas consideran que su papel es continuar resistiendo, denunciando y exigiendo protección y garantía de sus derechos, mientras se encuentre vigente la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. En lo local es preciso exigir el apoyo de la Administración municipal y los políticos locales, a pesar de que es bastante difícil que ellos colaboren por las razones históricas del conflicto en el municipio.

Por su parte, desmovilizados y víctimas, señalan las responsabilidades del sector económico y los políticos locales y de la subregión, sin que ello haya implicado responsabilidades morales o materiales. Los primeros centran sus demandas en el aspecto de la seguridad física y material, suya y de sus familias. Las segundas exigen garantías de no repetición en medio de un proceso que califican como “mentiroso”.

El Gobierno local, considera que tienen voluntad de apoyar ambos procesos, a través, de la Secretaría del Gobierno, en igual sentido, la Personería Municipal. Sin embargo, consideran que la política de reintegración sigue siendo demasiado centralizada, y que en ocasiones no permite la articulación con el orden regional y municipal

4.2 Municipio de Puerto Triunfo

Caracterización de la población desmovilizada

El municipio de Puerto Triunfo cuenta con un total de 227 participantes del proceso de reintegración, 214 de ellos son desmovilizados colectivamente y sólo 13 desmovilizados individualmente. De acuerdo con grupos armados a los que pertenecieron, 217 son ex integrantes de las AUC, uno del ELN, siete de las FARC, y de dos de ellos no se tiene información. El estado de la población por reintegrar en relación con el programa DDR corresponde a 162 excombatientes activos, 17 detenidos, cinco fallecidos y 43 inactivos.

Del total de excombatientes 15 son mujeres y 212 son hombres. En cuanto a la edad, 72 están entre los 18 y 25 años, 133 entre los 26 y los 40 años y 22 tiene más de 40 años. Todos los participantes del programa tienen cédula de ciudadanía, sólo 102 cuentan con libreta militar y 173 tienen Certificado del pasado judicial. Del total de excombatientes, 107 tienen grado de escolaridad primaria, 22 de secundaria y de 98 no se tiene información.

De los desmovilizados colectivos (214) se tiene que 160 están activos, 17 detenidos, cinco fallecidos y 32 inactivos. De la población desmovilizada individualmente (13), 2 están activos y 11 inactivos. En términos generales, el 71% de la población desmovilizada en el municipio de Puerto Triunfo continúa dentro del programa DDR y el 28% del total de la población se encuentra por fuera del programa DDR.

De la población que se encuentra por fuera del programa DDR, 54 excombatientes participaron de desmovilizaciones colectivas y 11 de desmovilizaciones individuales. La mayoría de las personas que se encuentran por fuera del programa son hombres, sólo cinco mujeres. En relación a la edad, 18 están entre los 18 y 25 años de edad, 18 entre los 26 y 40 años y 41 son mayores de 40 años. En cuanto a la escolaridad, de 62 no se tiene información al respecto, 2 tienen primaria y 1 secundaria. Los 65 cuentan con cédula de ciudadanía y certificado de pasado judicial, 34 tienen libreta militar. En salud, de 16 no se tiene información, 49 están carnetizados: 19 en el régimen contributivo y 30 en el subsidiado.

Al analizar la población activa dentro del programa DDR, se encontró que 160 personas participaron en desmovilizaciones colectivas y dos en desmovilizaciones individuales. 161 excombatientes hicieron parte de las AUC y uno de las FARC. La mayoría de la población activa son hombres (152) y sólo 10 son mujeres. En relación con las edades, 54 excombatientes se encuentran entre los 18 y 25 años de edad, 92 de ellos entre 26 y 40 años y 16 son mayores de 40 años. Sobre el nivel de escolaridad se encuentra que de 36 no se tiene información al respecto, 21 tiene primaria y 105 secundaria. Los 162 poseen cedula de ciudadanía, de ellos 68 tienen libreta militar y 142 certificado de pasado judicial. En salud, de 10 no se tiene información, los demás (152) están carnetizados: 101 en régimen subsidiado y 51 en contributivo.

Servicios Sustitutivos

Seguridad Física y Rearme

Los participantes del programa de reintegración señalan que Puerto Triunfo fue sede de entrenamiento de combatientes para la región y el resto del país, de manera que al momento de la desmovilización en este municipio se presenta una alta concentración desmovilizados. Sin embargo, hoy son diversas las razones que dan cuenta de la disminución significativa de excombatientes en la región, que oscilan entre desmovilizados que han solicitado su traslado para otros municipios en razón de buscar mejores oportunidades laborales, otros se han ido del municipio por razones de amenazas a su seguridad por parte de grupos armados ilegales. La Policía y la ACR han llevado a cabo estudios de riesgo para nueve excombatientes; un subregistro de lo que acontece en la zona, según indican los desmovilizados. La ACR y los excombatientes referencian un número de cinco desmovilizados asesinados durante el primer semestre de 2008 en Puerto Triunfo, en términos generales la subregión del Magdalena Medio ocupa el tercer lugar, después del Urabá y el Bajo Cauca en número de desmovilizados muertos e inactivos.

Una de las mayores amenazas a la seguridad, es la persistencia de grupos armados y organizaciones narcotraficantes. A pesar de que la relevancia de la subregión en el panorama del narcotráfico está dada por las rutas que ofrece para el tráfico, en el municipio de Puerto Triunfo se ha logrado identificar la acción del comando de Roque, hijo del Jefe desmovilizado de las Autodefensas del Magdalena Medio, Ramón Isaza, con incidencia en el sector del Prodigio, desde donde controla la actividad ilícita. Las remuneraciones fijadas de acuerdo a los oficios, ofrecen un salario mínimo de \$600.000 mensuales con el fin de que se vinculen nuevamente a la organización. Según señalan los participantes, muchos de ellos han aceptado la invitación, incluso sin renunciar al programa de la ACR, para trabajar en actividades que van desde raspachines, hasta quienes deben encargarse de cuidar la seguridad de la zona.

Los excombatientes expresan que el surgimiento o avanzada de otras organizaciones narcotraficantes hacia la subregión, exige el afianzamiento del control del territorio. Esta es una de las razones por las cuales durante el último año se han contratado personas para hacer un censo de los cultivos de coca existentes en la región, para hacer el cobro del gramaje y ejercer el control sobre la venta de combustibles.

Señalan, además, que la Política Nacional no ha atendido los requerimientos de seguridad de los excombatientes, ya que no ha desarrollado una propuesta de seguridad en concreto, lo que se ha convertido en un asunto que debe cada uno resolver. Los protocolos para la evaluación del riesgo de la ACR y la Policía son demasiado demorados y la mayoría de las veces ha provocado que el desmovilizado emigre antes de la resolución de riesgo que debe emitir la Policía o a ser asesinado en espera del subsidio para el cambio de residencia y medidas de protección. Las personas que deciden salir de la zona de riesgo, no son más

responsabilidad de la ACR sino de Acción Social por su nueva condición de desplazados forzados.

Algunos terratenientes y empresarios continúan pagando por servicios de seguridad, sobre todo por parte de propietarios de ganaderos. El sector comercial por su parte no ha tenido conocimiento sobre actuales extorsiones o “vacunas”, los que hoy en día pagan lo hacen de manera voluntaria y como contraprestación por un servicio de vigilancia particular, connotación que adquirió la llamada vacuna (Entrevista local, 2008).

Salud

En términos generales el 94,7% de los participantes del programa de ambos municipios se encuentran carnetizados en salud, el 63,4 % de ellos en el régimen subsidiado y el 30,2% en contributivo (tabla 13).

Tabla 13
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en el municipio de Puerto Triunfo

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro	Subsidiado ARS
Puerto Triunfo	162	101	51	10	

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

En términos generales, los participantes del programa DDR manifiestan que la atención es ágil. Encuentran deficiencias en la entrega de medicamentos, la mayoría de estos no son cubiertos por el POS, por lo que se debe acceder a ellos a través del mercado. Algunos, apuntan dificultades con la afiliación de miembros del núcleo familiar, pues aparecen en la base de datos asignados a una EPS, pero realmente no se encuentran reportados en la EPS y les niegan la atención.

Un obstáculo en la atención en salud en general, es la falta de programas dirigidos particularmente a las necesidades de salud física y mental de la población desmovilizada, tales como las discapacidades físicas, tratamiento de adicciones y a severos compromisos de salud mental.

Educación

De los 162 participantes activos de Puerto triunfo, el 17,9% tiene básica primaria terminada, el 8% terminó educación secundaria y el resto tiene secundaria incompleta. El 91,9% de excombatientes de éste municipio son población objeto de los programas de educación. Así, el 67,2% de ellos participan en ciclos de educación formal y sólo el 53% se encuentra en formación para el trabajo (tabla 14).

Tabla 14
Población objeto de los programas de educación en Puerto Triunfo

Municipios	Nº Participantes Activos	Población con Formación académica > 5o 2ª.		Población objetivo para educación académica	Población atendida de la población objetivo	Formación para el empleo
Puerto Triunfo	162	29	13	149	109	86

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

Como puede verse, la población desmovilizada de este municipio tiene serios problemas de analfabetismo. Todos son de extracción rural y reclaman programas de formación afines con las actividades propias de la zona, pues a pesar de la amplia oferta muy pocos ofrecen recursos reales para conseguir empleo en las zonas o para la implementación de proyectos productivos propios. En relación con esto último, los desmovilizados encuentran frustradas sus expectativas de tener un proyecto rentable para subsistir económicamente, como se verá más adelante, producto de la falta de comprensión de las oportunidades a que tienen derecho con el programa de reintegración, las rutas para acceder y los trámites.

Reintegración Económica

En Puerto Triunfo, se han iniciado pequeños proyectos como el cultivo de ají, piscicultura y algunos galpones, de los cuales se beneficia un pequeño porcentaje de población desmovilizada. El proyecto de Ají fue financiado por la OIM para vincular un grupo integrado por participantes, víctimas y comunidad, el cual ha registrado un alto porcentaje de deserción dadas las inversiones iniciales de los participantes en términos de tiempo, mano de obra, transporte y alimentación, señalan algunos de los participantes de dicho proyecto. Por otra parte, la ACR ha contactado 8 empresas en Puerto Triunfo con el resultado de un empleo para un excombatiente.

Un problema que se presenta frecuentemente en relación con la bonificación económica es la consignación de un monto menor al estimado y cuya reclamación es bastante engorrosa. Dada las tensiones que les generan la dependencia e incertidumbre, insisten en poder en marcha proyectos productivos que no dependan de su iniciativa y administración, ni de los Gobiernos locales, sino de técnicos nacionales.

A lo largo del proceso los desmovilizados en ambos municipios han encontrado con varias dificultades que en último término configuran el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional:

1. El bajo nivel de escolaridad de los desmovilizados y la falta de cultura de asociatividad, lo cual se ha fijado como prerequisite para realizar desembolsos a proyectos.

2. La alta concentración de la propiedad de la tierra. Además consideran que el recurso que el gobierno ofrece como plante por cada participante es insuficiente para llevar a cabo un proyecto productivo sostenible, dado los altos costos de insumos y materia prima en la zona.
3. La falta de articulación de actores locales, especialmente gobierno local, departamental y el sector privado en la generación de alternativas en el marco de una política estructurada.
4. Finalmente, los proyectos que podrían implementarse en la zona como los cultivos de caucho y cacao o la ganadería no dan rentabilidad desde el comienzo, sino que sus utilidades son a largo plazo y exigen la compra de tierras, para lo cual no hay recursos.

Actualmente se lleva a cabo una negociación entre la ACR, ASODERMAN – Asociación de desmovilizados del Magdalena Medio, la Alcaldía municipal y la Representante del ex jefe paramilitar Ramón Isaza para la selección de un terreno para la implementación de un granja productiva cercana al penal donde aspira el exjefe paramilitar terminar su condena. Ello ha dejado al desnudo un conflicto de intereses que deja entrever fisuras en las lealtades políticas con el Ex jefe paramilitar.

Reintegración Política

Líderes sociales y algunos excombatientes aseguran que en las pasadas elecciones no hubo presión de grupos armados ilegales a favor de ninguna de las campañas y que la población desmovilizada no ejerció coerción sobre la población. Una minoría de ellos no hizo uso del derecho al voto debido a dificultades de documentación. Algunos excombatientes se inscribieron en listas de concejo y su participación fue democrática. En los resultados de los comicios, ninguno logró obtener los votos necesarios para alcanzar una curul. Otras voces cercanas a los políticos locales y subregionales, aseguran que durante el periodo electoral se hicieron arreglos políticos entre las partes y aclaran que el grado de control territorial que se logró en la zona no requiere de coerción al votante.

Además del grupo es el trabajo de apoyo psicosocial y los pequeños grupos de socios en los pocos proyectos productivos que hay en el corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo queda la sede de la Asociación de desmovilizados del Magdalena Medio, que aglutina un número importante de personas desmovilizadas, recientemente uno de sus líderes fue capturado por delito de narcotráfico.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención psicosocial

El proceso de reintegración social ha estado mediado por el hecho de que la gente en el municipio no se ha sentido tan golpeado por la violencia como el resto de los municipios de la subregión. La ACR realiza con periodicidad talleres psicosociales, que muchos de los participantes evalúan como positivos para su desarrollo personal, otros dejan entrever que

su asistencia a ellos se debe más a la normatividad que vincula la asistencia a los talleres con el pago de los subsidios.

Las psicólogas de la ACR encargadas del área, señalan que desde la propuesta de trabajo de integración comunitaria, excombatientes, no han encontrado apoyo de ninguna de las instituciones locales: Alcaldía, Policía, Colegios, entre otros. En este sentido, los avances en materia de reintegración social se circunscriben a los logros en el ámbito personal a través del apoyo psicosocial.

Si bien el municipio tiene un escaso nivel de organización y movilización social, algunas personas señalan que generalmente se ha creído que la violencia en Puerto Triunfo no fue significativa, *“pierden de vista, que la violencia se vivió de otras formas diferentes (Entrevista local. Grupo de Víctimas. 2008)”*, señalan, quienes de fondo manifiestan el dolor de la pobreza y el atraso de sus familias e hijos que fueron a la guerra; algunos como opción, otros como cuota ineludible.

En términos generales y con diferentes matices, en ambos estudios de caso municipales se evidencian como principales dificultades:

- La desconfianza en el proceso de desmovilización
- El dolor y miedo que persiste en la memoria que dejó la intensidad de la violencia
- La persistencia de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos articulada a la acción de grupos armados ilegales, sobre todo articulados al narcotráfico.
- La poca viabilidad de acceso de las víctimas a los derechos de verdad, justicia y reparación.
- La falta de compromiso y articulación de los gobiernos locales y Personerías con la ACR y el Gobierno departamental para abordar la reintegración.
- La falta de compromiso y articulación de las instituciones públicas regionales y departamentales en la aplicación, seguimiento y toma de acciones correctivas entorno al proceso de reintegración (Gobernación de Antioquia, Procuraduría Regional y Departamental, Alta Consejería para la Reintegración). Su acción ha sido evaluada como la realización mecánica de actividades que no se inscriben en las demandas históricas locales.
- Los grupos políticos de la subregión que demuestran voluntad de poner en el debate los obstáculos a la reintegración, garantías para las víctimas y superación de la violencia.

El papel de los diversos Actores locales

Particularmente en Puerto Triunfo, son poco visibles las acciones que la comunidad haya desplegado en torno al tema de la reintegración. Para la comunidad existe una relación poco problemática con los excombatientes, el narcotráfico es una industria agrícola para el grueso de la población. Lo problemático para éstos es la pobreza y la violencia asociada al narcotráfico.

Hay consenso en afirmar que voluntaria o involuntariamente el sector privado participó en el conflicto potenciado desde siempre por el narcotráfico y en tal sentido su responsabilidad es dinamizar la economía para todos.

Por su parte, del Gobierno local señalan su compromiso con el proceso, y demandan mayor compromiso de las autoridades para poner en marcha acciones de reintegración económica eficaces para todos los desmovilizados. La Administración municipal alude la necesidad de descentralizar la política de reintegración y aclarar las competencias municipales en el tema, así como la asignación de nuevos recursos para su financiación.

4.3 Observaciones sobre el DDR en la Subregión del Magdalena Medio

Tras la desmovilización de las AUC en el Magdalena Medio, se pone en evidencia la incapacidad de los acuerdos de paz, las operaciones DDR y demás planes institucionales de soporte, para garantizar la separación de la acción armada paramilitar de los asuntos regionales en los que incidió y poner freno a la utilización de estrategias de las que se valió para incidir en la configuración del estado de cosas; tales como la combinación de formas de acción legal e ilegal de las Fuerzas Armadas con locales civiles o armados en la lucha contrainsurgente; el desplazamiento y el despojo; la persecución de la protesta social en la que de manera relevante se incluye la garantía de derechos a las víctimas y la exigencia de garantía de no repetición; la violación de derechos humanos, agravada por acción del narcotráfico.

Esto que se sitúa en la base de los acuerdos mínimos de una negociación de paz, hoy constituye el fundamento de la deslegitimación y desconfianza en el acuerdo de paz y desmovilización de las AUC; aún por encima de la álgida discusión sobre los mecanismos jurídicos para la transición y la garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado. Aún el tema central de las tensiones locales son la producción de violencia en torno a objetivos del paramilitarismo en el territorio entorno al narcotráfico.

Obviamente, la modulación de la intensidad de la violencia se ha visto seriamente limitada por la negociación parcial de paz, a lo que se suma la combinación de estrategias de disuasión para que combatientes de las guerrillas se desmovilicen individualmente con el aumento de la confrontación armada que profundiza el desgaste de opciones para la real discusión de contenidos de un posible pacto político que efectivamente involucre las demandas propias del territorio que se han constituido en objeto de confrontación armada y no política.

El paramilitarismo logró llevar a cabo y aún sostiene los objetivos económico, político y social que terminaron imponiéndose como proyecto regional; el primero a través de la protección y seguridad para la expansión de la economía de enclave, expansión ganadera y de agroindustria; el segundo, por medio del cierre a las ideas la izquierda política y la recuperación de los feudos bipartidistas que duramente le disputó; y el social, por medio de la represión y encorsetamiento de las demandas que expresaba la movilización social, no ha logrado resolver el problema de la legitimidad del Estado (Alonso, 1997).

Las trayectorias de la violencia e identidades que han tomado los nuevos actores armados se nutren de la acción de: paramilitares desmovilizados que retoman actividades ilegales de manera permanente o con capacidad para demostrar permanencia dentro del programa de reintegración y paralelamente delinquir; civiles que ven oportunidades rentísticas; y nuevos reclutados. En la subregión pueden establecerse por lo menos dos identidades que se infieren del tipo de acciones ilegales y/o violentas que comente, un tipo de actor son las

bandas delincuenciales que se aprovechan de las formas de renta establecidas en lo local y del robo, lo cual amerita acciones policivas.

Otros actores son estructuras armadas del narcotráfico que ineludiblemente se nutren o – atentan contra la vida de- desmovilizados paramilitares que aún realizan actividades de tráfico ilegal de armas y drogas y que actualmente han agudizado la violencia particularmente contra desmovilizados en municipios tradicionalmente claves en el negocio como Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto Berrio.

Según se señala, para ello aún resulta bastante útil la alianza con las Fuerzas Armadas, no sólo para la acción conjunta en actividades del tráfico ilegal, sino también de acciones contrainsurgentes. Ello deja al descubierto la incapacidad del Gobierno Nacional para frenar el narcotráfico, desvincular agentes narcotraficantes e institucionalizar el uso de la violencia en manos de las Fuerzas Armadas, como expresión de profundas reformas que afecten los marcos dinámicos que las ha llevado a convertirse en un actor más de la confrontación armada y no regulador del orden constitucional.

Finalmente, una forma de violencia que aún se expresa en el ámbito social y cultural, es la que apela al *status del paramilitar* para resolver conflictos e intereses de cualquier índole. Tal se nutre de los referentes culturales simbólicos que operó el proyecto paramilitar en la población, lo cual no facilita la desestructuración del poder legitimador de la *repetición del acto* que expresa valores, normas y relaciones que ordenó el actor armado; subyacentes a la dominación paramilitar, ni facilita la transferencia del poder regulador; que ha privatizado el Estado, a las instituciones encargadas de la función pública de administrar recursos, garantizar y proteger derechos, así como administrar el debido proceso.

Los acuerdos de paz con las AUC del Magdalena Medio parecen no haber puesto en el centro de la discusión, la agudización de la militarización de los problemas regionales, de cara a acordar respuestas políticas y no militares a los conflictos que catalizó el paramilitarismo en la subregión, uno de los cuales configuraba las demandas de inclusión de campesinos y colonos, a la comunidad política, productora y dinamizadora del desarrollo regional; y del cual vienen a formar parte los nuevos marginados excombatientes y víctimas que arrojó el conflicto armado en la configuración regional.

La ACR en la subregión ocupa el lugar de un operador de proyectos, con ninguna capacidad de negociación, de decisión sobre recursos, planeación de programas, su capacidad local para comprender los procesos históricos de configuración del conflicto regional y atenderlos pertinentemente rebasa el mandato del Gobierno nacional. A la vez que la evaluación del éxito de la reintegración se deriva de la cuantificación de eventos y actividades a lo cual se encuentra supeditado el control de quienes se desmovilizaron, sin que cuente la efectiva transformación de los ordenes alternos.

En este sentido se podría decir, que los mecanismos están dispuestos para que cada persona vinculada al programa extraiga el máximo beneficio racionalmente posible, no para la transformación política de las condiciones del conflicto. A pesar de que la idea de la generación de ingresos para volver al campo a producir el “pan coger” no encaja dentro de

las expectativas de moldeadas por una *nueva ruralidad* vinculada al modelo de vida suntuario del narcotráfico, por lo cual, muchos de ellos no ven oportunidades de “superación de la pobreza” en las opciones de educación académica y formación para el empleo. La guerra les ha generado marcos demasiado inmediatistas para una meta que parece “no asomar”.

Lo que se concibió como una bonificación económica de soporte al excombatiente en la transición hacia la independencia económica, va configurándose como una demanda de subsidio al desempleo, como se ha dicho, sin que paralelamente se estén desarrollando estrategias de dinamización del desarrollo subregional para la desestructuración de la pobreza, no sólo para la inclusión social y económica de desmovilizados, sino también de víctimas y comunidad en general. La economía subregional altamente dependiente de la actividad ganadera, caracterizada por utilización de grandes extensiones de tierra, genera poca redistribución de los ingresos y ha agotado las posibilidades de desarrollo rural campesino, entorno a lo que se dictan los programas de formación para el empleo. Este es el contexto en el cual se ancla el componente de productivo de la política de reintegración, en el cual los desmovilizados encontraron los mayores incentivos a su desmovilización.

Tal como el contenido de los acuerdos de paz en los que se involucra el futuro del Magdalena Medio, el desarme y la reintegración de las AUC, no es tema de la agenda política de la subregión. Las iniciativas de las Administraciones municipales, cuando más plantean el acompañamiento a víctimas y desmovilizados a través de la inclusión de dicha población a sus programas dirigidos a población vulnerable, generalmente de proyectos productivos, lo cual dadas las condiciones no es despreciable. Sin embargo, en la subregión los gobiernos locales, no representan la institucionalización aglutinadora del poder, capaz de tematizar los conflictos, ordenar y regular las diferentes dinámicas que se expresan en el desarrollo pluralista del territorio, así como para reafirmar la autoridad y legitimidad del orden democrático. Todo ello es indicativo de que sobre el contenido político de los acuerdos de paz prevaleció la interpretación del conflicto armado de las élites regionales o “sectores con supremacía en la elaboración e imposición –coactiva y persuasiva –.

5. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA: El Caso de los municipios de Caucasia y Tarazá.

En 1892, se establece el Bajo Cauca como una zona de extracción de recursos, pero no de permanencia por el clima mal sano, los blancos de Antioquia siempre consideraron un castigo y una “región maldita” a la que se iba a conseguir fortuna para luego abandonar, su poblamiento como región nunca estuvo determinado por políticas de poblamiento y dinamización económica propiamente diseñadas por el gobierno de Antioquia, más bien fue la mirada de extranjeros que vieron en la zona potencialidades de extracción de la riqueza del subsuelo minero y la explotación de maderas finas.

Sólo a inicios del siglo XX se presenta un primer periodo de regionalización del Bajo Cauca, su repoblamiento se estructura a partir de cuatro factores relevantes: la llegada de la empresa minera extranjera, la ampliación de zonas de frontera para la hacienda ganadera, los flujos de migración provocados por la guerra de los Mil Días y la ampliación de caminos. A partir de la llegada de empresas mineras productoras y comercializadoras del oro en los municipios de Segovia, Remedios, Nechí, Cañafístula como se llamaba Caucasia y Zaragoza, economía de enclave que demanda mano de obra y dinamiza el comercio y las rutas de comercio con Barranquilla puerto de exportación e importación²⁵. Paralelamente se viene expandiendo las zonas de frontera de los colonos provenientes de Córdoba y Bolívar para la multiplicación de las haciendas ganaderas a lo largo de la ribera del río Cauca. A ello se suma la población que acosada por la guerra de los Mil Días y escapando del alistamiento llegarían a las tierras bajas cercanas a los ríos e internándose en la selva llegarían al Bajo Cauca.

Finalmente, hacia 1918 Caucasia se configuraba como población estacionaria de importancia para comunicar la Costa Atlántica pasando por Valdivia con Antioquia o el interior del país, sin embargo sus principales vías de comunicación serían los ríos Nechí y Cauca, y sus principales rutas de comercio se dirigirían hacia Magangué y Baranquilla. Hacia 1920 la titulación de tierras fue impulsada por el proyecto Ferrocarril de Antioquia que nunca se ejecutó, pero cuyos terrenos se convirtieron en fincas ganaderas. Posteriormente cuando la Troncal del Norte llegaba al municipio de Valdivia y traza su continuación hasta Caucasia, la región se configuraba territorio colonizado.

Un segundo periodo de regionalización se dio por el fortalecimiento del proceso de integración del Bajo Cauca al departamento y el país, marcado por la ampliación de la Troncal del Norte Tarazá –Caucasia, complementado por la construcción de la carretera Segovia – Zaragoza por parte de la Frontino Gold mine que unió los dos núcleos mineros de Antioquia – Bajo Cauca / Nordeste- y dinamizó más aún la comunicación del interior con el resto del país, fortaleciendo el comercio ganadero entre Antioquia y Córdoba, lo cual consolida a Caucasia como centro estacionario fuertemente comercial.

²⁵ Al respecto ver: García, Clara Inés. El Bajo Cauca. Como ver las regiones, 1993.

Todo ello fortalecería los ejes dinámicos económicos, sociales y culturales de la región, a los que se suman las dinámicas de algunos municipios del norte y el nordeste, en los que se anclarían procesos conflictivos entre actores sociales por el control de recursos. El primer ciclo conflictivo estaría marcado por el periodo de la violencia, tal como señala Mary Roldan; 2003. Este ciclo de violencia más allá de expresar la lucha bipartidista, sirvió de catalizador de demandas sociales por la inclusión de la “periferia” al núcleo del desarrollo Antioqueño, hasta entonces visto con desprecio por los blancos de Antioquia. La capacidad de protesta efectiva contra las políticas gubernamentales por beneficios sociales y aumentos salariales, cuya manifestación fueron los levantamientos laborales en la mayoría de los campamentos mineros, a los que se vincularon pobladores de las zonas mineras, las cuadrillas de obreros de las carreteras y de los ferrocarriles.

Un segundo ciclo de violencia estuvo caracterizado por: el aumento del precio del oro que no tardó en generar una serie de efectos sociales y políticos tales como, el aumento de la tasa de migración y el crecimiento de los cascos urbanos; la aceleración de la colonización y el daño ecológico; la municipalización del Bagre, Tarazá y Nechí con capacidad organizativa y dinámicas propias que expresan la vinculación de nuevos territorios a la región y de ésta al país; y una guerrilla apuntalada en los territorios de explotación minera. “Todo ello delimitará los perfiles de los nuevos actores que de ahí en adelante continuarán construyendo y definiendo más nítidamente las “fronteras” de la región” (Roldan, 2003; p. 39).

Durante este segundo periodo surgen conflictos por la titulación de tierras, apropiación de baldíos entre las empresas mineras y los grandes hacendados de la Costa Atlántica y Antioquia; demandas a las empresas mineras por daños en el terreno que ocasionaban desastres donde las familias perdían sus viviendas o cosechas; problemas de tráfico de mercancías que traían los “johnseros” desde el puerto de Barranquilla, todos ellos con intermediaciones armadas o cívicas promovidas por las guerrillas.

En el Bajo Cauca ha operado el frente 18 del Bloque nor- occidental de las FARC. Los frentes 9, 36 y 47 desde el oriente, nordeste y magdalena medio. Como resultado de la disminución del oro en el Bajo Cauca disminuyó su presencia, durante el periodo 90 -92 habían registrado una reducción importante de la intensidad del conflicto armado, sin embargo, la situación vuelve a ser crítica entre 1993 y 1995. (Echandía, 1999).

La guerrilla también encontró aceptación social en zonas con las características del Bajo Cauca, entre otras, por tres razones la guerrilla [lideró] paros y marchas para llamar la atención sobre problemas [en las condiciones de vida de la gente] y en caso de incumplimiento estatal o respuesta represiva se multiplica la simpatía por la “causa insurgente”. El apoyo al actor armado irregular radica en la función que cumple en el logro del acceso a la propiedad de la tierra o en la continuación de su posesión; la existencia de terrenos baldíos, de propietarios anónimos y de debilidad del sistema institucional de entrega, registro y respeto a la propiedad apalancan este apoyo. La demanda por “seguridad y justicia” la guerrilla se ha arrogado las funciones de “juez, conciliador y policía” (Gaitán y Deas, 2006).

La llegada del paramilitarismo a la subregión encontró varios sentidos, uno de ellos, el más comúnmente utilizado, el sentido contrainsurgente. Sin embargo, su surgimiento se articuló a la financiación por parte del narcotráfico que ya se disputaba territorios por las rutas del narcotráfico con la guerrilla de las FARC. Localmente coinciden en señalar la articulación que siempre sostuvo el paramilitarismo con el narcotráfico en la subregión. A ello articularon fuertemente las dinámicas de todo el territorio de Tarazá, Valdívía, la Cauca y otros municipios del norte y el nordeste que al caso fueron configurando una *región* no definida político administrativamente, al tenor de las lógicas del control paramilitar del territorio, de los usos del suelo atados al cultivo y comercialización de coca que se tornaron fuertes dinamizadores de la economía.

Esta reconfiguración del territorio expresó la configuración de autoritarismos subnacionales atados a transformaciones en la política local, el control de recursos por parte del actor armado y el monopolio de relaciones que apalancaban su hegemonía y blindaba su acción ilegal en el territorio, logrando hacer semblanza del juego democrático, tal como lo ha puesto en evidencia estudios sobre las articulaciones de los actores armados y políticos en los ámbitos locales y nacional.

El Bajo Cauca la presencia paramilitar está asociada al control territorial ejército por el Bloque Central Bolívar y el Bloque Mineros. El primero, desmovilizó 1.922 personas y entregó 1.386 armas de los frentes Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio, el 12 de diciembre de 2005 en el municipio de Remedios al mando de “Ernesto Báez”, Macaco” y “Julián Bolívar”. El Bloque Mineros, al mando de Ramiro Vanoy Murillo, entregó 1.433 armas y desmovilizó 2.790 personas. Actualmente el Bajo Cauca es la segunda subregión con el mayor número de población por reintegrar, el total de ellos asciende a 1544, de los cuales 1491 son desmovilizados colectivos de las AUC.



Seguridad Física y Rearme en los municipios de Caucasia y Tarazá

De acuerdo con las autoridades locales, la violencia se ha disparado por el surgimiento de bandas criminales al servicio del narcotráfico, según algunos sectores de la comunidad, se relaciona con la presencia de estructuras o reductos paramilitares que se mantienen activos en la zona y que sostiene una lucha por el control del territorio y el sistema productivo de la coca. Adicionalmente a los enfrentamientos armados iniciados por el Ejército Nacional. En Tarazá, donde los casos de homicidios son más altos, al riesgo que representan las actividades del narcotráfico, las bandas criminales y la delincuencia común para la estabilidad de los excombatientes, se suma la presencia de guerrillas (tabla 15).

Tabla 15
Casos de Homicidios en la subregión del Bajo Cauca 1997 – 2007

SUBREGION	MUNICIPIO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
BAJO CAUCA	CAUCASIA	10	7	4	2	12	12	11	4	20	19	25
	TARAZA	11	7	12	1	46	6	2	7	24	43	41
	CACERES	14	5	0	1	4	8	1	2	10	19	22
	ZARAGOZA	6	7	5	1	8	7	3	2	9	18	9
	EL BAGRE	4	4	3	2	17	5	6	3	12	5	11
	NECHI	5	1	1	0	1	5	0	1	8	6	9
	Total casos	50	31	25	7	88	43	23	19	83	110	117

Nota:

-  Más del doble del número de casos de homicidio promedio por Subregión.
-  Municipios con número de homicidios por encima del promedio subregional.

Fuente: Observatorio de DD.HH Vicepresidencia de la República.

A partir del 2005, año en que se produce la desmovilización del Bloque Central Bolívar y posterior a la desmovilización del Bloque Mineros en enero del 2006, los índices de homicidios en la subregión aumentan notablemente. Los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá son los que reportan el mayor número de casos de homicidios. Desde el 2004, este último municipio presenta un comportamiento en las cifras de homicidios que se ubican por encima del promedio de casos de homicidios en el departamento.

Dicho aumento, se corresponde con el incremento de hectáreas de tierra cultivada en coca en la subregión, en la que Tarazá ocupa un lugar relevante en el cultivo y procesamiento: más del 90% de su territorio se dedica a la actividad, “estimativos extraoficiales señalan que en Tarazá habría por lo menos 6.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, el mayor centro de cultivo de Antioquia, y se dice en la localidad que sus 42 mil habitantes, de una u otra forma, tienen que ver con el negocio de la coca” (Entrevista local, 2009) (tabla 16).

Tabla 16
Hectáreas Cultivadas en Coca en la Subregión del Bajo Cauca

MUNICIPIO	2002	2003	2004	2005	2006	2007
CACERES	116	537	539	650	579	552
TARAZA	337	537	1166	1402	1105	1663
ZARAGOZA	399	506	416	600	400	1611
NECHI	57	125	195	365	335	1085
CAUCASIA	26	27	21	2	12	7
VEGACHI	74	75	49	38	25	58
EL BAGRE	327	524	546	721	463	1752
TOTAL	1336	2331	2932	3778	2919	6728

Fuente: SIMCI 2008

Nota: ■ Municipios con tendencia a aumentar o sostenerse, ■ Municipios con tendencia a disminuir

El Bajo Cauca limita con Córdoba. Es un corredor estratégico de la guerrilla y los paras por su cercanía con el Nudo de Paramillo y por su conexión directa con el Urabá antioqueño, una zona fuertemente disputada por Cuco Vanoy a la guerrilla de las FARC durante la expansión paramilitar. Además el municipio de Tarazá debe enfrentar, en límites con Ituango, la contención del cinco, 58, 18, 36 y cuatro Frentes de las FARC por Ituango. Adicionalmente, este municipio está sobre la troncal que conduce a la Costa y se sale directo al golfo de Morrosquillo, donde el narcotráfico tiene varios puertos naturales. Por su parte, el municipio de Caucasia adquiere mayor relevancia en el transporte de mercancía ilegal, lavado de dinero y retaguardia del territorio cocalero.

Los participantes del municipio de Caucasia denuncian haber sido víctima de varios atentados en los cuales han resultado muertos varios de ellos y otros tantos gravemente heridos. En concepto del Gobierno local se trata de venganzas o ajustes de cuentas entre ellos mismos y le restan importancia a estos hechos. Un amplio sector de la población desmovilizada atribuye la violencia contra ellos como el cumplimiento de las amenazas de grupos armados ilegales narcotraficantes ante la negativa de regresar a los grupos armados y de no plegarse a sus órdenes. Finalmente, directivas de la Policía Antioquia, anuncian a través de la prensa la vinculación de 450 excombatientes a grupos de narcotraficantes²⁶.

Esto último es la principal causa del incremento en el número de homicidios, las rutas del Bajo Cauca se encuentran en disputa entre Los Rastrojos, Los Paisas y las Águilas Negras. Existen puntos de las rutas y cultivos de esta subregión que ya han sido negociados con las guerrillas lo cual contribuye a la estabilización de la violencia. Sin embargo locales de ambos municipios denuncian el resurgimiento del reclutamiento forzado de menores de edad,

“Muchos han tenido que sacar sus niños, los que no los pueden mandar pa’ Medellín han sufrido mucho” (Entrevista local. Grupo Víctimas. 2009).

El desplazamiento forzado se ha vuelto a disparar en las zonas de influencia de las rutas del narcotráfico.

²⁶ Luego de que las directivas de la Policía Antioquia informaran que “unos 450 desmovilizados de las Autodefensas abandonaron el proceso de reinserción en el Bajo Cauca antioqueño”, y que de ellos “una buena parte se reintegró a las bandas de narcotraficantes de la región”, la Asesoría de Paz de Antioquia señaló que “no son 450, sino 408”. El Asesor de Paz de la Gobernación de Antioquia informa de acuerdo con la ACR, que 408 reinsertados que se creía habían abandonado el proceso, pero con la Alta Consejería hemos sabido que 55 se fueron a otras zonas, 39 han sido asesinados, 8 están detenidos, 32 se han contactado en otras localidades, 6 fueron asignados a procesos en otros municipios y 56 manifestaron su intención de salirse del programa por asuntos de seguridad”(El Mundo, 2008). Otra fuente de registro: http://www.derechoshumanos.gov.co/bitacoras/bitac_350.asp. Bitácora del 10 al 16 de septiembre de 2008.

Fuera del Área Metropolitana, el Bajo Cauca es la segunda subregión, después de Urabá, que tiene el mayor número de excombatientes en el departamento, el mayor número de desmovilizados asesinados (30) e inactivos (305).

Tabla 17
Estado de la Población desmovilizada dentro del proceso DDR en el Bajo Cauca

Municipio	ACTIVO	DETENIDO	FALLECIDO	INACTIVO	TOTAL
CÁCERES	211	18	6	33	268
CAUCASIA	413	18	10	110	551
EL BAGRE	101	1	5	33	140
NECHÍ	19	0	1	13	33
TARAZÁ	365	17	7	95	484
ZARAGOZA	45	1	1	21	68
Total	1154	55	30	305	1544

Fuente: Alta Consejería para la Reintegración. A junio de 2008.

El narcotráfico hoy es más visible que nunca en la historia de la subregión y la demanda de mano de obra es alta, por esta razón algunas estructuras de las AUC no se desmovilizaron y continuaron al servicio de la actividad ilegal. Los excombatientes denuncian el actual reclutamiento y entrenamiento de nuevas unidades, de acuerdo con lo cual, la mayoría de los desmovilizados que se reinsertan tienen con motivación el incumplimiento del gobierno, otros tipo de incentivos son los económicos o coercitivos de los armados.

Las debilidades del programa de reintegración y la Policía Nacional en materia de seguridad son serias, de ello es evidencia el alto número de homicidios y de desmovilizados inactivos especialmente en Caucasia (110) y Tarazá (95), el desplazamiento de un número indeterminado de ellos y de sus familias. De acuerdo con la ACR y la Policía departamental, existe un protocolo de seguridad que deberá seguirse en el momento en que cualquier desmovilizado solicita un Análisis de Riesgo. Dicho protocolo pretende determinar la naturaleza e inminencia del riesgo para la vida del desmovilizado, su aplicación dura entre 15 y 20 días y es llevado a cabo por la Policía departamental, en caso de ser aprobado se aporta al desmovilizado apoyo económico para su cambio de residencia hacia el lugar que se evalúe conveniente, y paso de revista al nuevo domicilio. Las dificultades que estas instituciones reconocen es la inevitable lentitud de aplicación del protocolo, tiempo en el cual la amenaza puede llegar a concretarse, de manera que los participantes no esperan y se desplazan hacia otros lugares, caso en el cual ya no es competencia a de la ACR brindar acompañamiento sino que; para mayor trámite del excombatiente, deben reportarse como desplazados en Acción Social.

Por su parte, algunos desmovilizados prefieren desplazarse a acudir a la Policía, dado que reconocen los vínculos del Ejército Nacional y la Policía con actores armados, lo cual empeoraría su situación; esto explica el bajo número de peticiones de estudios de seguridad en ambos municipios (entrevista municipal, 2009). En palabras suyas,

“ ... si no, dígame ¿por qué teniendo tanto Ejército desde Yarumal hasta Caucasia, no pasa nada?, por aquí transita todo!”(Entrevista político local. 2009).

Paradójicamente, mientras una parte de los desmovilizados denuncian su preocupación por los riesgos a que se exponen en el municipio de Caucasia y la poca colaboración de las autoridades, otro grupo de ellos argumenta no experimentar temor, afirman no haber recibido amenazas y desarrollar sus actividades con toda normalidad, manifestando que varios de los compañeros que han sido asesinados fue porque estaban vinculados a actividades ilícitas. De acuerdo con el profesional del área sicosocial, ello puede obedecer a la doble participación de algunos de ellos en el programa y en grupos armados, donde uno de los roles importantes es bajar la tensión de los acontecimientos.

5.1 Municipio de Caucasia

Caracterización de la población desmovilizada

De acuerdo con la Alta Consejería para la Reintegración, el municipio de Caucasia cuenta con un total de 551 excombatientes, de los cuales 540 son ex integrantes de las AUC, seis del ELN, dos del ERP y tres de las FARC. En procesos de desmovilizaciones colectivas participaron 537 personas y sólo 14 en desmovilizaciones individuales. En general, 493 son hombres y 58 mujeres. De acuerdo con la edad, 154 de ellos están entre los 18 y 25 años, 344 entre los 26 y los 40 años, 52 tienen más de 40 años y de uno no se tiene información. Del total de excombatientes, dos están indocumentados y 549 realizaron el proceso de cedula, 261 cuentan con libreta militar y 430 tienen Certificado del pasado judicial. En relación con el grado de escolaridad, de 322 no se tiene información, 150 tienen grado de escolaridad primaria, 78 de secundaria y uno universitario.

De acuerdo con el tipo de desmovilización, se encuentra que de la población colectiva (537), 400 están activos, 18 detenidos, 10 fallecidos y 109 inactivos. Por su parte, de la población desmovilizada individualmente, correspondiente a 14 excombatientes, 13 están activos y uno inactivo. Por consiguiente se tiene que la población a reintegrar por el programa DDR se ha disminuido en un 25%.

La población inactiva del municipio de Caucasia representa el 25%; es decir, 138 desmovilizados de los cuales 110 no han regresado al programa, 10 fallecieron y 18 se encuentran detenidos. Este grupo está compuesto por 8 mujeres y 130 hombres. De éste grupo poblacional, 137 participaron del procesos de desmovilización colectiva y uno individualmente. En relación a la edad, 41 de ellos están entre 18 y 25 años, 85 entre los 26 y 40 años y 12 son mayores de 40 años. Los 138 cuentan con cédula de ciudadanía y certificado de pasado judicial, 65 tienen libreta militar. En cuanto a la escolaridad se encuentra que de 134 no se tiene información y 4 tienen primaria. 30 de ellos se encontraban vinculados al Régimen de Seguridad Social contributivo, 71 al régimen subsidiado y de 37 no se tiene información.

La población activa representa el 74% del total de la población registrada por reintegrar en el municipio, es decir 413 de los cuales 403 ex integrantes de las AUC, cinco del ELN, dos del ERP y tres de las FARC. 400 del tipo de desmovilización colectiva y 13 individual. 50 de género femenino y 363 de género masculino. En relación a la edad, 113 están entre los 18 y 25 años de edad, 259 entre 26 y 40 años, 40 son mayores de 40 años y de 1 no se tiene información. Sobre el nivel de escolaridad se encuentra que de 188 no se tiene información al respecto, 146 tiene primaria, 78 secundaria y uno universitario. Los 413, dos están indocumentados y 411 poseen cedula de ciudadanía, de ellos 196 tienen libreta militar y 347 certificado de pasado judicial. En salud, de 21 no se tiene información y 392 excombatientes están carnetizados: 301 en régimen subsidiado, dos en régimen subsidiado ARS y 88 en contributivo.

Salud

El 94% de la población que participa en el programa de reintegración se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, el 73% en el régimen subsidiado y el 21% en el régimen contributivo. Sólo el 5% no se encuentra asegurado (Tabla 18).

Tabla 18
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en el municipio de Caucasia

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro	Subsidiado ARS
Caucasia	413	302	88	21	2

Fuente: Datos ACR Antioquia en Junio de 2008.

Las dificultades en el acceso a salud se relacionan con la atención ineficiente frente a una elevada demanda de consultas, limitaciones en acceso a medicamentos por fuera del POS y las remisiones a centros hospitalarios de otros niveles. No existen programas dirigidos específicamente al perfil de morbilidad de la población desmovilizada, es por ello que no tiene acceso a tratamiento de adicciones. Los participantes señalan que nunca han recibido asistencia en temas de promoción y prevención de la salud, además que no tienen atención especializada para las personas con discapacidades y sus tratamientos no son cubiertos, no tienen mayor conocimiento de cómo funciona el sistema de salud y desconocen el conducto regular para tramitar sus demandas. Existe la percepción entre los excombatientes de que debería tener un servicio y atención particular como población desmovilizada.

Educación

De los 413 participantes activos de Caucasia sólo un bajo porcentaje, 31,2% -tiene básica primaria terminada y sólo el 10,8% ha terminado educación secundaria. El 89,1% es considerada como población objetivo de los programas de educación formal y formación para el empleo, sin embargo sólo el 45,7% se encuentra en el ciclo de educación formal y un 18,8% se encuentra en procesos de formación para el trabajo (tabla 19).

Tabla 19
Población objeto de los programas de educación en Caucasia

Municipios	Nº Participantes Activos	Población con Formación académica > 5o 2 ^a .	Población objetivo para educación académica	Población atendida de la población objetivo	Formación para el empleo ²⁷
------------	--------------------------	---	---	---	--

²⁷ Población cursando y matriculada en cursos de formación para el trabajo.

Caucasia	413	129	45	368	189	78
----------	-----	-----	----	-----	-----	----

Fuente: Datos ACR Antioquia en Junio de 2008.

Los participantes de Caucasia presentan inquietud frente a la relación que existe entre el estudio y la bonificación económica, pues sienten disminuido su ingreso cuando pasan de la primaria al bachillerato, aspecto que los afecta económicamente debido a la alta dependencia de su economía personal y familiar con respecto a dicha ayuda.

Reintegración Económica

Luego de la desmovilización surgieron en el Bajo Cauca varias ONG's y Corporaciones de desmovilizados, la corporación Buscando Caminos Buenos BCB del municipio de Caucasia y Elbapaz. Un buen número de estos proyectos vincula a víctimas y comunidad en general. De acuerdo con la ACR, son seis los proyectos productivos que se han implementado en Caucasia, de carácter agropecuario, piscícola y del cultivo de caucho, siendo este último el que según los participantes aún se mantiene. Éstos han sido financiados con recursos del Ministerio del Interior y de Justicia

Los participantes mencionan que han emprendido siete proyectos productivos: yuca industrial, plátano, psicicultura, jatrofa, artesanías, compostaje y lomobricultivo, ovino y caprino, ají, todos ellos con muy poco éxito, sólo uno de Caucho va adelante, pero su rentabilidad es a largo plazo. Las principales dificultades se han centrado en: incumplimiento de los requisitos mínimos para el desembolso de recursos, no aprobación por parte de la ACR, falta de tierra para los proyectos productivos, falta de voluntad política para encontrar terrenos compartidos o en comodato para los proyectos.

A la frustración de sus proyectos empresariales, agregan que la bonificación económica es insuficiente frente a las obligaciones familiares que cada uno de ellos tiene, razón por la cual se ven en la tarea de buscar trabajo alternos a las actividades de estudio para lograr de un lado juntar los requisitos para el subsidio económico y de otro garantizar otras fuentes de ingresos en trabajos como en bares, discotecas, tiendas, supermercados, algunos prestan el servicio de mototaxi como propietarios de las motos o simplemente como conductores. Agregan que su bajo perfil y la discriminación de los empresarios de Caucasia obstaculizan la vinculación laboral.

Sin bien ninguno de ellos asume la participación en grupos armados, algunos excombatientes consideran que el narcotráfico como fuente de empleo ofrece salarios más atractivos, que oscilan entre \$800.000 y \$1.600.000, de acuerdo con el tipo de actividad, experiencia o rango que el desmovilizado tenía cuando estaba activo, para las actividades de coordinación de grupos, manejo de equipos de comunicación, o manejo financiero. Sobre los combatientes rasos la presión parece ser menor.

Reintegración Política

De acuerdo con algunos líderes, las viejas relaciones de la política con los actores armados no se han roto, *“han sido muchos años de presencia en la subregión, lo difícil es ponerlas en evidencia en otros ámbitos por fuera de lo local.”*(Entrevista político local. 2009). Al respecto, en el municipio de Caucasia recuerdan el caso de la líder local y ex representante a la Cámara Rocío Arias, condenada por parapolítica, pero nadie habla con facilidad sobre este tipo de vínculos con la política local.

En este municipio se presentaron cinco candidatos a la Alcaldía. Uno de ellos fue señalado por locales y externos de ser apoyado por desmovilizados y Jefes activos del narcotráfico, otras versiones han desmentido el hecho y lo han puesto en un lugar de enconadas divisiones políticas²⁸.

Lo cierto es que la política que se vive en éste municipio de 92.139 habitantes, de los cuales aproximadamente el 2% son excombatientes del ejército armado con el que se logró el control territorial de una de las zonas que ha dejado en evidencia las articulaciones entre las redes de la política local y nacional con los paramilitares. Esto junto a la permanencia de estructuras armadas y actividades ilegales tradicionalmente desarrolladas por las AUC, ha llevado a que en términos generales la participación de desmovilizados en la política local connote ilegalidad y vínculos entre políticos y actores armados, aún cuando los mecanismos de su articulación no sea tan clara, consideran algunos representantes de medios subregionales, que al caso recuerdan el caso de la líder local y ex representante a la Cámara Rocío Arias, condenada por parapolítica y agregan: *“han sido muchos años de presencia en la subregión, lo difícil es ponerlas en evidencia en otros ámbitos por fuera de lo local”* (Entrevista político local. 2009).

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención Psicosocial

De acuerdo con la ACR, de 91% de los participantes de Caucasia se encuentra asistiendo al menos una vez a actividades de acompañamiento psicosocial. De acuerdo con los participantes, el proceso de apoyo psicosocial permite potencializar sus capacidades individuales a la vez que ha potenciado los vínculos con la comunidad, a través del reciente proyecto de comunidades operado por la Fundación Oleoductos de Colombia. Mencionan que la debilidad del este apoyo es la frecuencia, uno o dos encuentros por mes.

²⁸ Los medios registran “En este municipio se presentaron 5 candidatos a la Alcaldía. Un político local aspirante a postular su candidatura a la Alcaldía, José Nadim, denunció que “muchos líderes nos decían que llegaban desmovilizados exigiendo: hay que votar por el médico (aludiendo al candidato ganador Jorge Iván Valencia de Cambio Radical)”, a pesar de que éste en otro momento, acompañara activamente una marcha de respaldo a las AUC, organizada por ganaderos y campesinos de Caucasia. Al respecto, el Alcalde electo, argumenta que “Es muy difícil distinguir a todos los que apoyaron mi campaña” (votebien.com)

La población desmovilizada señala que estos no participan en ninguna organización ciudadana o comunitaria, su única participación se ha dado en marchas como la del 4 de febrero en contra de las FARC, en actividades promovidas por la iglesia católica en el marco de la semana por la paz y en los trabajos comunitarios promovidos por la ACR, Oleoductos de Colombia y la Policía comunitaria.

Dado que en esta subregión no se ha desestructurado la actividad ilegal, a la fecha no se puede afirmar que la desmovilización haya generado transformaciones en el contexto y el orden social, lejos de hacerlo, el incremento en los homicidios producto del reordenamiento de los actores ilegales en la zona, se ha generado un mayor mutismo y zozobra en la comunidad de ambos municipios. La mayoría de los desmovilizados ejercían su actividad como grupo armado en el municipio y de varias maneras la comunidad los conocía y se relacionaba con ellos, de manera que su baja credibilidad en el proceso y su desconfianza se relaciona con una desmovilización que les parece incompleta, continuidad de actividades vinculadas a las AUC como el narcotráfico, las vacunas, acciones de violencia y el control social entre otras. Según los desmovilizados, se hace evidente que son objeto de desconfianza. Por su parte, representantes de la comunidad señalan

“[...] es posible que nos junten a la comunidad y a los desmovilizados, pero son reuniones donde nadie dice nada, porque no sabemos quién es quién.”(Entrevista líder local. 2008).

Poco se ha avanzado en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las autoridades civiles y militares, al caso, la gente atribuye mayor efectividad en la aplicación de justicia que ejercían los grupos armados ilegales. Por ello, posterior al proceso de desmovilización la comunidad continuó buscando estas vías ilegales para la tramitación de sus conflictos e intereses. Pero además, continúan siendo evidentes, cuando menos, las alianzas entre la Fuerza pública y los actores armados, e incluso entre actores armados ilegales se hacen pactos, ya no tan extraños para la comunidad, entre guerrillas y ejércitos narcotraficantes.

De acuerdo con algunos participantes, la Administración local no está interesada en articular acciones decididas con otras instituciones o entes territoriales para aportar en la aplicación de una política de reintegración a nivel local. A pesar de lo cual, la Gerencia de la Alta Consejería para la Reintegración con sede en Cauca, ha señalado el logro de algunas alianzas con el Gobierno municipal para adelantar campañas de reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía con los desmovilizados y las Autoridades locales. Por su parte el Gobierno local percibe el proceso de reintegración como una responsabilidad del Gobierno Nacional, de manera que se encuentra exclusivamente en las manos de la ACR.

El papel de los diversos Actores

Aún en medio de la violencia que desata la confrontación entre estructuras armadas del narcotráfico, la comunidad espera que los excombatientes evidencien un mayor compromiso con el proceso y jueguen un papel importante en el esclarecimiento de la

verdad, más allá de la realización de actividades de carácter comunitario. Por su parte los excombatientes demandan de la ciudadanía mayor comprensión y una mejor actitud hacia ellos, que posibilite mejorar las relaciones sociales, superar los estigmas y avanzar hacia la reintegración.

Existe un alto grado de desconfianza en las autoridades al punto de acudir con mayor facilidad donde los “muchachos” que a la policía o el Ejército Nacional. La gente dice que la violencia hoy es alta y comprenden que se debe a la lucha entre facciones del narcotráfico,

“Es mejor irnos temprano para la casa, porque prohibieron estar en la calle después de las 8 p.m [...] sólo matan a los que estén metidos con el narcotráfico y ahí cae mucho desmovilizado, eso no es con todo el mundo, y los están matando dentro de la casa”.(Entrevista líder local. 2008).

Los participantes del Programa de Reintegración consideran que la reconciliación es que la gente se respete y que no existan problemas, que todos se olviden de lo que paso sin echarle la culpa a nadie, para que no vuelvan a pasar esas cosas, porque cuando se señalan y se buscan a los culpables, es cuando se empiezan las venganzas. Por su parte, la sociedad considera que un asunto fundamental para la reconciliación es hablar con la verdad y que se aplique la justicia y repare a las víctimas.

El alcance de las acciones realizadas por la Administración Municipal es de asistencia a los desmovilizados y víctimas, sin mayor capacidad para crear condiciones para la transformación del conflicto local; “ello no se convierte en mayor presencia del Estado” a la vez que,

“ No existe un plan estratégico de copamiento institucional integral para la subregión, ni planes de dinamización del desarrollo socioeconómico, que superen el modelo de los subsidios, los cuales son importantes en las condiciones de abandono de la población, pero equivocados frente a los problemas que estructuran el conflicto armado.” (Entrevista político local. 2009).

En el mismo sentido, el Centro Fusión de la Gobernación de Antioquia y estrategia de consolidación de la seguridad democrática del Plan de Desarrollo Nacional; de acuerdo con un funcionario de la Gobernación, pretende complementar las acciones militares con el desarrollo social.

Según señala un representante del sector económico, al principio, cuando sólo existía la amenaza de la guerrilla y el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad, los grupos paramilitares se volvieron una alternativa de solución para el sector privado de la zona, y en ese sentido el sector posee una responsabilidad con el proceso DDR, pero con el paso del tiempo las prácticas de guerra utilizadas por los grupos paramilitares rompieron con los pactos o expectativas de la sociedad y del sector específico.

“Hoy sin embargo el sector [económico] no se ha comprometido de una manera seria con el proceso; todos los que tienen interés económicos en la región tuvieron que ver con el conflicto pero ahora nadie asume su responsabilidad y cree que la reconciliación no es con él” (Entrevista local. Representante del sector privado. 2008).

5.2 Municipio de Tarazá

Caracterización de la población desmovilizada

El municipio de Tarazá cuenta con un total de 484 participantes del proceso de reintegración, todos desmovilizados colectivos ex integrantes de las AUC. De los 484, 365 están activos, 17 detenidos, siete fallecidos y 95 inactivos. Del total de excombatientes 44 son mujeres y 440 son hombres. En cuanto a la edad, 165 están entre los 18 y 25 años, 260 entre los 26 y los 40 años y 59 tiene más de 40 años. Todos los participantes del programa tienen cédula de ciudadanía, de los cuales 216 cuentan con libreta militar y 427 tienen Certificado del pasado judicial. Del total de excombatientes, 147 tienen grado de escolaridad primaria, 122 de secundaria y de 215 no se tiene información.

La población por reintegrar en este municipio, ha disminuido en un 24,5%, es decir, 119 excombatientes de los cuales 17 se encuentran detenidos, siete han fallecido y 95 no han regresado al programa. Del total, 6 son mujeres y 113 hombres. En relación a la edad, 44 están entre los 18 y 25 años de edad, 63 entre los 26 y 40 años y 12 son mayores de 40 años. En cuanto a la escolaridad, de 116 no se tiene información y tres tienen primaria. Los 119 cuentan con cedula de ciudadanía y certificado de pasado judicial, 54 tienen libreta militar. En salud, de 22 no se tiene información, 97 están carnetizados: 22 en el régimen contributivo y 75 en el subsidiado.

La población de desmovilizados activa dentro del programa para la reintegración es del 75% del total de población desmovilizada que se radicó en el municipio de Tarazá. Ex integrantes de las AUC, de los cuales 38 son mujeres y 327 son hombres. En relación a la edad, 121 están entre los 18 y 25 años, 197 entre 26 y 40 años y 47 son mayores de 40 años. Sobre el nivel de escolaridad se encuentra que de 99 no se tiene información al respecto, 144 tiene primaria y 122 secundaria. Los 365 poseen cedula de ciudadanía, de ellos 162 tienen libreta militar y 339 certificado de pasado judicial. En salud, de 25 no se tiene información y 340 excombatientes están carnetizados: 307 en régimen subsidiado, uno en régimen subsidiado ARS y 32 en contributivo.

Salud

El 92% de la población se encuentra vinculada al Régimen de Seguridad Social en Salud para el desmovilizado y su núcleo familiar. El 84% de ellos bajo el régimen subsidiado, el 8% en el régimen contributivo y el 6% del total de la población desmovilizada no tiene aseguramiento (Ver Tabla 20).

En un municipio con baja cobertura en la seguridad social de la población de los niveles uno y dos del SISBEN y deficiente prestación de los servicios de salud, de acuerdo con Planeación de la Gobernación de Antioquia, la percepción de los excombatientes como principal dificultad en el componente de salud tiene que ver con que se conciben a sí

mismos como una población preferencial y prioritaria para la atención y la prestación del servicio de salud se presentan dificultades para acceder al servicio por la alta demanda de pacientes, a la vez que para acceder a medicamentos por fuera del Plan Obligatorio de Salud.

Tabla 20
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro	Subsidiado ARS
Tarazá	365	307	32	25	1

Fuente: Datos ACR Antioquia en Junio de 2008.

La Administración Municipal señala que ha sido diligente en el proceso de afiliación a través, de la Dirección Local de Salud. Mencionan la importancia de recibir asistencia en temas de promoción y prevención de la salud y atención de problemas de discapacidad. De acuerdo con la ACR, ello ha mejorado a partir de la ilustración sobre la igualdad del derecho al acceso al servicio de salud.

Educación

De los 365 participantes activos, el 41,3% ha terminado el ciclo de básica primaria y el 10,6% terminó educación secundaria. El 89,3% de los desmovilizados son considerados población objetivo para la educación formal y la formación para el empleo, así, un alto porcentaje -57,2%- se encuentra en el ciclo de educación formal y el 23,5% se encuentra en formación para el trabajo. (Tabla 21).

Tabla 21
Población objeto de los programas de educación en Tarazá

Municipios	Nº Participantes Activos	Población con Formación académica > 5o 2ª.	Población objetivo para educación académica	Población atendida de la población objetivo	Formación para el empleo ²⁹	
Tarazá	365	151	39	326	209	86

Fuente: Estadísticas ACR Antioquia en Junio de 2008.

En el municipio de Tarazá la gran dificultad presentada en el grupo de desmovilizados está relacionada con el bajo nivel de escolaridad, y las altas tasa de analfabetismo; muy pocos han accedido a educación superior por medio de carreras técnicas, tecnológicas y

²⁹ Población cursando y matriculada en cursos de formación para el trabajo.

profesionales. Los participantes llaman la atención sobre lo problemático de la vinculación entre la obligatoriedad de asistir a procesos de formación como condición para recibir el subsidio y la necesidad de dedicar tiempo para otras actividades que les permita aumentar sus ingresos sin perder el subsidio.

Reintegración Económica

Según informe de la ACR, a junio de 2008 no ha desembolsado recursos propios para proyectos productivos en este municipio. En cuanto a empleabilidad, en estas cifras no se registra ninguna empresa contactada, empleo gestionado u obtenido.

La mayoría de proyectos productivos, del Ministerio del Interior, fueron impulsados a través de Corporaciones de desmovilizados Senderos y Tierra de Promisión vincularon la participación de víctimas, lo cual facilitó el trámite y desembolso de recurso. Sin embargo, con la puesta en marcha de los proyectos estallaron dificultades que continuaban evidenciando mala administración de los recursos, pervivencia de cadenas de mando, entre otras dificultades que incluyen la apropiación de recursos y lavado de dinero, generando reacción en los entes de control nacional que solicitan a la ACR, la revisión de la adjudicación de recursos y seguimiento a proyectos entre los cuales se encuentra los administrados por Tierra de Promisión.

Luego de la desmovilización surgieron en el Bajo Cauca varias ONG's y Corporaciones de desmovilizados, entre las más relevantes de este municipio se encuentran Senderos, Tierra de Promisión. Con frecuencia estas organizaciones vincularon la participación de víctimas en proyecto productivo. Sin embargo, con la administración de los recursos para la puesta en marcha de los proyectos estallaron dificultades que continuaban evidenciando cadenas de mando. De hecho la Corporación BCB es dirigida por Fernando Soto, Comunicador Social de la mesa de Santafe de Ralito y Elbapaz cuya misión orienta un trabajo mucho más político en el municipio de Tarazá, tiene por coordinador de proyectos productivos a Bladimir Vanoy, hijo de alias "Cuco Vanoy" exjefe paramilitar del Bloque Mineros (Alonso, 2007).

A diferencia del proyecto productivo de caucho, los demás fueron abandonados debido a la lentitud de resultados, la falta de preparación de los desmovilizados y el tipo de asociación que crearon. Según los participantes, el proyecto productivo del cultivo de caucho presenta inconsistencias graves, pues muchos de los beneficiarios que aparecen como socios en los registros de la ACR, nunca han estado vinculados al proyecto y otros que han trabajado hasta por espacio de tres años o más no aparecen en los registros.

En términos generales existe una tendencia a depender de la bonificación económica como fuente de ingresos. Adicionales a ésta, la Alcaldía de Tarazá ofrece una bonificación económica por el orden de \$ 200.000 mensuales en contraprestación por su vinculación en la ejecución de obras públicas, no directamente como obreros del municipio sino a través convenios. Por otra parte se realizaron otra serie de acuerdos con la administración para la reintegración económica, relacionado con la distribución de lotes provistos por el sector

privado³⁰ para ser explotados por la población desmovilizada, sin que se haya materializado el acuerdo.

Las dificultades del componente de Reintegración Económica en el municipio de Tarazá se centran en los bajos niveles educativos, la falta de claridad en el mismo programa para hacer la asesoría a la formulación de proyectos y los desembolsos, a más de los múltiples trámites que contrasta con las ofertas y presiones del narcotráfico en la zona, puntualizan los desmovilizados. Sin considerar problemas estructurales de la economía local, señalados en varios documentos de planeación local y departamental, como la baja competitividad y productividad del sector agrícola y pecuario generado por el alto número de predios con tenencia ilegal; en buena medida debido a la expropiación de tierras por las AUC, deficientes programas para incentivar la actividad agropecuaria y precariedad de la infraestructura vial.

Por su parte, el narcotráfico continúa perfilándose como actividad económica para desmovilizados y población en general, funcionarios públicos dan cuenta de la alta movilidad humana que entra y sale del municipio en busca de empleo de raspachin;

“[...] incluso personas de los barrios populares de Medellín vienen en busca de empleo a Tarazá, agregan los funcionarios.

Reintegración Política

De acuerdo con lugareños de Tarazá, los desmovilizados del Bloque Mineros asistieron a varias manifestaciones públicas de la pasada contienda electoral, en apoyo a la campaña política del candidato Miguel Ángel Gómez del Partido Liberal Colombiano, lo cual fue interpretado por los lugareños como el visto bueno del antiguo bloque y los nuevos mandos al candidato.

Miguel Ángel Gómez, ex trabajador minero y alcalde durante el periodo 2000 – 2003, resultó electo con el 49,97%³¹ de las votaciones³², 2.171 votos por encima de su mayor opositor Héctor Leonidas Giraldo y una coalición de concejales liberales que ocuparon 7 de 13 curules, luego de que la competencia electoral se diera entre 100 candidatos a la corporación, un número de candidatos nunca antes registrado. Posteriormente en noviembre del 2008 la prensa regional y local registró la captura del mandatario sindicado de amenaza, constreñimiento, concierto para delinquir y presuntos vínculos con el ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy alias “Cuco Vanoy” extraditado a Estados Unidos.

³⁰ Específicamente de propiedad del Alcalde municipal 2008 – 2011, Miguel Ángel Gómez García.

³¹ www.cne.gov.co

³² De un total de 10.599 votos válidos, el Candidato ganador obtuvo 5.604; es decir el 49,97% de las votaciones, seguido por un 30% de votos para el candidato Hector Leonidas Giraldo Arango del Partido Comunitario y Participativo.

Finalmente, tras varias querellas, Carlos Mario Cuartas Torres fue nombrado alcalde. El primer mandatario local fue dejado en nombramiento por el mismo Alcalde antes de su captura, y suspendido por el Gobernador Ramos, quien pidió una terna al partido Liberal para la designación. Una vez nombrado Bobil de Jesús Bedoya Ruiz, el diputado liberal Rodrigo Mesa de Envigado; de acuerdo con algunos políticos locales actuando como portavoz de la oposición local, informó sobre su inhabilidad y posterior destitución, a pesar de que el Jefe del Partido Liberal, César Pérez, ratificara en el cargo al señor Bedoya, según él con el aval de la Dirección Nacional Liberal. Posteriormente es enviada otra terna en la que fue postulada la esposa del Alcalde detenido, la cual no pudo posesionarse por incompatibilidad (Semana, 2008), luego de lo cual es presentado una tercera terna y nombrado como alcalde Guillermo Pérez Pérez, el cual resultó ser hermano de Jorge Eliecer Pérez, ex alcalde 1998 -2000, condenado por el Tribunal Superior de Antioquia a 18 años de cárcel por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público³³.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención Psicosocial

De acuerdo con la ACR, a los talleres y actividades psicosociales regularmente asiste el 82% del total de su población desmovilizada. Tras varias recomendaciones, la ACR empieza a implementar proyectos de reintegración comunitaria, en los que se vinculan participantes, comunidad, víctimas y jóvenes. El proyecto está siendo operado por Oleoductos de Colombia y tiene como principal fortaleza la vinculación de profesionales y líderes de la subregión, así como la generación de sinergia entre los procesos locales propios de la Fundación y esta nueva iniciativa. Sin embargo, los alcances como tal del proyecto son bastantes cortos y limitados en la vinculación de población y territorios, a la vez que se plantea un año como término para su realización.

De acuerdo con la ACR, la población desmovilizada se compromete con los trabajos de proyección social promovidos por la ACR y la Policía Comunitaria, porque ven en este tipo de actividades la posibilidad de transformar su imagen ante la sociedad y recuperar confianza. A pesar de las estrategias para la reintegración, confianza es lo que menos existe en la localidad; aseguran algunos de sus habitantes. La permanencia de las actividades económicas ilegales del paramilitarismo, la generación de violencia en torno a la protección de dichas actividades económicas promovidas por combatientes que nunca se desmovilizaron, el reclutamiento de desmovilizados y nuevos combatientes; entre ellos menores de edad, la fuerte presencia militar que no genera transformaciones positivas e incrementa la zozobra, la violación de derechos humanos y asesinato de líderes. Éstos son factores que no permiten recuperar la confianza local.

³³ “Los hechos investigados ocurrieron en el 2000, cuando el entonces mandatario local suscribió 11 contratos de manera irregular, por cuantía de \$869 millones para el mantenimiento de 20 kilómetros existentes entre la cabecera municipal y el corregimiento de la Caucana” (Semana, 2008).

El papel de los diversos Actores

Con desaliento, algunos líderes campesinos consideran que *“todo está por hacer... por aquí el proceso de paz no llegó”*. La población habla con demasiadas reservas sobre lo que acontece en la zona, y consideran que lo mejor que puede pasar es que, *“el Ejército se retire o llegue con todo”*. Haciendo referencia a que es mejor cuando sólo existe un actor armado y en tal sentido es reconocido como un actor más del conflicto. Con la presencia del Exjefe paramilitar Ramiro Vanoy, existe una fuerte polarización, mucho lo ven como un protector y otros con reservas hablan de la forma como ayuda a la comunidad.

Existen varias organizaciones sociales, especialmente de víctimas por desplazamiento armado, una de desplazados por la guerrilla y otra por los paramilitares. Sin embargo, su nivel de organización es bajo, tanto en número como en formación. No hay una organización social que lidere la búsqueda de la solución a sus demandas por mejores condiciones de vida y la exigencia de derechos de las víctimas, más allá de la contingencia de las reparaciones económicas, lo cual, ha sido visto como un apoyo para mitigar la pobreza, dado que el narcotráfico hace que la vida se ponga más cara en la zona. Es un importante motor de la economía local que no distribuye ingresos, *“[...] pero si es mejor que sembrar yuca.”*³⁴

Por su parte, el Gobierno local ha pretendido vincular algunas acciones con el bienestar de los desmovilizados a través de la destinación de recursos públicos para ello, lo cual se ha visto truncado por su captura. Los gobiernos Nacional y Departamental, han adoptado un plan de 38 mil millones de pesos para realizar una acción integral para la sustitución de cultivos de coca, con aspectos para el mejoramiento de vivienda, salud y educación

³⁴ De acuerdo con estudios de la Gobernación de Antioquia, Tarazá es el segundo municipio, después de Nechí, con mayor índice NBI de la subregión.

5.3 Observaciones sobre el DDR en la Subregión Bajo Cauca

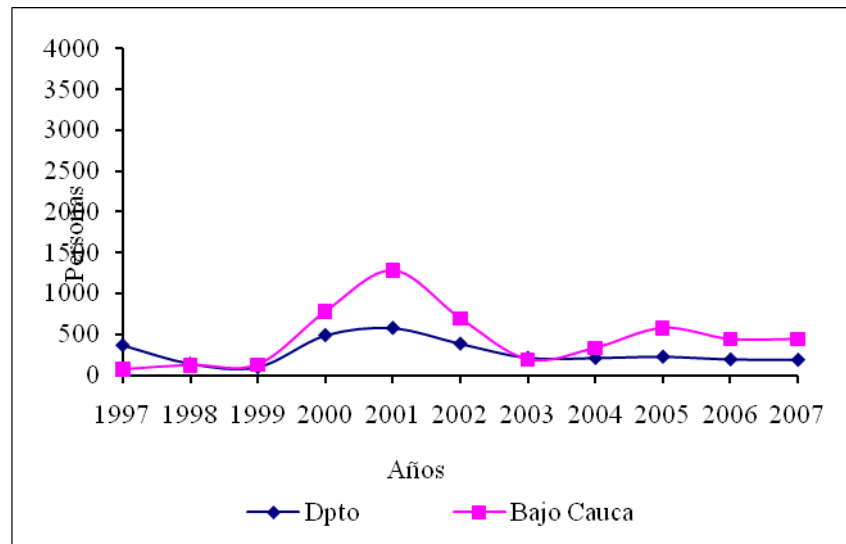
En la subregión del Bajo Cauca, los acuerdos de paz y DDR de las AUC más que la renuncia al control territorial por parte de un actor armado ilegal para recuperarlo a manos del Estado, ha representado la fragmentación de los poderes que ven la subregión posiciones estratégicas para sus intereses en el narcotráfico y tráfico de armas. El Bajo Cauca, hoy como ayer es un territorio de extracción de riqueza por parte de *los colonos* Antioqueños, de la Costa Atlántica y otras zonas del país menos visibles que los ejércitos armados que protegen sus negocios.

En la subregión el núcleo del problema de los acuerdos de paz con las AUC y del DDR, gira en torno al eje del narcotráfico como dinamizador de la economía y otras dinámicas sociales del Bajo cauca y de territorios aledaños.

Aparentemente el problema de la reintegración y la reparación de víctimas representa más un asunto de inclusión social, tal como en otros ciclos de conflicto que ha vivido la subregión. En ambos casos el problema se relaciona más con la pobreza que genera una economía basada en la ganadería extensiva y por ende la concentración de la tierra, en un contexto eminentemente rural; a pesar del vertiginoso desarrollo comercial de Caucasia que no da abasto para el excedente de mano de obra interna. La concentración de tierra se generó a partir de dos procesos colonizadores que ha vivido la subregión durante el siglo XX. El primero de ellos obedeció a la colonización ganadera, tal como se ha señalado aquí, consolidada durante los años 70's a partir de la llegada de hacendados de Antioquia y la Costa Atlántica. La segunda colonización fue la emprendida por la compra de tierras por parte del narcotráfico, pero sobre todo por medio del despojo a los campesinos, motivado por la avaricia y el cultivo de coca.

Los cultivos ilícitos han sido motor para el despojo, tal como ha puesto en evidencia la Comisión de Protección de Tierras de Antioquia; en el Bajo Cauca se expropió el 25% del total de las tierras expropiadas en el departamento (Fiscalía, 2008), lo cual, se ubica en el fondo del alto número de desplazamientos masivos e individuales desde 1999 hasta el 2001, siendo el 2001 el año en que se produjo el más alto número de desplazamientos (Ver Gráfico 1). A la vez el auge de los cultivos ilícitos ha generado un alto flujo de migraciones de Medellín hacia los municipios cocaleros como Tarazá, Zaragoza, Nechí, El Bagre, en el norte en Valdivia y Yarumal y Yalí en el nordeste.

Gráfico 1
Comparación promedio del desplazamiento del departamento y el desplazamiento por expulsión en la subregión del Bajo Cauca



Fuente: cálculos realizados por la autora con base en cifras de

A pesar de las características estructurales que encierra el problema, las respuestas institucionales han sido del orden de políticas públicas, cuando más para quienes se desmovilizaron, que lejos de generalizar el resentimiento entre las víctimas y desmovilizados, tal como en otras subregiones, más bien se presentan solidaridades. Dichas políticas resultan insuficientes para romper con la naturaleza del conflicto decididamente vinculada al cultivo y comercialización de coca. Por otro lado, los programas de sustitución de cultivos no han logrado superar ni las retaliaciones a que son sometidos los cultivadores por parte de actores armados, ni mucho menos la sustitución por cultivos cuya producción y mercados para la comercialización estén asegurados. Durante el último año ello ha activa movilizaciones y acciones colectivas de los campesinos cocaleros de los municipios de Valdivia y Tarazá, a través del éxodo de campesinos marchando hacia la toma de escuelas y zonas públicas para protestar por la falta de acuerdos con el Gobierno nacional y departamental para la sustitución de cultivos.

Los participantes del programa de la ACR, resumen así los problemas de la reintegración:

- No se tiene seguridad a la vida.
- La reintegración ha de pasar por la posibilidad de emplearse o de valerse por sí mismos desde los proyectos y cuando llevamos los proyectos a un estudio de factibilidad siempre los rechazan. Los proyectos productivos con lo del capital semilla no han resultado, eso es como ganarse la lotería, de 25 o 200 participantes en esta mesa ninguno ha recibido capital semilla. No sabemos qué pasa con los dineros de los proyectos.

- En el municipio de Cáceres, Zaragoza, El Bagre, Caucasia, Nechi, Taraza se presentaron proyectos de los que no se ha obtenido respuesta por parte de la ACR Bogotá. Ello evidencia el centralismo.
- No nos abren posibilidades de empleos dignos que garanticen la estabilidad económica. Hay muchas empresas para tocar puertas
- El desempleo y lo educativo: siempre nos llevan cursos cortos, y lo que necesitamos son estudios de nivel tecnológico para poder valerlos por sí mismos y no depender de las ayudas humanitarias.
- Lo económico es lo problemático, lo que nos da el Estado no es suficiente y necesitamos hacer otras actividades que en algunas ocasiones no nos dejan asistir a las actividades psicosociales, y si no asistimos a estas actividades no nos pagan, sabiendo que esas otras entradas son las que nos permiten vivir un poco mejor.
- (Zaragoza) EL SENA dijo que nos llevaría educación donde estuviésemos y no nos han brindado esas oportunidades.

El problema nuclear del DDR es la estabilización del uso de la violencia armada; es decir, la reducción de las confrontaciones armadas, bien porque en efecto la Fuerza pública logre el sometimiento de las estructuras armadas del narcotráfico y de la delincuencia; lo cual no consideran probable a pesar del reclamo de la acción institucional de cumplir con su función constitucional de proteger la ciudadanía y garantizar seguridad y orden; y generar transformaciones en las instituciones de la Fuerza pública que efectivamente evidencien acciones del Estado para la desestructuración del poder ilegal en el territorio por medio del rompimiento de las tradicionales relaciones con el tráfico ilegal. O bien porque las lógicas de la guerra finalmente agoten la confrontación en la definición de un poder hegemónico.

“Falta presencia del Estado y la comunidad es la que paga por la guerra entre bandas que tienen la comunidad acorralada. Peleando territorios, llegan a un lugar y presionan la población. Se volvió al estado de antes de la desmovilización o peor por el incremento de los asesinatos, los atracos y las bandas organizadas. En esto el aparato de seguridad del Estado tiene una gran complicidad, en todos los municipios hay comandos de policía pero suceden anomalías delante de ellos, saben quiénes son los que están delinquiendo pero no los detienen [...] más bien transan con el narcotráfico y se dejan comprar, cuando no tienen “acciones” [en el negocio] ”. (Encuentro Subregional DDR. Gobernación de Antioquia, ACR, Conciudadanía. 2009).

Por su parte, los actores armados han usado como estrategia de rearme el desprestigio de la política de reintegración y el incumplimiento de los acuerdos; para el común de ellos representados en las garantías para la empleabilidad y la generación autónoma de ingresos para cada desmovilizado. El grado de desconcentración del control sobre los territorios y quienes se desmovilizaron llega al punto de generar emplazamientos de la población. Al caso, desmovilizados habitantes del municipio de Tarazá recibieron amenazas directas a sus vidas si se desplazaban ante la convocatoria de las Instituciones públicas para tratar el

problema del rearme. Así como acuerdos tácitos o explícitos entre actores armados; incluidas las guerrillas, sobre el usufructo del territorio: control del cultivo, la venta e intermediación, cuidado y uso de rutas, etc.

Finalmente, el problema del rearme, el narcotráfico, los cultivos ilícitos y la intensificación de los índices de violencia, es un problema de campesinos y desmovilizados locales que son objeto de políticas nacionales intervencionistas inconsultas del territorio, generalmente de militarización. A pesar de ello la estrategia de combate y persecución a cabecillas de estructuras armadas no genera resultados, especialmente en la lucha contra los dineros que capitalizan el negocio ubicados por fuera de la subregión que al caso sirve de zona de cultivo y tráfico.

“Están buscando el ahogao río arriba” (Entrevista Político regional. 2009).

6. REINTEGRACIÓN EN LA SUBREGIÓN DEL URABÁ: El Caso del municipio de Turbo

El contexto subregional del Urabá de hoy no deja de ser una amalgama de expresiones del conflicto armado que ha vivido la subregión a través de diferentes fases, actores, intereses y alianzas. Como factor de articulación regional, el conflicto armado ha operado a través de los conflictos obrero – patronales; eminentemente violentos, y conflictos político – militares, que cumplen el papel de construcción regional por la vía de los actores sociales regionales (Aramburo, 2003).

Más contemporáneamente, desde los 70's las guerrillas de las FACR y el EPL han llevado a cabo su lucha revolucionaria, promoviendo la lucha agraria a través de la toma de tierras y al movimiento sindical de Sintrabanano y Sintrainagro de los obreros de las fincas bananeras. Los acuerdos de paz del EPL con el Gobierno de Virgilio Barco, llevaron a las FARC y al EPL a disputarse las bases sociales y sindicalistas, en medio de lo cual surgen alianzas entre nuevos actores por la redefinición del orden político y económico de la subregión (Romero, 2003). En este escenario la desmovilización del EPL y fracciones del movimiento sindical incidieron en la configuración de las nuevas alianzas que darían origen al proyecto paramilitar de los 90's en el Urabá; mismo que más tarde a través de la reconfiguración de las alianzas de entonces daría origen a la facción puramente narcotraficante del paramilitarismo (Duncan, 2005).

Posterior a la desmovilización de las AUC en Antioquia, el Urabá es la subregión con el mayor número de desmovilizados de Antioquia, aún cuando los mismos desmovilizados reconocen que no todos se desmovilizaron y que apoyos sociales se vincularon como combatientes, en tres actos de desmovilización para dos frentes y una más del Bloque Elmer Cárdenas, al mando de José Alfredo Berrio, alias el “Alemán”, se desmovilizaron 1.538 combatientes y entregaron 1.405 armas. Por su parte el Bloque Bananeros al mando de Ever Veloza alias “HH”, desmovilizó 453 hombres y 351 armas en el municipio de Turbo durante el 2004. Actualmente es la subregión que concentra el mayor número de desmovilizados y el mayor número de participantes inactivos, capturados y detenidos del política de reintegración.

6.1 Municipio de Turbo

Caracterización de la población desmovilizada

De acuerdo con la ACR, en el municipio de Turbo residen un total de 622 excombatientes de los cuales sólo 10 son desmovilizados individuales de las FARC y 11 desmovilizados individualmente de la AUC. Del total de excombatientes 21 son mujeres. En relación con la edad, 245 excombatientes se encuentran entre los 18 y 25 años, 341 de ellas están entre los 26 y 40 años y el resto tienen más de 40 años de edad. A excepción de dos excombatientes, todos realizaron el proceso de cedulación, sólo 288 tienen libreta militar y 531 el certificado de pasado judicial. De acuerdo con el grado de escolaridad, 146

excombatientes han terminado el ciclo de educación primaria, 192 han terminado la secundaria, seis de ellos poseen estudios universitarios, del resto no se tiene información.

De los desmovilizados colectivamente sólo 386 se encuentran activos, del resto, 42 han sido detenidos, 32 han fallecido y 141 se encuentran inactivos. De los desmovilizados individualmente, 20 se encuentran activos y uno inactivo. En términos generales, el estado de los excombatientes dentro del proceso de reintegración es igual a 406 se encuentran activos, 42 detenidos, 32 fallecidos y 142 inactivos.

La población desmovilizada que se encuentra por fuera del programa de reintegración en el municipio de Turbo, asciende al 34% del total de la población por reintegrar radicada en el municipio; es decir, 216 desmovilizados, uno de ellos ex integrante de las FARC, el resto de las AUC. De este grupo de excombatientes al margen del programa DDR, se encuentra que 42 están detenidos, 32 han fallecido y 142 no han regresado al programa. De este grupo 212 son hombres y sólo 4 mujeres. En relación a la edad, 72 tienen entre los 18 y 25 años de edad, 127 entre los 26 y 40 años y 17 son mayores de 40 años. El grado de escolaridad de dos de ellos alcanza la primaria, dos la secundaria y del resto no se tiene información. Del total de ésta grupo sólo dos no tenían cédula de ciudadanía, todos poseen certificado de pasado judicial, y ninguno libreta militar. En salud, 174 se encontraban bajo el régimen subsidiado y 44 bajo el régimen contributivo, el resto de ellos no tiene cobertura.

La población activa dentro del programa representa el 66% del total de la población que inició su proceso en este municipio; es decir, 406 desmovilizados; 386 de desmovilizaciones colectivas y 20 desmovilizados individuales. De acuerdo con el grupo armado al que pertenecieron, 397 ex AUC, y nueve de las FARC. 17 mujeres hacen parte de este grupo de excombatientes y 389 hombres. En relación con la edad, 173 están entre los 18 y 25 años, 214 entre 26 y 40 años y 18 son mayores de 40 años. Sobre el nivel de escolaridad se encuentra que de 144 tienen básica primaria, 190 secundaria y 6 participantes tienen estudios universitarios. El total de participantes tienen cédula de ciudadanía, 224 de ellos no tiene libreta militar y 39 de ellos no tiene certificado de pasado judicial. En salud, 248 se encontraban bajo el régimen subsidiado y 127 bajo el régimen contributivo, 31 de ellos no tiene cobertura.

Servicios Sustitutivos

Seguridad Física y Rearme

El mayor riesgo que se evidencia en lo local para la seguridad de los participantes del proceso de reintegración está relacionado con la permanencia y reestructuración de organizaciones ilegales narcotraficantes; lo cual empezó a manifestarse como bandas delincuenciales y grupos de desmovilizados descontentos con la deficiente protección del territorio por parte del Ejército Nacional, las cuales se llamaron Águilas Negras, Renacer,

Autodefensas Gaitanistas; Frente Carlos Velásquez, y Central de Urabá³⁵. Esta competencia interna por el narcotráfico y otros negocios ilícitos las han llevado a enfrentamientos entre sí y a alianzas con otras estructuras armadas fuera del departamento. Por su parte, no pocos actores coinciden en señalar los vínculos entre tales organizaciones y la Fuerza pública de Urabá, mucho más notoria en actividades relacionadas con el puerto. Además las señalan de no está cumpliendo su función constitucional de perseguir a los delincuentes ni la obligación de proteger a los desmovilizados y población que son objeto de protección especial por el DIH.

A pesar de las voces de alerta de los empresarios y políticos de la región sobre el retorno de la violencia y cuestionar la capacidad del Estado para garantizar seguridad, tras la desmovilización ha estallado la competencia entre mandos medios por el control del “negocio del puerto”; el tráfico de armas y droga. Hoy la Fuerza pública es acusada por distintos actores de actuar en contubernio con grupos narcotraficantes, los desmovilizados prefieren huir o buscar protección en la estructura más poderosa en la confrontación a acudir a la Policía o el Ejército Nacional,

De la subregión, es sabida su ubicación estratégica para el tránsito de droga y armas desde antes del surgimiento de las AUC, fuertemente explotado por éstos y ahora en disputa por la reconfiguraciones que ha sufrido el paramilitarismo en la subregión. Tras la captura de Don Mario, en el Urabá se evidencian facciones de lo que fuera la estructura bajo su mando, además se encuentran en competencia con la banda los Rastrojos por los cultivos de la zona límite con Córdoba. Dicha disputa se extiende hasta el Bajo Cauca, donde los enfrentamientos se dan entre los Urabaeños o la banda Urabá contra los Paisas y los Rastrojos en alianza con los Comba. A lo que se suma el incremento de las acciones de las FARC, un actor más que entra en la negociación del poder en la subregión.

A pesar de que a finales del 2007 y principios del 2008 utilizaran varios canales para hacer sentir la frustración de lo pactado y el incumplimiento por parte del gobierno, como un paro que logró cerrar las agencias públicas y privadas del comercio en la capital de la subregión, volantes de amenazas de rearme, entre otras, públicamente su discurso se fundamentó en las fallas de los proyectos productivos y problemas poco claros en salud y educación para el empleo.

³⁵ “Según informes de inteligencia conocidos por El periódico el tiempo (2007), desde Unguía (Chocó) se habría fortalecido un grupo conocido como ‘Renacer’, con 80 desmovilizados del ‘Élmer’ al mando de ‘don Mario’, sobrino de ‘El Alemán’. Por la parte central de Urabá, de los reductos del ‘Bananero’ nacieron las ‘Águilas Negras’, con ‘H.H’ y Carlos Vásquez, ‘Cepillo’, a la cabeza. ‘Cepillo’ falleció en agosto pasado y Hernández se separó del proceso de paz, se clandestinizó y luego fue capturado. [...]El interés de los ‘Rastrojos’ y los ‘Varelas’, ambos del Valle, por colonizar nuevos territorios agrega un nuevo ingrediente explosivo. Inteligencia señala que esas mafias habrían enviado a ‘El Tigre’, quien en 1994 perteneció al ‘bloque Bananero’, para contactar a antiguos compañeros y llegar a acuerdos. El informe coincide con discusiones que se han dado en consejos de seguridad departamentales en el sentido de que los narcos del Valle buscan ganar posiciones en Antioquia”.

Los desmovilizados, señalan como razones para la deserción, las presiones del narcotráfico, las presiones de la Fuerza pública; ejército y policía, la falta de oportunidades laborales, el estado de zozobra que obliga a hacer alianzas para la protección y la seguridad. Hay dos poblaciones susceptibles de reclutamiento: la primera es la población desmovilizada, reclutada mediante la amenaza armada y la oferta del incentivo económico (se paga entre \$800 mil/mes y \$1,0 millón/mes para patrulleros y de \$2,0 – \$4,0 para cuadros de mando). La segunda población susceptible de reclutamiento son las bandas juveniles que están proliferando principalmente en Apartadó y Turbo altamente vulnerables a caer en la criminalidad y aptos al reclutamiento.

Por su parte la policía denuncia que los delincuentes se ocultan en la población civil y los civiles víctimas y comunidad en general piden protección, “*Por aquí sólo hemos visto pasar violencia*” (Entrevista local, Grupo de Víctimas. 2008), perciben injusticia en el apoyo a través de programas y subsidios monetarios a los desmovilizados a cambio de nada porque no se comprometen con la paz, señalan.

Salud

De acuerdo con la ACR, en Turbo se presenta un cobertura del 94%. El 61% bajo el régimen subsidiado y el 39% bajo el Régimen contributivo. Y cinco afiliados a la ARS. Según diferentes actores del municipio el sistema de salud ha funcionado relativamente bien, con las mismas problemáticas que se presentan para el resto de la población civil (tabla 22).

Tabla 22
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en el municipio de Turbo

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Subsidiado ARS	Por fuera o sin registro
Turbo	406	248	127	5	26

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

Educación

La ACR registra que de los 622 participantes del proceso en la subregión, el 23% se encuentra cursando básica primaria, 30% en secundaria y el 1% cursa estudios universitarios. El 48% restante no registra ningún grado de formación académica.

De las 406 personas activas en el programa de reintegración de Turbo, el 52% tienen una formación académica que supera la básica primaria, sólo el 13% de los participantes son graduados como bachilleres, el 87% de los integrantes del programa son considerados

población objetivo para la formación académica, de los cuales se atiende el 77%. A programas de formación para el trabajo asiste el 67% de los excombatientes (tabla 22).

Tabla 23
Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en el municipio de Turbo

Municipios	N. Participantes Activos	Formación Académica			Población objetivo para Formación académica	Población atendida	Formación para el empleo ³⁶
		> 5o	2 ^a .	Superior			
Turbo	406	213	52	6	354	276	276

Fuente: Estadísticas ACR Antioquia en junio de 2008.

Al parecer, una de las razones para que algunos no se vinculen en los programas de formación académica, es que muchos se encuentran por fuera de la edad escolar, lo cual les inhibe para insertarse eficientemente en el sistema educativo; en este caso existen mayores problemas de demanda que de oferta.

Sin embargo se presentan otras dos problemáticas importantes, una en relación con los que participan en los programas de formación, éstos señalan que los programas del SENA son demasiado superficiales y cortos, según lo cual, esto dificulta una verdadera habilitación profesional o para el trabajo,

“[...] primero a través del SENA nos capacitan con unos cursitos de 50-100 horitas que no servían para nada aquí.” (Entrevista local. Persona desmovilizada. 2008).

La segunda obedece a la valoración exclusiva que algunos excombatientes le otorgan a los procesos de formación como la vía de acceso a la bonificación económica, la cual es una condición establecida por la política nacional para acceder al beneficio económico.

Reintegración Económica

En relación con los proyectos productivos, la ACR señala que de los 13 proyectos presentados y desembolsados, 1 corresponde al municipio de Turbo, al cual se financió con recursos de la ACR por \$42.000.000 en el sector de la producción agropecuaria. Al principio de la operación de los proyectos productivos, los recursos fueron entregados para ser ejecutados a través de asociaciones o corporaciones que han surgido en la subregión, posteriormente acusadas de no facilitar la ruptura de cadenas de mando, así como apropiarse de los recursos, ampliar la oportunidad de apropiación de tierras por parte de quienes venían a ocupar el lugar de jefes, o servir para el lavado de activos. En cuanto a empleabilidad, la ACR registra contactos con una empresa para la gestión de empleos sin

³⁶ Población cursando y matriculada en cursos de formación para el trabajo.

ningún resultado. Entre unos y otros señalan los siguientes problemas que evidencian polarización entre los desmovilizados que optaron por la vía de la asociación.

Algunas de las cooperativas de la subregión son, la Cooperativa Solidaria de Urabá quien realiza actividades de capacitación con desmovilizados y los ha vinculado a servicios de vigilancia en los barrios; Construpaz de los desmovilizados del Bloque Élder Cárdenas, quienes configuraron un Sistema administrativo de la bonificación económica provista por la ACR, según señalan, ello les permitió garantizar a 200 participantes un salario de \$700 mil y vivienda, en asocio con la administración municipal de Necoclí. Y los participantes que pertenecían al Bloque Bananero organizaron una empresa asociativa que trabaja con la producción no exportable del banano, empleando a 17 participantes de la zona.

- El gobierno ordenó integrar las asociaciones de participantes para emprender proyectos de producción asociativa y entregó capital semilla individual.
- El Gobierno Nacional prometió financiar proyectos productivos de los cuales algunos se pusieron a marchar, para lo cual los participantes consiguieron tierras e hicieron otros avances, sin embargo el Gobierno detuvo el proceso de otorgamiento de viabilidad a los proyectos y obviamente su financiación.
- Hubo otros problemas imputables a los participantes como pérdidas de dinero, malversación de fondos por algunos líderes, muertes violentas de líderes, todo lo cual contribuyó al fracaso de los proyectos productivos.
- Solamente se ha sostenido una finca en jurisdicción del municipio de Turbo que tiene 142 socios entre desmovilizados y comunidad.

Los desmovilizados puntualizan que hicieron parte activa de la guerra debido a unas condiciones precarias de vida, las cuales prometieron ser resueltas al momento de la desmovilización, ligando el retorno a la vida civil a unas garantías materiales que en la actualidad no han sido materializadas y amenazan con el rearme. En este sentido señalan que quienes están volviendo a la guerra lo hacen porque las oportunidades de tener un trabajo “bien remunerado” son muy pocas, aluden que la subregión no tiene una dinámica económica capaz de absorber el excedente de mano de obra que dejó la desmovilización. La guerra fue una oportunidad de empleo para los combatientes rasos y de enriquecimiento para los jefes o altos mandos, por tal motivo los participantes señalan que la guerra no se acabará mientras pervivan los niveles de pobreza y el narcotráfico como opción de desarrollo económico.

Los desmovilizados perciben la estigmatización de los empresarios. Hay gran recelo en la subregión por parte de los empresarios para emplear desmovilizados, no hay una vinculación con el proceso en el nivel municipal. Muchos desmovilizados que trabajan en las bananeras deben pasar como incógnitos para no ser despedidos. Los empresarios que nos apoyaron para la guerra, ahora no nos quieren apoyar para la paz. Finalmente agregan,

“Nos prometieron desde el programa que íbamos a ser empresarios. Después de 4 años aún no hay acceso a proyectos productivos ni se ve una política clara. El futuro, con relación a este

tema se ve incierto, aunque se mantiene la esperanza de que se cumplan las promesas del Estado en cuento a este tema. Los proyectos que han fracasado por falta de dirección han generado grandes frustraciones.”(Encuentro Subregional DDR. Gobernación de Antioquia, ACR, Conciudadanía.2009).

Reintegración Política

Algunas versiones de locales vinculan la participación de desmovilizados durante el anterior periodo electoral con la campaña del actual Alcalde, éste posteriormente ayudó a la vinculación laboral de los desmovilizados en la actividad de mototaxismo conocida por su papel en la vigilancia y control de todos los movimientos en la zona. Adicionalmente, hubo algunos candidatos a cargos públicos que hacían parte de la población desmovilizada; si bien ninguno de ellos resultó electo, esto da cuenta de un interés explícito de hacer parte de la política local, o mejor de continuar, si se tiene en cuenta la vieja trayectoria del conflicto armado en la política regional.

Si bien los desmovilizados no tuvieron intervenciones exitosas en la política local, es común que en los municipios en el eje bananero los desmovilizados del EPL, señalados de haber sido aliados del paramilitarismo, se desempeñen actualmente como gobernantes con una fuerza política organizada.

En cuanto a la participación comunitaria muchos de ellos se han vinculado activamente en espacios y organizaciones locales como las Juntas de Acción Comunal. Una evidencia importante de su nivel de organización y participación, es que en los espacios de deliberación subregionales y departamental, un núcleo importante de desmovilizados, mantienen una participación regular, especialmente ex integrantes del Bloque Bananeros.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención Sicosocial

En el municipio de Turbo se presentan dos matices acerca del concepto de reintegración; el primero hace referencia a un proceso de reincorporación en el que los excombatientes deben estar completamente vinculados a la sociedad y tienen resuelta su situación laboral y en consecuencia han minimizado sus riesgos de reincidencia. El segundo se refiere al hecho de que la reintegración es un hecho ya dado debido a que los excombatientes se encuentran en el lado de la sociedad civil y de la legalidad, tienen las mismas oportunidades que cualquier persona de los sectores sociales populares del municipio, quienes se emplean por medio de labores informales e ingresos eventuales y bajos.

De los 406 participantes activos 374 asistieron en el mes de junio de 2008 al menos una vez a actividades de atención psicosocial. Lo que significa que la cobertura de éste

programa fue del 92%. Según señalan los participantes del municipio de Turbo las actividades de acompañamiento psicosocial funcionan generalmente muy bien. En sus palabras referencian que éste ha cumplido la función de deconstrucción de las estructuras de mando que se mantuvieron entre los grupos de desmovilizados y los participantes se relacionan cada vez menos con sus antiguos mandos y más con el psicólogo encargado. En sentido opuesto, el profesional de apoyo psicosocial refiere que aún se notan relaciones de mando y uso de la intimidación. Normalmente se molestan con la obligatoriedad de asistencia a los talleres para el pago del subsidio; principal instrumento a través del cual la ACR hace seguimiento a los desmovilizados activos, sin que este sea suficiente, pues algunos reconocen como opera la doble participación en el programa y en actividades ilegales.

Algunos participantes señalan que la atención psicosocial es incapaz de contener totalmente a los participantes dentro del programa, ya que existen decisiones de deserción determinadas por la competencia entre los ingresos legales y las ofertas ilegales que son difícilmente superables por el Programa de Reintegración, en lo que los participantes señalan la necesidad de atender asuntos como la generación de ingresos.

La reintegración social tiene una doble característica: por un lado, existe una abierta aceptación por una parte considerable de las comunidades de origen, debido a que conciben a los participantes, no como excombatientes, sino esencialmente como hijos, hermanos, amigos de infancia, vecinos, etc. Pero al mismo tiempo de manera colectiva se mantiene un grado alto de estigmatización y desconfianza en los desmovilizados, al punto que cualquier actividad delincinencial es adjudicada socialmente a los desmovilizados, señalan éstos por su parte.

Los espacios para la deliberación sobre el proceso DDR son muy pocos, y los que existen se han generado principalmente en el nivel departamental y subregional pero no en los niveles municipales. En Urabá existió un espacio de deliberación que fue la Comisión Interinstitucional que actuó hasta principios de 2008, pero la ausencia de la ACR, según los actores, provocó su suspensión. Otro espacio ha sido el propiciado por la Comisión Subregional de Seguimiento al DDR, operada por Conciudadanía con muy poco reconocimiento e impacto en el nivel local.

El papel de los diversos Actores locales

Hasta finales del 2008, la política de reintegración se aplicaba sobre los desmovilizados exclusivamente. Durante el 2009 se dio inicio a al proyecto de reintegración con la comunidad, cuyo alcances es tímido en relación con las transformaciones culturales y del tiempo de ejecución estimado es de un año, en el que el proyecto procura la formación ciudadana de un grupo mixto de personas (desmovilizados, comunidad, víctimas, jóvenes, etc.), y la puesta en marcha de una obra decidida entre los participantes del proceso, y la realización de acciones simbólicas de encuentro. Por su parte, las posiciones de la comunidad se dividen entre exigencias de no repetición de los actos violentos y garantía de cumplimiento a los acuerdos de desmovilización y desarme, por un lado; y la justificación

del rearme a partir de las razones que públicamente son esgrimidas por los desmovilizados para participar en actividades ilegales.

La organización de víctimas, lidia con la falta de voluntad tanto en la nación como en el departamento y en lo local para la restitución de las tierras expropiadas, a riesgo de amenazas, un grupo bastante numeroso, exige garantías de no repetición en medio del conflicto armado que se ha desatado en la subregión entorno al narcotráfico, exige la verdad de sus victimarios como requisito impuesto por la Ley de Justicia y Paz para la restitución de sus tierras como ruta jurídica más expedita. A pesar de ello, en su versión libre, el empresario y desmovilizado Jefe paramilitar Raúl Hasbún, que operó como enlace entre los bananeros y las AUC, no reconoció la expropiación de las tierras de las 152 familias que son acompañados por la CNRR y la ONG Conciudadanía, para la restitución de sus tierras. Los desmovilizados agregan,

“Se esperaba un proceso en el marco de una ley diseñada para él (Justicia y Paz) que fue quebrantado con la extradición de los jefes que desmovilizaron sus bloques como Jorge 40, a un país que no vivió la guerra. Esto es un riesgo para la verdad y la reparación, ya que muchos abusos en el proyecto contrainsurgente de las AUC van a quedarse sin ser confesados, generando cadenas de odio que se transmiten a las nuevas generaciones” (Encuentro Subregional DDR. Gobernación de Antioquia, ACR, Conciudadanía. 2009).

En relación con el sector privado, existe la percepción de que sobre todo el sector vinculado a la economía rural, como productores de banano, ganado, otros agrícolas, han estado muy vinculados a la generación de la violencia y apoyaron financieramente en los últimos años a los grupos paramilitares. En este sentido los participantes afirman que el sector privado no ha sido un sector interesado en la construcción de paz, por lo tanto no ha materializado ningún tipo de apoyo al proceso de desmovilización y reinserción.

Los actores locales consideran que en el municipio de Turbo y en general en el Urabá no se ha configurado una acción sistemática y decidida de las Administraciones locales para viabilizar la reintegración, asunto que depende fundamentalmente del interés, voluntad política y de la disponibilidad de recursos. Aparentemente, los municipios más comprometidos son Necoclí y Apartadó. Los funcionarios no tienen claro el alcance del proceso DDR, no existe relación con la ARC y no disponen de recursos.

El Alcalde municipal de Turbo considera que el programa se encuentra excesivamente centralizado y sus políticas DDR fracasaron frente a la evidencia del rearme, de los proyectos productivos y el aumento de la violencia a la que el ente municipal tiene que enfrentar, aún sin capacidad financiera. La mayoría de actores locales se encuentran en las críticas al Gobierno Nacional debido a la mala gestión del proceso, ya que como señalan:

“... no se comprometió seriamente a la sociedad con el DDR, realizando un trabajo profundo de sensibilización para que la población desmovilizada fuera aceptada y recibida; tampoco

sensibilizó y sumó al proceso de paz a los empresarios y diferentes instituciones del Estado local y departamental. No entendió que los excombatientes tenían en el grupo armado un empleo remunerado que les garantizaba los ingresos para ellos y sus familias y que la garantía de su reincorporación radicaba en gran parte en la obtención de condiciones de autosuficiencia económica” (Entrevista líderes locales. 2008).

Hoy la búsqueda de la autosuficiencia económica se relaciona con la mala gestión de los proyectos productivos y la prohibición de que se desempeñaran legalmente en cargos relacionados con la seguridad privada; según señalan los participantes, el Estado nacional

“no ha sido capaz de gestionar bien ni la ayuda humanitaria que consiste en expedir un cheque mensual bien consignado”. (Entrevista local. Persona desmovilizada.2008)

Además, ha sido indiferente a la garantía de la seguridad de los participantes amenazados por grupos criminales y el narcotráfico.

6.2 Observaciones subregionales

Los diversos actores subregionales postulan dos tipos de análisis en relación con el proceso DDR. La primera de ella tiene que ver con la atención del problema emergente del alto número de personas desmovilizadas que vienen a configurarse como un grupo poblacional con NBI que piden ser incluidas en programas de generación de oportunidades. Y la segunda tiene que ver con las estrategias de implementación de los acuerdos DDR para la desmovilización, tal vez la más importante por cuanto es más determinante en la desestructuración del poder armado en el territorio.

Los acuerdos de paz y las operaciones de desarme y desmovilización de las AUC se fundamentaron exclusivamente en la naturaleza contrainsurgente que el actor armado mostró sobre todo en el departamento y el país, sin consideración de otros intereses diferentes que lo caracterizaron en el territorio y en torno a los cuales consolidó su hegemonía territorial. El astillamiento de las ACCU entorno al narcotráfico puso en evidencia el surgimiento de otras alianzas e intereses que dieron sentido e identidad a la acción del actor armado en los diferentes territorios del país; generalmente de índole económico, pero que en el nivel departamental y nacional continuaron expresándose en el lenguaje de la contrainsurgencia.

En la subregión de Urabá, tales intereses configuraron conflictos que si bien se sitúan en el ámbito local, los actores que participan de las alianzas e intereses, lo exceden con mucho. Más bien denota la consolidación de autoritarismos subnacionales que se valen de articulaciones con agentes regionales y nacionales por fuera del territorio como soporte del dicho poder. En este sentido, al momento de los acuerdos de paz con las AUC, el paramilitarismo en el Urabá no es sólo la ejecución de la acción violenta por parte de un ejército contrainsurgente que obstaculiza la actividad productiva y el desarrollo económico de la subregión, si no el proyecto económico y político de una élite regional, que se valió de la estrategia armada para la consolidación y expansión de su modelo político y económico, fundamentando su poder en la monopolización de los medios de producción y la economía; de la política subnacional por la vía de truncar otras alternativas políticas, y la monopolización de los vínculos institucionales supralocales.

La recomposición política de los 90's en el Urabá a partir de la legalización del partido político EPL y la participación del sindicato de bananeros SINTRINAGRO, logró un cambio de lealtades en el orden político y económico a favor de una élite económica regional, que implicó la eliminación de fuerzas políticas de oposición en la región, al servicio de lo cual se encontraron las nuevas organizaciones que controlan la violencia – ACCU- con el auspicio de las Fuerzas militares (Romero, 2003).

Los actores alineados en torno a las nuevas alianzas implicaron a fuerzas del narcotráfico, políticos del partido liberal y empresarios ganaderos y bananeros.

Esta subregión, para la cual se ha trazados grandes proyectos, como el de comunicación interoceánica, generación de energía eléctrica y oleoductos; producción de aceite y

biocombustible de palma africana, ha venido a ocupar un relevante lugar en la economía nacional. De manera que, además del alto índice de violación de derechos humanos por la recuperación de la zona geoestratégica del Urabá de manos de las guerrillas, el paramilitarismo en la subregión también implicó la expropiación de tierras a campesinos, como el inicio de lo que sería el desarrollo de grandes proyectos económicos, por medio de la intimidación, el desplazamiento, la compra ficticia, entre otras formas ilegales.

Tal y como aconteció la desmovilización de las AUC y dados los discursos que en general rodearon la negociación, sólo se desmovilizó su naturaleza contrainsurgente, sin incidencia sobre los sectores políticos, económicos e institucionales del Estado que configuraron el fenómeno paramilitar tal como lo conoció el Urabá. En este sentido, con los acuerdos de paz y la desmovilización no desarticuló o cuando menos desplazan los intereses a los que se ata el paramilitarismo en la subregión.

El supuesto de que la desmovilización del actor armado por sí misma rompe las dinámicas que lo ataban al territorio; si bien en ello es lo deseable, se encuentra en extremo determinado por la capacidad de desarticulación o desplazamiento de sus intereses y objetivos locales, para lo cual no basta la desmovilización de los combatientes; sino entre otras, la introducción estratégicamente planeada de elementos que debiliten su hegemonía por la vía del fortalecimiento de sus antagonistas económicos, políticos y cívicos; es decir, de la democratización del poder en aquellas arenas donde el actor armado fundamentó su hegemonía.

Para el caso, aún es observable la capacidad de dicha élite política y económica para controlar los recursos económicos de la subregión a partir de la monopolización de la política local, las relaciones con agentes externos, el sostenimiento de las lealtades de locales y agentes externos como soporte de su poder. Sin embargo con la desmovilización de las AUC, se desatan nuevas competencias y oportunidades en diferentes escenarios y entre diferentes actores, que bien abren posibilidades a nuevos ciclos de la violencia armada comúnmente explicada a partir de lo que se ha llamado “lucha por el control de territorios” por parte del narcotráfico, tal como en otros momentos la violencia paramilitar fue explicada básicamente como acciones violentas en contra de la guerrilla.

El primero y tal vez más obvio, tiene que ver con la capacidad de dicha élite regional para sostener las lealtades de actores directamente responsabilizados por el paramilitarismo en la subregión y sus vínculos con el narcotráfico y otros delitos como la expropiación de tierras origen de muchos de los proyectos económicos más rentables de la subregión, que involucra no sólo actores locales, sino que pone en riesgo el sistema de interacciones, actores y alianzas sobre el cual se sostiene el proyecto económico y político regional de hoy, y buena parte de la política antioqueña y del país como ha sido señalado por Claudia López (2008).

El segundo, situado en el ámbito subregional y departamental, tiene que ver con la extracción del máximo beneficio del contexto que abre aparentes oportunidades para compartir los recursos captados por el paramilitarismo en la subregión. Actualmente actores locales de las desmovilizadas AUC y otros agentes oportunistas se encuentran interesados en medir fuerzas en la participación de proyectos económicos estratégicos de la

subregión con otros agentes civiles locales, echando mano del recurso armado que señaló el proyecto paramilitar de los 90's.

Actualmente, comunidades habitantes de zonas forestales del medio Atrato han denunciado atropellos de empresarios madereros y palmicultores que los han declarado objeto de presiones militares por parte del actor armado que hoy respalda la expansión del proyecto económico y político vivido por el Urabá durante la década de los 90's y ejecutado entonces por el paramilitarismo contrainsurgente. Desde la declaratoria de la Zona de Reserva Forestal en el medio Atrato a finales de los 80's, que dio a las comunidades nativas la garantía de participar de licencias ambientales para la explotación del bosque nativo, se originaron problemas entre Empresas madereras (Maderas del Darién, Chapas de Colombia) y las asociaciones campesinas locales por la explotación del recurso y la ampliación de zonas de frontera para el cultivo de palma africana.

En el mismo sentido se expresan las Comunidades nativas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, Bajirá y Rio sucio, quienes denuncian la extensión latifundista del Urabá con los proyectos de palma africana³⁷ sobre su territorio a través del desplazamiento de la población, violación de derechos humanos y la afectación de titulaciones colectivas de comunidades negras y afrocolombianos, por parte de seis empresas palmicultoras entre las que destacan a URAPALMA (Mingorance, 2004), apoyadas de ejércitos ilegales, pero además otros actores locales como administraciones municipales, al respecto se señala la acción preventiva que debió asumir el municipio de Mutatá por medio del mecanismo de protección de tierras. El actor armado ilegal no sólo tiene el carácter de ejército armado ilegal protector de la Industria, sino además de empresario. En esta ocasión SINTRAINAGRO, amenaza con paros cívicos por el cierre de las fincas bananeras y el despido de obreros; denuncia la sustitución del banano por la palma y la abrumadora disminución de mano de obra³⁸.

Actores individuales y colectivos pertenecientes a las estructuras armadas de las AUC, continúan operando ejércitos armados como principal estrategia para hacerse lugar dentro del proyecto económico de la subregión, a veces en competencia con los intereses de la élite política y económica que a través suyo consolidó su poder en la subregión. La expresión de dicha competencia se evidencia en la disposición de recursos y alianzas para surgir como nuevos empresarios dentro de lo que podría llamarse la "élite primigenia"; sobre todo soportados en la estrategia armada que operara entonces.

Sin embargo, el "nuevo empresario", con poca capacidad de incidencia política y/o económica, poca disposición de alianzas y recursos que blinde su acción, generalmente tendrá que hacerse a la sombra del prestigio de la élite y mantener las lealtades. Lo contrario obligará que el selecto grupo proteja su patrimonio y prestigio; en último término su proyecto político y económico. Así, tras las denuncias del actor opositor al proyecto

³⁷ Para el año 2001, se movilizaron 7.439.469.000 USD en el comercio mundial de los aceites de palma (FAO; citado por Mingorance, 2004) .

³⁸ El cultivo de 1000 ha. de banano requiere 2000 empleos, mientras la misma proporción de cultivos de palma genera sólo 100 empleos (SINTRAINAGRO, 2007).

palmicultor expansionista y la afectación internacional de los Empresarios, éstos emitieron un comunicado público en los siguientes términos,

“Detrás de estos proyectos productivos en palma de aceite estarían intereses paramilitares por adueñarse de las tierras de propiedad de los Consejos Comunitarios de esas comunidades. Sobre el particular, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asumió el conocimiento de estos hechos y entró a resolver la titularidad de los predios en mención, encontrando que hay 3.406 hectáreas sembradas en palma, pertenecientes a las comunidades que habitan el territorio colectivo, las cuales deben ser devueltas a sus legítimos titulares. [...] Fedepalma ha lamentado muchísimo lo sucedido en el Urabá Chocoano donde actores externos a nuestra actividad han tratado de incursionar con prácticas y manejos repudiables. [...] No obstante lo anterior, no podemos aceptar que esa situación pueda estigmatizar toda una actividad económica productiva donde participan un sin número de actores, grandes, medianos y pequeños. Aún más, lo que esa gente logró sembrar en el Urabá Chocoano no representa más del 1% del total del área nacional”.

Finalmente, la desmovilización generó astillamiento entre facciones armadas del paramilitarismo en la subregión por el control de las actividades de economías ilegales, y de los internos con estructuras armadas externas. Lo cual implicó la captura de recursos menores como la vacuna de vigilancia y otras prácticas extorsivas que constituían el pago de impuestos en cada municipio de la subregión y la configuración de bandas delincuenciales en los barrios de los municipios grandes como Apartadó y Turbo, que después fueron cooptadas o eliminadas por las facciones en competencia por el narcotráfico. Las actividades del narcotráfico en la subregión se relacionan con el cargue y descargue de mercancía –drogra y armas- en el Puerto, lo cual genera alta demanda de mano de obra, en diferentes actividades de vigilancia, cuidado de rutas, etc. En límites con Córdoba ha implicado confrontaciones armadas con estructuras armadas por el control de zonas de cultivos.

De esta manera lo que podría interpretarse como el astillamiento de poder paramilitar en facciones armadas y objetivos estratégicos sobre los que actores locales y externos se lanzan a competir, termina siendo catalizado por el narcotráfico en el que se encuentra inmersos nuevos y viejos actores de la élite regional que 20 años atrás concentró el poder regional, que desmovilizó su objetivo contrainsurgente, pero pervive a través de un viejo aliado - el narcotráfico-; y en tal sentido su identidad se configurará exclusivamente narcotraficante.

Por su parte el movimiento de víctimas ha logrado visibilizarse y protegerse de los mecanismos que ha utilizado el narcotráfico para condensar los conflictos subregionales que encontraron en la desmovilización de las AUC una oportunidad de presionar por sus intereses, a pesar de las escasas oportunidades que de conjunto abre el marco jurídico creado para la transición y la garantía de los derechos de las víctimas. De conjunto, ello pone en un alto riesgo de seguridad de las víctimas y defensores de derechos humanos,

situándolos nuevamente en el centro de la confrontación que desde los 90's vive la subregión. Las organizaciones que han logrado una mayor incidencia no utilizan rutas de interlocución con agentes locales, interactúan con organizaciones y actores políticos externos a la subregión, dado el grado de monopolización del poder.

En este contexto las políticas de reintegración tienden a perfilarse exclusivamente como programas de atención a poblaciones vulnerables, el alcance que de ellas se espera para la contención de nuevos ciclos de violencia son rebasados por la dinámica política de la subregión. La desmovilización de los paramilitares de ambos bloques Bananero y Elmer Cárdenas, pudo evidenciar oportunidades para su participación como actores políticos en la reconfiguración del poder regional, sin embargo, la mayoría de ellos han sido aglutinados en torno a la identidad del combatiente, presos del discurso del que se han valido su propia trayectoria narcotraficante para rearmar ejércitos. Ello le resta visibilidad y oportunidades a iniciativas genuinas que demandan políticas de atención individual y colectiva a los desmovilizados para su bienestar.

Su aplicación en sentido estricto como programas dirigidos a población vulnerable no ofrece ninguna oportunidad para que la comunidad y quienes realmente se entienden a sí mismos como excombatientes, logren incidir en la configuración del poder regional diferente. A pesar de que se mantiene la alta concentración de desmovilizados éstos no discuten el interés común y continúan situados en la lógica militar de la cadena de mando. El discurso político que los desmovilizados ponen en los espacios que se abren para la discusión subregional se encuentra cargado de lugares comunes que ha creado el narcotráfico utilizando las falencias del programa de reintegración como sofisma de distracción en medio del rearme de estructuras al servicio del narcotráfico, lo cual invisibiliza las demandas realmente articuladas al desmonte paramilitar en la subregión y la reintegración de los excombatientes.

Así pues, evaluado en justa proporción, los proyectos productivos sobre los que recaían las expectativas de la mayoría de los desmovilizados no han sido exitosos y por el contrario fueron objeto de la distribución de recursos por la que aún compiten algunos mandos medios en la subregión. En muy pocas oportunidades el sector privado de la subregión se encuentra interesado en generar oportunidades para la reintegración, para unos y otros, estos constituyen ejércitos de reserva. La formación para el empleo no encuentra mucha demanda de la oferta que se genera con los programas. Por lo tanto, estudiar con la proyección de partir o de diseñar pequeños proyectos para la subsistencia y recibir los subsidios económicos para manutención es la ruta más viable para quienes realmente quieren salir de la guerra.

El papel de los gobiernos locales es irrelevante, frente al excesivo centralismo administrativo, programático, financiero y evaluativo de la política, lo cual es comprensible por las presiones que recaen sobre el Gobierno Nacional de generar indicadores de resultados aceptables sobre los acuerdos de paz con las AUC y su lucha contra el narcotráfico.

7. REINTEGRACIÓN EN EL OCCIDENTE: El Caso de los municipios de Santafé de Antioquia y Sopetrán

El occidente cercano ha estado integrado a la zona nuclear de Antioquia desde la colonia, sin embargo durante el periodo de la violencia se dio un reordenamiento del territorio; especialmente el occidente lejano aún no vinculado a la dinámica central de Antioquia, que trazaría los caminos de hoy. Al parecer las guerrillas que se conformaron en el occidente tras la violencia bipartidista, a menudo colaboraron entre sí trazando sobre los caminos de hoy focos de violencia y de abigeato, articulando una zona de orden público coherente, sobre la que posteriormente surgiría la Carretera al mar y un circuito de intercambio entre y movimiento de personas, productos, armas y fuerzas oficiales, entre el Urabá y hasta Cañasgordas de regreso.

En los años en que estalla la violencia Gaitanista, el occidente era catalogada como una región de potencialidades en recursos; especialmente por el oro y algunas explotaciones de madera fina, sin embargo su dinámica comercial no era relevante dentro del conjunto de Antioquia y si bien el departamento se disputó el control del Urabá, esta región del noroccidente de Antioquia sólo sería integrada hasta bien entrada la década de los 50's. No obstante, fue ruta importante del tráfico de tabaco y otros productos comerciales; en las costas del Urabá florece el contrabando, entre otros productos, de armas que venían desde América Central y Panamá para abastecer los grupos insurgentes a lo largo de la carretera al mar (Roldán, 2002; p. 220).

La violencia en occidente encontró en sus gentes, provenientes de la actual Córdoba, una “combinación de ira partidista, resentimiento profundo contra un gobierno departamental que por décadas había ignorado las necesidades locales y gobernado mediante la imposición” (Roldán, 2002; p. 22) y cuestiones culturales, que hicieron que la Fuerza pública lograra un mayor control del orden público basado en la filiación política y raza compatible con la del lugar donde fuera enviada a mantener el orden público, lo cual motivó que el gobierno departamental conservador de 1950 distribuyera armas entre los grupos de *contrachusmas*, voluntarios y constituidos localmente y sólo las fuerzas policiales aceptables culturalmente.

Durante este periodo acontecieron decisiones de los gobiernos departamental y central que moldearon el rumbo de la violencia. El aprovisionamiento de armas por parte de la guerrilla no fue lo que facilitó su consolidación en los territorios, sino la lejanía e incapacidad del gobierno departamental para ver sus propios territorios y trazar políticas de paz coherentes con las dinámicas propias del conflicto. De acuerdo con Roldan (2002), la evolución del conflicto llegó al punto en el que “cualquiera hubiera sido el origen de las disputas iniciales que desencadenaron la agitación y los disturbios en la región, al final oficial de la Violencia, contener a las guerrillas liberales e imponer la hegemonía partidista no eran ya los principales objetivos de la fuerza pública. El conflicto evolucionó hasta adquirir una dinámica propia caracterizada por la necesidad de que la violencia prosperara para extraer ganancias personales. Las causas de la continuidad de la violencia en la región no fueron

inicialmente instigadas por las guerrillas liberales, sino por las desconfianzas entre el gobierno conservador y sus propias fuerzas armadas, y la falta de consenso entre el gobierno central y departamental y el partido Conservador en el departamento.

Desde entonces la mayor presencia de la guerrilla de las FARC ha existido en los municipios de Dabeiba, Frontino, Ituango y Urrao en las subregiones vecinas, como corredor que se extiende desde el chocó pasando por el suroeste hacia Urabá y el bajo medio Atrato. Los municipios cercanos al Urabá fueron lugares de asiento de las FARC desde donde conformaba una red de corredores entre Urabá y Córdoba a través del Nudo del Paramillo y con el departamento del Chocó a través del río Murri, de manera que el occidente operó más como zona de refugio de las FARC; especialmente durante los años duros de los 90's confrontación armada con las AUC en el Urabá y Córdoba.

La acción de la guerrilla en el occidente estuvo dirigida hacia los bloqueos de las vías, y otras acciones propiciadas por el frente 35 de las FARC que incursionaba desde el Bajo Cauca hacia Córdoba, pasando por Peque y dos disidencias del EPL, y otras milicias que no se desmovilizaron durante las negociaciones de paz propuestas por el Presidente Betancur (Observatorio DD.HH, 2006). El frente 34 de las FARC logra una mayor actuación en el occidente, también allí tienen asiento los frentes cinco en la zona Mutatá, Dabeiba, Córdoba; Frente 18, 57 y 58 con mayor radio de acción hacia Ituango, Nudo del Paramillo, Bajo Cauca, Norte y Nordeste.

El paramilitarismo que inicia como contrainsurgencia en el Urabá, se extiende hacia los municipios del occidente sur: Dabeiba, Frontino, Uramita, Cañas Gordas, Peque, Sabanalarga, Buriticá, Giraldo y Abriaquí, logrando una retoma del territorio y la expansión de control territorial y de las actividades del narcotráfico sobre el corredor Urabá y el suroccidente, a través de la compra de tierra y la expansión de la zona de cultivos ilícitos. Las compras de tierras de narcotraficantes; con importante influencia de los Ochoa, se incrementaron en municipios como Heliconia y Ebéjico. El tipo de acciones que caracterizó el paramilitarismo en esta porción del territorio estuvo marcado por la alta intensidad y acciones. Por su parte, la avanzada de las AUC provenientes del Norte se extiende hacia los municipios del anillo turístico y demás cercanos a Medellín: San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Sopetrán, Olaya y Liborina.

Posteriormente, en 1997 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unirían para integrar las AUC – Autodefensas Unidas de Colombia-, con una estructura armada en la subregión del occidente antioqueño cuyo principal aliado sería un ex guerrillero del EPL, Conrado Pérez y abarcaría los municipios de Uramita, Giraldo, Cañasgordas, Frontino, Abriaquí y luego se extendería hacia Urrao en el suroeste antioqueño. Su principal eje de acción sería la apropiación del corredor Frontino, Nutibara, Murri, Urrao, Chocó, Panamá. La altísima intensidad de la violencia que vivirían los municipios vecinos y los corregimientos de Frontino durante 1996 – 1997, se correspondería con la violencia llevada a cabo por la expansión de las AUC desde Urabá hacia Ituango por la apropiación del corredor del alto Sinú, y el alto San Jorge hacia el departamento de Córdoba.

El pacto narcotráfico – Autodefensas a través del cual los segundos proveyeron ejércitos y protección a los primeros para neutralizar la competencia con la guerrilla de las FARC por el control del narcotráfico, da origen al paramilitarismo narcotraficante en la subregión. Al caso hacia 1998 “Don Berna” y miembros del Cartel de Envigado habían adquirido tierras para lo cual recurrieron a grupos armados (Observatorio DD.HH, 2006).

El 11 de septiembre, en acto realizado en la vereda El Rodeo del municipio de Sopetrán, se produjo la segunda desmovilización de 222 integrantes del bloque Noroccidental, bajo el mando de un ex guerrillero de las Farc, llamado Luis Arnulfo Tuberquia, alias *Alberto Memín*. Actualmente, en el occidente se encuentran 308 desmovilizados adscritos al programa de reintegración, 287 de ellos de desmovilizaciones colectivas de las AUC. Del total seis se encuentran detenidos, 10 inactivos y 34 han muerto. De 287 desmovilizados colectivos. El total de detenidos y fallecidos pertenecieron a las AUC, sólo cuatro de los inactivos corresponden a desmovilizaciones individuales.

7.1 Municipio de Santafé de Antioquia

Caracterización de la población desmovilizada

De acuerdo con la Alta Consejería para la Reintegración, el municipio de Santa Fe de Antioquia cuenta con un total de 48 hombres desmovilizados colectivos de las AUC, de los cuales 40 se encuentran activos, 1 detenido, 3 fallecidos y cuatro inactivos. Del total, 12 se encuentran entre los 18 y 25 años, 33 entre los 26 y los 40 años y tres tienen más de 40 años. Todos realizaron el proceso de cedulación, 25 cuentan con libreta militar y 41 tienen Certificado del pasado judicial. En relación con el grado de escolaridad, de los 45, 15 tienen grado de escolaridad primaria, 11 de secundaria y de 22 no se tiene información.

La población que se encuentra por fuera del programa representa el 16% del total de la población municipal por reintegrar, todos desmovilizados de las AUC, de los que 4 no han regresado al programa, tres fallecieron y 12 se encuentran detenidos. De estos, dos se encuentran entre 18 y 25 años de edad, cinco entre los 26 y 40 años y uno es mayor de 40 años. Los ocho cuentan con cédula de ciudadanía y certificado de pasado judicial, cinco tienen libreta militar. No se tiene información del nivel de escolaridad de la población inactiva. En relación a la salud, tres de ellos están adscritos al régimen contributivo, uno al subsidiado y de cuatro no se tiene información.

Por su parte, la población activa en el programa de reintegración es el 82%. Esto es igual a 40 hombres ex integrantes de las AUC, desmovilizados colectivos. De éstos, 10 se encuentran entre los 18 y 25 años de edad, 28 entre 26 y 40 años y 21 son mayores de 40 años. Sobre el nivel de escolaridad se encuentra que de 14 no se tiene información al respecto, 15 tienen primaria y 11 secundaria. Los 40 poseen cédula de ciudadanía, de ellos 20 tienen libreta militar y 36 certificado de pasado judicial. En salud, de tres no se tiene información y 37 excombatientes están carnetizados: 19 en régimen subsidiado, 17 en el contributivo y uno en subsidiado ARS.

Servicios Sustitutivos

Seguridad Física y Rearme

Según señala un funcionario público, en el municipio de Santafé de Antioquia y en general en el occidente antioqueño, el clima frente al proceso de reinserción es favorable, y por ende no hay afectación de los participantes al respecto; en su concepto, no se han presentado homicidios, desapariciones, persecuciones o amenazas a la seguridad de los desmovilizados. En el mismo sentido se expresan los jóvenes desmovilizados entrevistados. A pesar de los homicidios manifiestan satisfacción por la seguridad que les presta la policía y miembros del ejército, consideran que han sido tenidos en cuenta, son escuchados y acompañados en sus actividades por parte del policía comunitario; en ningún momento se

han sentido intimidados por parte de la fuerza pública, ni estigmatizados por parte de la comunidad. Con todo, el homicidio de los compañeros desmovilizados es atribuido a su participación en bandas delincuenciales articuladas al narcotráfico.

Una amenaza latente que recae no sólo sobre los excombatientes, sino también sobre la comunidad y en especial de las víctimas, es la presencia de actores armados vinculados con algunas actividades delincuenciales y del narcotráfico que pueden amenazar a desmovilizados y víctimas que hoy hacen parte de los proyectos conjuntos. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, condenó a través de tres sentencias a Luis Arnulfo Tuberquia, ‘Memín’, Jefe desmovilizado de las Autodefensas Bloque Noroccidental; vinculado a investigaciones por narcotráfico, a 42 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en el homicidio de cinco personas en el año 2007 (Observatorio UNAL, 2010).

A pesar de presencia de laboratorios de narcotráfico en la zona, localmente señalan que el mayor riesgo para “la estabilidad del orden” es una posible incursión guerrillera en el municipio, esto podría generar nuevamente violencia y amenaza para la población. Tal riesgo se fundamenta en la presencia histórica de guerrilla en la subregión que fue desplazada por las AUC, generando temor de incursiones guerrilleras tras la desmovilización, con muy pocos fundamentos reales.

Salud

En el tema de carnetización para salud el 93 % de los participantes ha sido afiliado. Un buen número de ellos, (17) en el régimen contributivo y 19 al subsidiado. En términos generales hacen una buena evaluación de los servicios, contadas excepciones de quienes han presentado un tipo de enfermedad que no cubre el POS, caso en el cual, se ponen en evidencia las fallas del servicio de salud que en general acontecen para todos los ciudadanos (tabla 23).

Tabla 24
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en el municipio de Santa Fe de Antioquia

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro	Subsidiado ARS
Santafé de Antioquia	40	19	17	3	1

Fuente: Datos ACR Antioquia en Junio de 2008.

Educación

Del total de desmovilizados 29,3% tiene básica primaria terminada, El 10% terminó educación secundaria, el 89,6% son población objeto – 36 desmovilizados-. De la población objeto para educación académica, 19 han estado matriculados en procesos de formación académica, pero solo 2 han asistido; estas dos cifras –a pesar de poderse considerar problemáticas- le permiten plantear a la ACR que el 58% de la población objetivo fue atendida en el tema de educación. El 36,2% se encuentra en el ciclo de educación formal y el 51,7% se encuentra en formación para el trabajo (tabla 24).

Los desmovilizados señalan que actualmente algunos están validando el bachillerato, y otros estudiando con el SENA, además precisan que la participación escolarizada les ha generado satisfacción.

Tabla 25
Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en el municipio de Santa Fe de Antioquia

Municipios	Nº Participantes Activos	Población con Formación académica		Población objetivo para educación académica	Población atendida de la población objetivo	Formación para el empleo
		> 5o	2ª.			
Santafé de Antioquia	40	12	4	26	21	16

Fuente: estadísticas ACR Antioquia en junio de 2008.

Reintegración Económica

A junio de 2008 la ACR no registra ningún proyecto productivo que este postulado o en ejecución para el municipio de Santafé de Antioquia. La economía municipal gira prioritariamente entorno al turismo y la hotelería, las fuentes de empleo se relacionan con el sector y tienden a ser inestables, o con sector público. La ACR no ha contactado a ninguna empresa local, ni ha gestionado ni vinculados empleos concretos para los participantes. A pesar de lo cual un buen número de excombatientes de Santa fe de Antioquia se han vinculado a actividades económicas que les genera algún nivel de autosuficiencia económica; lo que les permite no depender exclusivamente de la ayuda humanitaria que les da el gobierno. Muchos de ellos aún desempeñan labores de vigilancia a los establecimientos comerciales, las fincas de recreo y el mototaxismo, actividades que previo a la desmovilización les permitía adelantar acciones de control, seguridad y denuncia.

Los diferentes actores locales reconocen la reintegración económica como un factor determinante del éxito del proceso, a pesar de lo cual en lo local no se han generado estrategias entorno a ello. Los desmovilizados tratan de señalar las responsabilidades morales y materiales de las élites económicas que aprovecharon los servicios del ejército paramilitar. Por otro lado, el Alcalde actual, reconocido por sus iniciativas para la

población desmovilizada, no ha materializado ninguna de ellas durante lo que lleva de gestión. La población desmovilizada recalca la importancia de un empleo estable, señalando los proyectos productivos como un engaño que motivó la desmovilización. La experiencia con los proyectos productivos ha sido desalentadora, dados la falta de información clara a la que son sometidos, de un lado por la ACR y de otro por los intermediarios que eligen, el último de sus líderes capturado por vínculos con bandas criminales.

La combinación de las actividades laborales con las actividades académicas para poder mantener los beneficios que les da el programa de reintegración, les resulta complicado en términos de la utilización del tiempo.

Reintegración Política

Tal como señalan los funcionarios públicos entrevistados y los mismos excombatientes, la participación política de estos últimos se limitó a ejercer el derecho al voto, no se evidencia otro tipo de participación político electoral. Por el contrario otros afirman que los desmovilizados participaron apoyando visiblemente al candidato electo.

Durante campaña electoral, llamó la atención la movilización de altos recursos económicos inusuales dentro de las dinámicas locales de contienda electoral, sugiriendo vínculos con actores locales del narcotráfico a los que, de manera marginal, aún se encuentran vinculados algunos desmovilizados.

Según señala una autoridad local, si bien los desmovilizados han empezado a participar de escenarios públicos de corte comunal esencialmente, no poseen mucha fortaleza política, lo cual se puede evidenciar en la falta de cohesión grupal para la reclamación de sus derechos.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención Psicosocial

La mayoría de actores ubica el asunto de la superación de la violencia como un asunto subjetivo, personal y espiritual, que poco tiene que ver con lo social o político y que por lo tanto no basta con decretarla a través de leyes que no hacen posible que realmente el conflicto se acabe. Estas percepciones se encuentran ancladas en las profundas desconfianzas que permanecen sobre la veracidad del proceso de desmovilización y desarme, de donde temen enfrentar el tema político. La mayoría de víctimas del municipio las generó el paramilitarismo. Estas disponen de pocos recursos y organización para enfrentar la reclamación de sus derechos, la mayoría de ellas han optado por la reparación vía administrativa como un recurso a la pobreza, muchas de ellas manifiestan desesperanza y otras exigen sin reparo a los desmovilizados del municipio les aclaren las circunstancias de su victimización.

Las instituciones locales, como la Personería, no dedica mucho interés al tema. La ACR y Conciudadanía promueven el trabajo local entre “sobrevivientes” y desmovilizados, a través del encuentro entorno a acciones conjuntas y de visibilización de acciones cívicas. Algunos desmovilizados manifiestan incomodidad en los encuentros, dadas las constantes demandas por la verdad de algunas víctimas, frente a lo cual algunos procuran explicar las lógicas militares que no facilitan resolver estas demandas por la información fragmentada que poseen o simplemente porque combatieron fuera de ese municipio, otros aseguran que de ello aún no se puede hablar.

El centro de la atención sicosocial de la ACR gira en torno a talleres de formación ciudadana y superación personal, muy bien evaluada por los desmovilizados, con profundas dificultades para los profesionales del área, dada las bajas posibilidades de hacer clínica y responder más asertivamente a un proceso de interrogación individual. A pesar de ello valoran profundamente los resultados exitosos medidos por la funcionalidad del sujeto en el mundo laboral.

El papel de los diversos Actores locales

El estado local ha sido uno de los sectores de la sociedad que menos conocimiento e incidencia a tenido sobre el proceso de desmovilización. Según señala la comunidad si bien ha garantizado el mantenimiento de asuntos como la seguridad del municipio, en cuanto al proceso de reintegración de los excombatientes no han sido muy evidentes las acciones; la personería municipal por su parte no se ha insertado en el trabajo con el nivel nacional en pro de garantizar el éxito del proceso, en esta dependencia no se tiene ni siquiera información sobre las estrategias locales de la administración para atender a los desmovilizados, o los programas que ésta ha podido desarrollar o incluir en el Plan de Desarrollo. Según el Secretario de Gobierno, la administración municipal está dispuesta a ayudarlos sobre todo en el asunto laboral, sin embargo se señala que las posibilidades son muy pocas, ya que solo pueden brindarles de esta institución empleos temporales u oficios puntuales y de corta durabilidad; hasta este punto de proceso el aporte de la Administración municipal ha brindado se ha materializado básicamente en prestar los espacios para el trabajo pedagógico que hace la Alta Consejería para la Reintegración, pues hasta la fecha no se cuenta en el presupuesto municipal con qué atender otras demandas de este grupo.

Lo más prioritario para el éxito del proceso, según el secretario de Gobierno, “es la presencia activa de las autoridades para que la comunidad confíe y no utilicen otras opciones al margen de la ley para tramitar sus conflictos”; los desmovilizados sin embargo ha hecho requerimiento en otros asuntos de subsistencia y vida digna que consideran fundamentales para su reintegración, por tanto han solicitado a la administración municipal estrategias que provean asuntos como vivienda, ya que la mayoría provienen del campo y dado que no pueden volver a las veredas por el riesgo que corren por la presencia de la guerrilla, deben instalarse en el área urbana y no cuentan con vivienda propia. Según afirman los desmovilizados este tipo de requerimientos ha sido aceptado por la administración local e incluido en el Plan De Desarrollo Municipal, sin que a la fecha se haya dado trámite.

Según la comunidad una de los más importantes requerimientos que se esperan del Estado nacional/local, es la articulación para el cumplimiento de los acuerdos pactados en el proceso, pues el incumplimiento por parte del Estado es una justificación que utilizan los excombatientes para volver a delinquir. Por su parte el funcionario público considera que la responsabilidad del Estado local es sensibilizar al resto de la población sobre la situación de estos jóvenes y generar acercamiento y

“resocializarlos para que se reintegren a la vida civil, pues hasta el momento ni siquiera los conozco a todos”. (Entrevista Gobierno local. 2008).

Otros actores, señalan el sector privado como un actor con enormes responsabilidades en el conflicto, y por ende en el proceso de reintegración;

“la financiación de los grupos armados ilegales y de sus acciones de guerra, ha sido el mayor apoyo que este sector ha brindado”. (Entrevista político local. 2008).

En este sentido, el sector privado debe garantizar no abrirle las puertas o financiar nuevos grupos armados, pero además crear estrategias concretas de apoyo al proceso y a los participantes de éste por medio del ofrecimiento de empleos serios y en el marco de la ley, de lo contrario se corre el riesgo *“de que estos muchachos vuelvan a integrar esos grupos”.* (Entrevista político local. 2008).

7.2 Municipio de Sopetrán

Caracterización de la población desmovilizada

El municipio de Sopetrán, cuenta con un total de 28 hombres participantes del proceso de reintegración, todos de tipo de desmovilización colectiva de las AUC. De los 28, 18 están activos, dos fallecidos, uno detenido y siete inactivos. En cuanto a la edad, nueve están entre los 18 y 25 años, 16 entre los 26 y los 40 años y tres tiene más de 40 años. Todos los participantes del programa tienen cédula de ciudadanía, de los cuales 14 cuentan con libreta militar y 23 tienen Certificado del pasado judicial. Del total de excombatientes, uno tienen grado de escolaridad secundaria y de los otros 27 no se tiene información.

La población desmovilizada que se encuentra por fuera del programa de reintegración asciende al 35% del total de la población radicada en el municipio para llevar a cabo su proceso de reintegración; es decir 10 hombres desmovilizados colectivos de las AUC, de los cuales 1 se encuentra detenido 2 han fallecido y siete no han regresado al programa. En relación a la edad, cuatro tienen entre los 18 y 25 años de edad, cinco entre los 26 y 40 años y 1 es mayor de 40 años. No se tiene información del nivel de escolaridad. Los 10 excombatientes cuentan ocho están adscritos al régimen subsidiado, 1 al contributivo y del otro no se tiene información.

La población activa representa el 64% del total de la población que inició su proceso en este municipio, todos hombres ex integrantes de las AUC. En relación con la edad, 5 están entre los 18 y 25 años, 11 entre 26 y 40 años y 2 son mayores de 40 años. Sobre el nivel de escolaridad se encuentra que de 17 no se tiene información al respecto y 1 tiene secundaria. Los 18 poseen cédula de ciudadanía, 9 de ellos tienen libreta militar y 15 certificado de pasado judicial. En salud, el total de excombatientes activos están carnetizados: 14 en régimen subsidiado y 4 en contributivo.

Servicios Sustitutivos

Seguridad Física y Rearme

En el municipio son relevantes las actividades del narcotráfico relacionadas con el procesamiento de coca en laboratorios, así como algunas rutas estratégicas de conexión del centro con Urabá. En el tema de la seguridad de los excombatientes en el municipio, la percepción de los desmovilizados es de asedio tanto de la Fuerza Pública como de organizaciones criminales. A pesar del alto número de operativos y efectivos militares no han sido lo suficientemente eficiente para resolver asuntos de orden público tanto frente a la delincuencia común, como frente a la seguridad de los participantes. Según señala un grupo de participantes,

“en el tiempo en el que se ha desarrollado el proceso de reintegración han asesinado a varios participantes del proceso, y los

hechos aún no han sido aclarados”. (Entrevista local. Persona desmovilizada. 2008).

Las relaciones con la fuerza pública no han sido del todo cooperativas, no hay confianza mutua entre los desmovilizados y la policía, lo cual consideran un riesgo de seguridad.

Por otro lado, consideran que las acciones de vigilancia de la fuerza pública son excesivas y trascienden a actos de maltrato y estigmatización hacia los desmovilizados. Dicen entender que este tipo de relación,

“tiene parte de justificación en mecanismos de control que el Estado ha venido implementando debido al fenómeno de expansión militar que ha tenido en el departamento la acción narcotraficante y armada de alias Don Mario”. (Entrevista local. Persona desmovilizada. 2008).

Y si bien entienden este tipo de controles, creen que puede poner en riesgo la integridad de los participantes. Por su parte el ente público no manifiesta inquietud por los riesgos a la seguridad de los desmovilizados en el municipio, ni rearme, o surgimiento de grupos emergentes que incite a los desmovilizados a vincularse nuevamente a grupos ilegales. Frente al tema otros actores locales son herméticos.

Salud

En la tabla 24, se observa el número de ex combatientes afiliados o no al sistema de seguridad social

Tabla 26
Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en el municipio de Sopetrán

Municipio	Número de participantes Activos dentro del programa DDR	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Por fuera o sin registro	Subsidiado ARS
Sopetrán	18	14	4		

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

Según la cifras de la ACR la cobertura en afiliación al sistema de salud es del 100%, de los cuales 4 pertenecen al régimen contributivo y 14 al subsidiado. Con respecto a la atención en salud, los excombatientes consideran que no se logra satisfacer los requerimiento básicos, ya que la atención impartida por la empresa a cargo de prestar el servicio a los desmovilizados (Caprecom con el SISBEN) es de baja calidad y poco eficiente, en términos de la disponibilidad de los medicamentos droga, servicios oportunos, realización de exámenes, entre otros asuntos que han hecho que los desmovilizados se vean en la necesidad de acceder a la atención por medios particulares, lo cual no garantiza el acceso, y

pone la materialización del derecho, en manos de la capacidad adquisitiva. Contrariamente aquellos desmovilizados que poseen un empleo estable por medio del cual se garantiza el pago de prestaciones sociales con otros organismos prestadores han obtenido mejores condiciones de atención.

Educación

De los 18 participantes activos, 27,7% (5) tienen estudios de básica primaria, 11,1% (2) son bachilleres y 88,8% (16) son población objetivo para la formación académica, de los cuales solo 1,7% (1) participante estaba matriculado en un proceso de formación académica para junio de 2008, pero ninguno asistió. En formación para el trabajo, 24,1% (12) participantes están estudiando. Las instituciones que los atienden en este componente del programa son el Ciber Colegio, la Universidad Católica del Norte y el SENA (tabla 25).

Tabla 26
Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en el municipio de Santa Fe de Antioquia

Municipios	Nº Participantes Activos	Población con Formación académica		Población objetivo para educación académica	Población atendida de la población objetivo	Formación para el empleo
		> 5o	2ª.			
Sopetrán	18	5	2	16	1	14

Fuente: Datos ACR Antioquia en junio de 2008.

En conclusión, el nivel académico de los desmovilizados es bajo y las perspectivas de formación para el empleo productivo escasas, como se verá en el apartado de reintegración económica. A pesar de lo cual los desmovilizados son enfáticos al afirmar una alta valoración de los beneficios que el programa de educación les provee; especialmente económicos, consideran que ha sido eficiente, flexible de acuerdo a sus necesidades, y productiva para su proceso de reintegración. Sienten que en este sentido tanto ellos como el gobierno han cumplido y tienen mucha motivación para salir adelante.

Reintegración Económica

La economía municipal se fundamenta en el turismo, fincas de recreo y el cultivo de frutas, en torno a ésta última actividad varios desmovilizados gestionaron conjuntamente con los de Santafé el proyecto productivo –ASOPULPAS-, el cual se vio truncado por la captura de su líder. Por su parte, la ACR no ha realizado ningún contacto efectivo para la empleabilidad, que es bastante restringido en la zona. Sumado a la baja formación académica de los participantes, y el requerimiento de ésta para el desembolso de proyectos productivos, muestra las razones del poco avance de este componente en el municipio (Comisión Departamental seguimiento DDR, 2008).

Algunos de ellos se encuentran empleados, este asunto se debe sobre todo a gestiones individuales de los participantes. Paradójicamente algunos de los que participan en las

capacitaciones de emprendimiento, no han logrado concretar el proyecto productivo debido a que poseen otras responsabilidades de tipo laboral que no lo permite, de acuerdo con éstos en labores agrícolas generalmente inestables. En contraste, algunos de los participantes y los funcionarios públicos señalan que una de las mayores razones que han motivado a los individuos a hacer parte directa del conflicto por medio de la toma de las armas es el desempleo, y la falta de oportunidades:

“Generalmente los muchachos jóvenes comenzaron a trabajar en estos grupos por que les ofrece dinero, porque no hay otra forma de empleo”. (Entrevista Gobierno local. 2008).

De acuerdo con los desmovilizados, esto constituye un reto para el Estado nacional y local para el éxito del proceso, de lo contrario la oferta de empleo ilegal siempre estará a disposición de quien la quiera asumir y con unas remuneraciones que no compiten con los empleos legales, sobre todo en zonas como el occidente donde el narcotráfico aun sigue latente. En contraste con las percepciones que ofrecían sobre la seguridad, debe entenderse que el narcotráfico no es una amenaza a su seguridad personal, constituye más bien una fuente de empleo.

Las principales dificultades para avanzar en los proyectos productivos, según los funcionarios públicos, se centra en dos asuntos: en los bajos niveles de escolaridad de los participantes y en los requerimientos asistencialistas de los desmovilizados. Los participantes señalan que es muy importante la oportunidad y fácil acceso a los servicios educativos; algunos han podido terminar el bachillerato, otros han avanzado considerablemente en aprendizajes de lecto-escritura. Según el funcionario público un avance del proceso con la población desmovilizada es el evidente mayor compromiso y un mayor entendimiento de los límites y responsabilidades del proceso de reinserción.

Reintegración Política

Aparentemente, los desmovilizados no tienen el mejor concepto sobre el ejercicio de la política, a pesar de lo cual su participación en la contienda electoral fue evidente, motivados entre otras cosas por los beneficios que pueden tener con el certificado y con las posibilidades que les genera en términos de empleabilidad el hecho de que llegue al poder el candidato electo que ellos apoyaron y que los incluyó en su programa de gobierno. Fueron múltiples los niveles de participación y las formas de hacerlo, algunos solamente ejercieron su derecho al voto, otros asistieron a las reuniones de promoción de la candidatura, otros participaron como testigos electorales, acciones todas en el marco de la legalidad a diferencia de anteriores elecciones, en ésta no se habla por parte de los diferentes actores locales de manipulación electoral o coerción armada por parte de los excombatientes. Paulatinamente, la participación de los desmovilizados en las JAC's ha aumentado; entre otros espacios de deliberación pública.

Servicios Reconciliatorios

Reintegración Social y Atención Psicosocial

Tal como señalan los participantes y las autoridades locales los desmovilizados del municipio han empezado a crear lazos de confianza con la comunidad, y han logrado insertarse en importantes escenarios locales, como son espacios o actividades comunitarias. Este tipo de asuntos se ha dado entre muchas cosas debido a que los desmovilizados han realizado acciones donde –según ellos– *“hemos demostrado ante la comunidad el interés de construir lazos de solidaridad social”*. Aunque en general los desmovilizados sienten relaciones amables y cordiales por parte de la comunidad, no todos los sectores sociales y poblacionales asimilan con igual agrado a los participantes dentro de su comunidad, ya que hay también una concepción entre la sociedad civil que articula las acciones delictivas, el narcotráfico en el municipio y otras acciones violentas con el proceso de desmovilización y los participantes de dicho proceso.

De acuerdo con actores sociales, la aceptación de un desmovilizado en la comunidad, pasa por muchos factores que determinan favorable o desfavorablemente el proceso de reintegración social: el estatus social o el grupo familiar al que pertenecía el desmovilizado antes de vincularse al grupo paramilitar, si era de prestigio es de más fácil aceptación; el rol que cumplió dentro de grupo armado, si era quien ordenaba puede ser de más fácil aceptación por la *“imprenta del poder armado, que hasta respeto genera aunque provenga del miedo”*; y las relaciones sociales que el joven tenía de infancia en esa comunidad a la cual regresa como desmovilizado.

En términos generales los desmovilizados por su parte creen que el proceso integral de reintegración va por buen camino y que se ha respondido a lo planteado en la negociación realizada entre las AUC y el Gobierno nacional, y en esta medida no plantean riesgos visibles a éste. Por su parte, la comunidad considera que hay un riesgo latente debido a las posibilidades de rearme o la reincidencia en prácticas delictivas, lo cual fundamentan a la expansión del narcotráfico, pero también por la falta de oportunidades de los participantes, la falta de comunicación entre sociedad - Estado y desmovilizados, y finalmente por la presión excesiva que ejerce la fuerza pública sobre los participantes.

El papel de los diversos Actores locales

Según los actores locales entrevistados existe una responsabilidad por parte de la comunidad con la Reintegración, que tiene que ver con el asunto de la aceptación del “otro”, para este caso del excombatiente; lo cual no es propiamente fácil del lado de las víctimas. Según las autoridades locales hay una responsabilidad por parte de la comunidad de generar espacios amables de encuentro y diálogos que posibilite conocer la visión del otro, su historia de vida para entender el panorama general del conflicto. Según los desmovilizados es necesario que,

“la sociedad entienda la importancia de la reintegración, y que en esa medida reemplace estigmas y rechazos sociales por debates y discusión”.(Entrevista local. Persona desmovilizada. 2008).

Para algunos actores sociales, el hecho de que algunos de los líderes de ésta, se comienzan a preguntar por razones de fondo del conflicto armado y de la resolución de este, como es el hecho de la existencia de unas estructuras ocultas detrás de la violencia directa, donde los financiadores y el narcotráfico juegan un papel fundamental, es un avance para la sociedad civil. De acuerdo con un funcionario público, otro avance importante por parte de la comunidad es que ha transformado prácticas que legitiman poderes ilegales, como es el hecho de la tramitación de conflictos por medio de actores ilegales; reconoce a su vez que la razón de esto es la ineficacia estatal al respecto. La sociedad debe dejar de utilizar la seguridad privada al margen de la ley para protección, solucionar diferencias o como intermediarios en la tramitación de los conflictos cotidianos. Agrega que:

“La sociedad debe acudir a las instituciones del Estado para tramitar todas sus demandas”. (Entrevista Gobierno local. 2008).

En campaña y formulación de plan de desarrollo, la administración Municipal involucró proyectos para la población desmovilizada, propuso la gestión de proyectos de vivienda para los desmovilizados, con ningún resultado a la fecha. Los participantes hacen reclamos directos hacia el ente gubernamental con el requerimiento preciso de generar oportunidades de empleo sostenibles. Por ahora se encuentran a la espera de que los empleen en un programa de mejoramiento de vivienda. Agrega un desmovilizado que además “la Administración local ha ofrecido tenernos en cuenta a los participantes con las instalaciones para el proyecto productivo de ASOPULPAS”, aspecto en el que los desmovilizados depositan mucha confianza, y a pesar de lo cual consideran que la Administración ha sido poco firme.

La razón de la falta de liderazgo del gobierno local frente al proceso, la presenta un funcionario público, que concibe que el proceso de inserción es competencia de la Nación y que el papel del municipio es tan solo indagar para conocer sus avances, de acuerdo con lo cual la Administración municipal ...

“... Ha tenido buenas relaciones y contacto con el programa, se reúne con los participantes y ha ofrecido apoyo laboral para aquellos participantes que posean el curso de vigilancia para ayudarles a conseguir empleo en la ciudad de Medellín”.(Entrevista Gobierno Local. 2008).

Este ofrecimiento muestra el desconocimiento por parte de la autoridad municipal frente a las restricciones laborales de los participantes. A la idea de que la reintegración es responsabilidad del gobierno nacional se suman voces de actores sociales que creen que es responsabilidad del gobierno nacional cumplir con los compromisos adquiridos con ellos, en pro de garantizar el éxito del proceso,

“... porque si el gobierno les prometió darles estudio, colaborarles con el empleo, y no les está apoyando, no hay nada.”(Entrevista Comité de Reconciliación Municipal, 2008).

Además, señalan que el gobierno debe garantizar oportunidades de empleo y estudio a los jóvenes que cumplen el ciclo formativo básico, en caso contrario la guerra sería una oferta laboral con mayores posibilidades de ser elegida.

Por su parte el sector privado señala que existen practicas en los funcionarios públicos que deben ser reconfiguradas ya que es evidente que uno de los problemas que ha tenido el Estado es la incidencia del fenómeno del paramilitarismo por medio de la corrupción; si este tipo de formas ilícitas arraigadas en las estructuras estatales no son atacadas, reducidas o eliminadas, será muy difícil romper un tipo de circulo vicioso que siempre aboca a la sociedad colombiana al conflicto armado. Finalmente debe decirse que los actores locales señalan que es fundamental para el proceso, que la Fuerza pública también se transforme,

“... para nadie es un secreto que muchas veces se hicieron los de la vista gorda. Pero hoy tienen que ganar protagonismo y posicionamiento en las regiones donde estaban relegados por el accionar de grupos ilegales, garantizando siempre los derechos de la ciudadanía, en un accionar eficiente integral de la institucionalidad pública”. (Entrevista Comité de Reconciliación Municipal, 2008).

Del sector privado, señalan representantes de la comunidad, que es uno de los principales actores del conflicto armado, debido a su responsabilidad en la financiación de las acciones de guerra, por lo tanto es su responsabilidad en medio del proceso de reintegración garantizar la no repetición de estas acciones ilegales y crear estrategias de apoyo para los desmovilizados, sobre todo en lo concerniente a la generación de empleo digno y legal, asuntos que hasta hoy no han sido posibles. Por su parte los desmovilizados señalan que las empresas tienen políticas explotadoras del trabajador y que las oportunidades laborales están mediadas por asuntos de preferencias y cercanías. A su vez, agentes públicos locales, conciben el sector del comercio como víctima del conflicto, pues el control social y el cobro de vacunas que hacían los paramilitares estaban muy dirigidos hacia este sector, aunque reconoce que en algunos casos fueron ellos los que solicitaron los servicios del actor ilegal. Finalmente, no existen espacios municipales que los entrevistados identifiquen en los cuales se analiza el tema del conflicto armado y la reintegración.

7.3 Observaciones al DDR en la subregión del Occidente

La subregión del occidente en el panorama del conflicto continúa siendo relevante en tanto eje de comunicación con el Urabá y el Norte, y en este sentido el principal factor que lo vincula al conflicto armado es el tráfico de mercancías que se mueven por el puerto de Urabá, pero además por el cruce de caminos hacia el norte y el chocó por Frontino. Ello representa el mayor riesgo a la reintegración.

El narcotráfico ha venido consolidando un lugar relevante en la subregión, básicamente articulado a actividades de procesamiento, tráfico y vigilancia, lo cual se articula con las demandas por generar procesos de inclusión del grueso de la población a formas de economía que garanticen acceso a mejores condiciones de vida. En este sentido es el una actividad susceptible de generar mayor violencia si la situación en general del departamento no se estabiliza.

Aún así, ambos asuntos plantean los mayores retos de la reintegración en la subregión caracterizada por actividades económicas que no vinculan mano de obra, y por el contrario sobre agregan problemas sociales tales como la prostitución. Ello ayuda a perfilar el occidente tal como el Magdalena Medio como una subregión que expulsa mano de obra para la guerra.

8. ANOTACIONES GENERALES SOBRE EL DDR EN ANTIOQUIA

La Política CONPES para la Reintegración de personas y grupos armados ilegales al margen de la ley, parte de un diagnóstico sobre los obstáculos a la reintegración propios del contexto general y de la caracterización de la población excombatiente. A pesar de que asume que ésta acontece fundamentalmente en lo local no se conduce consecuente con la importancia de reconocer las particularidades de cada región y las lógicas del poder paramilitar que se desarrollaron en cada territorio, mas allá del ejército armado. Tal como se verá, éste ha sido un rasgo básico de la política que ha delineado el curso de cada una de las fases del proceso. A continuación se presentan algunos rasgos comunes, en su orden, de la fase de reintegración, desmovilización y desarme en el departamento.

8.1 Reintegración: Económica, social y política.

Reintegración Económica

Las dificultades para conseguir que la Reintegración se materialice en la consecución de un estatus civil y de un empleo e ingresos económicos de manera sostenible, ha implicado que la política nacional para la reintegración adopte un enfoque para la reintegración en el cual deposita la responsabilidad de la reintegración efectiva en la capacidad individual del excombatiente para adaptarse rápidamente a las condiciones y funcionamiento del mercado laboral y el orden social en general, para que más prontamente pueda acceder a los derechos, bienes y servicios en las mismas condiciones que el resto de la población.

Existe el consenso de que el sector privado debe asumir responsabilidad moral, material y, en casos judiciales, por su participación -directa o indirecta- en el conflicto armado y los costos de la guerra en vidas desperdiciadas y victimización de la población a través de la expropiación y el destierro, entre otras varias formas a través de las cuales se favoreció. Ello implicaría un papel más relevante en la dinamización de las economías regionales y apoyo a iniciativas económicas para el beneficio prioritario de víctimas y excombatientes. No obstante, los exiguos resultados evidencian la falta de compromiso del sector privado.

Adicionalmente, la alta concentración de la riqueza y el aumento de zonas que mantienen una estructura de “*clusters de pobreza*” en Antioquia, hace que las iniciativas de proyectos productivos no compitan con la variedad de incentivos de las economías ilegales. En términos generales, los proyectos productivos como principal mecanismo para la autonomía económica ha sido profundamente decepcionante para las personas desmovilizadas. A menos que sean proyectos de pan coger, resulta bastante complicado anclar las iniciativas de negocios en las economías regionales. La mayoría de experiencias que han emprendido modelos corporativos han sido denunciadas por la indebida apropiación de los capitales *per cápita* aportados por el gobierno nacional, por la utilización de la organización como fachada para la continuación de actividades ilícitas, entre otras.

La falta de protocolos para la implementación de proyectos productivos generó el despilfarro de recursos. Posteriormente aumentaron los requisitos en capacitación técnica y formación académica para solicitar desembolsos de dinero para las iniciativas de negocios, lo cual garantizaría el mayor éxito de las iniciativas económicas, sin embargo los resultados han sido bastante desesperanzadores para excombatientes y locales. Por otro lado, la formación en oficios presenta inconvenientes que van desde la capacidad del excombatiente para competir por un empleo en condiciones de igualdad con el resto de postulados, la voluntad de los empresarios y los problemas estructurales de generación de empleo en el país.

No obstante el criterio de descentralización territorial de la política de reintegración planteado en el documento CONPES sobre la base de la responsabilidad de los gobiernos locales a través de la adaptación y prestación de los servicios en coordinación con las instituciones de nivel nacional y departamental, en términos generales la participación del ente territorial ha sido escasa durante todas las etapas del proceso de paz. En los municipios donde más se han vinculado las instituciones locales, la participación ha estado más mediada por las relaciones entre los desmovilizados y los administradores públicos y con los políticos locales.

El excesivo centralismo, sumado a la falta de nuevos recursos o aumento en las transferencias para responder a las demandas de la reintegración, o incluso el desconocimiento de la política nacional de reintegración, se han convertido en las razones que argumentan los gobiernos locales para no incluir el tema en la agenda política y económica de gobierno. La adopción de estrategias para la reintegración en los Planes de Desarrollo Municipales, ha sido una apuesta de muy pocos gobiernos. Y en todos los casos esta población se ha convertido en un sector más de la larga lista que espera por ser “incluidos”.

La idea de la reintegración económica como condición básica para el éxito de la reintegración, ha sido usada por las personas desmovilizadas como un mecanismo de presión sobre la sociedad y el gobierno local, departamental y sobre todo nacional, para movilizar recursos entorno a ello. Al respecto aluden que,

“El gobierno no ha cumplido con todos los compromisos que pacto con los desmovilizados y esto genera riesgos para el proceso y la comunidad”. (Entrevistas Personas Desmovilizadas. 2008.)

Así, la frustración de las personas desmovilizadas con la dimensión económica de la reintegración es el principal criterio que emplean para evaluar el cumplimiento o no de “los acuerdos con el gobierno nacional”, lo cual de paso, ha operado como un discurso legitimador del rearme a nivel local y nacional que también actores armados han sabido aprovechar.

Mientras el rearme ha sido un asunto exclusivamente de orden nacional, los problemas de la reintegración continúan siendo un problema local, aún cuando la fase de reintegración cargue con el lastre de los errores e imprecisiones de las operaciones de paz precedentes. El

control central de la política le ha permitido al gobierno nacional mostrar balances en cifras sobre el proceso de desmovilización, con excelentes resultados políticos, nada despreciables para su gestión, sin embargo ha persistido en el interés de no vincular los problemas de la reintegración con el rearme de ejércitos, la reactivación y emergencia de bandas delincuenciales.

La capacidad de la política de reintegración para retener los excombatientes se ha visto menguada por las ya enunciadas limitaciones de un acuerdo de paz parcial, en medio del conflicto armado y la pervivencia de contextos de ilegalidad articulados al narcotráfico. De paso, ello complejiza la consideración simplista que hace la Política Nacional acerca de que los perfiles psicológicos de las personas en proceso de reintegración limitan su capacidad para permanecer en la legalidad. Tales razonamientos deberían operar como motores para dar mayor prioridad al diseño e implementación de estrategias tendientes a impedir el retorno de los desmovilizados a la vida armada y garantizar la no repetición de actos violentos y la disminución de las víctimas.

Sin embargo, pareciera ser que ello no bastará siempre que persista el conflicto armado. Se precisaría además de la negociación política con los demás actores del conflicto armado, abandonando la desgastante y costosa estrategia de desmovilización individual de combatientes de las guerrillas, y una lucha más decidida contra las estructuras del narcotráfico que poco tiene que ver con la persecución de simples delincuentes y más con la desestructuración de los factores en que se ancla la pervivencia de los grandes negocios ilegales. Con todo, la importante concentración de los recursos públicos y privados en la seguridad militar no ha logrado la no repetición, la cohesión social entorno a valores democráticos, ni la obediencia al Estado.

Reintegración Social

Con diferentes intensidades, en términos generales el proceso está plagado de desconfianzas de un lado entre población, víctimas y desmovilizados; de otro lado, entre desmovilizados y gobierno nacional; finalmente, entre sociedad civil y gobierno nacional. La desesperanza de las víctimas, se suma a la de los pobladores que esperaban un cambio en el orden social y político, y la de los excombatientes que efectivamente creen en el proceso de reintegración y ahora tienen que huir de la guerra, sin encontrar oportunidades para sí y sus familias.

En algunos territorios, la comunidad expresa poca confianza en torno a los desmovilizados como nuevos vecinos. El grado de confianza en la dejación de las armas por parte de los desmovilizados como individuos, generalmente se encuentra asociado a la intensidad de la violencia que se vivió en el territorio y los imaginarios que alcanzaron a instalarse en la comunidad sobre la función que los excombatientes desempeñaron en la generación de la violencia. Dichos roles responden a la imagen del guerrero, asesino o al referente de autoridad y orden, ambos ubicados en el extremo de una variedad de posibilidades que hablan de la forma como operó la violencia en el contexto particular.

El planteamiento de la reintegración comunitaria que hace la Política Nacional es una instrumentalización de las acciones reconciliatorias para prevenir el rechazo del excombatiente por parte de la comunidad, en zonas de convergencia de un alto número de población demobilizada y víctimas del conflicto armado. En este sentido sus planteamientos sobre la reconciliación aluden al mejoramiento de la convivencia pacífica y la aceptación de las personas desmovilizadas previendo futuras retaliaciones, lo cual es bastante relevante. Sin embargo, sus limitados alcances en el marco de las demandas por procesos de justicia restaurativa que prevea el debate local por la construcción de memoria histórica, creación de condiciones de no repetición y la garantía de los derechos a las víctimas, obedecen menos a la disponibilidad de recursos y más a la falta de creatividad y voluntad política.

En el curso natural que ha tomado la interacción desmovilizados – comunidad, tras la llegada de una persona desmovilizada a un determinado lugar para habitar, se reflejan tres tipos de prácticas por parte de las personas desmovilizadas. Una de ellas consiste en acciones de acercamiento entre excombatientes y comunidades, generalmente promovidas por el programa de la ACR. La segunda se presenta a través de la opción individual por mantener bajo perfil e invisibilizarse frente a las autoridades cívicas y la sociedad para reconstruir la vida personal y familiar, lo cual implica no plantear demandas asociadas a su condición de excombatiente. La tercera práctica consiste en el aprovechamiento del referente de poder que la persona desmovilizada aún constituye para la comunidad para continuar con prácticas de sometimiento en beneficio propio o el uso del prestigio social para desarrollar formas de liderazgo social y político no siempre para el beneficio personal.

Resulta bastante relevante el hecho de que en algunos contextos³⁹ la población continúa sometida a la trampa del trueque de lealtad con un determinado actor armado por protección y seguridad. En los contextos donde el conflicto armado no comporta eventos de confrontación armada, con menor intensidad continúa presentándose homicidios y prácticas de “limpieza social” y amenazas por comportamientos “*inadecuados*”.

Finalmente, el excesivo centralismo de la política en su diseño estratégico, implementación y seguimiento, no deja posibilidades al orden territorial departamental y municipal de intervenir al respecto y reorientar la política nacional de acuerdo con los obstáculos y demandas propias de los contextos particulares y menos aún para que se recreen otras estrategias de transformación de éstos, posiblemente dirigidas a interrogar los símbolos y repertorios a través de los cuales el actor armado se legitimó y sobre los cuales continúan operando las trayectorias del conflicto armado en las distintas subregiones del departamento. De hecho las instituciones que operan la política dependen de los rígidos lineamientos nacionales.

Por su parte, pocos funcionarios del Ministerio público en los municipios asumen la responsabilidad de proteger los derechos de excombatientes y víctimas, la mayoría de los

³⁹ Zona rural de municipios del Bajo Cauca y municipios cocaleros donde los campesinos deben lealtad al ejército ilegal controlador el mercado.

funcionarios públicos presentan como argumento no haber recibido directrices del orden nacional.

Reintegración política

La Reintegración política no ha sido planteada dentro de la Política Nacional para la Reintegración. Las preocupaciones de mayor relevancia en torno a la participación de desmovilizados de las AUC en la política local y nacional, se relacionan con los efectos electorales; especialmente allí donde fueron más comunes las prácticas de constreñimiento armado; tales como, las alianzas entre políticos locales y regionales con jefes paramilitares para el fortalecimiento del control paramilitar por la vía de la eliminación de la oposición y las alianzas⁴⁰.

Por otra parte, las permanentes denuncias y observaciones que académicos y sociedad civil ha realizado sobre los mecanismos para la extracción de recursos públicos por parte de los actores armados (Sánchez y Chacón, 2007; Velásquez, 2009), genera desconfianza sobre los procesos organizativos y de incidencia política de los excombatientes.

La participación en asuntos públicos de la vida local es más relevante en las subregiones donde se presenta una mayor concentración de desmovilizados y continúan la extracción de economías ilegales. Aún es común escuchar sobre favores y relaciones entre políticos locales y desmovilizados, por ejemplo, a cambio de votos. Sin que necesariamente ello implique constreñimiento armado al elector, sino la operación de intermediaciones con las comunidades y el uso de la influencia social. A diferencia de las regiones donde la dispersión de los excombatientes es mayor, los políticos y gobiernos locales son extremadamente cuidadosos en sostener o evidenciar algún tipo de vínculo con los desmovilizados.

8.3 Desmovilización y Desarme

Hasta este punto el estudio se ha conducido bajo una cierta lógica de que el éxito de la reintegración se encuentra fuertemente atado a la reintegración económica. Sin embargo, de entrada el análisis del DDR se relaciona con el nivel de cumplimiento de los objetivos

⁴⁰ De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Además de 59 congresistas judicializados por para-política, se encuentran 253 servidores públicos – entre electos, funcionarios y miembros de la fuerza pública, también investigados por narco-paramilitarismo en el país. En Antioquia se encuentra el 9% de funcionarios y políticos vinculados a denuncias e investigaciones judiciales por para-política del país: 9 alcaldes, 2 ex alcaldes, 2 ex concejales, 1 gobernador, 3 policías, 6 militares, 2 ex congresistas. En total de 20 casos investigados, 5 de ellos se encuentran en preliminares, 8 en instrucción, 4 en indagación, 2 acusados y 1 enjuiciado. Los políticos vinculados a procesos judiciales en Antioquia son: Rubén Darío Quintero, Senador 2006; Humberto Builes Correa, Senador 2006; Mario Uribe, Senador 2006; Oscar Suárez, Senador 2006; Antonio Valencia, Senador 2006; Gabriel Zapata, Senador 2006; Guillermo Gaviria, Senador 2006; Mauricio Parody, Representante 2006; Jorge Ignacio Morales, Representante 2006; Estanislao Ortiz, Representante 2002; Manuel Darío Ávila, Representante 2002; Jesús Dova, Representante 2002; Cesar Augusto Andrade, Representante 2002; Rocío Arias, Representante 2002 con sentencia anticipada (López, 2008).

de un programa DDR en el marco de un acuerdo de paz, y en tal sentido tendrá que ver con la efectividad de sus operaciones para la superación de los conflictos locales susceptibles de estallar en nuevos ciclos de violencia armada; que siendo justos con el contexto de negociación parcial deberá medirse mínimo por la capacidad de retener los excombatientes por fuera de la guerra y la disminución de la intensidad de la violencia; lo cual no sólo pasa por la generación de ingresos o la autonomía económica del excombatiente a pesar de su innegable relevancia durante la fase de reintegración.

Tal como se ha dicho, el cumplimiento de dichos objetivos se encuentra altamente determinado por las fases iniciales de negociación, desmovilización y desarme, que para el caso acontece en un contexto institucional laxo en la consecución y porte de armas en Colombia, el tráfico de armas y funcionamiento del mercado negro sin que ello represente aún un problema de debate social y político a pesar de algunas obviedades en las lógicas de la guerra que de conjunto la política de paz no previó dentro de sus estrategias de desarme.

Si bien el acuerdo de paz con las AUC desmovilizó un importante número de combatientes, seguido de un periodo de disminución nada despreciable de los índices de homicidios en el departamento, esto no duró mucho. Lejos de ello la fragmentación de poderes que suscitó el curso de la implementación de los acuerdos de paz ha llevado al recrudecimiento de la violencia armada y la consecuente generación de nuevas victimizaciones, producto de la lucha por la preservación del control sobre las economías ilícitas. Los acuerdos de paz y la implementación del proceso DDR no lograron poner fin a acciones que caracterizaron la identidad de los grupos paramilitares en cada una de las subregiones. A pesar de que los resultados de investigaciones judiciales y operaciones militares han dejado al descubierto la participación de antiguas facciones del paramilitarismo, el Gobierno Nacional insiste en la idea del desmonte del paramilitarismo, de manera que las expresiones armadas de hoy son simples grupos y bandas delincuenciales que han emergido en las regiones.

Ello sugiere, en primer término que tanto el abordaje de la negociación de paz, como las operaciones de paz subsiguientes, debieron atender la naturaleza descentralizada del poder paramilitar en los diferentes territorios⁴¹, lo cual ha sido un factor determinante de la naturaleza del paramilitarismo y la violencia en las distintas subregiones del departamento. En segundo lugar, que el DDR deberá cargar con el lastre de los desaciertos de un acuerdo de paz con poco contenido y dispositivos para la desestructuración de las actividades generadoras de violencia armada.

En tal sentido, además de las dificultades propias de una negociación de paz parcial, en los acuerdos de paz con las AUC fueron pasados por alto aspectos claves para evitar nuevas trayectorias del conflicto armado, tales como, el abordaje de una negociación colectiva que no reconoció las identidades particulares e intereses en torno a los que se generó la acción

⁴¹ Construido éste a partir de la significación social, política y económica de un espacio a través de las relaciones entre los sujetos, por un lado, con fundamentado en un sentido instrumental de su utilización para la vida práctica y la subsistencia. Por otro con un sentido simbólico de soporte de identidades colectivas e individuales. (Jiménez, 2000 citado por García, 2002)

violenta de los diversos Bloques de las AUC, y no pactó acuerdos diferenciados en relación con asuntos básicos como el desmonte de economías ilícitas que cada Bloque AUC desarrolló en los diferentes territorios que controló, tales como, tipos de actividades económicas ilícitas, rutas y logística de operación, mecanismos de legalización, entre otros.

En la mayoría de estudios de caso, tanto excombatientes como otros actores locales, dejan en evidencia que no se desmovilizaron todos los combatientes; muchos de ellos mandos medios, y algunos desmovilizados no hicieron parte del ejército ilegal. En algunos casos fue posible identificar desmovilización de personas no reconocidas comúnmente en las labores del paramilitarismo contrainsurgente y más relacionadas con actividades del narcotráfico, de lo cual no se tuvo en cuenta durante las fases de desmovilización y desarme. Aún cuando se hubiera desmovilizado completamente los combatientes que efectivamente hicieron parte de las diferentes estructuras en que se organizaban los grupos AUC, no se previó la reactivación de grupos armados articulados a nuevas o viejas prácticas ilegales. Todo ello, ratifica la relevancia del carácter descentralizado de las AUC y la naturaleza particular del actor armado en cada región para la agenda de negociación, la firma de acuerdos y el diseño de las operaciones DDR.

La diferente naturaleza del paramilitarismo en las subregiones dio lugar a dos modelos de desmovilización, desarme y reintegración en el departamento, el primero de ellos caracterizado por la alta concentración de excombatientes; lo cual ha implicado la creación de Gerencias especiales para la ejecución de la política de reintegración. Este primer modelo de DDR se presentó en el Magdalena Medio, el Bajo Cauca y el Urabá, claramente marcado por la alta concentración de combatientes desmovilizados, a pesar de la conservación de retaguardias; la pervivencia de prácticas de control social; la continuidad de economías ilegales; alianzas más estrechas entre los desmovilizados y los políticos locales; mayor participación de los desmovilizados en la política local e incidencia en las instituciones públicas; y un drástico incremento en la intensidad de la violencia armada. En estos territorios es característica la consolidación de autoritarismos subnacionales⁴² fundamentados en el control armado y el funcionamiento de economías ilícitas base de su capacidad para el aniquilamiento, sometimiento, negociación y subordinación.

El segundo modelo de desmovilización, desarme y reinserción se presentó en las subregiones del occidente, oriente y suroeste antioqueño, caracterizado por la alta desconcentración y dispersión de excombatientes paramilitares. En dichos territorios la incidencia de la población desmovilizada en las instituciones públicas es baja, las viejas

⁴²En tal sentido los autoritarismos subnacionales se definen por la capacidad de articulación de su poder territorial con el centro, a través de interconexiones entre todos los niveles del sistema territorial nacional, en el entendido de que controlar el poder local requiere: controlar también vínculos en diferentes niveles de organización territorial; cerrar las oportunidades políticas a sus oponentes locales con el fin de reducir su poder local, incluso por la vía de la intromisión de externos que pudieran aliarse con la oposición; diseñar estrategias para extraer recursos del centro y para prevenir la intervención del centro en asuntos locales. Generalmente tales estrategias operan a través del control de posiciones de gobierno nacional en el poder ejecutivo, el legislativo o judicial, o formando parte de coaliciones nacionales que apoyan el ejecutivo nacional (Gibsson, 2005).

prácticas de control social ejercidas por la AUC y las alianzas entre políticos y desmovilizados se han debilitado. En estas regiones el poder del ejército paramilitar no logró la subordinación del orden social (Escalante, 1993; p. 63) y se observa una tendencia declinante de los autoritarismos sustentados en el control armado.

Particularmente para la subregión del oriente antioqueño, lo anterior no se traduce en la disminución de casos de violación de DD.HH y del DIH, donde el ejército nacional ha intensificado las operaciones militares contrainsurgentes en ocasiones soportadas en la participación de personas desmovilizadas. En las subregiones del occidente y el suroeste la violencia armada aparece claramente vinculada a la generación de bandas delincuenciales con una participación importante en la venta de estupefacientes.

Tales modelos de desmovilización, desarme y reintegración sugieren que el paramilitarismo en Antioquia al momento de la desmovilización, estuvo sustentado en el ejercicio de autoritarismos subnacionales fundamentados por un lado en el férreo control armado del territorio por parte de actores armados que por medio de alianzas y la consolidación de prósperas economías ilegales se hicieron al control de las instituciones públicas y dominaron la política regional. De otro lado, se sustentó en autoritarismos subnacionales basados en el control de economías legales por parte de actores políticos y económicos regionales que paulatinamente se han ido fortaleciendo a la sombra del narcotráfico y donde el ejército armado paramilitar se mantuvo subordinado.

Al respecto, resultan sugestivas las observaciones de Mary Roldan sobre la configuración de identidades regionales en Antioquia que dieron origen a zonas nucleares y zonas modulares del desarrollo. De acuerdo con ello, el proyecto hegemónico del Estado en Antioquia liderado por los hombres fuertes de la política y la industria antioqueña, discriminó zonas - Magdalena Medio, el Bajo Cauca y Urabá-, que a pesar de su importancia estratégica para la extensión del “poderío antioqueño”, se diferenciaban culturalmente de los valores identitarios de la “raza antioqueña” ó núcleo de Antioquia e históricamente habían demostrado ser difíciles de controlar o resistentes a la dominación cultural, política y económica antioqueña. (Roldán, 2005; p. 59).

Así, a diferencia de las zonas nucleares antioqueñas que históricamente han comportado el centro del desarrollo económico y político del departamento, el fortalecimiento actual de economías ilegales en Antioquia, se presenta en las zonas modulares asimiladas a partir de procesos de recolonización por parte de las élites regionales del centro. Ello sugiere una fuerte intervención de los hombres de la política y empresarios en lo que se llamado el proyecto paramilitar. Esta diferenciación entre las zonas nucleares de Antioquia y las zonas periféricas es central en el carácter de los problemas regionales a los que se articuló, de manera particular, la acción del paramilitarismo y determinó tanto la naturaleza del actor armado, como las trayectorias de la violencia y el devenir del actor armado tras la desmovilización.

En el mismo sentido, los símbolos y recursos que el paramilitarismo utilizó, permearon en diferente grado las relaciones sociales y por ende las instituciones reguladoras del orden social local. Existe una marcada diferencia entre los procesos DDR llevados a cabo en

territorios permeados por identidades y elementos aglutinantes entorno a los recursos ideológicos y materiales que planteo el paramilitarismo a los marcos dinámicos del Estado; tales como el Magdalena Medio, Bajo Cauca y el Urabá, y los procesos DDR que se llevan a cabo en subregiones donde el paramilitarismo no logró transformar y eliminar los referentes identitarios del orden social preexistente, lo cual le plantea desafíos diferenciables a la política DDR y demás operaciones de paz.

En suma, el balance sobre el proceso de desmovilización, desarme y reintegración de las AUC podrá fundamentarse en el análisis de las estadísticas de permanencia o disidencia de quienes se desarmaron y desmovilizaron como parte de las estructuras armadas del ejército de las AUC en el marco de las operaciones de paz y mostrar unos indicadores más o menos aceptables de éxito. Sin embargo, tal como se ha planteado durante el último apartado, ello no necesariamente dará cuenta de la efectiva superación del fenómeno paramilitar como proyecto hegemónico de orden económico, político y social, tal y como aconteció en las diferentes regiones del departamento.

De acuerdo con tales consideraciones, en la segunda parte se abordará la trayectoria que ha seguido el conflicto armado en el departamento tras el proceso de desmovilización de las AUC y se propone un modelo de análisis del proceso de desmovilización, desarme y reinscripción más consecuente con la naturaleza del paramilitarismo. Para realizar este análisis se toma como referencia la subregión del suroeste antioqueño.

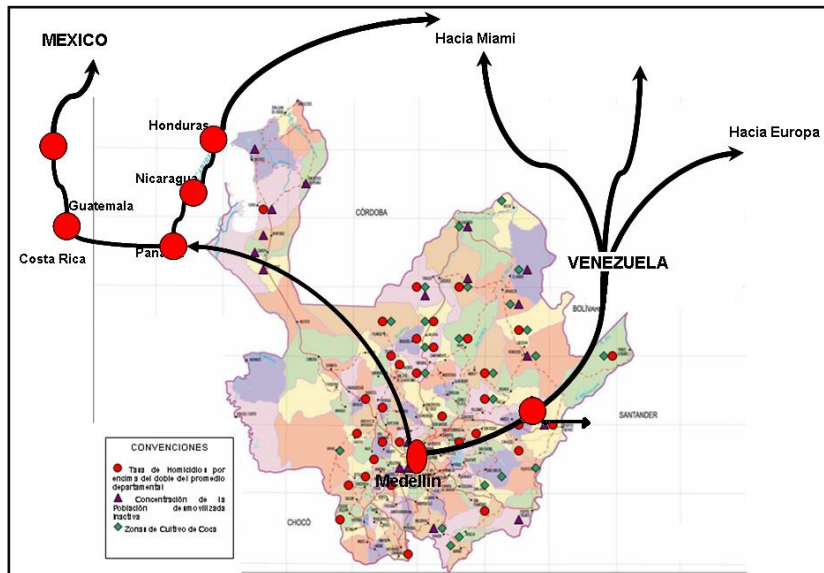
**II PARTE: TRAYECTORIA DEL CONFLICTO ARMADO EN ANTIOQUIA TRAS
LA DESMOVILIZACIÓN DE LAS AUC. Origen e Identidad de la Violencia
paramilitar: Una relectura del Caso Suroeste.**

9. NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA ARMADA EN ANTIOQUIA

Colombia es el principal productor de coca en el mundo, seguido por Perú y Bolivia. De acuerdo con el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el área interna sembrada del país aumentó durante el 2007 en un 27% (Naciones Unidas, 2008). En este año la producción mundial se estimó en 994 toneladas anuales, de las cuales Colombia tuvo una capacidad de producción de hasta el 60%; ligeramente por debajo respecto de los años anteriores, señala el informe. De acuerdo con algunos estudios, el área sembrada y la producción debieron aumentar dados el reforzamiento de los controles de interdicción en las rutas entre Colombia y los países de destino.

En el panorama nacional del narcotráfico, Antioquia ha ocupado un papel relevante dadas las dos rutas de tráfico para la exportación de estupefacientes hacia otros países y el ingreso de armas: el puerto de Turbo hacia Estados Unidos por Panamá - México y por el nororiente del departamento hacia Europa y Miami por Venezuela (figura 1).

Figura 1
Mapa Rutas del Narcotráfico en Antioquia

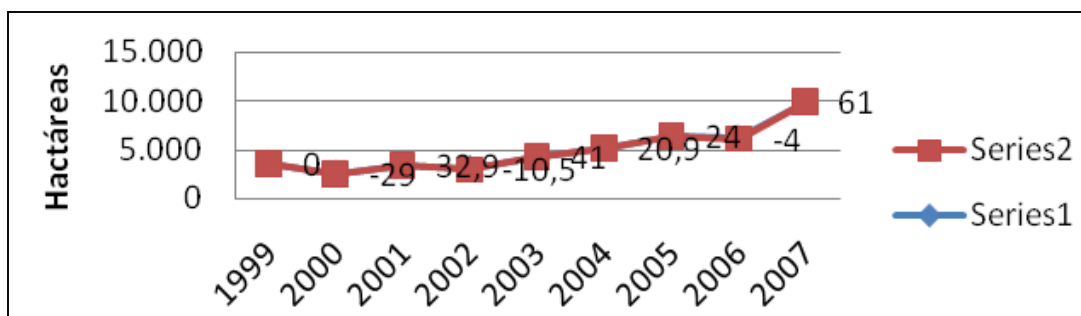


Fuente: Reelaboración de las rutas mapeadas por la Confederación Española de Policía, Sindicato Profesional de Policía Uniformada. Rutas de exportación de droga desde América, 2001.

Por otro lado, la siembra de mata de coca tiende a aumentar. De acuerdo con los reportes sobre el número de hectáreas cultivadas por municipio del SIMCI – Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, es a partir del año 2003 donde se observa una tendencia al aumento de hectáreas cultivadas en coca, reflejando un incremento del 227% desde el 2003 hasta finales del 2008.

El impacto de las labores de erradicación de hectáreas cultivadas en coca en el departamento evidencia un comportamiento decreciente sólo durante los años 2000, 2002 y 2006. A pesar de que en el 2008 se intensificaron las labores de erradicación manual en un 277% respecto del año anterior, pasando de 5.127 hectáreas erradicadas manualmente en el 2007 a 19.366 durante el 2008, los cultivos de coca aumentaron el 61% en relación con el año anterior, lo cual evidencia la ineficacia de las políticas de erradicación frente a la inmensa capacidad del narcotráfico de ampliar las zonas de cultivo (gráfico 2).

Gráfico 2
Variación porcentual y Ha. Sembradas de coca en Antiquia
1999-2007



Fuente: creación propia a partir de datos suministrados por la Dirección de la Policía Nacional Antinarcóticos. Bogotá, 2009.

En el panorama departamental las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca revelan una importante participación en el cultivo de coca, como parte de los corredores del narcotráfico por el Urabá en límites con el litoral pacífico – Córdoba - Bajo Cauca - Sur de Bolívar - Magdalena Medio – Barranca hasta el Norte de Santander límites con Venezuela (Gráfico 3).

Gráfico 3

Contraste de la evolución de cultivos entre el departamento y los municipios

Gráfico 3.1. Cultivos de coca Dpto - Norte

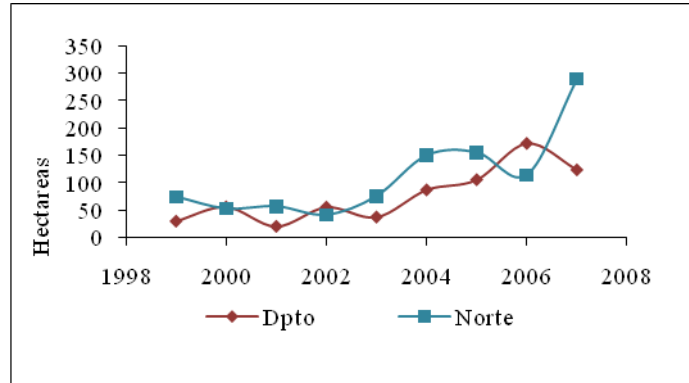


Gráfico 3.2. Cultivo de coca Dpto - Nordeste

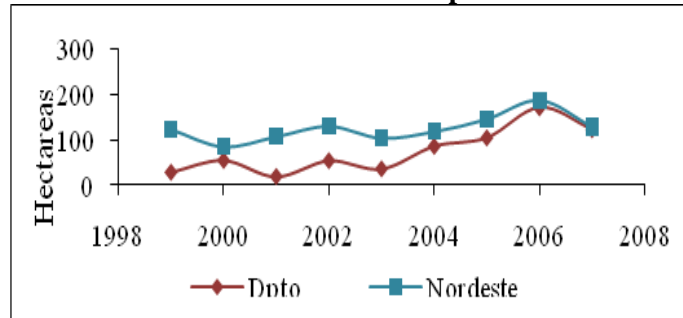
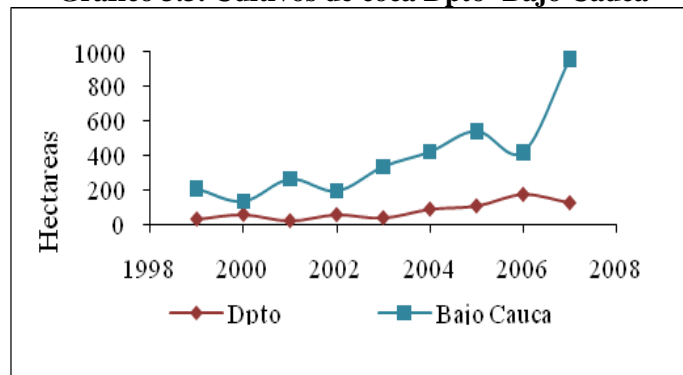


Gráfico 3.3. Cultivos de coca Dpto- Bajo Cauca



Fuente: cálculos de la autora a partir de datos de hectáreas cultivadas en mata de coca por municipio desde 1998 hasta 2008, suministradas por la Dirección de la Policía Antinarcoóticos. Bogotá, 2009.

Mientras en los municipios cultivadores cercanos al centro de Antioquia se ha sostenido la erradicación de la mata de coca, los municipios mencionados incrementaron el área de cultivos levente durante el 2002, y fuertemente a partir del 2003 hasta el 2005, dicho crecimiento se vio interrumpido durante el 2006⁴³. Sin embargo, durante el 2007 se nota una fuerte concentración y aumento del área de cultivos en las subregiones mencionadas durante el 2007 (figura 2). Sólo el 67,7% del área cultivada en el departamento se encuentra en la subregión del Bajo Cauca, donde en términos generales se presenta una tendencia a la concentración del área de cultivo.

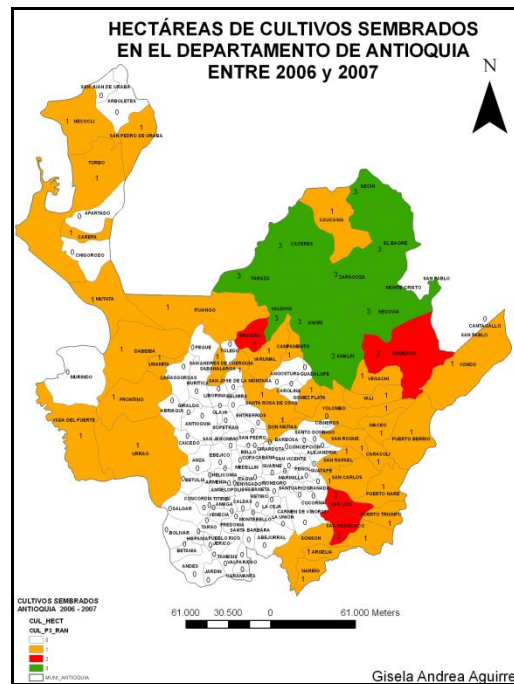
A pesar de los programas de erradicación, las subregiones del Norte, Nordeste y el Bajo Cauca han configurado el más importante grupo de municipios cultivadores de coca del departamento: Amalfi, Anorí, Vegachí, Segovia, Remedios y Yalí en el nordeste; Valdivia, Briceño, Ituango, Campamento y Yarumal en el Norte; Bagre, Tarazá, Zaragoza, Nechí, Cáceres y Cauca en el Bajo Cauca; Yondó y Puerto Nare en el Magdalena Medio.

En la subregión del Oriente se evidencia una leve tendencia a incrementar la zona de cultivos entorno a los municipios de San Luis y San Francisco. Según los datos oficiales, los programas de erradicación han tenido un mayor éxito en el occidente y un conjunto de municipios del nordeste; los cuales tienen en común encontrarse más cerca del Valle del Aburrá, (Yolombó, San Roque, Don Matías, Gómez Plata, San Andrés, Santa Rosa y Yalí).

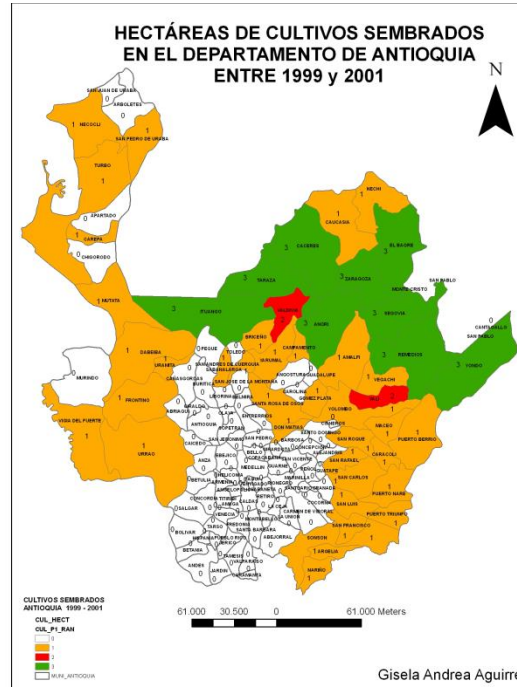
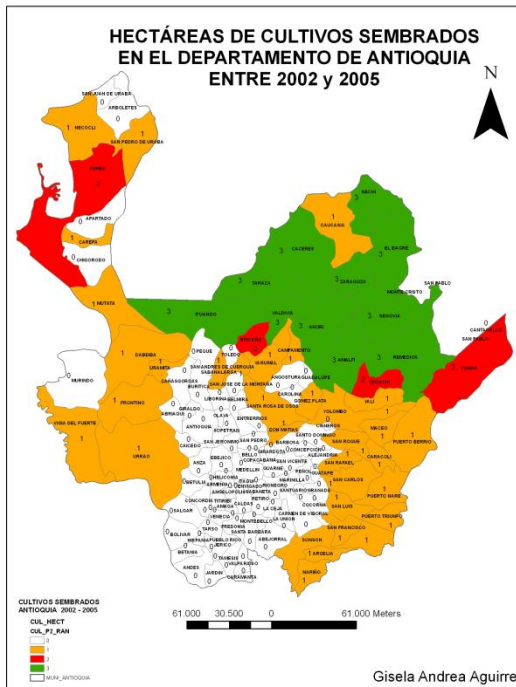
Según datos oficiales, en el oriente, durante el 2002, las labores de erradicación lograron llevar el proceso de erradicación a cero áreas cultivadas. Sin embargo, a partir del 2003, se empieza a presentar un proceso de resiembra en los municipios de Argelia, Sonsón, Nariño, San Francisco, San Luis, San Carlos y San Rafael.

⁴³ De acuerdo con datos del CIMSI a diciembre de 2007, esto pudo estar en relación con el mayor énfasis realizado ese año en las labores de aspersión aérea.

Figura 2
Mapas de hectáreas de cultivos de coca sembrados en el departamento de Antioquia por periodos⁴⁴.



⁴⁴ En el mapa se colorean los municipios ubicados en un rango de 0 a 3 de acuerdo con la concentración de hectáreas sembradas por municipio. El rango 0 corresponde a municipios de los cuales el SIMCI no registra cultivos; al rango 1 corresponde el color amarillo de los municipios con un número de hectáreas cultivadas inferior al promedio departamental del periodo; al 2 corresponde el color rojo de los municipios con un número de hectáreas cultivadas igual al promedio departamental del periodo; y al rango 3 corresponde el color verde de los municipios con un número de hectáreas cultivadas superior al promedio departamental del periodo.



Pese a los datos oficiales de la Policía Antinarcóticos, de acuerdo con los cuales el occidente no tendría áreas de cultivos en coca, otras fuentes aseguran lo contrario, especialmente en los municipios de Sopetrán y Liborina, y asignan un importante papel a la subregión en el tráfico por el corregimiento Horizontes que comunica con el Norte, y el triángulo de Quebrada Seca donde convergen Santa Fe, Sopetrán y Olaya; el municipio que presenta mayores índices de homicidios en la subregión y de los más altos del departamento. Por otro lado, un buen número de los laboratorios hallados por la Policía Antinarcóticos en el departamento han sido reportados desde estos municipios y el municipio de Ebéjico.

De acuerdo con algunos actores departamentales, el suroeste tiene un papel marginal en las actividades de producción y tráfico de droga; sólo se presentan cultivos de coca en el municipio de Urao. Sin embargo, desde los 80's, la subregión ha ocupado un el lugar de inversión de capital en la actividad ilícita y blanqueo de dinero. Por otro lado, frente a las presiones de la Fuerza Pública sobre el puerto de Buenaventura, el suroeste se ha convertido en la puerta de entrada ó la vía alterna para el tráfico del Valle del Cauca, por el Occidente - Urabá.

Al parecer el lugar del Urabá en la cadena del negocio del narcotráfico, resulta de mayor relevancia en el tráfico para la salida de la mercancía, que en la siembra de cultivos ilícitos. A pesar que desde el 2003 se reportan pequeñas áreas sembradas⁴⁵, a diciembre del 2008 el SIMCI registra erradicación total en la subregión.

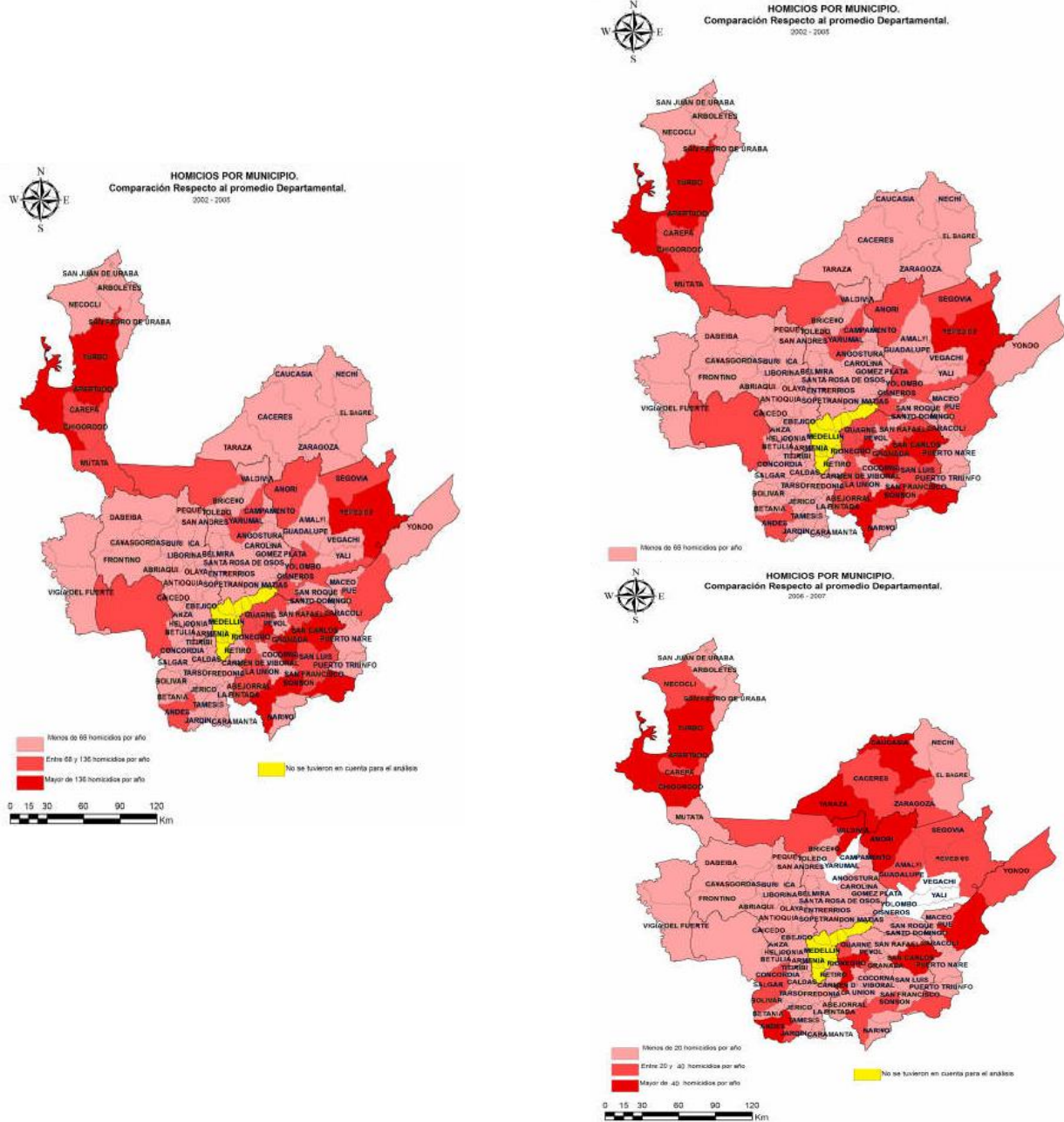
⁴⁵ Básicamente en los municipios de Carepa, Mutatá, Vigía del Fuerte y Turbo en el que se llegó a cultivar 154 hectáreas durante el 2003.

De igual forma, el Magdalena Medio no es una subregión productora, si bien los municipios de Yondó y Puerto Triunfo han logrado consolidar áreas importantes de cultivos no equiparables con las del Norte, Nordeste y el Bajo Cauca. La subregión se encuentra más afectada por la importancia del río en el tráfico ilegal y de territorio limítrofe con el vecino país de Venezuela.

Los municipios de las subregiones cultivadoras y de tráfico han venido consolidando una fuerte economía entorno al narcotráfico, los diferentes circuitos económicos que requiere el funcionamiento del negocio, generan una altísima demanda de mano de obra para los diferentes eslabones del proceso de producción, procesamiento y tráfico, que van desde servicios de seguridad, exportación de drogas, importación de armas, servicios de inteligencia, control de los embarques de droga, cuidado de caletas, control social del territorio, neutralización de las autoridades civiles y militares, vinculación de la población civil, garantía de seguridad en rutas, cuidado de cultivos, inversiones y blanqueo de dinero, por mencionar algunos.

Luego de que durante el periodo que duró el proceso de desmovilización y desarme de las AUC, las tasas departamentales de homicidios mantuvieran una tendencia a disminuir, en el 2008 se revierte drásticamente el proceso decreciente del índice de homicidios, pasando de -8,7% en el 2007 a 14% en el 2008 (figura 3). La expansión del narcotráfico y el reordenamiento de la geografía del conflicto, ha reflejado un aumento en la tasa de homicidios del departamento tendiente a concentrarse en torno a los territorios relevantes en la geografía de cultivos y rutas del narcotráfico.

Figura 3
Homicidios por municipio en el departamento de Antioquia



Durante el 2007 las tasas de homicidios tuvieron un comportamiento medianamente homogéneo entre las subregiones del departamento (Ver tabla 26 y gráfico 4). Sin embargo en relación con el año anterior, los homicidios tienden a subir drásticamente en los municipios de Valdivia, Don Matías, Ituango. De igual forma en el Urabá especialmente en Turbo, Apartadó, Chigorodó, Carepa. En el Bajo Cauca se presenta incremento en los municipios de Tarazá, Cauca y Cáceres (tabla 27).

Tabla 28
Variación porcentual de los homicidios en Antioquia en la década de 1998 a 2008

<i>Homicidios</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total Caso	5785	5929	6517	7269	6949	4453	2726	2376	2174	1984	2271
variación %	-17	2,4	9,9	11	-4,4	-35	-38	-12	-8,5	-8,7	14

Fuente: Estimaciones a partir de datos suministrados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Bogotá, Febrero de 2009.

Gráfico 4
Variación porcentual de los homicidios en Antioquia en la década de 1998 a 2008



Fuente: Estimaciones a partir de datos suministrados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Bogotá, Febrero de 2009.

Tabla 29
Tasas de Homicidios Antioquia (100.000ha.)

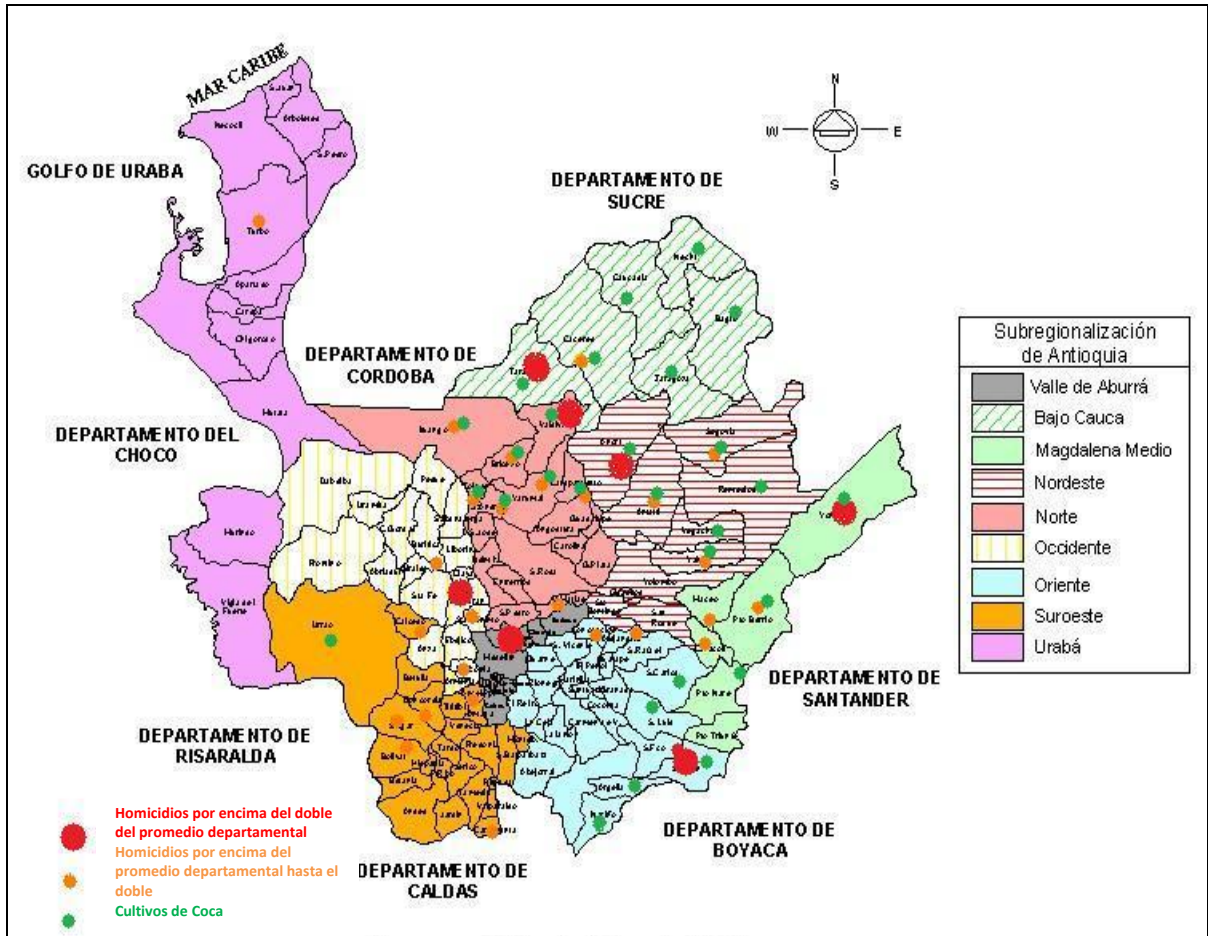
SUBREGIÓN	TASA 06	TASA 07	VARIACIÓN %
URABÁ	36	43	7
MAGDALENA MEDIO	63	46	-17
BAJO CAUCA	42	43	1
NORDESTE	54	49	-5
NORTE	42	51	9
OCCIDENTE	31	28	-3
ORIENTE	45	30	-15
SUROESTE	67	40	-27
VALLE ABURRA	31	28	-3

Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Bogotá, febrero de 2009.

Durante el mismo año del 2007, se presentó una importante disminución de 27 puntos porcentuales en la tasa de homicidios en el Suroeste y 17 puntos en el Magdalena Medio, siendo Puerto Berrío el único municipio que aumento sus tasas de homicidios, contrario al comportamiento de los homicidios en el resto de la subregión. De igual forma las tasas disminuyeron en el Nordeste, occidente y oriente.

Los municipios con tendencia a aumentar las tasas de homicidios por encima del promedio departamental, tienen en común pertenecer a las subregiones duras de cultivos ilícitos y/o tráfico de estupefacientes: Norte: Valdivia, Toledo, Briceño, San Andrés, Yarumal, Campamento, Don Matías e Ituango. Bajo Cauca: Cáceres y Tarazá. Urabá: Turbo. Magdalena Medio: Berrío, Yondó, Maceo y Caracolí. Nordeste: Amalfi, Yalí, Anorí, Segovia. Occidente: Caicedo, San Jerónimo, Olaya, Buriticá, Caicedo. Oriente: Alejandría, Concepción, San Francisco. (figura 4).

Figura 4
Mapa Cultivos Coca y Homicidios en Antioquia 2007 – 2008



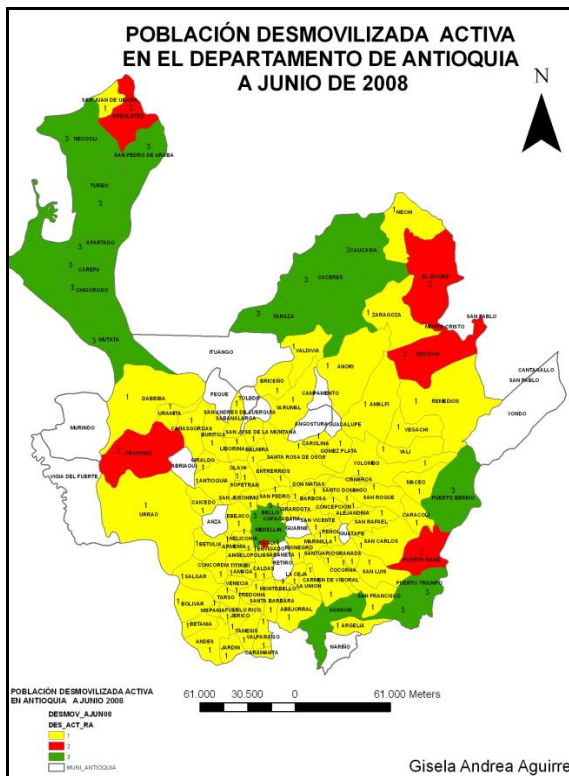
Fuente: Mapa del Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia. 2001.

Nota: Modificación del mapa administrativo de Antioquia, Gobernación de Antioquia con mapeo de datos suministrador por la Dirección de la policía Antinarcóticos Bogotá a diciembre de 2008; El Observatorio de DD.HH. de la Vicepresidencia de la República a diciembre de 2008 y Alta Consejería para la Reintegración en Antioquia a junio de 2008.

9.1 Estado de la población desmovilizada de las AUC en Antioquia y la incidencia del narcotráfico en el proceso de reintegración

El programa de la Alta Consejería para la reintegración ha categorizado el estado de los excombatientes en activos, inactivos⁴⁶, detenidos y muertos.

Figura 5
Concentración de la población desmovilizada de las AUC en el Departamento de Antioquia a junio de 2008



Tras el proceso de desmovilización de las AUC, la población total nacional desmovilizada fue de 46.181. De allí 24.689 son desmovilizados colectivos de las AUC, de los cuales el 70% se encuentran activos en el programa de reintegración de la Alta Consejería para la Reintegración a junio de 2008, el 4% están muertos y el 21% se encuentran por fuera del programa por razones desconocidas.

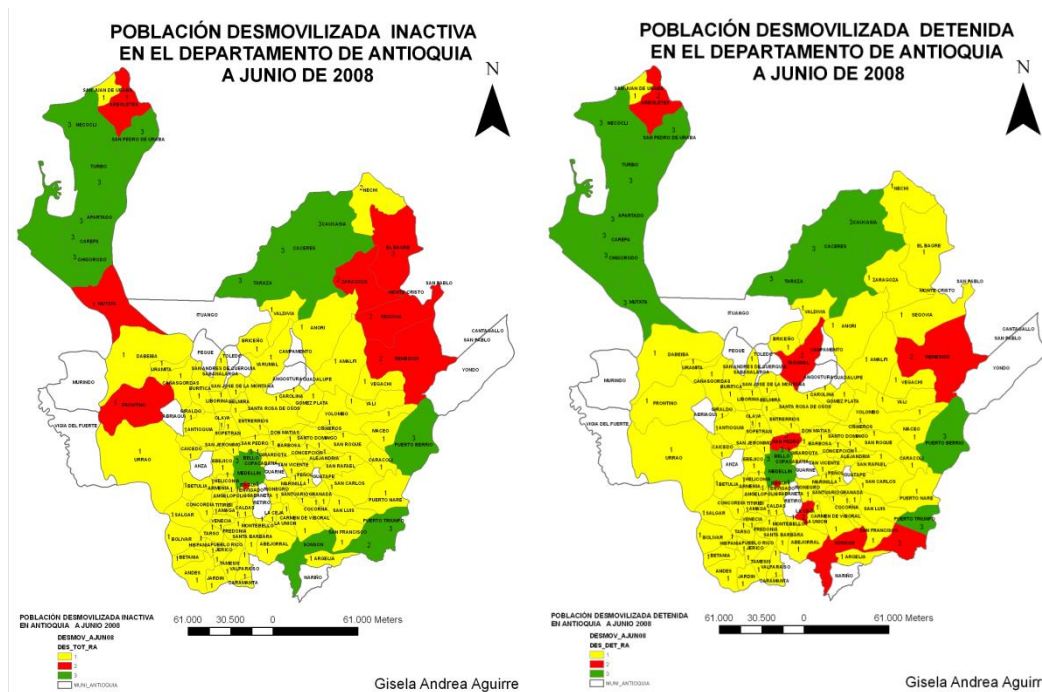
Por su parte el departamento de Antioquia representa el 25% del total de la población desmovilizada del país, de la cual sólo el 6% son mujeres. Sólo el 10% de la población desmovilizada del departamento corresponde a desmovilizados individuales; generalmente de las guerrillas de las FARC y el ELN, y el 90% -10.312 hombres y mujeres- restante corresponde a personas desmovilizadas durante los actos colectivos de desmovilización de las AUC (figura 5).

De 10.312 ex AUC que hacen parte del programa de reintegración del departamento, a junio del 2008, el 74% se encontraban activos, un 4% ha fallecido; la mayoría de ellos por homicidio y el 5% se encuentran detenidos. Finalmente, el 16% de ésta población se encuentran inactivos o por fuera del programa, lo cual representa el 23% del total nacional de inactivos.

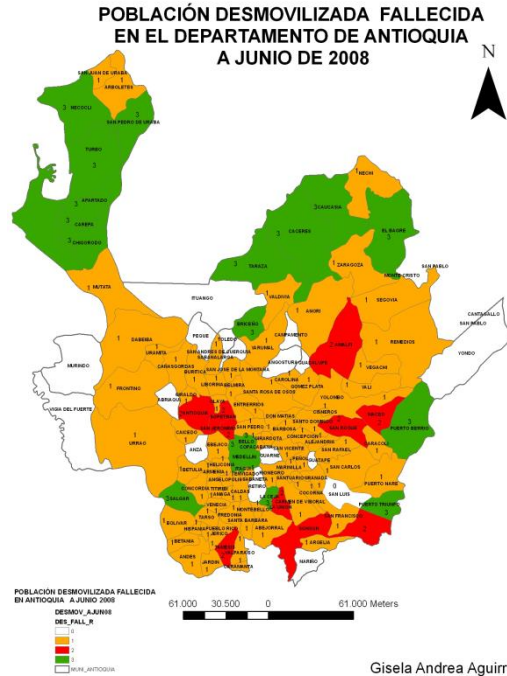
⁴⁶ La ACR entiende por Activos a los excombatientes que han participado en al menos una actividad psicosocial en los últimos tres meses. Por inactivos comprende las personas que no han asistido a las actividades psicosociales en los últimos tres meses.

Lo anterior significa que el 26% de la población ex AUC colectiva por reintegrar en el departamento se encuentran por fuera del programa DDR, bien sea por detención, muerte, retiro voluntario⁴⁷ o reincidencia en el uso ilegal de armas, y el 74% continúa activo dentro del programa a junio de 2008 (figura 6).

Figura 6
Mapa del Estado de la población desmovilizada de las AUC en Antioquia

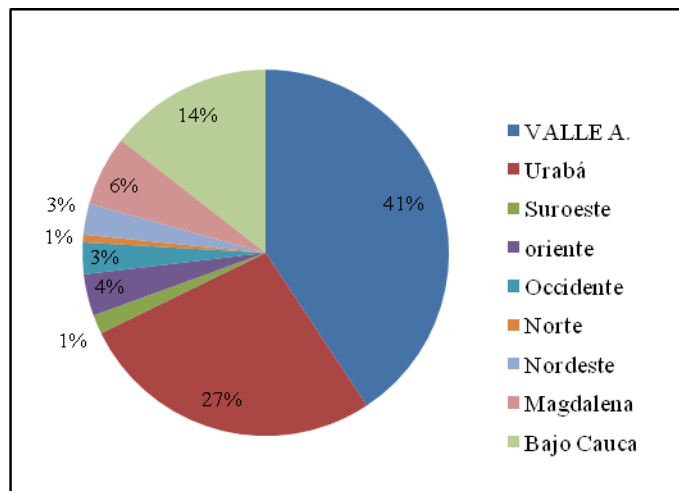


⁴⁷ De acuerdo con altos funcionarios de la ACR Regional Antioquia, puesto que la reintegración no tiene un periodo determinado para finalizar el proceso de cada participante, más allá del que determina la ruta de reintegración, un grupo de 125 excombatientes han firmado acta de retiro voluntario del programa.



En relación con el total de la población de cada subregión, son el Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio las subregiones que tienen las tasas más altas de concentración de excombatientes por 100.000 habitantes, seguidos por el Norte, Nordeste, Occidente; y en menor porcentaje Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste (gráfico 5).

Gráfico 5
Ubicación de la población desmovilizada de las AUC en el departamento de Antioquia



Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos ACR Antioquia. 2008.

En términos generales, de acuerdo con la categorización que se hace sobre el estado de los excombatientes de las AUC, el porcentaje de población activa, inactiva, muerta y detenida, evidencia un comportamiento medianamente similar en cada subregión excepto en el norte donde varía considerablemente el patrón de comportamiento. Sin embargo, es preciso anotar que un mayor número de población inactiva se registra en las subregiones del Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio (tabla 28).

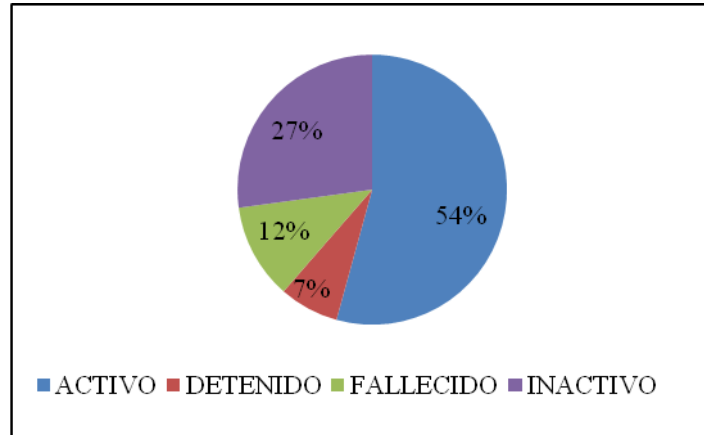
Tabla 30
Estado de la población desmovilizada colectiva dentro del proceso de Reintegración por subregión

SUBREGIÓN	ACTIVO	DETENIDO	FALLECIDO	INACTIVO
VALLE DE ABURRÁ	3300	230	196	470
URABÁ	1938	147	104	603
SUROESTE	125	9	11	28
ORIENTE	275	17	21	67
OCCIDENTE	241	6	10	30
NORTE	38	5	8	19
NORDESTE	204	12	8	58
MAGDALENA	454	48	27	112
BAJO CAUCA	1117	55	29	290
Total	7692	529	414	1677

Fuente: Datos ACR Antioquia. 2008.

Del total de población excombatiente colectiva de la subregión del Norte (70), el 27% se encuentran inactivos, el 12% muertos y el 7% capturados. Es la subregión dónde se registra el más alto porcentaje de excombatientes inactivos del programa DDR (Gráfico 6).

Gráfico 6
Estado de la población desmovilizada colectiva en el Norte a Junio de 2008



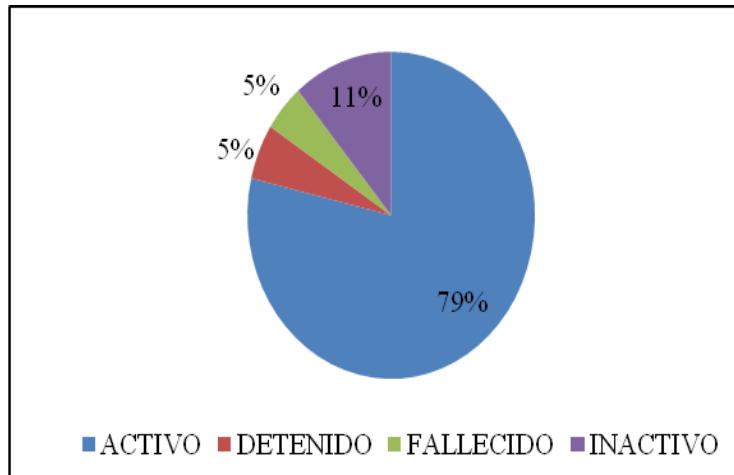
Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

El Valle de Aburrá concentra una población de 4.196 desmovilizados colectivos, 79% activos en el programa de reintegración, 11% inactivos, 5% capturados y 5% muertos (gráfico 7).

Después del Valle de Aburrá, el Urabá es la subregión que concentra el mayor número de población desmovilizada colectiva del departamento (2.792 ex AUC), de los cuales a junio de 2008 sólo el 70% se encontraban activos y el 30% restante por fuera del programa (4% muertos, 5% detenidos, 22% inactivos). Urabá registra un mayor porcentaje de población inactiva en relación con el Valle del Aburrá (gráfico 8).

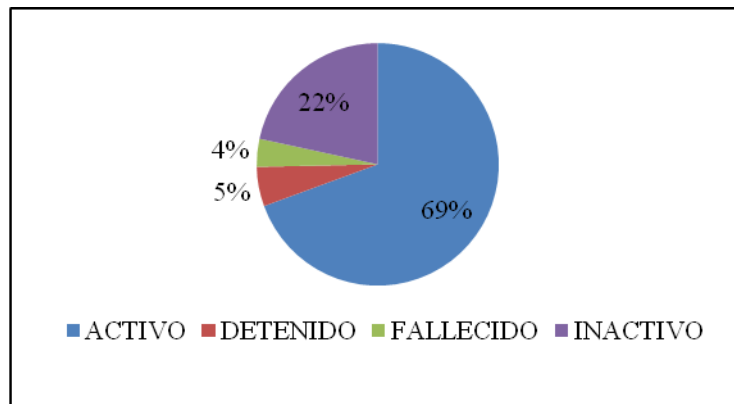
En el Bajo Cauca se concentra una población de 1.491 excombatientes colectivos, de los cuales el 75% de excombatientes se encuentran activos y el 25% restante por fuera del programa; 19% inactivos, 2% muertos y un 4% detenidos (gráfico 9).

Gráfico 7
Estado de la población desmovilizada colectiva en el Valle de Aburrá a Junio de 2008



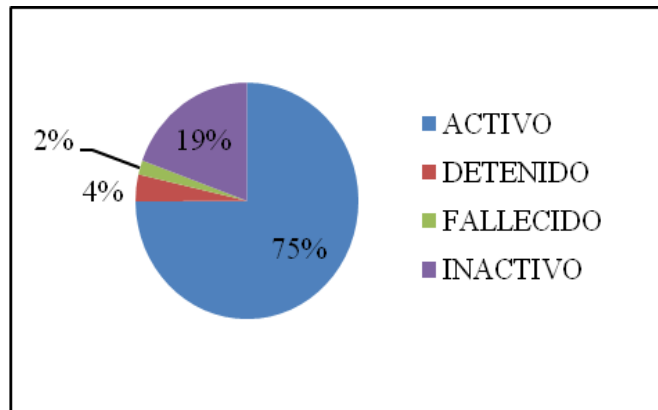
Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

Gráfico 8
Estado de la población desmovilizada colectiva de Urabá a Junio de 2008



Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

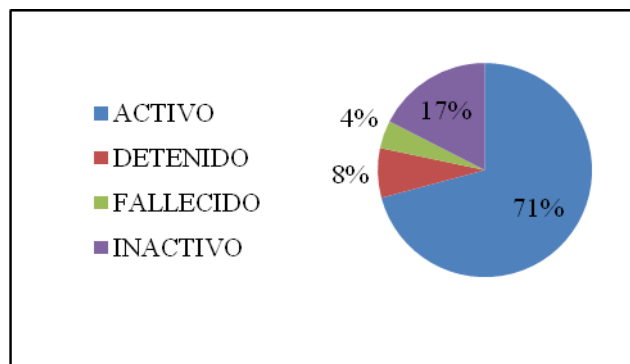
Gráfico 9
Estado de la población desmovilizada colectiva en el Bajo Cauca a Junio de 2008



Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

En el Magdalena Medio de 641 desmovilizados colectivos, el 71% se encuentran activos (gráfico), el restante 29% se encuentran por fuera del programa, lo cual la convierte en la segunda subregión, después de Urabá (gráfico 10), con mayor porcentaje de pérdida de excombatientes (17% inactivos, 4% muertos, 8% detenidos). Es la subregión que registra el más alto porcentaje de población desmovilizada detenida.

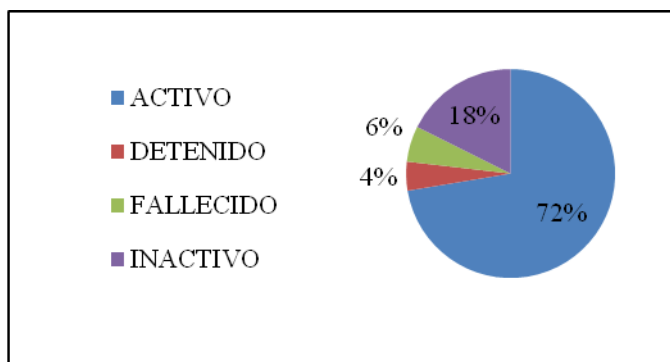
Gráfico 10
Estado de la población desmovilizada colectiva en el Magdalena Medio a Junio de 2008



Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

La población a reintegrar en el oriente es de 380 excombatientes, de los cuales el 72% se encuentran activos dentro del programa, el 18% inactivos, un 6% muertos y el 4% detenidos (gráfico 11).

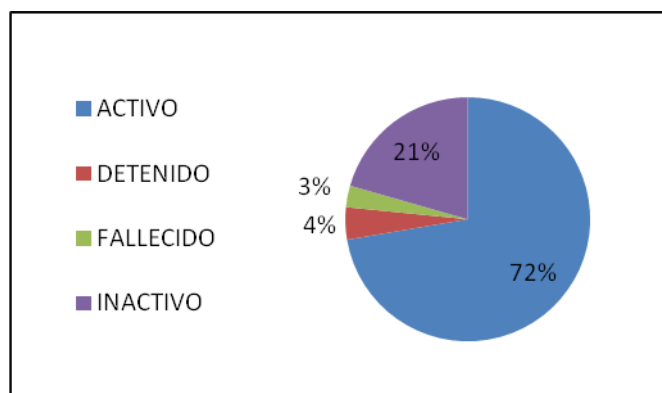
Gráfico 11
Estado de la población desmovilizada colectiva del Oriente a Junio de 2008



Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

En el Nordeste la población a reintegrar llega a 282 excombatientes, de los cuales el 72% se encuentra activo, el 21% inactivo, el 3% muertos y el 4% detenidos (gráfico 12).

Gráfico 12
Estado de la población desmovilizada colectiva en el Nordeste a junio de 2008

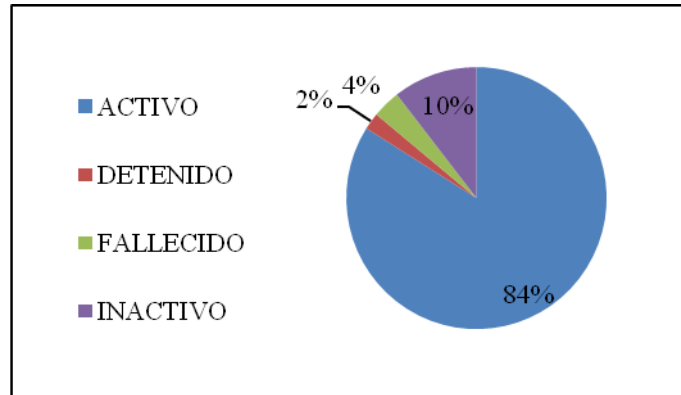


Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

En el occidente la población por reintegrar llega a los 287 excombatientes, de los cuales el 84% se encuentra activos dentro del programa de reintegración, el 10% se encuentra inactivo, un 4% ha fallecido y el 2% ha sido detenido (gráfico 13).

Gráfico 13

Estado de la población desmovilizada colectiva en el Occidente a Junio de 2008



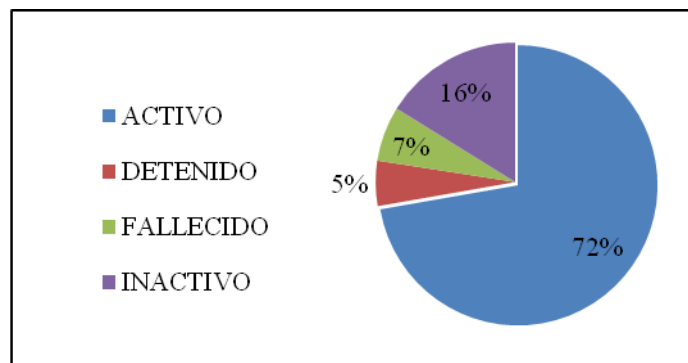
Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

Después del Norte, en la subregión del suroeste se encuentra el menor número de excombatientes por reintegrar. Registra un 16% de población inactiva, 7% muertos, 5% detenidos, para un total del 28% de población desmovilizada por fuera del programa.

Medido en términos de permanencia de la población activa dentro del programa, es la subregión del Occidente quien presenta mayores niveles de retención de la población desmovilizada. En general el promedio de población activa por subregión se encuentra alrededor del 72% y un margen de fuga de población del 17%. Sólo el occidente y el suroeste mantienen sus márgenes por debajo de dicho porcentaje. El resto de las subregiones lo exceden (gráfico 14).

Gráfico 14

Estado de la población desmovilizada colectiva en el Suroeste a Junio de 2008

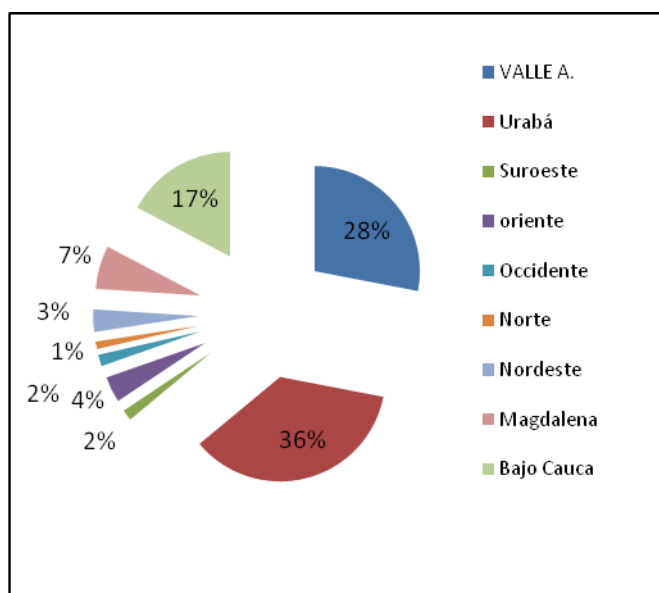


Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

El 36% del total de la población inactiva del departamento corresponde al Programa DDR de Urabá, el 28% es de Medellín y el Valle de Aburrá, el 17% del Bajo Cauca, un 7% del Magdalena Medio y el resto se distribuye en las demás subregiones en pequeños porcentajes (gráfico 15).

Al cada vez más serio problema del narcotráfico y de la agudización de la violencia en el departamento, se suma que las zonas donde se presenta una mayor concentración de población desmovilizada, son los territorios duros de cultivos ilícitos y tráfico de narcóticos y armas, con la característica de que éstos se especializaron en el entrenamiento de combatientes para Antioquia y el resto del país. Adicionalmente coincide con que en éstas subregiones se presenta el mayor número de población desmovilizada inactiva.

Gráfico 15
Concentración Población Inactiva por Subregión a Junio 2008

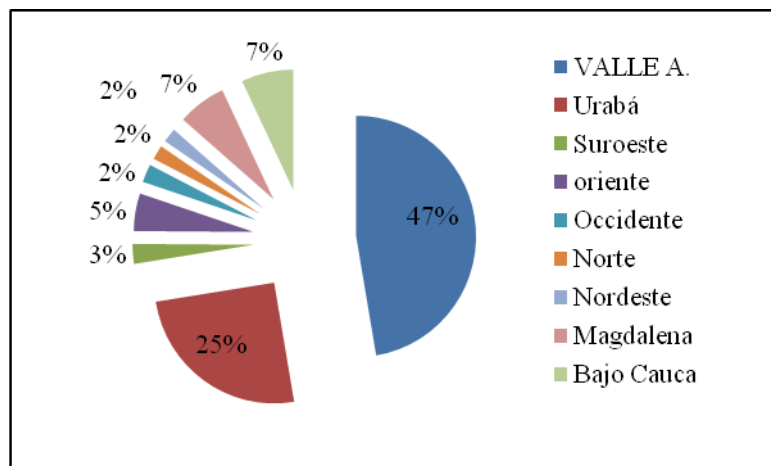


Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

En conclusión, son coincidentes las áreas geográficas que señalan los mapas de concentración de la violencia medida en homicidios; zonas de cultivo y tráfico ilícito y mayor concentración de población desmovilizada y población inactiva.

La muerte de excombatientes se ha incrementado en relación con los años anteriores, la mayoría de estas muertes obedecen a homicidios cometidos en Medellín, Urabá y en similares proporciones en el Magdalena Medio y Bajo Cauca. De acuerdo con los excombatientes, las muertes se producen en mayor proporción por: las operaciones que implican controlar las economías ilegales (narcotráfico, tráfico de armas, control de plazas de vicio y vacuna) y la vinculación de excombatientes en operaciones militares, que por el ajuste de cuentas entre sí (gráfico 16).

Gráfico 16
Lugar de concentración de las muertes de los excombatientes colectivos



Fuente: Cálculos de la Autora a partir de datos de la ACR Antioquia. 2008.

Hay dos poblaciones susceptibles al reclutamiento por parte del narcotráfico, la principal de ellas es la población desmovilizada, con un saber útil a las economías ilegales. La segunda es el reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad, el cual persiste en el departamento de acuerdo con la MAPP OEA (Informe MAPP OEA, 2009; p. 5).

Este panorama ha incidido negativamente sobre el proceso de reintegración de los excombatientes: Primero, se ha incrementado las amenazas efectivas de muerte sobre la población desmovilizada y sus familias.

Segundo, los excombatientes y sus familias se han visto obligados al desplazamiento hacia otras subregiones o fuera del departamento buscando invisibilizarse para ganar seguridad, dadas las múltiples amenazas y el ambiente de inseguridad. El constante desplazamiento de éstos y sus familias no facilita la construcción de una nueva biografía atada a un territorio en el que procuren hacerse a algunas oportunidades, y por tanto un obstáculo para la reintegración y la reconciliación. Estos casos fueron referidos especialmente en las subregiones del Norte, Urabá y Magdalena Medio y fuertemente en Medellín.

Tercero, la reincidencia de excombatientes que han vuelto a hacer parte de estructuras delincuenciales bien por presiones del narcotráfico, o por la capitalización de los viejos aprendizajes.

Cuarto, el hecho de que algunos excombatientes le estén haciendo doble juego al proceso de reintegración, asistiendo a algunas actividades del programa y delinquiendo. Aparentemente, esta última expresión del problema se presenta como una forma de mantener indicadores aceptables que no presionen demasiadas reformas en la política de reintegración y por otro hacer actividades de control sobre el resto de la población desmovilizada.

Y quinto, con la extradición de los Jefes paramilitares que controlaron el poder federado del paramilitarismo, se acelera la proliferación de bandas delincuenciales de diversa composición: combatientes que no se desmovilizaron, nuevos reclutamientos, reincidentes o emergentes, que en último término dan origen a nuevos ciclos de violencia articulada a viejas prácticas ilegales. Las Bandas criminales o pequeñas estructuras armadas en el departamento, concentran tareas de control de pequeños territorios; la mayoría de ellas, al servicio del narcotráfico, el control del mercado interno de estupefacientes; y la reproducción de aprendizajes sobre el funcionamiento de actividades delictivas rentables como la vacuna, extorsión y control social. Su perpetuación se da a partir de un código de sucesión del ejercicio del poder sobre la dirección de la banda con la muerte del jefe, así las jefaturas se suceden de aprendiz en aprendiz, lo cual es funcional al enrolamiento permanente de nuevos jóvenes.

De esta manera el narcotráfico se configura como la principal amenaza al proceso de reintegración, y deja al descubierto cuando menos debilidades en dos niveles del proceso de Reintegración. Por un lado, en la formulación y aplicación de la Política Nacional de Reintegración, y por otro lado, en los pilares de apoyo al proceso DDR para la concentración del uso legítimo de la violencia en manos del Estado, concernientes a la reforma a la justicia, a las Fuerzas Militares y demás reformas a los marcos dinámicos y estáticos de las instituciones y la función pública sobre todo en el ámbito subnacional.

La falta de garantías a la seguridad física de los excombatientes y los obstáculos para la reintegración económica hace que la Política de Reintegración no compita con los incentivos que ofrece el narcotráfico, ésta se enfrenta con las formas de coacción del narcotráfico y sus poderosas ofertas económicas, lo que termina configurando fuertes amenazas a la reintegración y desafía la rigidez de la Política de Reintegración Nacional. Las estructuras armadas del narcotráfico generan diverso tipo de incentivos sobre los excombatientes para presionar el alineamiento de recursos y lealtades, que van desde la amenaza a su vida y la de sus familiares, hasta provocativas ofertas económicas. Los fuertes incentivos del narcotráfico sobre la población desmovilizada y la sociedad en general no facilitan los procesos de reintegración. En el mejor de los casos, los excombatientes optarán por invisibilizarse para abandonar la guerra definitivamente, aún cuando ésta permanentemente vaya a su encuentro, en los casos en que pudieran representar mano de obra calificada o alguna amenaza para el negocio.

9.2 Pervivencia de contextos de ilegalidad y la influencia local del actor armado

La pervivencia de estructura armadas y economías ilegales se encuentran profundamente ligadas a los contextos locales en los que la ilegalidad se ha arraigado en las formas de ser del Estado local. Pareciera ser que a diferencia de las zonas nucleares antioqueñas que históricamente han comportado el centro del desarrollo económico y político del departamento, logrando consolidar economías agrícolas e industriales fuertes (Roldán, 2007), el fortalecimiento actual de economías ilegales en Antioquia, se consolidó, en las regiones que históricamente han estado en la periferia del desarrollo del departamento, y que sólo tardíamente fueron vinculadas con sus propias prácticas políticas, sociales, económicas y culturales.

Así pues, la pervivencia de estructuras armadas se encuentra vinculada al grado de consolidación de autoritarismos locales, expresados en la capacidad del actor armado para sostener alianzas con autoridades cívicas y militares, controlar la política y las instituciones del Estado local, implantar formas de obediencia y de instrumentalizar modelos de funcionamiento de la economía y el orden social con arreglo a las instituciones democráticas; es decir que hace semblanza democrática acomodada a intereses privados, para lograr garantizar otras articulaciones y alianzas supra locales necesarias a sus intereses. Lo cual se presenta de maneras diferenciadas en los diferentes territorios.

En algunos casos, la condición de los gobiernos locales como ordenadores del gasto y no del Estado Social de derecho en lo local, ha facilitado la corrupción de las instituciones por parte del actor armado, cuando no ha sido por la vía de la utilización de los procesos político-electorales para la ocupación directa de los cargos de gobierno. Ambas vías instalan prácticas ilegales de cooptación y transformación de lo público que se normalizan e instalan como una forma de operar lo público.

La cooptación del Estado local; entre otros vínculos, resultó supremamente relevante en la exploración y actual consolidación de economías ilegales. En municipios y subregiones donde el cultivo y tráfico de narcóticos no es central, se desarrollan otro tipo de actividades ilícitas en torno a las cuales se da la organización delictiva tales como el control de plazas, la extorsión y la vacuna.

Subregiones como el Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, presentan una impresionante capacidad de readaptación de las formas ilegales al servicio de economías privadas, con un marcado carácter mafioso con una alta capacidad corruptora, de cooptación de lo público, de injerencia en las economías lícitas, y sostenimiento de prácticas de control social.

La expresión del fenómeno es notablemente diferente en subregiones como el oriente y el suroeste, donde la actividad de las estructuras narcotraficantes en la producción y tráfico es menos relevante en contraste con otras subregiones. El desarrollo económico de estas

subregiones es más sólido y gira en torno a procesos históricamente planificados. Allí, los actores armados no lograron consolidar de manera generalizada sus alianzas con el sector público para la extracción de economías ilegales a las cuales hoy ata su existencia; y existe un mayor nivel de organización e incidencia de la sociedad civil articulada a procesos históricos de participación ciudadana.

La pervivencia de contextos altamente permisivos con la ilegalidad, dan cuenta del ambiente poco favorable de algunos territorios en los que se está llevando a cabo el proceso de reintegración de un buen número de excombatientes. Pero además, alude la responsabilidad directa del gobierno nacional en la implementación de acciones complementarias a la desmovilización y el desarme para desestructurar las alianzas sobre las cuales se sostienen las actividades ilícitas que abren la oportunidad de pervivencia de contextos de ilegalidad de los que hoy se vale el narcotráfico.

El incremento en los índices de violencia, la proliferación en el departamento de actos delictivos y actores armados difíciles de tipificar, y que están al servicio del narcotráfico y la pervivencia de alianzas favorables a actores ilegales, amenaza seriamente el proceso de reintegración y por supuesto evidencia una crisis estructural del mismo.

De los resultados efectivos de la política gubernamental para romper con la inercia de los contextos ilegales, más allá de las respuestas exclusivamente militares y asistencialistas que transformen los factores estructurales de la pobreza; la lucha contra la corrupción política, las alianzas de las autoridades cívico militares y sectores de la economía con actores armados; que en conjunto sostienen los contextos de ilegalidad y amenazan la democracia, dependerá que se haga transición hacia la seguridad, estabilidad política, la confianza en el Estado de derecho ó hacia formas más sofisticadas del conflicto armado.

10. ORIGEN E IDENTIDAD DE LA VIOLENCIA PARAMILITAR.

Una propuesta interpretativa del DDR

Siguiendo la pista de la teoría interpretativa de la violencia en la guerra civil de Stathis Kalyvas, es posible aseverar que normalmente los modelos de Desmovilización, Desarme y Reintegración, responden a una comprensión generalizada de la guerra como un conflicto entre actores antagonicos, para el cual opera una “narrativa” que explica las razones centrales de la confrontación armada, describe los actores y la ideología que orienta sus acciones de acuerdo con el objeto central de la confrontación, generalmente respondiendo a la pregunta ¿qué causa la guerra civil?. Sin embargo, tal como se ha visto ello no garantiza el cese de la violencia, ni la continuidad o activación de nuevas expresiones armadas. En tal sentido, la formulación de operaciones DDR consecuentes con las dinámicas particulares de la guerra en los contextos locales deberá atender la pregunta por ¿qué causa la violencia en la guerra civil?

La guerra civil no es un simple conflicto binario entre paramilitares de un lado y la guerrilla del otro, diseminado de manera lineal y ordenada hacia lo largo y ancho del territorio nacional, generalmente ésta entraña una combinación confusa de identidades y acciones, al punto de ser definida por dicha mezcla (Kalyvas, 2004). Tal como acabamos de señalar, la manifestación empírica del paramilitarismo en las diversas regiones del país y aún dentro del departamento de Antioquia evidencia rasgos diferenciales. Más aún, la identidad de los actores en confrontación podía variar de región en región sin que ello se encontrara en lo fundamental tan determinado por la composición de los ejércitos paramilitares, la variabilidad de los apoyos del ejército militar legal, o la identidad de la acción contrainsurgente, como por las particularidades de los conflictos regionales en los cuales se articuló la acción paramilitar.

Esto significa que la acción paramilitar se articula a problemas locales ó intereses particulares de actores de los territorios donde actuó, promoviendo la “acción conjunta” entre actores locales y paramilitares. De manera que, la identidad del paramilitarismo en lo local se encuentra definida por la aparente mezcla masiva aunque variable de identidades y acciones subyacentes a los conflictos locales en que articuló su acción armada.

Así, la interacción entre la naturaleza del paramilitarismo a nivel nacional –catalogada como una lucha contrainsurgente- y los conflictos locales se sitúa la fuente de ambigüedad del conflicto armado, que no puede ser explicado en los contextos particulares a partir de los objetivos centrales del proyecto armado. Para el caso de Antioquia, es posible evidenciar varios rasgos característicos entorno al narcotráfico y la extracción de rentas ilícitas, la lucha contrainsurgente, el mercenarismo corporativo (Duncan, 2005; Sánchez, 2005; Romero, 2003; Kalyvas, 2006; Franco, 2003; Duncan, 2005). Todos rasgos del mismo fenómeno que podrían variar o acentuarse unos sobre otros de territorio en territorio.

Esto supone una disyunción entre la identidad y acción del paramilitarismo a nivel central e identidades y acciones de los paramilitares a nivel local, observable a través de las “acciones en terreno” del actor armado, más vinculadas con asuntos locales o privados que con la confrontación dominante de la guerra, y el aprovechamiento de individuos locales para arreglar sus conflictos en nada relacionados con los objetivos centrales de la guerra. De este aspecto fundamental se deriva la ambigüedad de la guerra, de la dinámica que se genera entre la comunidad y el actor armado, que a menudo abre amplias posibilidades para que conflictos preexistentes se resuelvan a través de la acción violenta del actor armado.

Sin embargo, la identidad del actor armado se encuentra en extremo determinada por las oportunidades que le abrió a conflictos o problemas en los territorios en particular; es decir, que el paramilitarismo sirvió como catalizador de intereses, conflictos locales/subregionales que determinaron el rasgo característico de su identidad en tales territorios, echando mano de recursos y símbolos para aliarse con actores que luchan por conflictos locales. En todo caso, la identidad del actor armado se determina por el conflicto o interés local más relevante con el que se articula y en tal sentido las acciones paramilitares se relacionan más con los asuntos locales y privados que con la confrontación dominante en el centro. Incluso en oportunidades la confrontación dominante termina en exceso diluida.

Tales conflictos locales con los que se articula el actor armado no siempre son de carácter público, muchos de ellos son de carácter privado y a menudo expresan intereses mezquinos y oportunistas de la presencia del actor armado para resolver conflictos e intereses privados. Algunos han sido trayectorias de conflictos históricos que han mutado su manifestación. Otros tienen que ver con intereses en torno a oportunidades rentísticas estratégicas que brinda el territorio para lo cual se puede valer del control armado del actor sobre el territorio y la población. O simplemente conflictos o intereses locales estratégicos que le ofrecen al actor armado la posibilidad de ejercer un control más eficaz sobre el territorio.

Esos conflictos locales tienden a desaparecer o enmascarse bien dentro de la escisión nacional, lo cual significa la politización de dicho conflicto dentro del conflicto nacional; pueden convertirse en parte de la “narrativa” que explica la presencia del actor armado en dicho territorio y en tal sentido operar como el objetivo del paramilitarismo, lo cual implica que la escisión local pierde autonomía y se convierte en una manifestación local de la escisión maestra que sustenta el paramilitarismo. Más importante aún para el objeto de análisis es que pasada la negociación con el actor armado ramificaciones de la escisión central o escisiones locales que llegaron a politizarse dentro del conflicto nacional en los determinados territorios continúen activas.

La articulación entre ejércitos paramilitares y locales se presenta mediante el mecanismo de la alianza, a través del cual múltiples actores de identidades disímiles producen acción conjunta producto de transacciones. La alianza explica la presencia de varios actores y no únicos – ó solamente armados-; la acción localizada tanto en el centro como en la periferia y una variedad de preferencias e identidades que motivan la acción paramilitar en vez de una única articulada a la acción contrainsurgente. La observación empírica deberá dar cuenta de las modalidades a través de las cuales se ligan los distintos actores en la acción conjunta con el ejército paramilitar y las motivaciones. Una vez que la guerra ha terminado,

la “narrativa central” de la escisión brinda un camino para simplificar, perfilar y cubrir las ambigüedades y contradicciones de la guerra, incluso el papel de las alianzas Duncan, 2005; Sánchez, 2005; Romero, 2003; Kalyvas, 2006; Franco, 2003; Duncan, 2005).

Las escisiones locales tienen un impacto importante en la distribución de las alianzas, en el contenido, dirección e intensidad de la violencia desplegada. La vinculación del actor armado con las escisiones locales sobre agregan violencia al conflicto armado; podría decirse, que producen un “plus” de violencia sobre aquella violencia que se deriva de la confrontación armada dominante.

10.1 Seguimiento a las dinámicas de la violencia armada: ¿Qué causa la violencia paramilitar?

El valor analítico del esbozo teórico de Kalyvas (2004), radica en la posibilidad de abordar el fenómeno de la violencia más que como una consecuencia directa de la confrontación armada entre dos actores antagónicos ó la guerra civil, como la producción de acción conjunta entre el actor armado y otros múltiples actores de variadas identidades, con intereses articulados con el objetivo central del proyecto armado o no, en lo local. Lo cual resulta crucial tanto para el diseño de operaciones DDR, como para su seguimiento en el ámbito local, en tanto implica abordar la secuencia dinámica de decisiones y hechos que se combinan entre sí para producir actos de violencia, así como los actores invisibles partícipes de dicho proceso sin ser víctimas o victimarios⁴⁸, en el sentido de que no padecen directamente las acciones violentas, ni las ejecutan, pero participan en la distribución de la violencia (contenido, dirección e intensidad).

Una premisa importante es que la guerra civil ofrece una excusa para que múltiples conflictos locales preexistentes o nuevos salgan a flote y se resuelvan a través de la violencia armada, conflictos que en tiempos de paz posiblemente no utilizarían la violencia armada. La segunda es que la característica definitoria de la guerra civil es la soberanía escindida y por lo menos dos actores competirán por el monopolio por la vía del desafío armado. La tercera alude a la competencia entre actores armados por el apoyo de la población civil, dado que su colaboración es un componente determinante de los resultados del conflicto, moldeada por incentivos selectivos materiales o ideológicos, o uso extremo de la violencia a medida que la guerra se intensifica.

En este sentido, la violencia paramilitar tiene dos orígenes estrechamente vinculados. El primero de ellos tiene que ver con la violencia producto de las alianzas con actores locales, el segundo tiene que ver con la violencia que se produce de acuerdo con los intereses de controlar los territorios o pretensiones de soberanía. Sin embargo, dicho vínculo resulta

⁴⁸ Desde el enfoque que tradicionalmente se abordan los estudios sobre la violencia tendientes a polarizar los actores en las categorías generales de víctimas y victimarios.

bastante ineludible, dadas las necesidades de interacción con la vida local para la efectiva imposición, ejercicio y consolidación del poder hegemónico⁴⁹.

La violencia que se genera como producto de la confrontación armada en la guerra civil, supone por lo menos dos actores en disputa y pretensiones de soberanía o control de territorio, la población puede actuar como partícipe de las oportunidades o es obligada a transferir su lealtad y sus recursos al actor armado. De fondo esto supone que la guerra civil desata competencias por la soberanía entre actores armados.

El seguimiento a la violencia paramilitar se centra por un lado en el análisis de las dinámicas locales desde la dimensión espacial de las estrategias del actor armado por el control territorial, aquello que lo amenaza y la incidencia de las dinámicas intracomunidad. Por otro, la distribución de alianzas locales que determinan el contenido, dirección e intensidad de la violencia paramilitar a lo largo del tiempo, o dinámica de la guerra, esto es, cómo y porque la gente se une o huye, cómo se ejecuta la violencia, cómo operan los mecanismos que desatan la violencia, etc.

La definición del control hegemónico sobre el territorio determina las estrategias del actor armado y la intensidad de la violencia que ejercerá sobre la población civil; es decir, que la violencia aparece cuando el control efectivo de los territorios está en riesgo. El modelo plantea tres hipótesis sobre la variación espacial de la violencia:

- En presencia de soberanía absoluta es probable que la violencia sea limitada, selectiva o indiscriminada y la ejerza el actor armado hegemónico.
- En ausencia de soberanía posiblemente la violencia sea masiva e indiscriminada en ejercicio de quien no es soberano.
- Cuando la soberanía es fragmentada la violencia podría presentarse de manera masiva y selectiva en ejercicio de los actores armados enfrentados y limitada donde existe un equilibrio de poder. En el primer caso es bastante probable que la población se vea obligada a tomar partido.

Generalmente esta la violencia que se ejerce en razón de la consolidación o protección de su control sobre el territorio utiliza la forma de desapariciones, masacres, torturas, homicidios, escarmientos, etc. Como se ha dicho la violencia indiscriminada dependerá de la disposición de información para ejercerla con mayor eficacia y en tal sentido con menor severidad. Este tipo de violencia es ejercida directamente por el actor armado como

⁴⁹ Kalyvas, advierte sobre el riesgo de un enfoque de análisis de la generación de la violencia fundamentado exclusivamente en las escisiones fallaría tener en cuenta los niveles de persecución o –intensidad de la violencia–, dado que las escisiones locales pueden ser compatibles tanto con una escalada de la violencia cuando las facciones opuestas tratan de tomar ventaja, y con moderación cuando cuentan con los medios de efectuar arreglos locales, pueden anticipar cooperación futura y acudir a una política de grupo efectiva en orden de prevenir una escalada descentralizada.

producto de los objetivos centrales de la confrontación contra un ejército enemigo, con la intención de generar escarmiento, aleccionar a la población y someter sus lealtades.

10.2 Dinámicas Intracomunidad

Por apoyo popular se entienden las acciones de colaboración exclusiva con uno de los actores políticos, sus motivaciones son múltiples y variables; sin embargo, el mayor incentivo se encuentra motivado por la supervivencia, independientemente de las preferencias iniciales, las cuales estarán en extremo condicionadas al poder desplegado en torno suyo.

Típicamente se considera que el apoyo popular es exógeno a la guerra, sin embargo éste se puede redefinir en función de la dinámica tanto de la guerra como de la violencia. Quienes detentan el poder despliegan acciones para privar al actor antagónico del apoyo civil a través de la imposición de medidas draconianas o castigos ejemplarizantes para los colaboradores. ¿Hasta qué punto la población que se encuentra bajo el dominio del poder de uno u otro actor tiene opciones distintas a colaborar con el actor armado dominante?.

Partiendo de la idea de que el actor armado procurará el ejercicio mesurado de la violencia por lo contraproducente que puede resultar el caso contrario para el sostenimiento de la lealtad de los civiles, el ejercicio de la violencia en buena medida dependerá del grado de información disponible al interior de la comunidad para el efectivo ejercicio del control hegemónico.

Sin embargo, el ejercicio de violencia selectiva requiere obtener información confidencial que se encuentra distribuida entre la comunidad de manera asimétrica, a la cual accederá el actor armado a partir de las dinámicas intracomunidad, lo cual implica que la aplicación de violencia selectiva es el resultado de la acción conjunta entre los locales y los armados que expresan compromisos y transacciones (Kalyvas, 2001).

Los locales deciden suministrar o no información sobre los trasgresores, denunciar o no tiene como incentivo básico de la supervivencia; en ausencia de información la violencia tiende a ser indiscriminada. Sin embargo, a medida que el actor armado combina incentivos selectivos (entre la violencia, bienes materiales ó ideológicos). La amenaza de la violencia indiscriminada disminuirá en la medida en que las relaciones intracomunidad facilitan un control compartido que se fundamenta en el poder de la información que ésta posee. Sus funciones van desde el recaudo de impuestos, hasta el control cabal de los movimientos al interior de la comunidad, la producción de listas “negras”, etc. Y en todo caso, ello deja en evidencia la capacidad de los agentes locales de ejercer poder de veto sobre el contenido, dirección e intensidad de la violencia.

Pero la denuncia no sólo brinda beneficios selectivos (resolver conflictos o intereses personales, adquirir status, recibir pago, etc), también implica riesgos que los cooperantes deberán sopesar, el más recurrente la venganza y la retaliación. En fin, la dinámica intracomunidad estará determinada por el juego entre control – ejercicio de la violencia –

disputa del control, en la que todos los actores juegan el juego de la sobrevivencia y la extracción del máximo beneficio.

10.3 Actores e Identidades que intervienen en la generación de la violencia local

A la tendencia a localizar la acción de la violencia en relación con la escisión central del conflicto armado, se sigue que la violencia se expone como una imposición del actor armado sobre los civiles. En tal sentido, los civiles son entendidos como objeto pasivos y no sujetos activos de la violencia.

Como se ha dicho, la identidad local del actor armado se puede establecer a partir de los conflictos, problemas locales ó escisiones locales que determinaron sus intereses y motivaciones para la acción en terreno, más que con la confrontación dominante de la guerra en general, lo cual supone una disyunción entre las identidades, motivaciones y acciones a nivel central y a nivel local, sin que deje de existir interacción entre los actores centrales y locales o cadena de mando.

Lo que se pone en evidencia a partir de la interacción de la escisión central y las escisiones locales, es que la violencia no es única y exclusivamente impuesta sobre las comunidades por extraños, y con frecuencia crece desde el interior mismo de las comunidades aún cuando ésta sea ejecutada por forasteros. Sin caer en el riesgo de restar responsabilidad a los actores armados sobre la ejecución de la violencia, los agentes locales, a menudo, participaron en la producción de la violencia, actuando como “instigadores” que sacaron ventaja de la presencia del actor armado para sus intereses particulares, a veces resistieron al ejercicio de la violencia y el control, colaboraron con simpatía con el actor armado y/o, fueron sometidos, sin que estas posiciones se mantuvieran estables, ni alineadas claramente a lo largo del tiempo.

En tal sentido los actores pueden ubicarse en la cima de las escisiones locales, de los cuales un proceso de desarme y desmovilización sólo opera sobre el ejército armado: jefes y tropas, excluyendo con frecuencia otras redes; aún cuando, las identidades de los agentes que produjeron la violencia no se derivan exclusivamente de los aspectos más visibles de la escisión central. Por su parte, la reintegración no puede fallar en la identificación de redes de apoyo locales, y otros agentes locales particularmente relevantes en la producción de la violencia, aquellos que participaron en la selección del contenido, dirección e intensidad de la violencia articulada a intereses que más allá de la desmovilización de los ejércitos permanecen susceptibles de activar un nuevo ciclo de la violencia bajo nuevas identidades.

Ello nos recuerda que la guerra civil en lo local se define por la ambigua mezcla de identidades - de actores grupales y unitarios, internos y externos-, y acciones. Otros actores de mayor relevancia en el “astillamiento” de la autoridad local, fueron quienes actuaron como facilitadores, promotores o financiadores de la acción armada. Los cuales también varían de acuerdo con el ámbito territorial en el que opera el conflicto armado.

Con frecuencia actores locales logran dirigir la violencia contra sus enemigos informando sus intereses en el lenguaje de la escisión maestra. La violencia entre prójimos, el hecho de denunciar al vecino lo motiva la clase de enemistades mezquinas que constituyen la construcción de la vida diaria, que en condiciones normales, no conducen a la violencia homicida. Al respecto, dos implicaciones relevantes para el proceso de reintegración tienen que ver por un lado con el alto riesgo de deshumanización del otro que se corre a través de las iteraciones de la guerra. Y por otro, con la excesiva politización de la vida privada que finalmente conduce a la privatización de la política como forma de ser del Estado y que utiliza el poder del Estado para satisfacer intereses personales, con frecuencia de codicia.

10.4 El astillamiento del Estado de derecho y la configuración de autoritarismos subnacionales paramilitares

Comúnmente el Estado ha llegado a ser comprendido como un aparato estático e intangible en el cual reside el poder. Tal vez, una noción más útil para la abordar el problema de la corrupción, la connivencia entre actores legales e ilegales, la utilización de las “vías democráticas” para la privatización de lo público, es la que nos permite entender el estado como relaciones y la naturalización de ciertas prácticas que permiten vivir un orden determinado en la sociedad, no siempre con arreglo a valores democráticos.

Así, el ejercicio del poder que se le supone al Estado es lo que autoriza y legitima “las fronteras de lo posible” (Roldán, 2002; p. 51). La institucionalización de dicho poder se materializa a través de la obediencia de la gente, manifiesta en las prácticas reiteradas que con el uso y el tiempo se naturalizan y no se cuestionan. Es decir; que tales prácticas son lo que realmente fundamenta o da contenido al poder. La institucionalización de dichas prácticas puede relacionarse con el aspecto coercitivo del ejercicio organizado del poder, sin embargo, las prácticas de coerción también habilitan el contrapoder, y en este sentido la hegemonía del poder depende de qué tanto el desempeño mismo del poder es capaz de lograr que la gente tenga una vivencia de éste que no le permita interpelar tales prácticas (Sayer y corigan, 2002). La gente – aquellos a los que el Estado supuestamente domina, también moldean la práctica de la política; es decir que la gente constituye un cuerpo político. De manera que por Estado se entiende el ejercicio del poder hegemónico y la gente – el nosotros- constituye el cuerpo político.

Esta perspectiva donde el Estado se encuentra sujeto a constantes cambios y renegociaciones del poder, resulta mucho más productiva para el análisis del DDR, la comprensión de las alianzas y transacciones del paramilitarismo que generaron el astillamiento del Estado de derecho, cuáles fueron las prácticas de régimen / gobierno a lo largo del tiempo que construyeron y naturalizaron un determinado poder político local, los efectos de dicha naturalización y las maneras como aquellos a quienes el Estado supuestamente domina, también moldearon la práctica de la política y un determinado orden social, entendido como el conjunto de regularidades, normas y pautas soportadas en valores y jerarquías, que incluso pueden facilitar que unos se beneficien más que otros, que

unos manden y otros obedezcan, pero que es que es vivido y reproducido como orden fáctico (Escalante, 1993; p. 63).

De esta manera, en territorios donde el paramilitarismo se consolidó como poder hegemónico, operó transformaciones en los valores, procedimientos y prácticas de los ciudadanos en relación con el Estado de derecho; no siempre y de manera exclusiva a través de la violencia armada. El paramilitarismo asumió las funciones de protección y justicia, definición de los derechos de propiedad, tributación y organización de ciertos servicios sociales propios del Estado - *definiendo las fronteras de lo posible*-, y configurando autoritarismos subnacionales, a través de estrategias de control político y de construcción del poder más allá del ámbito militar – en el ámbito político, de construcción de bases sociales, y sólidas economías de soporte. Tal como se ha dicho, en Antioquia, el paramilitarismo consolidó autoritarismos sustentados en el control armado sobre los procesos políticos y sociales del territorio, y de economías ilícitas; y autoritarismos sustentados en el control de los recursos económicos y medios de producción.

Siguiendo la pista sobre la interacción entre el centro y la periferia, el éxito en la configuración de autoritarismos subnacionales paramilitares, estuvo determinado por la capacidad de articulación de su poder territorial con el centro, a través de interconexiones entre todos los niveles del sistema territorial nacional, en el entendido de que controlar el poder local requiere: controlar también vínculos en diferentes niveles de organización territorial; cerrar las oportunidades políticas a sus oponentes locales con el fin de reducir su poder local, incluso por la vía de la intromisión de externos que pudieran aliarse con la oposición; diseñar estrategias para extraer recursos del centro y para prevenir la intervención del centro en asuntos locales⁵⁰.

Todo ello da cuenta de vínculos entre niveles de gobierno y actores organizados territorialmente; la funcionalidad e interdependencia de las relaciones entre diferentes niveles de gobierno y condicionantes para el ejercicio del poder; y una variedad de formas en las que las élites políticas territoriales adelantan estrategias o medios para lograr otros objetivos. (Gibsson, 2006).

Las implicaciones del astillamiento del Estado de derecho y la configuración de autoritarismos subnacionales, en el análisis de la violencia paramilitar para la formulación de operaciones DDR en lo local, presupone de un lado, indagar por los medios y prácticas que el paramilitarismo utilizó para la legitimación de su poder; cuáles son los valores subyacentes; y las formas en las cuales transformó los Estado. Por otro lado, cuáles fueron los medios a través de los cuales adelantó estrategias de control político y de poder territorial, los mecanismos de articulación de su poder subnacional con el centro y los objetivos que persigue para su consolidación.

⁵⁰ Generalmente tales estrategias operan a través del control de posiciones de gobierno nacional en el poder ejecutivo, el legislativo o judicial, o formando *parte* de coaliciones nacionales que apoyan el ejecutivo nacional (Gibsson, 2006)

11. ORIGEN E IDENTIDAD DE LA VIOLENCIA PARAMILITAR EN EL SUROESTE.

Trayectorias de la violencia: Por la defensa del Orden Social.

La profundización en el estudio de caso del Suroeste parte de la observación de que para el análisis de las violencias que perviven tras la desmovilización resulta insuficiente un análisis coyuntural o exclusivamente del periodo que enmarca las negociaciones de paz y su desenlace. De tal manera se propone partir de las preguntas por la naturaleza de la violencia en su doble lógica de la violencia producto de la confrontación y de las alianzas entre actores colectivos e individuales; civiles, políticos y económicos con ejércitos armados, que expresan intereses y conflictos que utilizan la violencia como mecanismo para resolverlos. Se precisa anclar el análisis en dos aspectos fundamentales del conflicto armado. Por un lado, el surgimiento de éste, en la perspectiva de las escisiones locales e intereses que se resuelven a través de la acción armada y las decisiones y alianzas entre actores que producen conjuntamente la acción violenta. Y por otro, captar las continuidades- evolución y posibles trayectorias del conflicto.

En este sentido, el presente capítulo intenta situar brevemente la irrupción de la violencia en el suroeste a partir del surgimiento de movimientos sociales de tipo contestatario a finales de los 60's a propósito de los descontentos con el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos, que hasta el momento habían coexistían en condiciones de convivencia aceptables con medianos productores y una élite terrateniente. Este periodo es central en el devenir histórico de la violencia armada en el suroeste, sucedido por una cronología de acciones y alianzas por resolver la competencia entre el orden social de la "cultura cafetera terrateniente" y las amenazas que percibió en los movimientos sociales contestatarios del periodo.

La parentela como mecanismo a partir del cual se configuró la élite terrateniente cafetera como actor principal del poder regional y las formas mediante las cuales esta élite ejerce y legitima su poder, fueron claves en la preservación del orden social de la cultura cafetera y la configuración de lo estatal, sin embargo los mecanismos que implementó para preservar dicho poder tras el surgimiento de expresiones cívicas contestatarias han sido determinantes en la fragmentación del mismo y el surgimiento de otros poderes con efectos posiblemente no imaginados que introducen transformaciones en el orden social de la llamada "cultura cafetera".

10.1 La Economía Cafetera y los contornos del orden social

La colonización antioqueña en el suroeste; entendida como una modalidad de producción particular por medio de la cual se integran nuevas tierras al espacio del mercado, y como una forma de subsistencia para un grupo amplio de individuos, estuvo marcada por el interés de comerciantes urbanos en el sentido de acoger las recomendaciones sobre métodos para el cultivo de café; entre ella la creación de la Hacienda cafetera, la ampliación y expansión de la producción para la exportación; ente los cuales se ubica las familias Santamaría, Vásquez, Los Ospina, Echeverri, Madriñan, entre otras, de exportar café. De esta manera, comerciantes de las zonas de Girardota y el Valle de Aburrá amplían las fronteras de expansión agrícola del suroeste, propietarios de grandes extensiones de tierra, hacendados -mediante los sistemas de peones fijos, peones con ficho, aparceros, peones contratistas y cosecheros- y posteriormente exportadores de café. El interés sobre la producción del grano, posteriormente incentivaría el cultivo entre pequeños y medianos propietarios, tal es el caso de Don Mariano Ospina Rodríguez, de hacer sus primeras siembras en Fredonia, pasó a ser exportado y a donde trajo la primera despulpadora y trilladora, posteriormente invirtió en el negocio de la minería, participó en la fundación de una cervecería, refinanció la Ferrería, invirtió en textiles (Poveda, 1981; p. 115), como una tipología del *campesino empresario* del suroeste que bajo el ciclo de la acumulación introduce la diversificación de la inversión y la industrialización de procesos puesto en la base del desarrollo económico liberal, herencia de los *colonos comerciantes* del Valle de Aburrá.

La pequeña propiedad caracterizada por la existencia de pequeñas unidades domésticas, cuya extensión se ubica entre 3 y 5 hectáreas, logra subsistir en el campo con el trabajo familiar y participar de manera endeble en el mercado local, en este sentido la tenencia de la tierra es la primera condición que convierte el campesino en productor potencial. “La base de la caficultura campesina es la familia y la finca que forma una unidad inseparable: el trabajo en la finca y la producción de la finca satisfacer las necesidades de subsistencia de la familia. La producción depende de la cantidad de trabajo disponible, de la relación trabajo familiar por área cultivable y es función del consumo familiar y no de la ganancia. Igual acontece con la participan en el mercado: la finca produce alimentos para el autoconsumo y café para el mercado [...] los miembros de la familia no trabajan fuera de la finca, no necesitan jornaleros, pero tampoco la finca requiere trabajo familiar [permanente] (Poveda, 1981; p. 115).

Al hecho de que la categoría de explotación familiar no demande permanentemente de empleo de mano de obra, en tiempo de no producción, es preciso que la familia se emplee como jornaleros en la mediana y grande propiedad. Esta condición no se ve mejorada frente a la posibilidad del estrecho o inexistente margen de acumulación que sólo le permite acceder a créditos sobre el respaldo de la propiedad y/o la cosecha venidera. Ello se encuentra en el foco de las lógicas tempranas de concentración de la tierra en el suroeste antioqueño.

La etapa de 1910 a 1950 la caficultura en la subregión fue netamente campesina antioqueña no industrializada. En ésta se ubican la coyuntura más importante marcada por el descenso productivo del café que dio origen al flujo migratorio de la población rural hacia las cabeceras municipales y la ciudad. Los años de 1975 a 1977 enmarcan la bonanza cafetera con un alto beneficio para los cafeteros. Y de 1977 a 1980 transcurre un progresivo deterioro de la relación precios internos – jornales.

Del periodo de 1975 a 1977 tendió a predominar las explotaciones mayores a las 50 has, de 1977 a 1980 se recuperaron los minifundios más pequeños y las explotaciones familiares, las explotaciones medianas y grandes se estancaron o bajaron sensiblemente, mientras que las mayores de 100 has crecieron. Lo cual concentró la tierra en los extremos; es decir, las explotaciones de tierra entre las 0 y 10 ha. crecieron a expensas de la parcelación del centro y las de más de 100 has crecieron a expensas de la concentración de más tierras, siendo más democrática la distribución de la tierra en el resto de Antioquia.

Por otro lado, la mayor vinculación de la región⁵¹ al centro del desarrollo departamental y nacional se potenciaría con obras de infraestructura como la troncal del café, la troncal del occidente, el Ferrocarril de Antioquia. Los excedentes del café fortalecerían la inversión en actividades económicas de mayor transformación de materia prima, a través de la industria cervecera, la incursión en la industria textil, además de la explotación del carbón y el cemento como materias primas, a las que se vincularon capitales de las élites económicas de la subregión, fortaleciendo el circuito económico del carbón con la industria textil, cervecera y ladrillera.

Así el principal factor determinante en la configuración de los rasgos más importantes del orden social (Escalante, 1993; p. 63) en la subregión; entendido como el conjunto de regularidades, normas y pautas soportadas en valores y jerarquías, que incluso pueden facilitar que unos se beneficien más que otros, que unos manden y otros obedezcan, pero que es que es vivido y reproducido como orden fáctico, estaría vinculado a la influencia de la colonización antioqueña; dirigida por comerciantes y nacientes empresarios, cuyos valores representaban los de la familia nuclear antioqueña con una fuerte influencia de valores eclesiales y costumbres conservadoras, a pesar de que la filiación política mayoritariamente liberal. Percibida en el resto del país como negociantes y pragmáticos tecnócratas de la nación y el departamento, colonos pujantes y católicos a ultranza, obsesionados por hacer dinero.

⁵¹ El sentido que aquí prevalece sobre la región la considera como unidades territoriales intermedias en tanto su sustrato básico es el territorio; -construido éste a partir de la significación social, política y económica de un espacio a través de las relaciones entre los sujetos, con fundamentado en un sentido instrumental de su utilización para la vida práctica y la subsistencia por un lado, y por otro, un sentido simbólico de soporte de identidades colectivas e individuales⁵¹ -, y la sociedad mayor de referencia. Las regiones son unidades “bisagra” entre los territorios y otros territorios más bastos parte de una “comunidad imaginada” del Estado-nación, como totalidades sociales, políticas, económicas y culturales que establecen límites diferenciadores con el afuera.

Su poder político y económico como redes de poder, fue construido a través de parentelas⁵² o aprovechamiento de los lazos familiares para el ejercicio del control y la dominación social sobre la bases del poder de una economía próspera. En no pocas ocasiones el poder se ejerce como dominación social sobre el más pequeño productor o tenedor de recursos sin capacidad de competencia con el terrateniente o el dueño minero. Las formas de dominación consolidadas a través de la Parentela o los lazos familiares en articulación con los valores conservadores predominantes, llevaron a que las familias con mayor reconocimiento ocuparan el lugar de auxiliadoras del “menos pudiente” conllevando a su sometimiento por la vía de las lealtades, como una forma consensuales de reconocimiento y legitimación de una situación de poder, facilitando el mantenimiento y reproducción del mismo.

Las formas mediante las cuales se ejerce y legitima el poder de dicha élite familiar, fueron funciones típicas de la familia, tales como la obediencia filial, la protección paternal, el sentido de pertenencia, las solidaridades primarias, las lealtades y agradecimientos. Y por esta vía se dio paso a gamonalismos y a la formación de clientelas político – partidistas. El gamonal, como expresión de relaciones de las sociedades típicamente agrícolas, construye todo un entramado de fidelidades que hacen que su poder y capacidad de mando no sea cuestionado, pues de él depende la vida del pueblo, de la región. En los municipios típicamente cultivadores de café, donde la concentración de la tierra es mayor y se arraigo el monocultivo, el gamonalismo se constituyó en una forma del poder capas de incidir sobre el aparato administrativo del Estado y en el gobierno de un municipal - regional.

La forma particular de ejercicio de poder desde las redes parentales y su incidencia en la forma particular de ejercicio del poder del aparato administrativo del Estado, no tiene que ver con el funcionamiento de un cuerpo jurídico legal o con el acato de un determinado cuerpo legislativo, y generalmente se ejerce para favorecer la acumulación. Allí donde la competencia por el poder es escasa se observa un determinismo absoluto del poder gamonal sobre el ordenamiento de la sociedad, la economía y la política. Sin embargo, ello varía en los territorios de la subregión donde los municipios se encuentran más cercanos al Valle de Aburrá y existe una mayor competencia por los recursos, así como una mayor distribución de éstos y actividades económicas alternativas a la caficultura.

La bonanza cafetera condujo hacia el monocultivo y por esta vía a la posterior monopolización de los recursos como base de la concentración del poder, así en territorios donde la forma de producción agrícola rural tiene como referente el modelo empresarial arquetípico, el monocultivo tiende a generalizarse y transformar los patrones culturales de relacionamiento con la tierra: tierra para vivir – tierra para producir y enriquecerse. Lo cual le implicó a los pequeños productores dejar de cultivar alimentos para comer y llevarlos desde Medellín a elevados costos, especialmente para los pequeños agricultores, modelo de producción insostenible durante los tiempos declinantes del precio del café, tendiendo a ser absorbidos por otros propietarios mayores. A partir de la década de los 90's, dicha concentración de recursos base de la dominación social se expresó en el monopolio del circuito cultivador, productor, procesador, comercializador y exportador del café, todas

⁵² En el sentido utilizado por Uribe (1998)

ellas fases en las que los intermediarios ganan trasladando los costos al campesino cultivador y reinvertiendo en otros sectores de la industria interna a la subregión o del departamento y el país. Pero además la figura del gamonal tiende a desaparecer para abrir paso a la del Empresario, dado que la actividad agrícola aunque próspera no constituye más la base de su poder extendido más allá de las fronteras regionales con capacidad de incidir en la política y economía nacional.

La capacidad de aglutinamiento de la población entorno al sistema de producción cafetera se vio favorecida por la inversión en infraestructura impulsada por el Comité de Cafeteros, tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la región y de producción del grano a través de la infraestructura y tecnificación. El lugar que ocupa la producción de café en el compendio de la economía nacional y departamental dio lugar a lo que se institucionalizó como la “cultura cafetera”, la nominación de la abstracción de las prácticas regulares, fundamentadas en valores y significaciones que sostiene la economía cafetera y a la vez se reproduce a sí misma. Es en el poder de las parentelas y las alianzas entre capitales y sociabilidades, donde se potencia la caficultura como actividad económica rentable donde se gesta y ejerce el poder, diferenciable, complementario y con frecuencia determinante de funcionamiento del aparato administrativo del Estado.

La Minería es la segunda actividad económica más rentable de la subregión del suroeste, sin embargo, ha sido marginal en la configuración del orden social del territorio. Los enclaves mineros se encuentran situados en los municipios de la Cuenca del Sinifaná y a pesar de las contribuciones que la explotación minera le ha tributado al desarrollo de la más importante industria antioqueña de los textiles y la cervecería, el desarrollo de la actividad ha sido mirado con desdén por los valores culturales que soporta el trabajador minero en contraste con los del antioqueño. Tradicionalmente vistos como una cultura desordenada, de vida licenciosa, reproductor de vicios y con poca capacidad de ahorro y de transformación de la industria sin capacidad de sobreponerse al mito fundacional del trabajo del sometido en el socavón.

Por su parte, la visión del minero sobre las representaciones culturales de la economía cafetera han sido las tradicionalmente nombradas como oligárquicas; es decir, de quienes pertenecen a una misma clase –de poderosos negociantes– que ordenan el poder de gobierno y cuyo poder se encuentra en la unión de éstos para que todos los negocios dependan de su arbitrio. A pesar de la imagen diferenciadora que pesa sobre el campesino y el trabajador minero, ambos protagonizarían formas contestatarias por demandas de mejores condiciones de vida y mayor distribución de la riqueza del terrateniente cafetero y dueños de la industria minera y cementera de la región.

11.2 Una Amenaza al orden establecido: Movimiento Cívico y Campesino del Suroeste

El movimiento cívico de los 70's, surge en el contexto de una región con contornos bastante bien delimitados desde el proceso de la colonización antioqueña, la naturaleza planeada y articulada a las élites del centro de la dinámica política y económica del departamento dotó de una profunda solidez las instituciones que soportaron la identidad regional de entonces hasta hoy. Sus orígenes más recientemente rastreables se encuentran en las políticas de la *Revolución en Marcha* del Ex presidente Alfonso López Purumarejo, proyecto de desarrollo económico destinado a resolver el problema agrario y la miseria de un campesinado sin tierras, estimular el sindicalismo, promover una educación orientada a solucionar los problemas nacionales, independizar al Estado de la tutela de la iglesia y convertir al pueblo en una fuerza política propia. Como Ministro de gobierno entre 1935 y 1938, Alberto Lleras Camargo promovió la *Revolución en Marcha* y la reforma constitucional de 1936, para consolidar una visión social del capitalismo basada en la idea de “la propiedad como función social”.

Tras su segundo periodo presidencial como líder liberal del Frente Nacional, crea la Ley de reforma agraria⁵³ y en 1961 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) cuyo principal objetivo era dar trámite a la reforma con el fin de modernizar el sector agrario, aumentar su productividad e integrarlo al desarrollo capitalista del país y reintegrar las guerrillas al campo. Sin embargo Los sectores de terratenientes y conservadores disponían de fuertes organizaciones gremiales y grupos de presión política, lo cual presionó la organización desde el Gobierno Nacional de los campesinos a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC-.

Entre 1968 y 1971 se intensificaron las actividades del INCORA y las movilizaciones campesinas de la ANUC. Las tierras más importantes fueron las que ingresaron por extinción de dominio frente a la falta de explotación por la mayor extensión, que entre 1962 al 1985 alcanzaron un poco más de 3,6 millones has. Otras tierras fueron canalizadas mediante el Fondo Nacional Agrario, inferiores en extensión: 889.000 has, de éstas el 79% fueron ingresadas antes de 1973. Sin embargo, en 1973 gremios económicos y la oposición política, ponen fin a la reforma agraria a través del pacto del Chicoral, el INCORA sólo conservaría algunos programas en zonas de graves conflictos sociales.

La decepción de los Campesinos organizados del Suroeste frente a la lentitud del INCORA para la adjudicación de baldíos y tierras bajo la figura de la extinción de dominio, así como la baja calidad de los suelos, llevó a la aceleración de la expropiación de tierras por parte del Movimiento Campesino del suroeste, amparados en la Ley 1 de 1968 que permitió la expropiación de tierras privadas cultivadas por arrendatarios o aparceros y que tenían a su

⁵³ La ley de reforma agraria, Ley 135, se promulgó en 1961, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Los objetivos de la reforma eran modernizar el sector agrario, aumentar su productividad e integrarlo al desarrollo capitalista del país. Otro objetivo fue pacificar las áreas rurales afectadas por la acción de la guerrilla.

cargo lotes de hasta 15 hectáreas. Lo cual dividió el Movimiento campesino, en quienes optaban por la vía de hecho para la expropiación y quienes por la vía jurídica.

Los ideales de las movilizaciones populares el suroeste durante este periodo, se enmarcaban en la búsqueda del cambio y la Justicia social que vieron oportunidades para reivindicar y conquistar derechos, inicialmente en las políticas de gobiernos aperturistas y en la fuerza del Movimiento nacional campesino y otras corrientes políticas lejanas tales como la Revolución Cubana. Además fuertemente inspirados en el Movimiento de la Liberación que planteaba “Camilo” y la Teología de la Liberación y la valoración positiva que hicieron del proceso de la “Iglesia Popular” en Nicaragua; las conclusiones de las conferencias episcopales de Puebla, México, en 1979, y de Medellín en 1968 ó “los documentos de Medellín” potentemente determinadas por los teólogos de la liberación acerca de la "opción por los pobres y jóvenes", dando así un fuerte impulso a sus seguidores, lo cual generó la idea de Medellín como la "matriz" de este movimiento.

“El objetivo entonces era construir el poder popular. En este momento el cambio social estaba claro en las personas que ingresaba al movimiento revolucionario a partir de la idea de que había un estado de desigualdad social en el país cuya manifestación era la concentración de recursos en la burguesía y los terratenientes a costa de la explotación de los campesinos y los obreros del suroeste (Entrevista loca. Exintegrante Movimiento Social. 2009)”

De esta manera las reivindicaciones que se llevaron a cabo en el Suroeste se formularon especialmente en el campo salarial y demás implicaciones de la relación obrero patronal, incluido el acceso a tierras para el cultivo y la subsistencia, y en menor medida en lo atinente a mejoras sustancial de condiciones materiales de vida tales como vías de comunicación, servicios públicos, tal como si aconteció en otras subregiones de Antioquia. En el fondo, las reivindicaciones sociales del Suroeste expresaron inconformidad con el modelo de relacionamiento de las élites económicas y políticas determinantes del orden social y los valores subyacentes a éste entendido como oligárquico, explotador, injusto con los campesinos y obreros, mal distribuido y jerárquico. La solidez de estas instituciones será determinante de la suerte del movimiento y el pensamiento de la izquierda tanto democrática como armada en la subregión.

El municipio de Urao se convirtió en el epicentro del movimiento cívico, en torno al cual se articulan otras organizaciones sociales campesinas del corregimiento Altamira de Betulia, Salgar y Andes. Posteriormente el movimiento se fortalecería en los municipios de Tarso, Pueblo Rico y Fredonia municipio central para el movimiento cívico.

Desde el municipio de Fredonia se llegaron a coordinar las acciones del movimiento cívico, esta era la diáfana expresión de jóvenes, estudiantes y campesinos que se movilizaban por la demanda de transformaciones concretas, muchas de ellas se entoncaban con la implementación de decisiones o de políticas, generalmente en el sector de obras públicas, de infraestructura de bienes y servicios por parte de los gobiernos locales o el gobierno

departamental, ó de la industria de la zona, como formas de expresarse y “contar” dentro de las decisiones. Tal como hemos dicho, buena parte de las acciones cívicas fueron producto del aprovechamiento de oportunidades estratégicas que se abrían en el orden nacional para mejorar las condiciones de vida local.

La Red de organizaciones de campesinos surge en el suroeste articulada a la Asociación Nacional de usuarios campesinos – ANUC-. El municipio de Andes concentraba la coordinación y en ella era igualmente relevante la asesoría del Padre Ignacio Betancur. Fundamentó su acción en la consigna “*la tierra pa'l que la trabaje*”, promovió la educación formal entre los campesinos, articulando acciones entre el Movimiento estudiantil y los campesinos para promover la alfabetización.

Bajo esta consigna se llevó a cabo la distribución de tierras entre los campesinos por medio de 3 figuras: una de ellas era la huelga para el pago de prestaciones y aumento de salarios, si el empleador no pagaba las prestaciones los campesinos se pagaban con tierra, este fue el caso de la finca de Troya en Salgar y Betulia 1975 – 1976. Otra figura consistía en la extinción de dominio que posibilitaba la Ley 135/61. Y finalmente, las acciones de expropiación de tierras que consistían en invitar a un *convite* de campesinos para salir en las noches a desmontar y sembrar cultivos de yuca, al día siguiente amanecía expropiada y distribuida entre varias familias.

Con estas tierras se constituyeron las Empresas Comunitarias Campesinas como proceso de transformación del “*sin tierra*” a campesino. El “*sin tierra*” es la no pertenencia, la no identidad de la persona con el campo, esta identidad se encuentra arraigada a la tierra y el cultivo de lo que le es propio a la naturaleza campesina” (entrevista local, 2009). Con las empresas campesinas eran entendidas entonces como un modelo de producción comunitaria para la subsistencia, con algunos excedentes para la comercialización.

En total en el Suroeste el Sindicato por la recuperación de la Tierra “recupera” 20 fincas de manos de terratenientes en los municipios de Urrao, Betulia, Salgar, Andes y Pueblo Rico y Tarso. En estos últimos se expropiaron cuatro fincas, una de ellas de un Cura Sierra que las hacía pasar como propiedad de la Curia para no pagar impuestos (entrevista actor político, de la subregión, 2009), la finca las Arepas, las Camelias y la Arboleda y la Linda. En Fredonia se expropio la finca la Samaria⁵⁴.

En la Federación de Estudiantes del Suroeste – FESO – se articulaban representantes estudiantiles de todos los colegios municipales del suroeste, entorno a problemas estudiantiles y de la educación en los municipios. La mayoría de sus actividades de carácter cultural y recreativo incentivaban la integración de sectores dentro del municipio y al interior de la región.

La actividad lúdica y cultural ocupó un importante papel durante este periodo de movilización social y reivindicación de derechos hacia la transformación de los valores predominantes de la empresarización e industrialización de las relaciones; tal como era leído por el movimiento cívico, los valores desarrollistas del suroeste que en suma

⁵⁴ Actualmente en la vereda la Linda entre Pueblo Rico y Tarso, así como en Urrao persisten las Empresa Comunitarias Campesinas, en éste último municipio se ha dado origen a la producción de granadilla.

encarnaban la cultura paisa del emprendimiento empresarial y la instrumentalización de las relaciones. Por encima de ello, a través de la música, la poesía, la literatura y las demás que la creatividad libertaria pudiera sugerir, pretendieron promover la solidaridad entre iguales, la redistribución y los derechos para todos.

La FESO (Valencia, 2008) resolvía problemas internos de la “Escuela” y la educación municipal, promovieron paros cívicos en los que procuraron involucrar las autoridades locales y padres de familia, realizaban actividades de integración de la comunidad local y subregional, reprodujeron medios de comunicación escritos, y realizaron labores de alfabetización del campesinado.

Por su parte, el Movimiento Sindical, surge como una expresión legítimamente democrática del interés de defender sus derechos laborales y conquistar nuevos derechos. El movimiento sindical compromete fuerzas de derecha e izquierda vinculadas a partidos políticos, abarca una amplia gama de trabajadores, del sector minero carbonífero y cementero, agrícola, obreros municipales, campesinos trabajadores de la hacienda ganadera, panelera y cafetera. Entre otros, en el suroeste surgió el Sindicato Agrícola de Salgar, el Sindicato de Industrial Huyera, el Sindicato de Obreros municipales con expresión en algunas Administraciones públicas; entre otras, Amagá y Concordia.

“Este era un tiempo de más avanzada, entonces había una búsqueda colectiva de los ciudadanos en busca de la superación de sus problemas sociales. Había mucho apoyo popular sin que fuera por la vía armada, y se estaba llevando a cabo un experimento social Sin embargo, la organización de terratenientes y Fuerza pública plantean mecanismos de persecución al Movimiento cívico, sindical y estudiantil” (Entrevista loca. Exintegrante Movimiento Social. 2009)”

Entre muchas, otras acciones de este periodo fueron: El movimiento indígena con la recuperación de las tierras de Cristiania en Jardín y la conservación de las minas de oro en el Alto Andágueda entre Chocó y Antioquia. La resistencia a terratenientes que querían expulsar a los indígenas de zonas de explotación minera y el triunfo de la resistencia civil.

11.3 El periodo de 1986 – 1996: Las expresiones armadas y democráticas de la izquierda y la derecha

Los municipios del suroeste lejano, tienen en común su ubicación sobre el cordón de los municipios con más alta producción de café en la subregión y haber padecido la mayor intensidad de violencia durante los diferentes ciclos del conflicto armado del siglo XX hasta hoy. Sobre los municipios del suroeste lejano se presentó la mayor afectación de violencia durante el periodo del bipartidismo, posteriormente durante la segunda mitad de la década de los 80's sufrieron la retaliación armada de los grupos armados paramilitares, lo cual se encuentra relacionado con su ubicación geoestratégica de comunicación entre el Chocó – Urrao – Frontino – y el resto del occidente hacia Ituango - el Nudo del Paramillo y

la Costa Atlántica; o hacia Urabá – Panamá. Concretamente las poblaciones de los corregimientos La Encarnación y Carauta de Urrao; Nutibara y Murri de Frontino han sufrido la mayor intensidad de violencia ejercida por todos los actores armados del conflicto colombiano.

En los municipios de Urrao, Salgar, Betulia, Ciudad Bolívar, Andes, Jardín, Támesis, Caramanta y los demás de la Cuchilla que limita con el Chocó, tradicionalmente ha habido paso de la guerrilla, del Frente 34 de las FARC en Urrao. La presencia del Frente Noroccidental del ELN, con el frente CHE Guevara del ELN por Ciudad Bolívar, con mayor incidencia en Tarso, Jericó, Valparaiso, Montebello, Santa Barbara. Otro actor fue el Comando Carlos Alberto Morales y Oscar William Calvo del EPL con acciones en Jericó, Caramanta, Bolombolo, Montebello, Andes

Sólo hasta este periodo la contención de las acciones cívicas reivindicatorias no había implicado acciones armadas, el cambio estratégico hacia la militarización de los conflictos fue producto del círculo vicioso: acentuación de las acciones por la búsqueda de inclusión, radicalización de la defensa de la propiedad privada. En medio de los acontecimientos del contexto de guerra que vivía el país durante este periodo, marcado por el fracaso de las negociaciones de paz durante el gobierno del Presidente Belisario Betancourt, en el suroeste se presentó el aumento de acciones violentas a través de grupos que se dieron a llamar de “limpieza social” en contra de los líderes de los movimientos sindicales y cívicos.

Estas presiones logran convocar al movimiento cívico y disidencias políticas de la izquierda armada entorno a la discusión sobre el futuro de la izquierda democrática en la subregión. A la discusión sobre el exterminio de las expresiones cívicas del suroeste, confluyeron además pequeñas disidencias políticas del ELN, EPL y las FARC que de fondo planteaban la discusión sobre si la ruta era la lucha armada o la conquista de espacios para la democracia en Colombia.

“Hubo un momento en el que se pasa del movimiento cívico al político, lo cual implicó clandestinidad a pesar de que no era un movimiento armado, porque nos estaban matando. Los que estábamos en el movimiento nos dimos cita para crear el movimiento político. En medio de estas discusiones surge el Movimiento de Unidad Revolucionaria en el suroeste y de paso se entierran los movimientos sociales”. (Entrevista loca. Exintegrante Movimiento Social. 2009)”

Se hizo una unificación del MIR – Movimiento De Integración Revolucionaria Patria Libre que a la vez se une al ELN y surge como la Unión Camilista del ELN y se crea un nuevo frente que es el del Che Guevara. Con esta integración empieza un nuevo ciclo de la violencia.

Los rasgos más sobresalientes de esta etapa del conflicto estuvieron marcados por el declive de las movilizaciones sociales y de las organizaciones sociales incluidas las Juntas de Acción Comunal a raíz del asesinato y persecución a líderes comunitarios y sindicalistas por medio de los diferentes grupos de la localmente llamada “limpieza social, la

consecuente criminalización de la protesta y estigmatización de cualquier manifestación democrática con los grupos armados de izquierda; toma fuerza y aumenta la acción de grupos de autodefensa en los municipios del Suroeste tanto en el área rural como urbana. Paradójicamente, este periodo estuvo acompañado del surgimiento de nuevos protagonismos que desencadenan formas distintas de movilización social con participación de las élites regionales a través de formas asociativas como APROCAFE – y el Encuentro de Dirigentes del Suroeste que se realiza desde 1984.

Es posible establecer una clara diferenciación de los principales giros de la derecha e izquierda en la subregión en dos sentidos: por un lado, la radicalización de la izquierda, atizada por la mayor presencia de guerrillas durante los primeros años del periodo y el aumento de grupos armados de derecha conducentes al escalamiento del conflicto que a su vez generalizó la respuesta armada de la derecha en contra de cualquier expresión democrática, o que enunciara valores diferentes a los históricamente dominantes. Paralelamente, en un contexto global donde la movilización de carácter popular aumentaba, en el suroeste aumentaba la criminalización de la protesta social y de la reivindicación de derechos de carácter marginal, y paradójicamente emergían nuevos liderazgos sociales integrados por representantes de las élites económica y política de la subregión que desataban formas distintas de movilización; básicamente no contestatarias y que en el fondo traducían la aspiración de dinamización de la economía regional, identificada profundamente con los mitos fundacionales de la colonización antioqueña y el llamado impulso de la *cultura paisa*, progenitora de la *cultura cafetera* del suroeste antioqueño, lo cual marca el agotamiento de las movilizaciones de carácter popular.

El surgimiento de los nuevos liderazgos tiene el doble efecto de cooptación de la movilización de masas y ofrecer un escenario que minimizara los efectos de la escalada del conflicto, a través de la imagen de la región compacta y homogénea, que llevó a creer que el conflicto armado se expandía hasta los límites de esta próspera tierra cafetera, cuna de la civilización antioqueña cuyas instituciones permanecían incólumes en medio de la conmoción en que se sumía el resto de Antioquia y el país, a pesar de la intensidad de la violencia que se vivió en el silencio de los interiores de la región.

La complejidad del proceso de integración regional y las manifestaciones del conflicto durante éste periodo, son la expresión particular del conflicto armado que vivía el resto de Antioquia, lo que marcan un quiebre en la idea del Suroeste como territorio compacto y sobre todo como territorio de paz, cuidadosamente preservada por las élites políticas y económicas de la subregión por medio de dispositivos para la despolitización del conflicto. Dicha despolitización del conflicto pasó por el carácter municipal, esporádico y no regional que de manera particular quiso imprimirse a la consolidación del paramilitarismo, iniciado durante este periodo a través de los cada vez más populares grupos de “limpieza social”.

De esta manera, el surgimiento de grupos de la mal llamada “limpieza social”, más que ser una expresión de intolerancia frente los problemas sociales, enmascaran la respuesta de élites locales frente a los crecientes riesgos de ordenes alternos en el territorio así como la elección de vías más expeditas por fuera del marco normativo para la protección del orden social. Los análisis que de manera generalizada definen el paramilitarismo como una respuesta armada de la población en legítima defensa frente a la incapacidad del Estado

para responder a los derechos de protección y seguridad de la sociedad, resultan absolutamente limitados en el caso del suroeste antioqueño.

Ello se encuentra en completa oposición a la caracterización del orden social predominante de la región cafetera de Antioquia, en buena medida determinado por la existencia de una élite determinante del orden social, cuya base de ampliación del poder consiste en el sostenimiento de redes parentales, alianzas y lealtades, que le confieren capacidad para incidir, más allá del aparato administrativo del Estado, sobre las prácticas de “*régimen/gobierno*”, en el sentido de la forma como se organiza y opera el poder local en relación con otros poder internos y externos al territorio, lo cual no pasa necesariamente por el funcionamiento de un cuerpo jurídico legal o la organización rígida de la premisas del Estado Constitucional.

11.4 El periodo de 1996 – 2006: Contrainsurgencia, Limpieza social como institución, vigilantismo y Narcotráfico

A la expresión de diversos grupos de “limpieza social” en el suroeste, tales como el grupo “La muerte” en Salgar; Los Racumies de Betania; “La Escopeta” en Andes, Támesis, Caramanta, Valparaíso, Jardín en el que además actuaba el grupo “Jardín sin guerrilla”; otros grupos locales actuaron en Concordia, Angelópolis, Hispania y Titiribí (entrevistas locales, 2009; El tiempo, 1996), se sumó la acción de Cooperativas de Servicio de Vigilancia amparadas bajo el Decreto 356 de 1994 o Estatuto de Seguridad expedido por el Presidente Cesar Gaviria, como preámbulo a lo que posteriormente se expresaría como un ejército paramilitar. “La Escopeta fue la organización paramilitar conformada por políticos, empresarios y terratenientes de los municipios de Andes, Concordia, Salgar y Jardín. A manos de quienes murió el Padre Ignacio en la Arboleda de Pueblo Rico” (Valencia, 2008; p. 285).

El paramilitarismo en el suroeste pasa por la expresión de tres conflictos superpuestos y traslapados, cada una de los cuales expresa la interacción entre actores con intereses específicos, lo cual da identidad a la acción del actor armado que tienen como enemigo común a la guerrilla. El primero de ellos tiene que ver con la inestabilidad y zozobra económica que generó la izquierda armada y democrática sobre el sector económico de la subregión exigiendo demandas de protección de la propiedad privada y las condiciones para el desarrollo normal de las actividades económicas de la subregión. La segunda expresión, el proyecto contrainsurgente en el que se ve envuelto el territorio nacional, tras el fracaso de las negociaciones de paz durante el periodo Belisario Betancur, a partir de lo cual se desata una oleada mayor de acciones violentas a través de la Coordinadora Guerrillera. Y finalmente, la existencia de dineros del narcotráfico mezclada con actividades lícitas de la región que demanda protección de sus intereses, y que también tiene como rival a la guerrilla. Los actores de los conflictos son por un lado políticos - empresarios *versus* expresiones de izquierda, el gobierno nacional *versus* guerrilla; narco políticos empresarios *versus* guerrilla.

Identidad Contrainsurgente del paramilitarismo

El Suroeste no representó un territorio de interés político para las guerrillas y más bien significaba un importante lugar de paso hacia otros territorios estratégicos. Varias son las razones que lo explican: primero, el Suroeste no ofrece la topografía necesaria para la estrategia militar de guerra de guerrillas. El Suroeste más que zona de confrontación es corredor estratégico hacia el Chocó y hacia el Noroccidente del departamento donde ubica sus zonas de retaguardia en el Parque Nacional de las orquídeas entre Urrao y Frontino; a diferencia de las economías de enclave, la economía cafetera no ofrecía ninguna posibilidad de extracción de rentas para el actor armado, más allá del secuestro de terratenientes y ganaderos, la vacuna y la extorsión, actividades de mayor costo político y baja “rentabilidad”; a pesar de las reivindicaciones de los movimientos sociales contestatarios, “ésta no representaba un lucha prioritaria” (*Entrevista loca. Exintegrante Movimiento Social. 2009*). Finalmente la guerrilla no tenía la suficiente base social necesaria para la pervivencia del momento armado.

El plan de exterminio contra las guerrillas se explica más por la utilidad de algunos municipios del suroeste lejano como corredor, lo cual se ubica en el origen de la violencia producto de la confrontación armada que ha padecido la población ubicada en la zona del cordón de mayor producción cafetera de Urrao – Betulia – Concordia – Salgar – Andes – Jardín – Ciudad Bolívar. Cualquier plan de lucha armada contra la guerrilla implicaría impactar dichas zonas, a pesar de que el anclaje real de las guerrillas en las dinámicas que configuraban el territorio no fuera relevante, tal como si aconteció en otras regiones del departamento como en el Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio o Urabá.

El paramilitarismo en el suroeste siempre actuó en connivencia con la Fuerza pública, es algo que coinciden en señalar localmente, y no en pocas ocasiones actuaron de manera conjunta. Una parte importante de la acción contrainsurgente en el suroeste, se encaminó hacia la persecución de la organización social y se criminalizó la protesta, toda organización o movimiento social debía expresar los valores e intereses del orden social dominante. Tal, implicó la confrontación armada, la amenaza y desplazamiento de quienes se creyó eran la base social de sostenimiento de la guerrilla.

Identidad vigilantista o el paramilitarismo como Ejército privado

En efecto actores políticos, económicos y sociales de la subregión coinciden en señalar la amenaza que representó la delincuencia y el comunismo al modelo de organización social de la subregión. Ello señaló una fuerte demanda de protección y seguridad de la propiedad privada para la estabilidad de la economía y el orden social de la subregión, la participación de los sectores en redes departamentales y nacionales permitió la implementación de mecanismos de contención de la amenaza. Al respecto un prestigioso representante de los cafeteros afirma:

“A nosotros nos tocó desaparecernos como 5 años de la región, no ir mucho, bajar el perfil, no mostrarse mucho y sobre todo no mostrar comodidades. Usted nunca ha oído hablar del suroeste como lo hacen del resto de las subregiones de Antioquia [...] la delincuencia a propósito del narcotráfico se está volviendo a disparar y si hay que volverlo a hacerlo, lo hacemos ¿cómo nos vamos a dejar?”. (Entrevista Regional. Líder Cafetero de la Región. 2009).

La articulación del paramilitarismo con las demandas particulares de vigilantismo⁵⁵ o ejército para la protección de la propiedad privada, se dirigió a través de la fusión entre los grupos que promovidos localmente actuaron como autodefensas y el ejército paramilitar al mando de ex militares de la Fuerza Pública y ex militantes de guerrillas desmovilizadas de Urabá, dando origen al Bloque Suroeste y en virtud de la alianza con políticos empresarios, adquiriría una identidad de ejército privado con relaciones directas de protección del terrateniente. El doble efecto que produjo la articulación del actor armado a la protección y garantía de la propiedad privada, por un lado adquirió una dinámica que tendió a autonomizarse del poder de los terratenientes y plantearse en competencia por el poder local, lo cual fue obstaculizado mediante una nueva negociación entre los terratenientes y un ejército paramilitar con mayores recursos armados para la eliminación del riesgo emergente.

Por otro lado, en algunos territorios con características de monocultivo y alta concentración de la tierra, el efecto de tener ejércitos privados al servicio de la protección de los terratenientes, fue la de consolidar las hegemonías locales de los empresarios y políticos terratenientes, a partir de la de la acumulación de recursos a través de la coerción para la expropiación o eliminación de la competencia. En suma ello favoreció, en algunos municipios, el monopolio de las diferentes actividades de la economía local, la ampliación del poder económico hacia el resto del departamento y por fuera de él; capacidad de incidir en el ejercicio de gobierno, definir prioridades de inversión de los recursos públicos, favorecido por la falta de poderes en competencia. Y en general mejoró su capacidad de negociación y de mayor alianza con actores de la subregión, el departamento y el nivel nacional. En este nivel, para los terratenientes empresarios del suroeste, el paramilitarismo representa la búsqueda de mecanismos de control militar sobre sus intereses estratégicos.

Identidad Narcotraficante del paramilitarismo

Sólo a partir de 1984 la prensa regional y nacional registra noticias del narcotráfico en Antioquia, siendo el año de 1988 donde se registra un crecimiento inusitado en relación con los años anteriores. A partir de 2004 nuevamente el narcotráfico ocupa las primeras páginas de la prensa escrita hasta hoy. Particularmente en esta subregión, la prensa regional da

⁵⁵ En el sentido que Kalyvas acuña el concepto de Huggies (1991) a partir de su tipificación del paramilitarismo de acuerdo con el tamaño del ejército, el escenario en que surge y los recursos de que dispone. Entiende el vigilantismo como movimientos extralegales y organizados de algunas personas que tomaron la ley por sus propias manos.

lugar a escasas denuncias de sindicalistas por persecución a líderes, e incremento de los homicidios sin atreverse a lanzar hipótesis sobre el fenómeno; sólo la prensa nacional en algunos artículos destaca las capturas y sindicaciones de algunos prestantes actores regionales y departamentales con fuerte incidencia en la subregión por presuntos vínculos y financiación a organizaciones paramilitares y de limpieza social⁵⁶.

En Antioquia la organización y financiación de grupos armados paramilitares ha tenido el doble vínculo de alianza con las Fuerzas Armadas, con el narcotráfico y con empresarios políticos⁵⁷. La presencia de dineros del narcotráfico en el suroeste ha existido de diversas formas rastreables desde los 80's, a través de la vinculación directa de actores locales en la actividad ilícita; la inversión de capital en reconocidas propiedades de Pablo Escobar y los Ochoa en la subregión. A finales de la década e inicios de los 90's la compra de tierras en el suroeste se hace más notoria, especialmente en los municipios “del balcón del río Cauca” como Venecia, Fredonia, Amagá, Titiribí, Támesis, incidiendo en el cambio de vocación económica por fincas de recreo y ganado, con la consecuente estela de problemas sociales que ello implica, tales como la proliferación de la “prostitución turística”, la mano de obra flotante, las migraciones de campesinos hacia la ciudad y en último término transformación de arraigos e identidades.

En tal sentido, el grupo armado paramilitar desarrolló actividades de protección de propiedades y narcotraficantes, y cuidado de rutas; generalmente las mismas que usaban la guerrilla de las FARC, causa de enfrentamientos, especialmente las rutas que comunica los municipios del suroeste cercano con el departamento de Caldas y el noroccidente de Antioquia. Otra actividad importante fue el control del microtráfico a través de los

⁵⁶En Medellín la Fiscalía Regional de Antioquia ordenó la captura preventiva de otras 21 personas vinculadas con el grupo paramilitar La Escopeta, responsable de la desaparición y muerte de aproximadamente 161 personas en el suroeste antioqueño. Habitantes de Támesis y Betania, y varios funcionarios de los municipios de Andes y Jardín (El tiempo, 1995). Por su presunta participación en la conformación de un grupo paramilitar que operaba en cuatro municipios del suroeste de Antioquia, la Fiscalía Regional de Medellín llamó ayer a juicio a 28 personas. Al proceso se encuentra vinculado un ex senador. (Armenia, Titiribí, Amagá y Concordia) (El tiempo, 1996).

⁵⁷ En Antioquia durante los 80's surgen facciones que logran evidenciar tensiones del liberalismo, partido de mayor tradición en el suroeste, de manera que dichas transformaciones lograron evidenciarse más tarde en el suroeste. El *Sector Democrático* del liberalismo fue liderado por importantes políticos y empresarios de los municipios de la subregión tales como Caramanta, Betulia, Andes, Betania, Urao, Salgar, Titiribí, Concordia, Amagá. El primer sector del Liberalismo liderado por Mario Uribe, llevó en 1998 a su Líder político al senado, con fuertes adhesiones en los municipios de Andes, Amagá, Bolívar, Angelópolis, Támesis, Titiribí, Salgar, Urao, Betulia y La Pintada, entre otros. Ésta estructura contó además con los representantes a la cámara Rubén Darío Quintero y William Vélez, quien fue miembro del partido político *Renovación Liberal* liderado entonces por Pablo Escobar, y creció al amparo de Mario Uribe y Álvaro Uribe Vélez. Posteriormente el partido *Colombia Democrática* al Senado 2006 tuvo todas sus curules investigadas incluido su Jefe político Mario Uribe. Este nació en el municipio de Andes, entre los años 1973 y 1975 fue Juez Civil en los municipios de Salgar y Medellín, finalizando la década del setenta se desempeñó como concejal y presidente del concejo municipal de Andes, entre 1982 y 1986 fue diputado a la Asamblea departamental de Antioquia y seguidamente Representante a la Cámara, cargo que ocupó hasta 1994 cuando su primo, Álvaro Uribe, decide postularse a la gobernación y él se postula al senado de la república, durante el periodo electoral 2006 repite como senador en cabeza de *Sector Democrático* (López; 2009).

expendios de droga en los cascos urbanos y algunos puntos rurales, para ello cifraron las acciones en clave del lenguaje contrainsurgente, de manera que la actividad del narcotráfico no apareció tan evidente y desnuda como hoy. En la mayoría de los municipios del suroeste; como de Antioquia, señalan que una de las más importantes tareas que realizó el actor armado fue la llamada “*limpieza social*” que consistía en desplazar o asesinar drogadictos y ladrones. Sin embargo, la “*limpieza social*” también enmascaró el asesinato de las familias o personas que no comercializaron la droga de éstos como nuevos proveedores, e intentaron sostener las lealtades con sus proveedores iniciales. Esto fue significativo en el elevado número de casos de homicidios locales a la llegada del actor armado, sólo que entonces no fue tan evidente como hoy, dado que los homicidios se traslaparon bajo la “aceptable” y necesaria “*limpieza social*”.

La alianza paramilitarismo – narcotráfico supuso el fortalecimiento de éste en la subregión y otorgó mayor fuente de poder a las élites subregionales articuladas al negocio ilícito, a la par que otros actores individuales lograron introducirse en la estructura del narcotráfico logrando en poco tiempo controlar los recursos necesarios para emerger como nueva élite en competencia por nuevos recursos, poniendo en competencia el mecanismo; hasta ahora exclusivo, de la parentela sobre el cual ha operado la construcción del ejercicio del poder, con el mecanismo de la alianza con otros actores. Ello supone una posible transformación de los valores que han sustentado el orden social de la *cultura de la sociedad cafetera* en interacción con otros emergentes. Pero sobre todo supone que el paramilitarismo como mecanismo que la élite terrateniente cafetera dispuso para la preservación del orden social, en interacción con otros factores que no logró controlar, paradójicamente se convirtió un nuevo actor que le compite por el ejercicio de poder bajo la identidad narcotraficante.

La emergencia del narcotráfico como un nuevo actor con posibilidades de incidir en la configuración del orden social, difiere en los mecanismos a partir de los cuales constituye su capacidad de incidencia y, las formas mediante las cuales ejerce y legitima su poder.

Probablemente, ello tienda a fragmentar la región a partir de dos trayectorias históricas que ha marcado el conflicto armado atadas a territorios concretos. La primera se enmarca en los municipios que son mayores productores de café, situados en el suroeste lejano sobre el corredor militarmente estratégico para los actores armados, sobre los cuales la violencia ha operado con mayor intensidad a partir de la naturaleza contrainsurgente del paramilitarismo. La segunda se enmarca en los municipios de la rivera del río Cauca, cercanos a Medellín, productores de café y carbón, y sobre los cuales las lógicas de la violencia han operado con mayor relevancia articulada a la naturaleza narcotraficante del paramilitarismo, si bien no es posible tan milimétrica distribución geográfica del impacto del narcotráfico en la subregión.

11.5 Una relectura del DDR desde la subregión del Suroeste

Al momento de la desmovilización el paramilitarismo en la subregión se caracterizaba por el desarrollo de actividades relacionadas con el vigilantismo, el narcotráfico y contrainsurgencia. Sin embargo, esta última termina enmascarando las diversas caras de su identidad, de manera que al momento de la desmovilización intereses como el narcotráfico se politizaron bajo la naturaleza contrainsurgente del actor armado. Lo cual es absolutamente determinante en los resultados de las operaciones de paz en la subregión, tanto para el grado de cumplimiento de los acuerdo de paz, como para el éxito de la desmovilización, desarme y reintegración en el desmonte del paramilitarismo, disminución de la violencia y contención del rearme.

El DDR que en el suroeste se caracterizó por la dispersión de excombatientes, la marginalidad del tema en las agendas política y económica de las instituciones y organizaciones de la subregión, las personas desmovilizadas no tienen capacidad de incidencia en las instituciones públicas y los políticos regionales temen vincularse con éstos dados los escándalos por parapolítica. Dicho panorama es consecuente con el modelo paramilitar que caracterizó la subregión fuertemente marcado por su identidad vigilantista. Allí el control del Estado jamás estuvo en poder del actor armado, éste operó como acción coercitiva para garantizar el régimen del gobierno/poder hegemónico de las élites políticas y económicas, y aún cuando el actor armado tuvo pretensiones de disputarse el control armado del territorio, las elites políticas y económicas de la subregión reaccionaron menguando su capacidad.

Particularmente en esta subregión el paramilitarismo se encuentra sustentado sobre autoritarismos subnacionales basados en el control de economías legales por parte de actores políticos y económicos regionales que paulatinamente se han ido fortaleciendo a la sombra del narcotráfico y donde el ejército armado paramilitar se mantuvo subordinado. En tal sentido, en este territorio tanto la desmovilización como el rearme se encuentra menos determinada por las negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y una cúpula militar determinante de la estructura armada que operó en el Suroeste Antioqueño; ó el rearme determinado por la capacidad de los excombatientes para disputarse poderes o intereses regionales, como por la voluntad de de las élites económicas y políticas tradicionales y emergentes narcotraficantes de la subregión.

Por su parte, la política de reintegración a cuyo carácter se entrega la responsabilidad de contener los desmovilizados por fuera de la guerra, en esta subregión adquiere con mayor relevancia el carácter de subsidios a personas vulnerables; en el sentido prevalente del término en materia de políticas públicas. En esta subregión se podría prescindir de las ofertas del programa de reintegración y ello no truncaría el proceso en la subregión o el departamento. De hecho el éxito de éste en el departamento no se encuentra tan determinado la capacidad de la población desmovilizada para reivindicar el acceso a condiciones favorables para la reconstrucción de su biografía por fuera de la guerra, como por la persistencia de escisiones locales articuladas a opciones armadas o la persistencia de acciones que corresponden claramente a la identidad narcotraficante de las AUC.

Técnicamente la implementación de las operaciones DDR con las AUC, se centró en las fases de desmovilización y reintegración de las personas combatientes. Si bien la concentración estuvo seguida de acciones de desarme, ello no garantizó el cumplimiento de los objetivos estratégicos del desarme, en cuanto a reducir la capacidad bélica del actor armado.

El incremento en los niveles de violencia en los territorios estratégicos del narcotráfico del departamento, el rearme de desmovilizados y recomposición de las recién desmovilizadas estructuras, la confrontación armada entre bandas ilegales al servicio del narcotráfico y el incremento de la tasa de homicidios de personas desmovilizadas, dejan al descubierto la falta de dispositivo contingenciales y estratégicos para la desestructuración del poder paramilitar en los territorios, por un lado y por otro, la atención de conflictos emergentes que amenazaran el desarrollo y éxito de las operaciones DDR, recurrentemente señaladas en las recomendaciones de los procesos de paz en el mundo.

Las operaciones DDR se desarrollaron de manera puramente técnica y procedimental sobre el nivel de los combatientes de los respectivos Bloques y Frentes de las AUC, sin que ello afectara las redes de apoyo y factores estructurales del sostenimiento del poder paramilitar; e incluso, sin afectar mandos y jerarquías de la estructura armada con capacidad de reconfigurar ejércitos.

Los estudios de caso señalan que las expresiones armadas en Antioquia que se ha dado en llamar oficialmente como *bandas emergentes*, se han estructurado a partir del recién desmovilizado ejército paramilitar, en la que es responsabilidad del Gobierno no diseñar los dispositivos necesarios que atendieran la más obvia de las trayectorias de una desmovilización en el marco de acuerdos parciales de paz. A pesar del alto número de personas desmovilizadas, el acuerdo de paz no bastó para la naturaleza paramilitar del actor armado en las subregiones. El paramilitarismo como proyecto hegemónico aún reside en las élites antioqueñas. La forma, el contenido y el desenlace que ha tenido el acuerdo de paz con las AUC, evidencian que la negociación se hizo desde la perspectiva de la élite política y económica que trazó el proyecto paramilitar; cuando menos en la falta de contenido político del acuerdo en general y su expresión regional, así como en el laxo marco jurídico que abrió para la transición.

Pareciera que el acuerdo de paz con las AUC se fundamentó en una comprensión binaria del conflicto armado y un entendimiento de la naturaleza del actor armado AUC como contrainsurgente en sentido estricto. Es decir, que el conflicto armado colombiano estaría determinado por el simple enfrentamiento entre paramilitares y guerrillas como ejércitos antagónicas a los que además se enfrentan la Fuerza Armada del Estado Colombiano. De tal manera, tanto los acuerdos de paz como las operaciones DDR con las AUC se fundamentaron en la comprensión generalizada del conflicto armado colombiano que ha entendido el paramilitarismo como un actor armado cuya naturaleza es exclusivamente contrainsurgente, ignorando otras identidades que han caracterizado el actor armado en los territorios y entorno a las cuales la violencia continúa reproduciéndose.

Tal como se evidencia en los estudios de caso, tales identidades cobraron mayor o menor relevancia de una manera particular en cada territorio, de acuerdo con los intereses y conflictos locales en que se articuló y las oportunidades que abrió la presencia de actores armados a conflictos latentes para tramitarse por esta vía, muchos de los cuales se politizaron bajo la identidad contrainsurgente que además caracterizó el actor armado a nivel nacional.

Tal como se dijo en apartados anteriores, a diferencia de las zonas nucleares antioqueñas que históricamente han hecho parte del centro del desarrollo económico y político del departamento, el fortalecimiento actual de economías ilegales en Antioquia, se presenta en las zonas modulares asimiladas a partir de procesos de recolonización por parte de las élites regionales del centro. Ello sugiere una fuerte intervención de los hombres de la política y empresarios en lo que se ha llamado el proyecto paramilitar. Esta diferenciación entre las zonas nucleares de Antioquia y las zonas periféricas es central en el carácter de los problemas regionales a los que se articuló, de manera particular, la acción del paramilitarismo y determinó tanto la naturaleza del actor armado, como las trayectorias de la violencia y el devenir del actor armado tras la desmovilización.

En tal sentido, el acuerdo de paz y el DDR con las AUC se convierten en una abstracción nacional con muy baja incidencia sobre los factores determinantes del conflicto en las regiones de Antioquia. A pesar de representar una oportunidad para la disminución de los índices de violencia, pese al centralismo, ello se ha encontrado en gran medida determinado por la capacidad de actores sociales e institucionales para insertarse activamente en el curso del proceso DDR por medio de exigencias, denuncias y demandas de garantías de no repetición al Gobierno Nacional, que de la ejecución de acciones estratégicamente diseñadas por parte del Gobierno negociador.

Ello no sólo llevaría a suponer la exigencia de pensar acuerdos de paz regionales, que reconozcan las particularidades de las dinámicas del conflicto armado de cara no sólo a la desmovilización y desarme de combatientes, sino además al resquebrajamiento de los factores determinantes de autoritarismos subnacionales armados, lo cual no sólo pasa por un más exigente diseño institucional para las operaciones DDR y de las herramientas para la transición que garanticen un soporte institucional efectivo para el éxito de la implementación de las operaciones de paz y demás transformaciones de soporte para la consolidación de los logros, especialmente de reformas institucionales, institucionales en la Fuerza pública, entre otras, tal como se ha señalado desde los estudios regionales.

De esta manera, la evaluación del DDR deberá atender tales particularidades regionales más allá de la presentación de indicadores de operación de las acciones de desmovilización, desarme y de la política pública de reintegración. Así como dar cuenta del grado de cumplimiento de los puntos de la agenda pactada en los territorios concretos donde operó el actor armado.

Índice de Tablas

Tabla 1. Grupos de las AUC desmovilizados en Antioquia	7
Tabla 2. Modelo de servicios y necesidades para la reintegración	20
Tabla 3. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Andes	27
Tabla 4. Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en Andes	28
Tabla 5. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud Amagá	34
Tabla 6. Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en Amagá	35
Tabla 7. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en San Carlos	44
Tabla 8. Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en San Carlos	44
Tabla 9. Número de hectáreas cultivadas de coca en el Oriente Antioqueño	50
Tabla 10. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en San Francisco	51
Tabla 11. Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en San Francisco	51
Tabla 12. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en Puerto Berrío	62
Tabla 12. Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en Puerto Berrío	62
Tabla 13. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en Puerto Triunfo	68
Tabla 14. Población objeto de los programas de educación en Puerto Triunfo	69
Tabla 15. Casos de Homicidios en la subregión del Bajo Cauca 1997 – 2007	79
Tabla 16. Hectáreas Cultivadas en Coca en la Subregión del Bajo Cauca	79
	195

Tabla 17. Estado de la Población desmovilizada dentro del proceso DDR en el Bajo Cauca	81
Tabla 18. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en Cauca	84
Tabla 19. Población objeto de los programas de educación en Cauca	84
Tabla 20. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en Tarazá	91
Tabla 21. Población objeto de los programas de educación en Tarazá	91
Tabla 22. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en Turbo	103
Tabla 23. Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en Turbo	104
Tabla 24. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en el municipio de Santa Fe de Antioquia	119
Tabla 25. Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en el municipio de Santa Fe de Antioquia	120
Tabla 26. Vinculación de los participantes del programa DDR a Seguridad Social en Salud en el municipio de Sopetrán	125
Tabla 27. Vinculación al proceso de educación académica y formación para el empleo en el municipio de Santa Fe de Antioquia	126
Tabla 28. Variación porcentual de los homicidios en Antioquia en la década de 1998 a 2008	199
Tabla 29. Tasas de Homicidios Antioquia (100.000ha.)	151
Tabla 30. Estado de la población desmovilizada colectiva dentro del proceso de Reintegración por subregión	157

Índice de Figuras

Figura 1. Mapa Rutas del Narcotráfico en Antioquia	142
Figura 2. Mapas de hectáreas de cultivos de coca sembrados en el departamento de Antioquia por periodos	146
Figura 3. Homicidios por municipio en el departamento de Antioquia	149
Figura 4. Mapa Cultivos Coca y Homicidios en Antioquia 2007 – 2008	153
Figura 5. Concentración de la población desmovilizada de las AUC en el Departamento de Antioquia a junio de 2008	154
Figura 6. Mapa del Estado de la población desmovilizada de las AUC en Antioquia	155

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Comparación promedio del desplazamiento del departamento y el desplazamiento por expulsión en la subregión del Bajo Cauca	97
Gráfico 2. Varición porcentual y Ha. Sembradas de coca en Antioquia 1999-2007	143
Gráfico 3. Contraste de la evolución de cultivos entre el departamento y subregiones	144
Gráfico 3.1. Cultivos de coca Dpto - Norte ...	144
Gráfico 3.2. Cultivo de coca Dpto - Nordeste ...	144
Gráfico 3.3. Cultivos de coca Dpto- Bajo Cauca ...	144
Gráfico 4. Variación porcentual de los homicidios en Antioquia en la década de 1998 a 2008	150
Gráfico 5. Ubicación de la población desmovilizada de las AUC en el departamento de Antioquia	156
Gráfico 6. Estado de la población desmovilizada colectiva en el Norte	158
Gráfico 7. Estado de la población desmovilizada colectiva en el Valle de Aburrá	159
Gráfico 8. Estado de la población desmovilizada colectiva de Urabá	159
Gráfico 9. Estado de la población desmovilizada colectiva en el Bajo Cauca	160
Gráfico 10. Estado de la población desmovilizada colectiva en el Magdalena Medio	160
Gráfico 11. Estado de la población desmovilizada colectiva del Oriente	161
Gráfico 12. Estado de la población desmovilizada colectiva en el Nordeste	161
Gráfico 13. Estado de la población desmovilizada colectiva en el Occidente	162
Gráfico 14. Estado de la población desmovilizada colectiva en el Suroeste	162
Gráfico 15. Concentración Población Inactiva por Subregión	163
Gráfico 16. Lugar de concentración de las muertes de los excombatientes colectivos	164

Referencias bibliográficas

ABRAMS, P. (2002, marzo). Notas Sobre la dificultad de estudiar el Estado, *virajes*, Vol. 02, No. 02, pp. 79-98

AGUIRRE, G. y CARDONA, B (2007). “Estudios locales sobre las dinámicas temporales del conflicto armado en cuatro municipios de Antioquia: La Unión, San Carlos, SantaFé de Antioquia, Sopetrán”, Consultoría Conciudadanía- OIM_.

ALONSO. M. A. (2007). *Estudio Departamental sobre el DDR en Antioquia: un análisis desde lo local*, s. e. p.23.

_____ (1997). *Conflicto armado y configuración regional en el Magdalena Medio*, Universidad de Antioquia, Medellín.

ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN (2007). *Diagnóstico y Plan de Acción para la Atención de Población desmovilizada Antioquia*.

ARANGO, M. *et al.* (1983). *Bonanza de los precios y transformaciones en la industria cafetera, 1975 – 1980, 1ª ed.*, Universidad de Antioquia.

BONILLA, G. (1997). “Historia local del municipio de Puerto Berrío Antioquia”, En: Posada, A. *et al. Historia y cultura en la región del Magdalena Medio*. Medellín: Plan Nacional de Rehabilitación, Colcultura. Universidad de Antioquia, p. 296.

BOURDIEU, P. (1993). *Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático*. Universidad de Buenos Aires.

NOCHE & NIEBLA. *Deuda con la Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia. 1988 – 2003*. CINEP. <http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/pdf/deuda06.pdf>. a Abril 4 de 2010.

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL –CONPES- (2008, diciembre). “Política Nacional de Reintegración de Personas y Grupos armados ilegales”, documento 3554.

COLIN, G. *et al.* (2004) *Desmovilización, y Reintegración. Guía Teórica y Práctica* [en línea], disponible en: http://www.reintegracion.gov.co/Es/ACR/Documents/pdf_normatividad/sobre/DDR_Guia_Teorica_y_Practica.pdf, recuperado el 15 de noviembre de 2009.

COLOMBIA, MISIÓN DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS -MAPP/OEA- (2009). *Décimo segundo informe trimestral del Secretariado General al Consejo permanente sobre la Misión de apoyo al Proceso de Paz en Colombia*.

COLOMBIA, CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA (1997, diciembre 26). “Ley 418 de 1997, Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” [en línea], disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0418_1997.html, recuperado el 16 de octubre de 2009.

_____ (2005, julio 25). “Ley 975 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” [en línea], disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0975_2005.html, recuperado el 16 de octubre de 2009.

_____ (1999, diciembre 23). “Ley 548 de 1999, Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones” [en línea], disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0548_1999.html, recuperado el 16 de octubre de 2009.

_____ (2002, diciembre 23). “Ley 782 de 2002, Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones” [en línea], disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6677>, recuperado el 16 de octubre de 2009.

COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA (2003, abril 23). “Decreto 1000 de 2003, Por el cual se corrigen yerros de la Ley 782 de 2002 "por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones" [en línea], disponible en: <http://www.yumbo.gov.co/downloads/DECRETO%201000%20DE%202003.pdf>, recuperado el 16 de octubre de 2009.

COLOMBIA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (2003, enero 22). “Decreto 128 de 2003, Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil” [en línea], disponible en: http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/2003/decreto_0128_2003.html, recuperado el 16 de octubre de 2009.

COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2006, septiembre 7). “Decreto número 3043, Por el cual se crea una Alta Consejería en el Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República” [en línea], disponible en:
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2006/septiembre/07/dec3043070906.pdf, recuperado el 16 de octubre de 2009.

COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2007, FEBRERO 14). “Decreto 395 de 2007, Por medio del cual se reglamenta la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 y se modifica parcialmente el Decreto 128 de 2003” [en línea], disponible en:
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/2007/decreto_0395_2007.html, recuperado el 16 de octubre de 2009.

CORIGAN, P. y DEREK, S. (1985). *El gran arco*, Cid, España.

ESCALANTE, F. (1993). *Ciudadanos imaginarios, Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana -Tratado de Moral Pública-*. México, El Colegio de México, p. 41.

DEAS, M. y GAITÁN, F. (1995). "Canjes violentos, reflexiones sobre la violencia política en Colombia", En: *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, FONADE, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

DEUDA CON LA HUMANIDAD. EL PARAMILITARISMO DE ESTADO EN COLOMBIA (s. f.) [en línea], disponible en: <http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/deuda.htm>, recuperado el 15 de noviembre de 2009

ESCOLA DE CULTURA DE PAU –ECP– (2008). “Análisis de programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) existentes en el mundo durante el 2007” [en línea], disponible en: [http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/EMAE-7AWREE/\\$file/ECP_Analisis%20de%20DDR_06.pdf?openelement](http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/EMAE-7AWREE/$file/ECP_Analisis%20de%20DDR_06.pdf?openelement), recuperado el 12 de diciembre de 2009.

ECHANDÍA, C. (1999). *El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia*, Presidencia de la República de Colombia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Observatorio de Violencia, Santa Fe de Bogotá.

FISAS, V. (2006). *Modelos de procesos de paz. Estudio comparado 1995 – 2005*, Escola de Cultura de Pau, Universidad de Barcelona.

Fisas, V. *Introducción al estudio de la paz y los conflictos*. Ed. Leina, Barcelona, 1987.

Fisas, Vicenç. *Modelos de procesos de paz. Estudio comparado 1995 – 2005*. Escuela de Cultura de Pau. Universidad de Barcelona. 2006.

FERNANDEZ, A. *El narcotráfico y la descomposición política y social. El caso de Colombia*. Plaza y Valdez Editores. 2002. México.

GARCÍA DE LA TORRE, C. (1993). *El Bajo Cauca Antioqueño. Como ver las Regiones*. Instituto de Estudios Regionales- INER-, Universidad de Antioquia.

_____ (2002). *Paradojas de los conflictos violentos. Territorio, regiones y fronteras en Colombia*, Universidad de Antioquia, Medellín.

_____ (2001). *Balance de los estudios sobre la violencia en Antioquia*, Instituto de Estudios Regionales- INER-, Universidad de Antioquia, Medellín.

GIBSSON, E. L. (s.f.). *Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos*. Northwestern University, Mimeo, 2005.

HOBBSAWM, E. (2001). *Bandidos*, Crítica, Barcelona, pp. 8-12.

KEARNEY, M (2003, enero-junio). “Fronteras y límites del Estado y el yo al final del imperio”, *Alteridades*, Vol. 13, No. 025, pp. 47-62.

KALYVAS, S. (2004). “Ontología de la violencia política: acción e identidad en las guerras civiles”. *Revista Análisis político*, No. 54, *Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI-*, Universidad Nacional.

_____ (2001). “La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría”. *Revista Análisis Político*, No. 42. *Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI-*, Universidad Nacional.

KALIVAS, S. y ARJONA, A. (comps.), (2005). “Paramilitarismo: una perspectiva teórica”, En: Tobón *et al.*, *El poder paramilitar* Planeta. Bogotá, pp. 25-40.

LÓPEZ , A. (2006). “Narcotráfico, ilegalidad y conflicto en Colombia”, En: Sanín, F. (Coordinador Académico) *Nuestra guerra sin Nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Norma, Bogotá, *Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – IEPRI-*.

LÓPEZ, C. (2007). “La ruta de expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia”, En: Romero M. (Coordinador Académico). *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdo políticos*, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.

MALLON, F. (2003), *Campesino y Nación. La construcción de México y Perú poscoloniales*, El colegio de San Luis, A. C, San Luis de Potosí, México.

MEDINA, C. y TÉLLEZ, M. (1994). *La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia*, Rodríguez Quito Editores, Bogotá.

NATIONS UNIES (2006). “Operational Guide to the integrated disarmament, demobilization and reintegration standards” [in line], available:

<http://www.unddr.org/iddrs/foreword.pdf>, recuperado el 10 de diciembre de 2009.

NILSSON, A. (2005, May). “Reintegrating Ex-Combatants in Post-Conflict Societies”, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) [in line], available: [http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/PANA7CEJPV/\\$file/sida_may2005.pdf?open+element](http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/PANA7CEJPV/$file/sida_may2005.pdf?open+element)

OCAMPO, J. A. (1991). *Historia económica de Colombia*, Biblioteca Digital Luis Ángel Arango –blaa-, Bogotá.

OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, NACIONES UNIDAS (2008). *Informe anual Junta Internación de Fiscalización de Estupefacientes – jife-*.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2007). *Informe Observatorio de DDHH y DIH 2007* [en línea], disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/documentos/informe_ddhh_dih_2007.pdf, recuperado el 15 de noviembre de 2009.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2008, enero-junio). *Indicadores sobre Derechos humanos y DIH en Colombia* [en línea], disponible en : http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/documentos/Indicadores/obs_indicadores_jun2008.pdf, recuperado el 15 de noviembre de 2009.

POVEDA, G. (1981) *Minas y Mineros de Antioquia*, Banco de la República, Medellín.

ROMERO, M. (2008). “Bandas Criminales, Seguridad Democrática y corrupción”, *Revista Arcanos*, No. 14, 2008.

ROLDAN, M. (2002). *A Sangre y fuego. La violencia en Antioquia 1946 – 1953*. Instituto colombiano de Antropología e Historia, Fundación para la promoción de la ciencia y la Tecnología.

_____ (2003) *A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia. 1946 – 1953*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, Colombia.

ROTH, D. y ANDRE, N. (2007). *Políticas Públicas, Formulación, Implementación y Evaluación*, Aurora, Bogotá.

SÁENZ, O. (1988). *Movimientos y paros cívicos en el oriente antioqueño 1960-1982*, Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia.

SÁNCHEZ, F. *et al.* (2006). “Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974 – 2002”, En: Sanín, F. (Coordinador Académico) *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Norma, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI- .

SALAMANCA, G. *et al.* (2008). *La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia*, Corporación Transparencia por Colombia, Avina, Bogotá.

SCOTT, James. (2002, diciembre). “Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos”, *Reflexión Política*, No. 8, Universidad Autónoma de Colombia.

SPECKER, L. (2008). *The R-Phase of DDR processes. An Overview of Key Lessons Learned and Practical Experiences*, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’ Conflict Research Unit.

SPRINGER, N. (2005). *Desactivar la guerra. Alternativas audaces para consolidar la paz*, Aguilar, Bogotá, pp. 422.

THOMPSON, E.P. (1963). “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del s. XVIII”, *Tradición, revuelta y consciencia de clase*, Crítica, Barcelona..

THRUENSEN, P. (2006, July). “From soldier to civilian: disarmament, demobilization, reintegration in Afghanistan”, Danish Institute for International Studies -, DIIS- Report [in line], available: <http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0C54E3B3-1E9C-BE1E-2C24-A6A8C7060233&lng=en&id=20984>, recuperado el 15 de noviembre de 2009.

URIBE, M. T. y ALVAREZ, J. (1998). *Raíces del poder regional. El caso Antioquia*, Universidad de Antioquia, Medellín.

URIBE, M. T. (2000). Desplazamiento forzado en Antioquia 1985-1998. Sección de Movilidad Humana. Secretariado de Pastoral Social (Autor Corporativo) Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia (Autor Institucional). Bogotá.

VALENCIA, G. (2007, diciembre). “Reconstrucción analítica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción con las Autodefensas Unidas de Colombia 2002-2007”, *Perfil de Coyuntura Económica*, No.10.

VALENCIA, L. (2008). *Mis años en la guerra*, Norma, Bogotá.

VÉLEZ, J. C. (2004, julio- diciembre). “Prácticas hegemónicas y resistencias cotidianas. Una perspectiva para estudiar la formación del Estado en Colombia”, *Estudios Políticos*, No. 25 [en línea], disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/25/4%20JuanCarlos.pdf>, recuperado el 2 de diciembre de 2009.

Anexo 1.

Acuerdo de Santa Fe De Ralito para contribuir a la paz de Colombia. Texto del acuerdo entre el Gobierno y las AUC.

Julio 15 de 2003

El Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C., como resultado de la Fase Exploratoria adelantada entre las partes a partir del mes de diciembre de 2002,

Acuerdan:

1. Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte a la nación en este momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se comprometen en este proceso, conscientes de dar un paso que aporta de manera efectiva a la construcción de la auténtica paz que espera y merece la nación colombiana.
2. Para el cumplimiento de este propósito, las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005. El gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil.
3. Las Autodefensas Unidas de Colombia valoran muy positivamente las recomendaciones finales de la Comisión Exploratoria y coinciden en que las mismas constituyen un norte adecuado para el proceso de paz entre el gobierno nacional y las AUC.
4. Acuerdan que a partir de las recomendaciones del informe final de la Comisión exploratoria, se da por terminada la fase de exploración del proceso de paz, para dar inicio a una etapa de negociación.
5. Crear las condiciones para que en un tiempo prudencial se concentren -con las debidas garantías de seguridad-, los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en sitios previamente acordados. La concentración de sus integrantes incluirá todos los rangos de mando, disponiendo de las garantías que para tal efecto se convengan entre las partes. Dichas zonas contarán con la presencia permanente de la fuerza pública.
6. Las Autodefensas Unidas de Colombia ratifican su compromiso con el cumplimiento del cese de hostilidades, como expresión de buena voluntad y continuarán con sus esfuerzos para lograr que sea totalmente efectivo.
7. Las Autodefensas Unidas de Colombia comparten el propósito del Gobierno de una Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado colombiano contra este fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente.
8. Agradecer la presencia permanente de la Iglesia Católica en este proceso de paz e invitarla a seguir acompañándolo, como garantía de transparencia y compromiso de las partes con la paz de Colombia.
9. Convocar la solidaridad y el compromiso nacional para fortalecer al Estado y construir las condiciones que hagan posible la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los miembros de las A.U.C. Piden a los diferentes sectores nacionales y a las comunidades locales que apoyen los esfuerzos institucionales para consolidar la seguridad, la convivencia y el desarrollo.
10. Exhortar a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos para defender y fortalecer la democracia colombiana y a prestar su concurso para desactivar los factores de violencia que afectan a Colombia.

Con este acuerdo, el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia responden al anhelo nacional de una Colombia en paz con oportunidades y garantías para todos.

Por el Gobierno Nacional:

LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz

Por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC:

HERNAN HERNÁNDEZ
RAMIRO VANOY
LUIS CIFUENTES
FRANCISCO TABARES
ADOLFO PAZ
JORGE PIRATA
VICENTE CASTAÑO
CARLOS CASTAÑO
SALVATORE MANCUSO
TESTIGOS

Miembros de la Comisión Exploratoria de Paz

CARLOS FRANCO
JORGE IGNACIO CASTAÑO
EDUARDO ESPINOSA
GILBERTO ALZATE RONGA
RICARDO AVELLANEDA
JUAN B. PÉREZ RUBIANO

Facilitadores del proceso por la Iglesia Católica

MONSEÑOR GERMÁN GARCÍA
MONSEÑOR JULIO CESAR VIDAL
PADRE LEONIDAS MORENO

SANTA FÉ DE RALITO, 15 de julio de 2003 2010